

DIEZ AÑOS DE AUDITORÍA A LA DEMOCRACIA

ANTES DEL ESTALLIDO



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

DIEZ AÑOS DE AUDITORÍA A LA DEMOCRACIA: ANTES DEL ESTALLIDO

© Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
www.pnud.cl

Santiago de Chile, diciembre de 2019

ISBN: 978-956-6057-05-5

Edición de textos

Andrea Palet

Diseño y Diagramación

TILT Diseño

Impresión

Ograma Impresores

Los contenidos de este libro pueden ser reproducidos en cualquier medio, citando la fuente.

Cita recomendada:

PNUD (2019). *Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido*. Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Representante Residente del PNUD en Chile

Claudia Mojica

Representante Residente Asistente a.i. y coordinadora de la Unidad de Investigación

Marcela Ríos

Unidad de Investigación

Raimundo Frei

Maya Zilveti

Sebastián Madrid

Matías Cociña

Felipe Ajenjo

Juan Pablo Miranda

Consultor

Juan Pablo Luna

Trabajo de campo Encuestas Auditoría a la Democracia

2018: Dirección de Estudios Sociales, Instituto de Sociología, P. Universidad Católica de Chile

2016: DATAVOZ/STATCOM

2008, 2010 y 2012: ICCOM y Centro de Microdatos de la Universidad de Chile

PRESENTACIÓN

A nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, tengo el agrado de presentar el Informe *Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido*.

Durante las últimas tres décadas, Chile destacó en el panorama mundial y especialmente en el contexto latinoamericano por su estabilidad política, por su desarrollo en el ámbito económico y por avances sociales significativos. En efecto, en este período el país demostró tener instituciones sólidas y gobernabilidad democrática, al tiempo que exhibía un crecimiento económico generalmente sostenido y una marcada reducción de la pobreza. Estos logros son innegables y se han traducido en mejoras en las condiciones de vida y en las oportunidades de desarrollo de miles de chilenas y chilenos. Sin embargo, esta superficie de estabilidad también estuvo marcada por diferencias, desigualdades y malestares profundos. La irrupción de masivas protestas en todo el país el 18 de octubre de 2019 reveló con fuerza que, a pesar de los avances, la democracia en Chile enfrenta desafíos importantes. El Informe que aquí presentamos aborda varios de ellos.

Su publicación coincide con un complejo momento del país, que confirma un argumento simple pero central: la democracia no es solo un ideal. Tampoco se reduce exclusivamente a aspectos procedimentales e institucionales, como elecciones periódicas de representantes e instituciones que perduran. Como reiteradamente ha planteado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia es una condición y un proceso para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo. Para contribuir a este propósito, requiere del reconocimiento y la protección de los derechos civiles, políticos, sociales,

económicos y culturales que hacen posible el ejercicio pleno de la ciudadanía. A su vez, necesita del perfeccionamiento continuo de las instituciones del Estado –con el propósito de procesar y canalizar demandas ciudadanas cada vez más complejas–, del fortalecimiento de los mecanismos de representación y de la ampliación de los canales de participación. Supone en definitiva asumir que las personas son la base y el motor de la democracia. Ese es precisamente el foco de esta publicación: analizar la calidad del régimen, desde la perspectiva de sus protagonistas. En un contexto donde la ciudadanía expresa hoy sus opiniones y demandas desde una multiplicidad de formas, este objetivo cobra hoy renovada vigencia.

A partir de los resultados de una serie de cinco encuestas nacionales de opinión pública, aplicadas entre los años 2008 y 2018, el Informe ofrece un diagnóstico profundo, sustentado en sólidas evidencias empíricas, sobre la evolución de la calidad de la democracia en Chile desde la perspectiva de la ciudadanía. Específicamente describe la valoración del régimen democrático, los niveles de confianza institucional, los cambios culturales, los ideales ciudadanos, las causas colectivas a las que adhiere la población y las nuevas formas de involucramiento político. Todos aspectos clave para la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible.

Por sus tiempos de elaboración, este Informe no aborda el estallido social de fines de 2019. Sin embargo, esperamos que contribuya con elementos relevantes para comprender los orígenes políticos y culturales del momento actual.

A través de este Informe y continuando una larga tradición en el mundo y en la región, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile reitera

su compromiso de contribuir a la profundización de la democracia en el país y de promover el debate, con información actualizada y análisis rigurosos sobre el acontecer nacional. Tal y como plantea la Agenda 2030, una democracia sólida, inclusiva y participativa es requisito para el desarrollo sostenible.

El Informe *Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido* es el resultado del esfuerzo de muchas personas. De los miles de ciudadanos y ciudadanas que a lo largo de

este período respondieron las encuestas y nos permitieron así acceder a sus percepciones, opiniones y expectativas sobre la democracia en Chile. De las instituciones que se adjudicaron el trabajo en terreno de las rondas de las encuestas. De las investigadoras e investigadores que elaboraron este Informe, cuya excelencia técnica es garantía de la calidad del análisis que hoy entregamos. Y sin duda de todo el equipo de la oficina país del PNUD, que a través de sus diferentes funciones y responsabilidades permitió que esta publicación llegue a sus manos.

Claudia Mojica
Representante Residente del PNUD en Chile



ÍNDICE

Prólogo	9
Introducción	15
Capítulo 1 UNA DEMOCRACIA TENSIONADA	19
Capítulo 2 CONFIANZA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE LAS INSTITUCIONES	43
Capítulo 3 CAMBIOS CULTURALES Y CIUDADANÍA	67
Capítulo 4 INVOLUCRAMIENTO POLÍTICO EN CHILE	99
Capítulo 5 BRECHAS Y CAMBIOS EN LA VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN CHILE	125
Anexos	141
Referencias	179

PRÓLOGO

El 18 de octubre de 2019 marcará un antes y un después en la historia de Chile. A las multitudinarias manifestaciones sociales que ha vivido el país se suman alteraciones del orden público, actos de violencia y graves vulneraciones a los derechos humanos. En los últimos meses ha cambiado el abanico y la profundidad de las demandas ciudadanas, y las respuestas que desde el Estado y el sector privado se plantean para enfrentar la crisis. Se han modificado las prioridades políticas y la agenda de desarrollo social. Mientras se escriben estas líneas, se discuten proyectos sociales que apuntan a mejorar las condiciones de vida de miles de personas, se formulan medidas para reactivar la economía y proteger los empleos, se promueven medidas en contra de los abusos y la corrupción, se proponen iniciativas legales para restaurar el orden y se inicia una discusión constitucional que hasta hace poco parecía improbable.

Chile cambió y, sin embargo, todos los elementos que resultaron en la mayor movilización social desde el retorno a la democracia ya estaban presentes con anterioridad al estallido. Entender el Chile posterior al 18 de octubre y elaborar caminos de salida a la crisis, que promuevan un desarrollo sostenible fundado en una democracia robusta y participativa, requiere por lo tanto comprender las características del orden social, cultural y político que configura al país en el presente. Requiere entender también cómo llegó a la encrucijada en que se encuentra hoy, al iniciarse ya la tercera década del siglo.

El Informe *Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido* es, en algún sentido, una pieza de arqueología de un pasado reciente: a excepción de este prólogo, el borrador final se cerró el jueves 17 de octubre de 2019, con

miras a su publicación en los primeros días de diciembre. El día siguiente la ciudadanía se volcó a las calles. Ello situó al equipo a cargo de la elaboración de este Informe ante un dilema: tenía entre manos una foto detallada de la relación del “viejo” Chile con sus instituciones democráticas, mientras en las calles cada día aumentaban las reivindicaciones, se diversificaban los repertorios de participación y se interpelaba a una institucionalidad política en la que se desconfía, y que se percibe crecientemente distanciada de las necesidades ciudadanas.

Una opción era, dado el contexto, revisar y reescribir toda la investigación para incorporar los eventos posteriores al 18 de octubre en los análisis. La otra era mantener el original inalterado y agregar un prólogo que contextualizara los hallazgos. Una relectura del trabajo a la luz de las primeras semanas de movilización mostró que el texto entregaba valiosas pistas para comprender el surgimiento de una crisis que no estaba en el horizonte de todos. Se optó, entonces, por conservarlo y añadir un prólogo que articulara, a modo de claves interpretativas de la crisis actual, un conjunto de tesis surgidas en las diversas investigaciones que ha desarrollado el PNUD en Chile a lo largo de más de veinte años.

Antes de describir cada una de ellas es importante despejar un punto central: nadie pudo prever la magnitud, la masividad y menos la extensión temporal de este estallido, como tampoco el momento preciso en que ocurriría. Pues si bien existía abundante investigación sobre los aspectos sociales, culturales, políticos e institucionales que han caracterizado el desarrollo de la sociedad chilena desde inicios de la década de 1990, no era posible anticipar que todos ellos confluirían para desencadenar acciones

colectivas masivas y sostenidas como las que se han vivido. El estallido pudo haber tardado más años en producirse, e incluso podría no haber ocurrido nunca.

Clave 1: Las múltiples caras de la desigualdad

La histórica desigualdad que caracteriza a Chile es un primer elemento que permite explicar lo que ha vivido el país desde mediados de octubre del 2019. Se expresa en múltiples dimensiones de la vida social, y la desigualdad de ingresos es una de las más evidentes. En el último Informe Mundial de Desarrollo Humano (PNUD, 2019a), del total de países de desarrollo humano “muy alto”, Chile es el que presenta la desigualdad de ingresos más alta. Según los últimos datos del Banco Mundial, está en la posición 16 entre los países más desiguales del mundo en términos de ingresos de los hogares, y ocupa una posición intermedia en América Latina. La concentración de ingresos en la parte alta de la distribución es muy elevada: el 1% de las personas de mayores ingresos concentraba un tercio del ingreso generado en el país en 2013, mientras que el 5% de mayores ingresos captaba más de la mitad del ingreso total (Banco Mundial, 2015). El libro *Desiguales* (PNUD, 2017a) mostró además la enorme cantidad de empleos con “salarios bajos”, es decir ingresos que no permiten a un trabajador o una trabajadora mantener a una familia de tamaño promedio por sobre la línea de la pobreza. Estas desigualdades socioeconómicas interactúan con otras, como las de género (PNUD, 2010), étnicas (PNUD, 2013) y territoriales (PNUD, 2018).

Pero la desigualdad en Chile no se reduce a la dimensión socioeconómica. En el país existen otras desigualdades muy marcadas y sentidas por la población. Una de las que más molesta a la ciudadanía es la desigualdad de trato, que se expresa tanto en las relaciones interpersonales como en el trato recibido de ciertas instituciones. En 2016, cuatro de cada diez personas declaraban haber recibido malos tratos. Casi la mitad de ellas atribuyó estas experiencias a su clase social, mientras que cuatro de cada diez mujeres lo atribuían al hecho de ser mujeres. Los malos tratos reportados ocurren principalmente

en el lugar de trabajo, en la calle, el transporte y los servicios públicos, incluidos los centros de salud. Esto se relaciona de cerca con los patrones de estratificación socioeconómica y la forma en que las ciudades replican la segmentación. En casi todos los grandes centros urbanos se han conformado territorios para pobres y para ricos, y la tarea de traspasar esas fronteras se ha hecho difícil para unos y otros.

La incertidumbre respecto del futuro está también profundamente estratificada. En las clases medias y bajas, por ejemplo, las bajas pensiones representan uno de los miedos principales de las personas. Para una enorme cantidad de chilenas y chilenos la jubilación es el fantasma de la pobreza futura. Algo similar sucede en el ámbito de la salud: la confianza de que en caso de enfermedad catastrófica o grave se tendrá atención oportuna y de calidad varía en función de la posición en la estructura social. Si en las clases altas una mayoría dice tener mucha o bastante confianza en recibir atención de salud en estos casos, en las clases bajas menos de un quinto de las personas tiene esa certeza. Las desigualdades en educación, por otra parte, hacen que el sistema educacional, junto con ser el depositario de las esperanzas sobre el futuro de los hijos e hijas, sea en la práctica un mecanismo de reproducción intergeneracional de las desigualdades.

Todas estas desigualdades generan una creciente sensación de injusticia. Ya sea en el transporte público o en los centros de salud, las personas enjuician las diferencias sociales a través de un principio de igualdad de dignidades, que la mayor parte de las veces no se cumple. Esta idea de dignidad personal, que ha enraizado fuertemente en la última década en el imaginario social, constituye un elemento clave para comprender la crisis actual.

Clave 2: Distanciamiento entre las elites y la ciudadanía

Una segunda clave es la creciente distancia entre las elites y la ciudadanía, alejamiento que, de acuerdo a las investigaciones del PNUD, ha evolucionado hacia la responsabilización de las primeras sobre lo que sucede en el país. Desde 2015 la evidencia muestra que las per-

sonas les atribuyen, especialmente a la elite política y a la elite económica, la responsabilidad por la desigualdad existente en el país y las numerosas situaciones de abuso que se denuncian (PNUD, 2015). Existe también una percepción, más o menos generalizada, de que se vive bajo la influencia de una elite socioeconómica cerrada, que se autorreproduce protegiendo sus privilegios y que atenta, por lo tanto, contra el ideal meritocrático que también se ha consolidado como principio normativo en la sociedad chilena, de la mano con la expansión del acceso a la educación superior.

Y, en efecto, en Chile hay una sobrerrepresentación de los grupos de alto nivel socioeconómico en los espacios de toma de decisiones. En el período 1990-2016, cerca del 75% de las y los ministros de Estado, 60% de senadores y más del 40% de diputados había cursado sus estudios secundarios en uno de 16 colegios de elite de Santiago, una de tres carreras en dos universidades de elite (también de Santiago), o ambas. La brecha de género en estos espacios es también muy marcada: si bien el Congreso electo en 2017 es más diverso, la distancia respecto de la composición de la sociedad sigue siendo aguda. Los hombres ocupan el 76% de los escaños en el Congreso. El sesgo socioeconómico en los espacios de toma de decisiones tiene su correlato en la opinión pública: siete de cada diez personas consideran que los empresarios tienen mucha o bastante influencia en las decisiones que toma el Congreso. Por el contrario, menos de un tercio opina lo mismo respecto de los movimientos sociales, los trabajadores o los pueblos indígenas. Más aun, en 2016 nueve de cada diez personas consideraba que en Chile la desigualdad sigue existiendo porque beneficia a los ricos y poderosos (PNUD, 2017a).

Esta desconexión entre elites y ciudadanía se aprecia al comparar las opiniones y demandas de quienes ocupan espacios de poder con las del resto de la sociedad. Por ejemplo, mientras el 59% de la ciudadanía señalaba el 2013 que no debería permitirse que las empresas privadas hagan negocios y obtengan ganancias en áreas como la salud, la educación y los servicios básicos, un 74% de la elite opinaba que sí debería permitirse. Asimismo, un 45% de la ciudadanía consideraba que los cambios en la sociedad debían ser profundos, porcentaje que disminuía a un 19% en las elites (PNUD, 2015).

Clave 3: La transformación del malestar y el sentido de urgencia

Un tercer elemento que permite explicar la crisis actual es la transformación del malestar y el renovado sentido de urgencia. Tempranamente el Informe de Desarrollo Humano hizo un diagnóstico del malestar en la sociedad chilena: en la versión titulada *Las paradojas de la modernización* (PNUD, 1998) se planteó que, en un contexto de logros importantes en materia económica, y de reducción de la pobreza, la sociedad chilena experimentaba un profundo malestar subjetivo. Y lo caracterizó como “un malestar mudo, difuso y difícil de explicar”, que se expresaba en una extendida sensación de inseguridad en ámbitos clave de la vida social, como la salud, las pensiones, el desempleo y la delincuencia. Publicaciones posteriores del PNUD mostraron nuevamente el malestar en Chile, y sostuvieron que este se volvía activo (PNUD, 2015, 2017d).

El IDH 2015 dio cuenta de este cambio y mostró dos procesos centrales para comprenderlo. Por una parte, las personas comenzaban a reconocer que la sensación era compartida y transversal en la sociedad. Por otra, había cambiado el sentido de urgencia de los cambios requeridos. En 2004, un 61% de las personas encuestadas consideraba que las soluciones necesitan tiempo; en 2013, un 61% pensaba que las soluciones no pueden esperar.

Las dos claves interpretativas restantes se desarrollan a lo largo de este Informe, que profundiza en las condiciones políticas y sociales que desembocaron en los eventos del 18 de octubre y las semanas posteriores.

Clave 4: Déficit institucional

Como se verá en los Capítulos 1 y 5, al preguntar por la valoración de la democracia se observa que esta sigue siendo el régimen de gobierno preferido por la ciudadanía. No obstante, desde la década de 1990 se mantiene un grupo, cercano al 20%, que en algunas circunstancias prefiere un régimen autoritario. Es una de las cifras más

altas de Latinoamérica. Por otra parte, en los últimos diez años ha aumentado la percepción de que la democracia chilena funciona mal o muy mal. Esta última evaluación se relaciona al menos con dos elementos.

Por una parte, como se verá en el Capítulo 2, se asocia con una generalizada desconfianza en instituciones políticas como los partidos y el Congreso, y en otras instituciones claves para el funcionamiento del Estado, como los tribunales de justicia. Si bien la expansión de la desconfianza en el decenio ha llegado también a otras instituciones, como Carabineros, las Fuerzas Armadas y la iglesia católica, son las instituciones políticas las que suscitan la mayor desconfianza. Eso se vincula con la negativa evaluación que realizan las personas sobre el funcionamiento de estas instituciones, su capacidad para considerar las necesidades y demandas ciudadanas, y la percepción de que en ellas se ha extendido la corrupción. Ya en el informe *Auditoría de la democracia* (PNUD, 2014) se alertaba sobre el deterioro de los partidos políticos y los riesgos de esta situación para la democracia representativa. A pesar de todas las reformas al sistema político en este último tiempo –como el fin del sistema binominal y la nueva ley de financiamiento de partidos–, la caída en la confianza de las instituciones políticas no se ha revertido.

Por otra parte, para las personas el buen funcionamiento de la democracia no solo se vincula con aspectos procedimentales, como elecciones libres y periódicas, sino con la construcción de una sociedad inclusiva y justa. En este sentido, desde la perspectiva de la ciudadanía, la persistencia de la desigualdad representa un fracaso de la democracia y de sus instituciones.

Clave 5: Nuevas formas de involucramiento político

Entre el inicio de la transición política y principios del 2000, la desafección con la política se tradujo en una notoria apatía, que sin embargo no tensionó de manera importante el sistema político. Pero a partir de la “revolución pingüina” (2006) se observa una creciente politización de la sociedad chilena. Hoy no solo más personas sienten que

tienen cosas que decir, sino que, desde 2008 en adelante, más personas participan en acciones políticas diversas y ha aumentado la aceptación normativa de distintos tipos de acción política, incluidas aquellas de carácter disruptivo, como bloqueos de calles y tomas.

Dos características centrales de esta politización sirven para comprender el momento actual: ocurre al margen de la política institucional –de hecho, aumenta mientras decrece la participación electoral, especialmente tras la introducción del voto voluntario– y coexiste con una escasa asociatividad o pertenencia a organizaciones sociales, lo que le confiere un carácter desarticulado. Esto ha quedado en evidencia en el contexto actual. Desde el 18 de octubre de 2019, la movilización social ha sido heterogénea y fragmentada, tanto respecto de quiénes se movilizan como de sus motivaciones, demandas y estrategias de acción. Ha carecido de liderazgos claros, y hasta ahora no ha logrado ser conducida por los actores tradicionales de la democracia representativa, como los partidos políticos, o por organizaciones sociales como sindicatos o gremios.

Los Capítulos 3 y 4 de este Informe muestran cómo entre 2008 y 2018 emerge una nueva ciudadanía, producto de aceleradas transformaciones culturales y de cambios profundos en el involucramiento político. Asimismo, ha aumentado considerablemente un grupo de la población que, a pesar de que ya no se reconoce ni en los partidos ni en el eje ideológico izquierda-derecha, participa en acciones políticas. El cambio ha sido profundo en las nuevas generaciones.

Por cierto, la evidencia proporcionada en este Informe no permite dar cuenta de todos los fenómenos observados desde mediados de octubre de 2019. No explica, por ejemplo, las particulares dinámicas de acción colectiva durante esta crisis, tampoco las respuestas de los partidos políticos, el comportamiento de las fuerzas de orden y seguridad, los hechos de violencia, el rol de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales, entre otros.

El presente estallido social es uno de las más impactantes desde el retorno de la democracia en Chile. No solo por la violencia observada, sino porque pone en cuestión

los arreglos políticos, económicos y sociales sobre los que había descansado la transición. Estas semanas de movilización social han sido vertiginosas, han desencadenado cambios en las reglas político-institucionales que en otras circunstancias habrían tomado largo tiempo o simplemente no habrían ocurrido, y acelerado procesos sociales de largo plazo que los datos presentados en este trabajo ya revelaban, aunque fuera imposible predecir sus consecuencias con precisión.

Este punto de inflexión puede ser una oportunidad para abrir un proceso virtuoso de reencuentro entre la esfera política y la ciudadanía, con el objeto de avanzar a una

nueva etapa del desarrollo, construyendo un Chile más sostenible, justo, inclusivo y democrático. Para ello es central reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones, fortalecer los canales de participación y mejorar la calidad de la representación política y de los sistemas de rendición de cuentas. Dotar de legitimidad ciudadana las propuestas que emanan de las elites y las instituciones es clave en este sentido. Es también fundamental avanzar hacia una comprensión más integral de la sociedad chilena “antes del estallido”, una comprensión que abarque los aspectos políticos, económicos y sociales que se conjugaron en la crisis actual. Este Informe aspira a ser un aporte en esa dirección.

INTRODUCCIÓN

Este Informe tiene como objetivo principal evaluar, desde la perspectiva de las personas, la calidad de la democracia chilena durante el decenio 2008-2018. Para ello se analiza la opinión de la ciudadanía y su evolución en varios temas clave para la gobernabilidad y el desarrollo sostenible: la valoración del régimen democrático, la confianza en las instituciones, los cambios culturales de estos años, las transformaciones de los ideales de ciudadanía, la adhesión a causas colectivas y las formas de involucramiento político.

El PNUD aspira a cumplir varios propósitos con este trabajo. Primero, proporcionar un diagnóstico profundo y sustentado en evidencia sólida de cómo evalúa la ciudadanía la democracia en Chile en el período de referencia. Segundo, mostrar las transformaciones que durante esta década ha experimentado el país en materia de cultura política y procesos democráticos. Y, tercero, reconocer los nudos críticos que obstaculizan el fortalecimiento de una democracia efectiva, que contribuya a lograr un desarrollo sostenible e inclusivo.

El tema de este Informe responde a una preocupación histórica de la oficina del PNUD en Chile por las condiciones sociales, culturales, políticas e institucionales que hacen viable y sostenible el régimen democrático. Prueba de ello son las múltiples publicaciones¹ y los proyectos de asistencia técnica de la institución que, durante estos últimos diez años, se han abocado a proponer

mejoras y reformas en distintos aspectos implicados en la calidad de la democracia, o bien a dar cuenta de sus avances y desafíos.

El presente trabajo se enmarca, además, en una larga tradición de reflexión colectiva del PNUD, que se ha materializado en publicaciones que desde distintos focos han analizado el funcionamiento de la democracia en América Latina. Los informes *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos* (2004), *Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la democracia en América Latina* (2008) y *Nuestra democracia* (PNUD-OEA, 2010) constituyen ejemplos concretos del persistente esfuerzo desplegado por el PNUD para ampliar el conocimiento sobre la calidad de la democracia en la región y contribuir a su consolidación.

En estos informes el PNUD mostró la heterogeneidad del Estado en América Latina –en términos funcionales y territoriales–, su debilitamiento en buena parte del continente y los problemas de participación y representación política, cuyo correlato eran los bajos niveles de legitimidad y confianza institucional (PNUD, 2004). Asimismo, identificó una clara tensión entre las dimensiones representativas y participativas de la democracia en la región (PNUD, 2010), y entre el horizonte de igualdad que las democracias propician y las enormes desigualdades socioeconómicas que inhiben el ejercicio pleno de derechos, y que impiden avanzar desde democracias de

¹ Ver, por ejemplo, *Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo* (PNUD, 2014); *Desarrollo Humano en Chile. Los tiempos de la politización* (2015a), *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile* (PNUD, 2017a) y, además, PNUD (2015b), (2015c), (2015d), (2017a), (2017b), (2017c), (2018b), (2019b).

electores hacia democracias de ciudadanas y ciudadanos (PNUD-OEA, 2010).

Por su parte, el último Informe de Auditoría a la Democracia del PNUD Chile estableció siete desafíos clave para profundizar y mejorar la democracia en el país: 1) legitimar la democracia para mantener la gobernabilidad; 2) enfrentar la desigualdad política, que refuerza la desigualdad socioeconómica, entendiéndola como diferencias en acceso a voz e influencia; 3) incorporar a la ciudadanía a la democracia a través de una participación efectiva; 4) mejorar la calidad de la representación política; 5) fortalecer los partidos políticos para una democracia sostenible; 6) recomponer la valoración de la democracia; y 7) generar más y mejor democracia, con una ciudadanía que “valora la democracia y cuyo descontento no la pone en entredicho, sino que exige que mejore para alcanzar las expectativas que las personas tienen de ella” (PNUD, 2014: 45). Dada la relevancia que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ONU, 2015)² otorga al respeto de los derechos humanos, al estado de derecho, la gobernanza, la transparencia y la eficacia institucional, estos desafíos adquieren hoy renovada vigencia.

¿Por qué un nuevo informe sobre democracia en Chile? Las razones son diversas. Primero, porque su relevancia para el desarrollo sostenible exige un monitoreo permanente. La democracia es más que la competencia electoral por el poder, y si bien su calidad depende efectivamente de la existencia de elecciones libres, también requiere de la consagración de derechos plenos de ciudadanía y condiciones que permitan su ejercicio efectivo, incluyendo un Estado con la capacidad de garantizar el imperio de la ley y el estado de derecho. Depende, además, de instituciones transparentes y eficaces, de que haya una ciudadanía que se interese e involucre en las decisiones colectivas a través de canales de participación diversos, y una cultura que abogue por el respeto de los derechos de todas las personas. La democracia es al mismo tiempo un ideal y un proceso en permanente construcción, no un acto aislado que pueda cerrarse una vez para siempre. En consecuencia, su calidad y legitimidad deben ser auscultadas sistemáticamente.

En segundo lugar, la gobernabilidad democrática en Chile no está exenta de riesgos y tensiones. Algunas de estas exceden las fronteras del país, como el surgimiento de liderazgos populistas de corte xenófobo, la creciente desconfianza en las instituciones y los fenómenos de oligarquización de la política, que están afectando a democracias consolidadas. En América Latina, varios países atraviesan duras crisis políticas y en muchos de ellos las autoridades han sido acusadas de corrupción. Y en el último decenio diversas olas de protestas han marcado el contexto global; por ejemplo, la Primavera Árabe en 2010 o los conflictos en Ecuador y Hong-Kong en 2019. Como se verá, Chile está experimentando muchos de estos fenómenos, como también un recrudecimiento de la protesta social (Somma y Medel, 2016). El Informe se hace cargo de la preocupación que ha surgido durante los últimos años sobre el futuro de las democracias liberales.

Tercero, Chile es un país bien distinto del de inicios del período. Entre 2008 y 2018 se han producido importantes transformaciones políticas, legales y sociales. Por ejemplo, tras años de discusión pública, se puso fin al sistema electoral binominal que marcó la transición a la democracia. Después de diversos escándalos de colusión y corrupción se promulgó una nueva ley de financiamiento electoral. También se modificó el balance de fuerzas políticas tras la irrupción en el parlamento de nuevos partidos y coaliciones, y se generó una normativa para la presencia de mujeres en las listas electorales para el Congreso. Se suma una serie de medidas en los ámbitos tributario, educativo y de regulación ambiental, así como la aprobación de la ley antidiscriminación, la despenalización del aborto en tres causales y, desde 2015, el Acuerdo de Unión Civil que incluye a parejas del mismo sexo. La fisonomía de la sociedad chilena se ha modificado a raíz de procesos sociales como la migración extranjera o el aumento de la conflictividad. En términos culturales, entonces, en muchos aspectos Chile ya no es el que era durante la primera década del siglo.

Este Informe se basa principalmente en los resultados de una serie de cinco encuestas nacionales de opinión pública, aplicadas entre los años 2008 y 2018 y elaboradas

² La Agenda 2030 es un plan de acción global para alcanzar el desarrollo sostenible que contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas. Fue suscrita por Chile y otros 192 países y su vigencia abarca el período comprendido entre 2015 y 2030.

por el proyecto Auditoría a la Democracia del PNUD.³ Las encuestas (en adelante, ENAD) comparten atributos metodológicos que las convierten en herramientas inválidas a la hora de analizar la calidad de la democracia en el país. Primero, varias de las preguntas provienen de instrumentos internacionales –como la Encuesta Mundial de Valores–, lo que permite realizar análisis comparados. Otras replican preguntas utilizadas en cuestionarios nacionales, por ejemplo, las encuestas del Centro de Estudios Públicos. En ambos casos se trata de instrumentos ampliamente validados.

La serie permite analizar la evolución en el tiempo de la opinión pública sobre el funcionamiento de la democracia, pues, si bien cada versión tiene diferentes focos y en consecuencia el cuestionario ha cambiado durante el decenio, se ha mantenido un núcleo estable de preguntas.

Por último, los marcos muestrales en cada versión son estadísticamente representativos de la población nacional en el período. La información contenida en las bases de datos para todos los años permite segmentaciones comparables por generaciones, nivel educacional (que aquí se emplea como *proxy* del nivel socioeconómico), sexo, macrozona de residencia, zonas urbanas y rurales, identificación política y confesión religiosa, entre otras variables de interés (ver Anexo 1).

En cuanto a los aspectos técnicos, todas las versiones han tenido cobertura geográfica nacional,⁴ un tamaño muestral aproximado de 1.500 casos y un error muestral máximo de 2,7 puntos porcentuales, considerando varianza máxima y un nivel de confianza del 95%. El universo considerado en cada una de estas encuestas corresponde a la población de 18 años o más, chilena o residente en Chile, que habita en viviendas particulares ocupadas, localizadas en zonas urbanas y rurales de todas las comunas de Chile.⁵

Del conjunto de datos analizados en este Informe se desprenden importantes hallazgos. En 2018, poco más del 50% de la ciudadanía legitimaba la democracia como la mejor forma de gobierno. El dato contrasta con lo observado en el resto de América Latina y sitúa a Chile en una posición de ventaja relativa en la región. Sin embargo, casi un quinto de la población considera que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Esta cifra es una de las más altas de la región. Asimismo, los datos revelan un incremento de la evaluación negativa del funcionamiento de la democracia, y un aumento del pesimismo sobre el futuro de esta en el país.

Se constata además que se ha acentuado la desconfianza en las instituciones. Si bien en el caso de los partidos políticos la tendencia se observa desde la década de 1990, al año 2018, tras los casos de corrupción y abuso que han tocado a otras instituciones, la desconfianza es un fenómeno generalizado y afecta a casi todas las instituciones del país. Pese a ello, persiste un “ethos republicano” que se expresa en la valoración que aún otorga un segmento importante de la ciudadanía al voto, los partidos políticos y el estado de derecho. Durante el período de referencia ha aumentado de manera importante el grupo que el Informe denomina “demócratas escépticos”: personas que legitiman el sistema democrático pero no confían en ninguna de sus instituciones centrales. Esa actitud se vincula con la evaluación negativa del funcionamiento del Congreso, los partidos políticos y los tribunales de justicia.

Asimismo, los datos revelan que el involucramiento político en el período ha experimentado profundas transformaciones, que se expresan en el aumento del número de personas que participan en distintos tipos de acciones políticas, y en el apoyo normativo a acciones más disruptivas. Esto sucede en un contexto en el que disminuye la identificación con partidos políticos y con el

³ Los organismos responsables de las versiones de 2008 y 2010 del proyecto fueron el PNUD, el Centro de Estudios Públicos (CEP), la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), Libertad y Desarrollo, y ProjectAmérica. La versión de 2012 estuvo a cargo del PNUD y del Consorcio de Centros de Estudios. En 2016 y 2018 el organismo responsable fue el PNUD.

⁴ Solo se excluyen las Áreas de Difícil Acceso (ADA) definidas por el INE.

⁵ Se excluye a quienes no residen en la vivienda por más de seis meses, o se encuentran en prisión o en casas de reposo. Para una explicación detallada de los aspectos metodológicos de cada una de las encuestas, ver Tablas en Anexo 2.

eje izquierda-derecha, se mantiene escasa la pertenencia a organizaciones sociales y se consolidan ideales ciudadanos como el cuidado ambiental.

Por último, destaca el acelerado y transversal cambio cultural experimentado por el país. En estos años ha disminuido el acuerdo con las representaciones tradicionales de los roles de género, ha aumentado el porcentaje de quienes justifican el matrimonio homosexual y el aborto y ha cambiado la valoración de la inmigración. En su conjunto, estos cambios han hecho de Chile un país culturalmente más igualitario, respetuoso de las libertades individuales y tolerante de lo que era en 2008. No obstante, el análisis en profundidad de estos cambios muestra también algunas señales de polarización valórica, un problema que ya ha sacudido a otras democracias contemporáneas:

se ha producido una acentuación de la distancia valórica entre grupos sociales dependiendo de las generaciones, la orientación política, la religión o el nivel educacional.

El Informe se organiza en cinco capítulos. En el primero se analiza la evolución de la valoración de la democracia durante el decenio 2008-2018. El segundo se enfoca en la confianza en las instituciones. En el tercero se analizan los cambios culturales durante el período de referencia, así como los ideales ciudadanos y las causas colectivas que al año 2018 despiertan mayor simpatía. El cuarto capítulo aborda las transformaciones en el involucramiento político a lo largo de estos años. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las claves sociodemográficas de los cambios descritos en los capítulos previos, y se exploran los principales desafíos para la democracia como sistema político en Chile.

1.

UNA DEMOCRACIA TENSIONADA

Desde hace unos años, el mundo asiste a procesos de crisis de la institucionalidad democrática o lo que la literatura ha denominado “recesión democrática”.¹ El malestar social, el colapso de los sistemas de partidos tradicionales en democracias consolidadas y la irrupción de liderazgos populistas en países desarrollados (Norris e Inglehart, 2019) son síntomas de parte de las dificultades que enfrentan actualmente las democracias representativas liberales. Según la encuesta global de IPSOS realizada en 2019 y que incluyó a 27 países, un 66% de las personas encuestadas considera que los políticos tradicionales ignoran su opinión, el 70% cree que la economía está organizada para favorecer a los ricos y poderosos, y más de la mitad (54%) está de acuerdo con que el sistema social en sus respectivos países está “quebrado”. En este contexto global, en muchos países la ciudadanía crecientemente apoya el surgimiento de “liderazgos fuertes” que sustituyan a los políticos tradicionales y a los técnicos.

En 2015, el renombrado *Journal of Democracy* editó un número especial sobre la recesión democrática y cuatro números adicionales sobre la “globalización del autoritarismo” y la “nueva amenaza autoritaria”.² En la década han aparecido también varios libros que describen el progresivo declive de las democracias contemporáneas (Levitsky y Ziblatt, 2018), mientras otros atribuyen el

debilitamiento de estos regímenes al orden económico neoliberal (Streeck, 2014; Brown, 2015). Y si bien una parte de la literatura sostiene que las democracias continúan avanzando y que los países que han ganado libertades superan a aquellos que las han perdido (IDEA, 2017), según algunos autores el escenario global actual es similar al de la década de 1930 en que, mientras avanzan los nacionalismos y la xenofobia, el orden democrático liberal se debilita y retrocede (Turchin, 2016).

Sin duda el panorama mundial presenta desafíos pocas veces vistos. Por ejemplo, a través del uso masivo de tecnologías de comunicación se expandan al instante noticias reales y falsas, y se viralizan escándalos a una velocidad que dificulta la reacción de las elites (Przeworski, 2019; Persily, 2017), en un contexto en que aumenta la conflictividad social y cae la legitimidad de los partidos políticos y las instituciones religiosas y militares. Se añaden los crecientes problemas en el funcionamiento de instituciones clave de la democracia liberal como los parlamentos, el poder judicial y los medios de comunicación (V-DEM, 2018).

La última década tampoco ha sido fácil para la región. Varios países latinoamericanos viven olas de protesta, y en muchos de ellos se experimentan recesiones económicas causadas por la inestabilidad política. En otros, conflictos

¹ El término recesión democrática alude a tendencias que van desde el debilitamiento de los regímenes democrático-liberales —y de las condiciones institucionales y sociales que los vuelven viables y legítimos— hasta procesos significativos de emergencia y consolidación de nuevos autoritarismos. Así, el término se emplea, de modo generalmente ambiguo, para hablar de síntomas de crisis democrática en el mundo contemporáneo. Sobre este tema ver, por ejemplo, Streeck (2016), Levitsky y Ziblatt (2018), Przeworski (2019), Runciman (2018), Mounck (2018) y Fukuyama (2018).

² Ver *Journal of Democracy* 26(1), enero de 2015. Ver también el volumen 26(2), de abril de 2015, el volumen 26(4), de octubre de 2015, y el volumen 27(1), de enero de 2016. Todos en <https://muse.jhu.edu>.

entre poderes del Estado han generado severos problemas de gobernabilidad, polarizaciones agudas entre bloques, olas migratorias, así como el cuestionamiento de la capacidad de las elites para plantear proyectos viables, en un contexto en que la colusión y la corrupción afectan a gobiernos de todos los colores. En menos de diez años, las esperanzas depositadas en los gobiernos que emergían del auge de las materias primas han dado paso a una creciente preocupación sobre la salud de la democracia en la región.

En este contexto global y regional, ¿cómo ha evolucionado durante el decenio 2008-2018 la valoración de la democracia en la sociedad chilena? Para responder la interrogante, este capítulo describe brevemente los acontecimientos más importantes de la agenda política de los últimos diez años, y luego se revisan cuatro indicadores para auditar la salud de un régimen democrático: la legitimidad del régimen político, la importancia de vivir en una sociedad democrática, la evaluación de su funcionamiento y cómo se percibe que va cambiando en el tiempo.

Los datos de la serie ENAD 2008-2018 muestran que en Chile la legitimidad de la democracia aumentó entre 2008 y 2012, principalmente a partir de la alternancia electoral del 2010, para experimentar después una baja sostenida que se intensificó en la última medición (2018). Asimismo, a lo largo del período disminuyó la evaluación positiva del funcionamiento de la democracia y, en comparación con las mediciones anteriores, el año 2018 muestra un deterioro significativo en aquellos indicadores que proyectan la calidad de la democracia en el futuro. Además, el paso del tiempo no ha borrado la existencia de un grupo de la población que considera que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a uno democrático.

A pesar de lo anterior, en el contexto global de recesión democrática los niveles de la valoración de la democracia en Chile resultan positivos. La legitimidad de la democracia y la evaluación de su funcionamiento solo presentan variaciones marginales en el tiempo, que parecen responder a fenómenos contingentes, como la alternancia de gobiernos de distinto signo político o el ciclo económico. En comparación con América Latina, la situación de Chile en ambos indicadores es también positiva. Confirman el diagnóstico las evaluaciones realizadas por la comunidad experta sobre la calidad del régimen democrático en el país (V-DEM, 2018). ¿Significa eso que Chile ha logrado escapar del síndrome de crisis democrática que afecta a un buen número de países en América Latina y el mundo, gracias al desarrollo de un proceso gradual y virtuoso de fortalecimiento y revaloración de la democracia? Los datos presentados a lo largo de este Informe sugieren una lectura menos positiva.

El capítulo se compone de cuatro secciones. La primera proporciona una breve síntesis de las principales transformaciones políticas y sociales ocurridas durante el período, y permite contextualizar los resultados de este y los restantes capítulos del Informe. En la segunda sección se describen distintos indicadores de la valoración de la democracia a partir de los resultados de las ENAD. En la tercera se comparan los indicadores de Chile con los del resto de América Latina y los países de la OCDE. Este análisis se complementa con los índices de calidad democrática elaborados en la región por la comunidad experta (V-DEM). En la última sección se exponen algunas de las principales lecturas generadas por las ciencias sociales sobre los procesos sociales y políticos que han marcado el devenir de la sociedad chilena tras la recuperación de la democracia; son claves interpretativas útiles para comprender la situación de Chile en materia de legitimidad democrática, así como los desafíos que surgen a la vista de los indicadores de evaluación ciudadana de la democracia.

EL CONTEXTO DE LA ENAD:

PRINCIPALES HITOS POLÍTICOS Y SOCIALES DEL PERÍODO 2008-2018

Los eventos políticos y sociales del decenio constituyen el telón de fondo para el análisis de la valoración de la democracia.

La información contenida en el Anexo 3 al final del Informe puede sintetizarse en cuatro tendencias generales.

Primero, entre 2008 y 2018 se ve un aumento significativo de la conflictividad social, así como la irrupción de múltiples movimientos sociales que logran impactar la agenda pública. Esta tendencia es más fuerte en algunos años, como 2011, pero se trata de una clave general del último decenio (ver Somma y Medel, 2017). Además del movimiento estudiantil, se consolidan en este período el movimiento feminista, los conflictos socioterritoriales y ambientales relativos a actividades extractivas y la conflictividad en la Región de la Araucanía.

Segundo, y especialmente a partir de 2014, una serie de escándalos de corrupción involucran a líderes políticos, empresarios e instituciones estatales como las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Como se verá, estos escándalos coinciden con una importante caída en la legitimidad del sistema político e institucional y de sus principales actores.

Tercero, durante el período 2008-2018 se producen dos procesos paralelos relativos a la conformación del Ejecutivo y del sistema de partidos. Por un lado, una alternancia cíclica entre los dos bloques políticos tradicionales (Concertación-Nueva Mayoría y Alianza por Chile-Chile Vamos) en los niveles presidencial, parlamentario y municipal. Simultáneamente, el sistema de partidos, caracterizado por su estabilidad desde el inicio de la transición democrática, ahora tiende a fragmentarse. Se produce una escisión relevante entre el Partido Demócrata Cristiano y sus socios tradicionales en el bloque de centroizquierda (PPD y PS) y, por otra parte, pese a la presencia hasta 2016 del sistema electoral binominal, el número efectivo de partidos políticos³ no solo se mantuvo alto en comparación con América Latina sino que aumentó significativamente.

Además, en los últimos años se produce la irrupción no solo de nuevos partidos (como Evópoli) sino de un nuevo bloque político (Frente Amplio); ambos fenómenos desafían el predominio de los partidos tradicionales y, con el cambio a un sistema electoral proporcional, logran un número significativo de escaños en el Congreso. Esta última tendencia consolida un proceso de transformación del sistema de partidos tradicional que antes había contemplado la aparición de *outsiders* como figuras presidenciales y el crecimiento de candidaturas independientes

³ En un trabajo clásico, Laakso y Taagepera (1979) desarrollaron la noción de “número efectivo de partidos”. La cifra toma en cuenta los tamaños relativos de los partidos (en términos electorales) para caracterizar la correlación de fuerzas entre ellos. Así, por ejemplo, en un sistema con dos partidos grandes y uno electoralmente marginal, el “número efectivo de partidos” será cercano a 2,2 en lugar de 3. En el caso de Chile, el Informe Auditoría a la Democracia (PNUD, 2014) reportaba, para el período 1990-2006, un número efectivo de 6,74 partidos. Durante el mismo período, el promedio latinoamericano era de 4,57 partidos efectivos. En la última elección parlamentaria bajo el sistema binominal (2013), el indicador para Chile ascendió a 8,7 (PNUD, 2014, Capítulo 2.3, Tabla 3 y Gráfico 1). En la elección legislativa de 2017, y considerando a los independientes que compitieron bajo un partido, la cifra llegó a 10,6 partidos efectivos.

tanto en elecciones legislativas como municipales (Luna y Mardones, 2010).

Cuarto, el sistema político chileno acomete durante el período tres tipos de reformas. Por un lado, se llevó a cabo un conjunto de reformas del sistema político (fin del sistema binominal, reforma electoral y de los partidos, entre otras; ver más adelante). Por otro, se legisló contra distintas formas de discriminación y se promulgaron leyes para “reconocer la diversidad sexual” (ley Zamudio, Acuerdo de Unión Civil). Por último, se concretó un

conjunto de reformas orientadas a expandir la protección social (sistema de pensiones solidarias y posnatal de 6 meses, entre otras; para un análisis detallado ver Larrañaga y Contreras, 2015).

Es importante destacar que, a pesar de los vaivenes en los precios de las materias primas en el contexto de crisis financiera global en 2008, la economía chilena se mantuvo relativamente estable (aunque con períodos de bajo crecimiento), lo que hizo posible el aumento del gasto social (ver Recuadro).

LA SITUACIÓN ECONÓMICA 2008-2018

El período de referencia de este estudio se caracterizó por un crecimiento económico con altos y bajos. El inicio estuvo marcado por la crisis financiera global de 2007-2008, que afectó tanto a los países de la OCDE como a la región latinoamericana. Y, si bien las medidas tomadas por el gobierno mitigaron el efecto de la crisis en el país, el precio del cobre experimentó un descenso muy importante durante 2008 y un crecimiento negativo el 2009. Entre 2010 y 2013 el país tuvo un crecimiento positivo (de un 5,6% a un 4%), para luego descender fuertemente el año 2014 y subir de nuevo el 2018. En términos comparados, durante este período el país experimentó un crecimiento menor que el promedio de la OCDE. Consistentemente, la tasa de desempleo bajó entre la crisis y 2013, para luego mantenerse estable, presentando una leve alza de cerca de un punto porcentual en los siguientes cinco años.

La política macroeconómica y la fiscal permanecieron estables en la década, aunque la deuda pública aumentó, no solo por el precio del cobre sino también por el mayor gasto social.

En este contexto han emergido al menos dos grandes preocupaciones. Por un lado, la productividad se ha mantenido en un nivel muy bajo desde finales de los noventa, y, salvo el sector minero, ha sido casi nulo su crecimiento (Comisión Nacional de la Productividad, 2017). Por otro, el menor crecimiento de la economía ha generado un desacople poco sostenible entre el consumo de los hogares y la evolución de sus ingresos, lo que se ha traducido en un elevado endeudamiento. El riesgo de no pago de las deudas de consumo ha subido, especialmente en hogares de menores ingresos (Banco Central, 2019).

EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LA DEMOCRACIA EN CHILE

La sección anterior contextualiza el decenio. En esta, se presentan los resultados de las cinco encuestas de Auditoría a la Democracia que dan cuenta de la evolución de la valoración de la democracia en Chile. Se describen las respuestas de las personas mayores de 18 años, residentes en todas las regiones del país, a dos preguntas: el grado en que prefieren vivir bajo un sistema democrático frente a otras alternativas –un indicador clásico de la legitimidad de la democracia– y el modo en que evalúan el funcionamiento de la democracia en el país.

Quienes analizan los resultados de encuestas de opinión pública deben hacer frente a una duda legítima: si la calidad de las democracias depende en gran medida de las elites políticas y de factores institucionales, ¿por qué es relevante analizar la opinión de la ciudadanía sobre los méritos del régimen y su funcionamiento? La literatura sugiere que la calidad de una democracia es en parte el resultado de la legitimidad que este tipo de régimen alcanza entre la clase política, así como de la capacidad de esta última para fomentar ante la opinión pública procesos de negociación y liderazgo que resulten propicios para la consolidación del régimen (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2013). Cuando las personas no legitiman la democracia, aumentan las probabilidades de que irrumpen liderazgos autoritarios (Booth y Seligson, 2009). En este sentido, aunque a corto plazo la democracia puede sobrevivir aun con escaso apoyo ciudadano, su sustentabilidad y calidad a largo plazo dependen de su capacidad para obtener una legitimidad social significativa. Desde esta perspectiva, el análisis de la valoración de la democracia y de sus potenciales determinantes constituye un heurístico relevante sobre los principales desafíos que enfrenta la democracia en el Chile contemporáneo.

¿Cuál es la tendencia general del período respecto de la legitimidad de la democracia en Chile? Según se observa en el Gráfico 1.1, la legitimidad de la democracia aumentó entre 2008 y 2012, especialmente a partir de la alternancia electoral que se produjo en 2010. Luego experimentó una baja sostenida, que se acentúa en la última medición. Se aprecia además un incremento progresivo de quienes consideran que da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario, porcentaje que había disminuido significativamente entre la primera (2008) y segunda medición (2010), para luego aumentar paulatinamente (en el capítulo quinto se examina qué grupos en particular aumentan y disminuyen sus preferencias democráticas).

Además, una proporción relativamente estable de la población considera que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a uno democrático. Esa estabilidad se ha interpretado tradicionalmente como un resabio de la polarización que afectó a Chile en los años setenta y que concluyó con el golpe de Estado y la dictadura militar: se plantea que quienes vivieron esa época y apoyaron el golpe de Estado de 1973 serían más proclives a favorecer un régimen autoritario que quienes no lo hicieron. El problema con esta explicación es que, naturalmente, quienes vivieron en los años setenta debieran ser un porcentaje cada vez menor en la población chilena, lo cual resulta inconsistente con la tendencia estable que se observa. Una explicación más plausible es que la posibilidad autoritaria pervive y se transmite en distintos entornos (familiar, social, político) como una vía aceptable de conducción social.

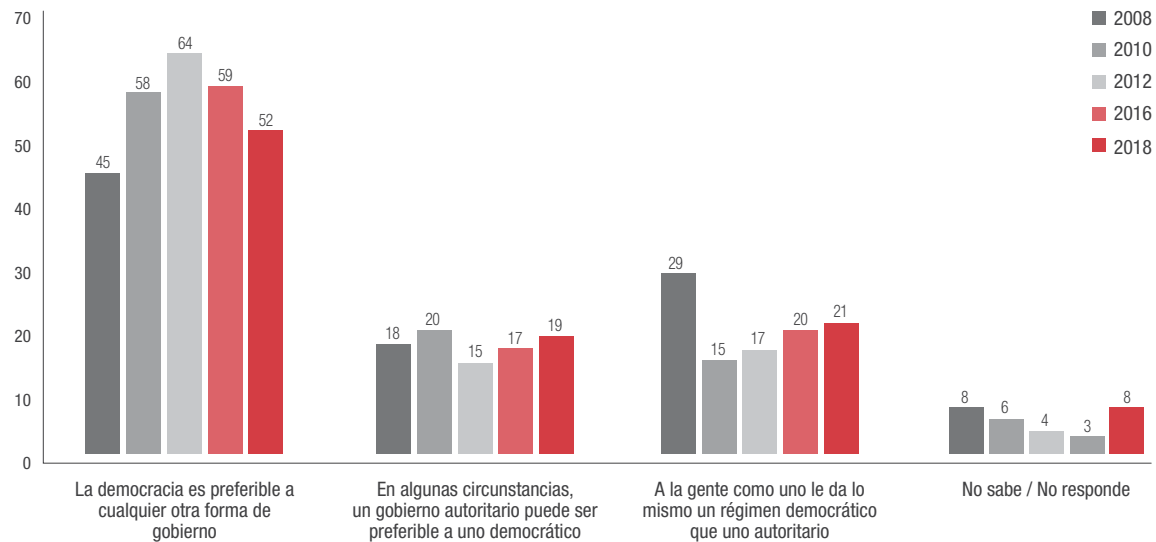
Las tendencias anteriores se confirman al analizar otro indicador de legitimidad democrática: la importancia

que la ciudadanía asigna a vivir en una sociedad democrática. Al comparar los datos de la Encuesta de Desarrollo Humano del año 2013 con los resultados de la ENAD 2018, se aprecia que en esta última medición

las personas encuestadas le otorgan menor importancia (ver Gráfico 1.2). En una escala de 1 al 10, donde 10 representa la opinión “es absolutamente importante” y 1 “no es para nada importante”, el promedio se redujo

GRÁFICO 1.1 Legitimidad de la democracia en Chile, 2008-2018

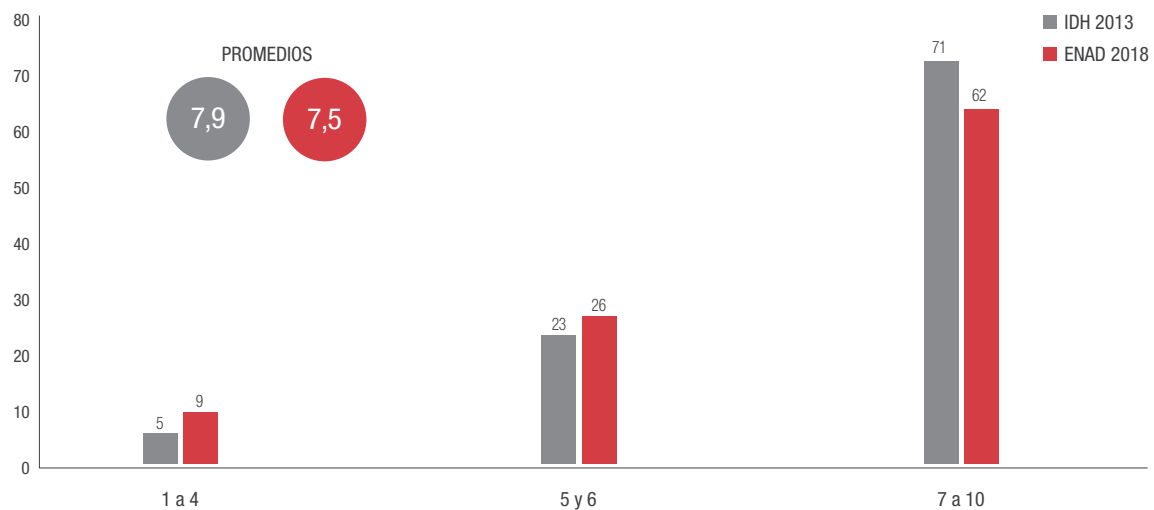
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 1.2 Importancia de vivir en una sociedad democrática, 2013 y 2018

¿Qué tan importante es para usted vivir en una sociedad democrática? En una escala donde 1 “no es para nada importante” y 10 es “absolutamente importante”, ¿qué posición elegiría usted?



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta de Desarrollo Humano 2013 y Auditoría a la Democracia 2018.

de 7,88 a 7,48 en estos cinco años. A su vez disminuyó en el período de un 71% a un 62% la proporción que otorga entre 7 y 10 puntos a la importancia de vivir en una sociedad democrática. En 2018 son levemente más quienes se ubican en una posición ambigua, asignando grados de importancia intermedios a vivir en una sociedad democrática (valores 5 y 6 en la escala de evaluación).

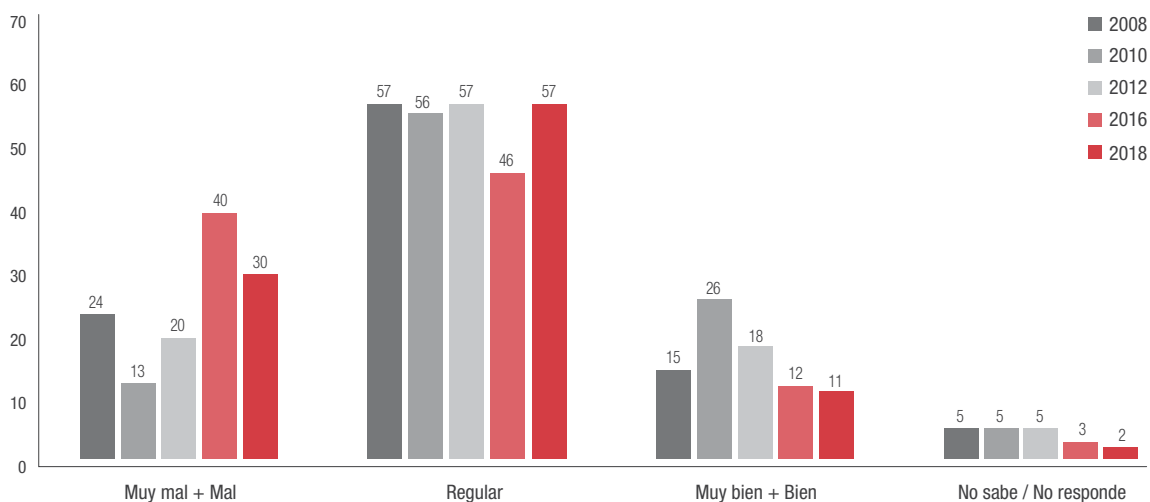
¿Existe una relación entre la evolución de la legitimidad democrática en el país y la evaluación que realizan las personas al funcionamiento de la democracia? Como se aprecia en el Gráfico 1.3, aunque con matices, entre el inicio del período (2008) y la última medición (2018) la proporción de personas que consideran que en Chile la democracia funciona bien o muy bien experimentó una importante disminución. Por ejemplo, en la medición de 2010, que coincide con la primera alternancia de bloques políticos en el gobierno, la evaluación positiva del funcionamiento de la democracia aumentó, pasando de un 15% a un 26%. Sin embargo, desde entonces se consolida una tendencia a la baja. Al año 2018, la proporción de personas que considera que la democracia en Chile funciona bien o muy bien solo alcanza un 11%.

Al mismo tiempo, aumentan las evaluaciones negativas sobre el funcionamiento de la democracia. Si bien los peores resultados se registraron el año 2016, después de las crisis políticas por los escándalos de colusión y corrupción que se conocieron durante todo 2015, y de una baja importante en el crecimiento de la economía a partir del 2014, aún en 2018 un 30% de la población considera que la democracia en Chile funciona “mal o muy mal”. Como se observa en el Recuadro 2, hay distintos aspectos de la sociedad chilena que han dejado de producir orgullo.

El Gráfico 1.4 presenta el resultado de un ejercicio retrospectivo y prospectivo que permite complementar el análisis desarrollado hasta aquí. Cada línea representa el promedio obtenido en las distintas mediciones del período al preguntar a las personas cuán democrático creen que era, es y será Chile en cuatro momentos: antes de 1973, diez años atrás, al momento de aplicarse la encuesta y en diez años más. Podían contestar entre los valores 1, “para nada democrático”, y 10, “muy democrático”. En cada una de las mediciones el presente es mejor evaluado que el pasado, y las expectativas sobre la democracia son más positivas que la evaluación del

GRÁFICO 1.3 Evaluación del funcionamiento de la democracia en Chile, 2008-2018

¿Qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que funciona la democracia en Chile?



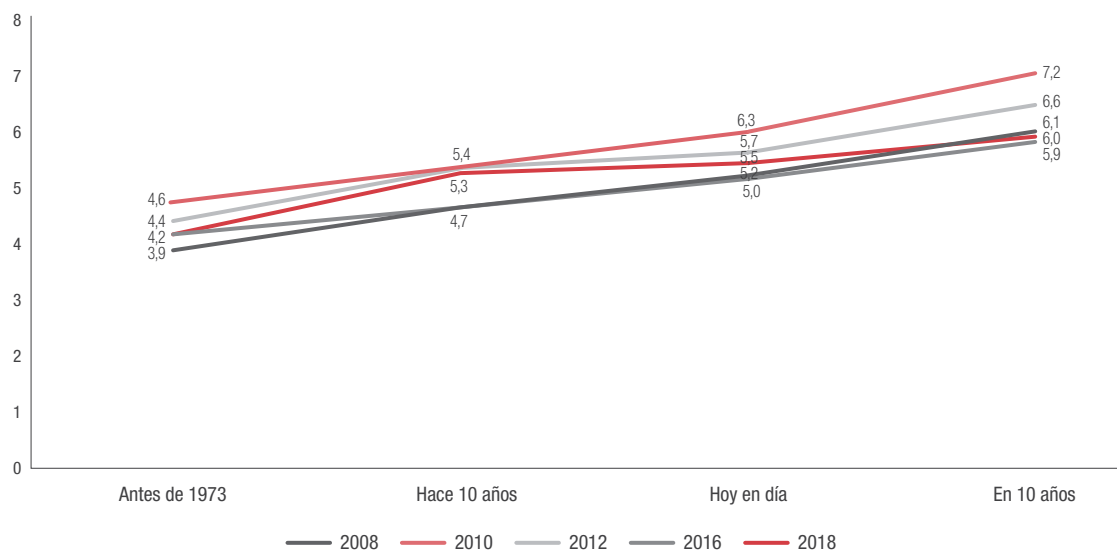
Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

presente. No obstante, al comparar los resultados de 2010 con los de 2018 se aprecia una tendencia pesimista. En 2010 el futuro de la democracia promediaba 7,2. Ocho años más tarde, obtiene un 6,0. Esta cifra es idéntica a la observada en el 2008, en plena crisis financiera global.

En suma, los datos reflejan una creciente evaluación negativa del funcionamiento de la democracia en Chile, así como una proporción estable (aunque minoritaria) de personas con actitudes pro-autoritarias. Además, a partir del año 2012 se observa un mayor sesgo pesimista sobre el futuro de la democracia en el país.

GRÁFICO 1.4 Percepción respecto de qué tan democrático es Chile, visión sobre períodos históricos y prospectiva, 2008-2018

¿Qué tan democrático es/ era Chile? Usando esta escala donde 1 significa “para nada democrático” y 10 significa “muy democrático”



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

ORGULLO RESPECTO DE DISTINTOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD CHILENA

El orgullo que despiertan en las personas distintas características del país es un elemento clave para explorar cómo ha evolucionado la relación que establece la ciudadanía con el desempeño de Chile en ámbitos diversos de la vida social.

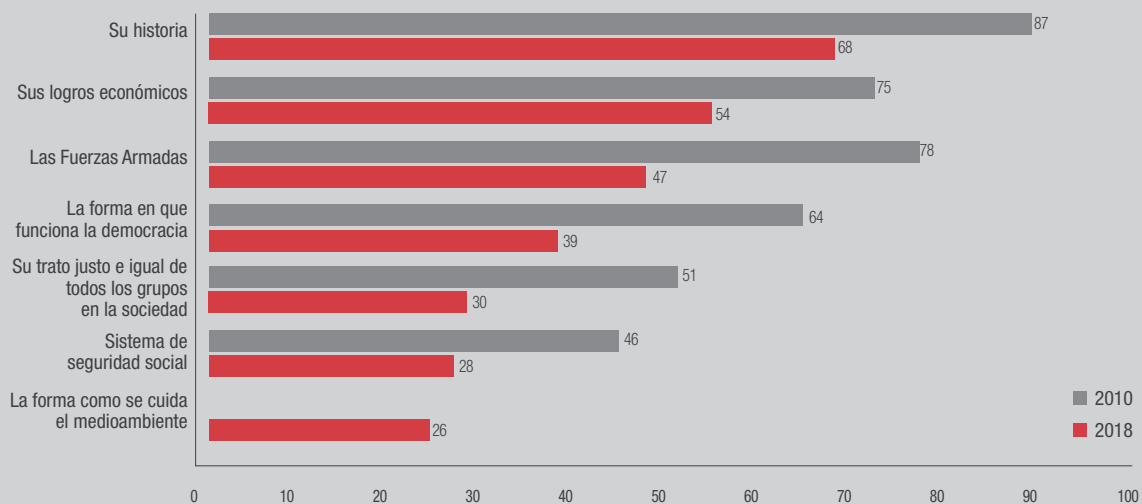
El Gráfico 1.5 muestra que entre 2010 y 2018 disminuyen sustantivamente quienes se consideran muy o algo orgullosos de todos los aspectos medidos. El orgullo por las Fuerzas Armadas y por la forma en que funciona la democracia son los aspectos que experimentan mermas más marcadas (31 y 25 puntos porcentuales). Se aprecia

que la historia del país es el aspecto que concita mayor orgullo y que, por el contrario, la forma como se cuida el medioambiente presenta el nivel más bajo, coincidente con la importancia que ha adquirido la preocupación por los problemas ambientales (ver Capítulo 3).

Por último, aspectos clave para la gobernabilidad democrática como la forma en que funciona la democracia, el trato justo e igualitario y el sistema de seguridad social no suscitan gran orgullo entre los chilenos. Estos resultados se pueden relacionar con la peor evaluación que realiza la ciudadanía al funcionamiento de la democracia.

GRÁFICO 1.5 Orgullo respecto de distintos aspectos del país, 2010-2018

¿Qué tan orgulloso se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes aspectos? Muy o algo orgulloso



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

CHILE EN PERSPECTIVA REGIONAL: OPINIÓN PÚBLICA E INDICADORES DE CALIDAD DEMOCRÁTICA

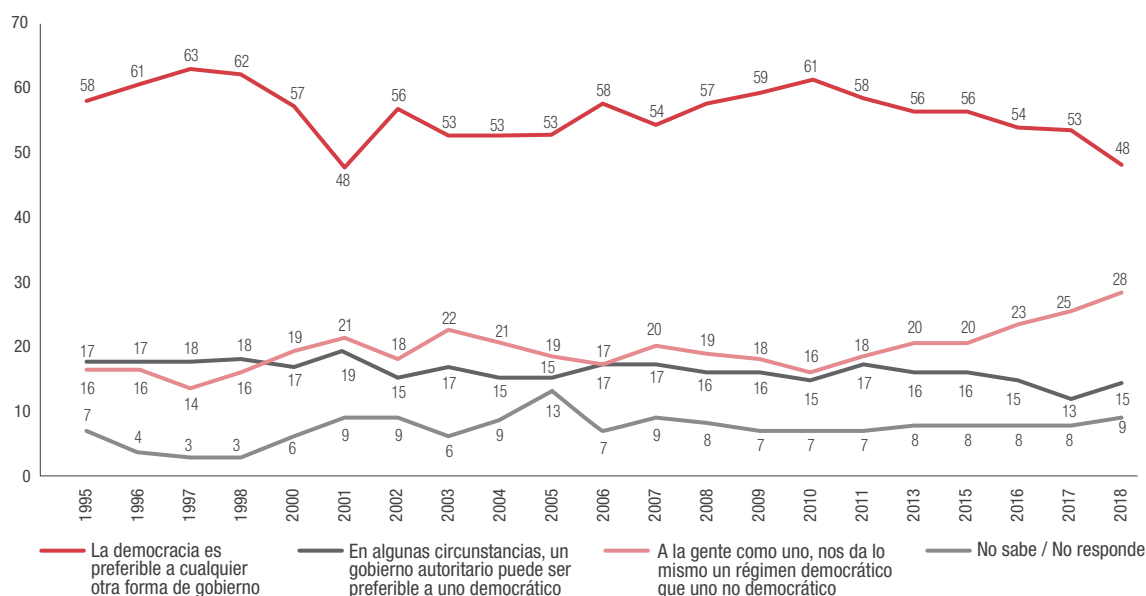
Desde 1995, la Corporación Latinobarómetro mide los dos indicadores presentados en la sección anterior en 18 países de la región. El Gráfico 1.6 presenta los resultados agregados sobre legitimidad del régimen democrático, y se observa que el porcentaje de quienes declaran que la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno se encuentra actualmente en su mínimo histórico (48%). Esta cifra también se registró en 2001, tras una drástica caída a partir del año 1998 (cuando estalla la “crisis asiática”). Lo llamativo de la caída más reciente es que no se relaciona con ningún fenómeno

de deterioro económico particular, pues se manifiesta de modo persistente desde 2010, época en que la región recibía los réditos económicos masivos generados por el auge de las materias primas). Por otro lado, entre 2010 y 2018 aumenta sostenidamente la proporción de personas que se declara “indiferente” entre un régimen democrático y uno no democrático.

En el Gráfico 1.7 se descompone la media regional de preferencia de un régimen democrático frente a otro tipo de gobierno, según países. Se aprecia que Chile

GRÁFICO 1.6 Legitimidad de la democracia en 18 países de América Latina, 1995-2018

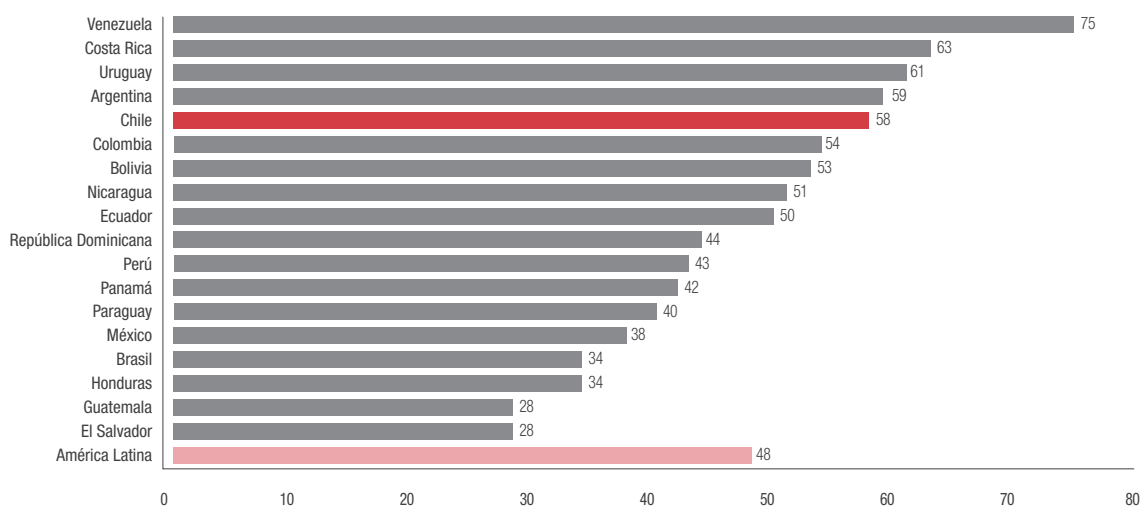
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? (%)



Fuente: Latinobarómetro, años respectivos.

GRÁFICO 1.7 Porcentaje que prefiere la democracia por sobre cualquier otro régimen político, 2018

¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (%)



Fuente: Latinobarómetro 2018.

se encuentra diez puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina, y que quienes declaran que la democracia es preferible a otra forma de gobierno representan un porcentaje mayoritario de las personas encuestadas. La situación de Chile es similar a la de Costa Rica y Uruguay, países con los que comparte una larga trayectoria democrática en la región. Los porcentajes más bajos se observan en países centroamericanos (Honduras, Guatemala, El Salvador), así como en México, Brasil y Paraguay. El caso venezolano, por otra parte, recuerda que la respuesta a esta pregunta expresa preferencias normativas más que un reflejo de la realidad.

El Gráfico 1.8 presenta el porcentaje de quienes se declaran indiferentes respecto del régimen político. Chile es uno de los países con menor indiferencia, lo que confirma su posición relativa positiva. El Gráfico 1.9, sin embargo, introduce un matiz relevante. Chile y Paraguay son los dos países de la región donde quienes sostienen que un régimen autoritario podría ser preferible a un sistema democrático representan más de un quinto de la población. Esta cifra evidencia que persiste en Chile un núcleo duro de personas con actitudes pro-autoritarias.

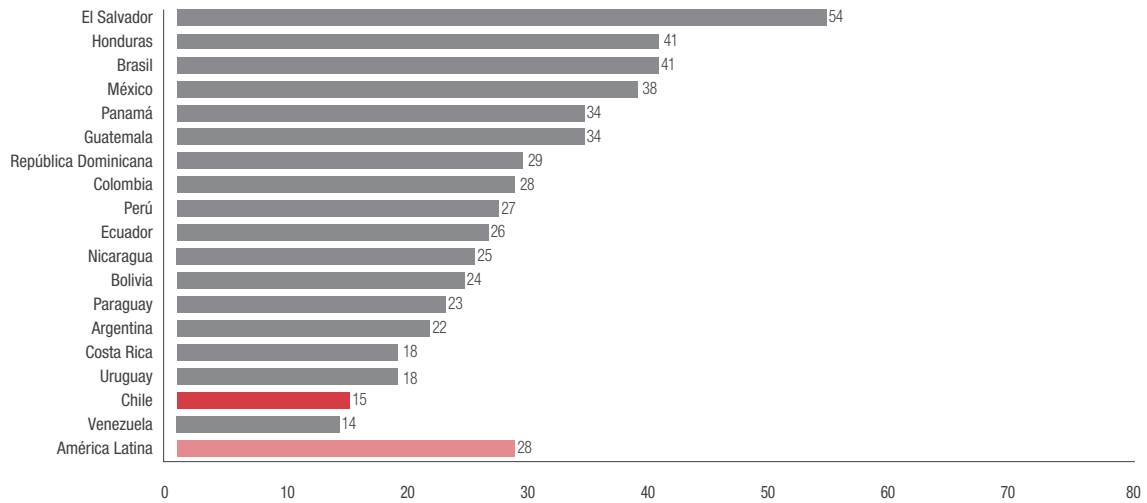
Si la evolución de la legitimidad de la democracia en América Latina resulta preocupante, también lo es la evolución regional de la satisfacción con el funcionamiento de este régimen político. Según se observa en el Gráfico 1.10, durante la última década hay un marcado y sostenido aumento de esta insatisfacción ciudadana. La información detallada por país (gráfico 1.11) indica que en algunos países de la región (Brasil, Perú, El Salvador y Venezuela) apenas en torno al 10% de la población se declara satisfecho con la democracia.

En el contexto regional, Chile, nuevamente junto a Costa Rica y Uruguay, está en una situación bastante más favorable. Sin embargo, en ninguno de estos tres países el porcentaje de encuestados satisfechos alcanza al 50%.

En síntesis, a nivel regional Chile presenta indicadores relativamente positivos tanto en legitimidad como en evaluación del régimen democrático, a excepción de un porcentaje proporcionalmente alto de personas que consideran que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a la democracia.

GRÁFICO 1.8 Porcentaje que se declara indiferente respecto del régimen político, 2018

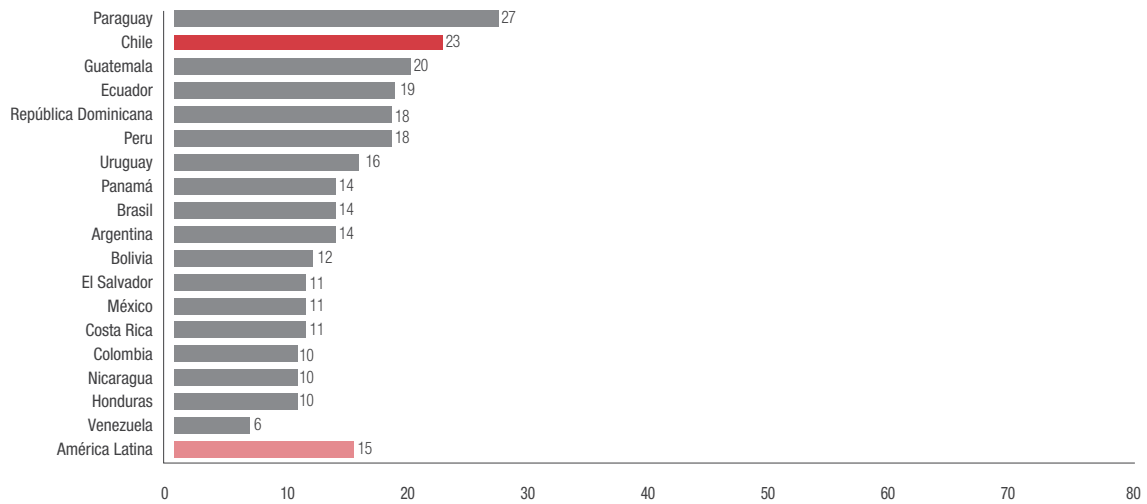
¿Con cuál de las siguiente frases está Ud. más de acuerdo? A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático (%)



Fuente: Latinobarometro 2018.

GRÁFICO 1.9 Porcentaje que declara que un régimen autoritario puede ser preferible, 2018

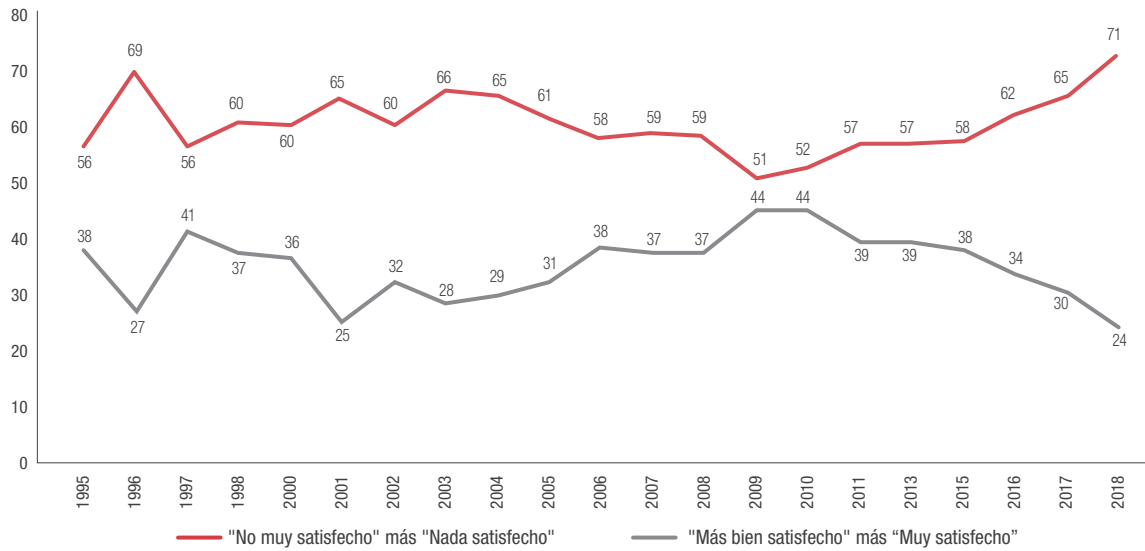
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático (%)



Fuente: Latinobarómetro 2018.

GRÁFICO 1.10 Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en América Latina, 1995-2018

En general, ¿diría Ud. que está Muy satisfecho, Más bien satisfecho, No muy satisfecho o Nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (país)? (%)

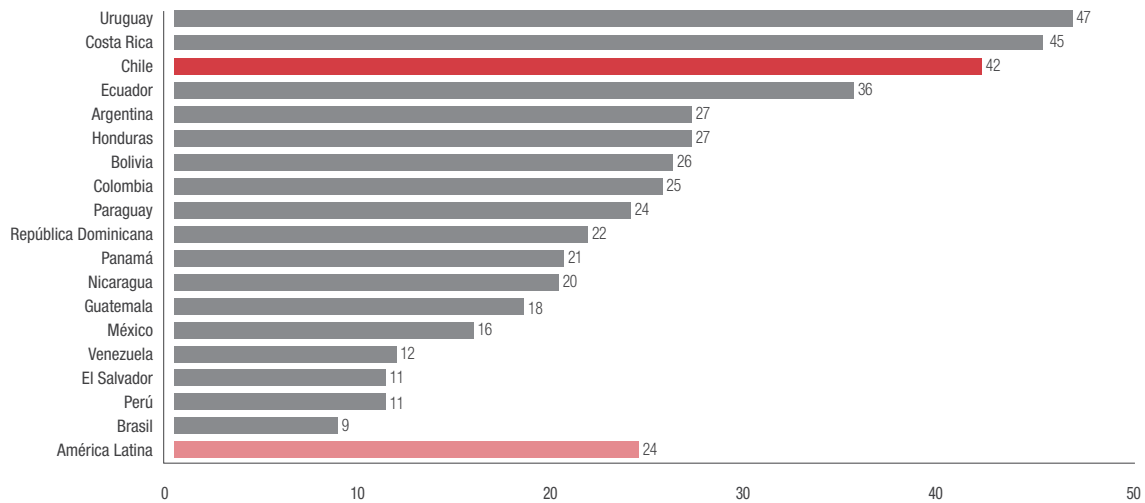


Fuente: Latinobarómetro, años respectivos.

Nota: No se grafica las opciones "No sabe" y "No contesta".

GRÁFICO 1.11 Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en su país, 2018

En general, ¿Diría que está Muy satisfecho, Más bien satisfecho, No muy satisfecho o Nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (país)? Porcentaje que contesta "Muy satisfecho" o "Más bien satisfecho" (%)



Fuente: Latinobarómetro 2018.

Otra forma de análisis son las opiniones de la comunidad experta en ciencias políticas de cada país, respecto de la evaluación de la democracia. El Gráfico 1.12 presenta el índice de democracia liberal (para Chile y para América Latina y el Caribe) calculado por el proyecto *Varieties of Democracy* (V-DEM), que hoy se considera adecuado para comparar regímenes democráticos (Teorell et al., 2016). Este índice de democracia liberal enfatiza la protección de los derechos individuales y de las minorías frente al poder del Estado, y permite estimar la calidad de la democracia según la protección de las libertades civiles, la vigencia del estado de derecho, la presencia de un poder judicial autónomo y la limitación del poder del ejecutivo mediante sistemas de división de poderes.

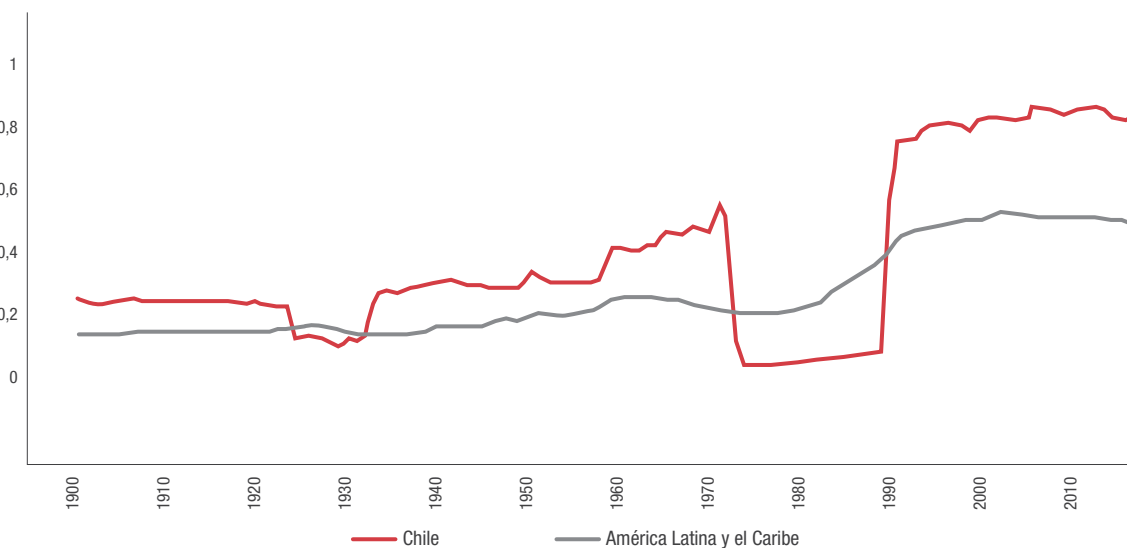
Se aprecia que, en el contexto regional, Chile posee una larga tradición democrática liberal. No obstante, registra dos caídas significativas, una es la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y otra la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Desde 1990, y particularmente desde los años 2000, el índice de democracia liberal observado en Chile es el más alto de su historia, y solo se registran variaciones menores a lo largo del período 2000-2018.

Además del índice agregado de democracia liberal, V-DEM calcula cuatro índices adicionales: el de democracia deliberativa, el de democracia participativa, el

de democracia igualitaria y el de democracia electoral. Este último es precondition de todos los anteriores y considera en qué medida los procesos electorales limpios, competitivos y libres constituyen la base para la elección de liderazgos en una sociedad. El índice de democracia deliberativa tiene en cuenta la existencia de un diálogo abierto y plural en el proceso de formación de políticas públicas. El índice de democracia participativa estima el grado en que la ciudadanía, siempre que sea posible, puede ejercer el poder de manera directa. Finalmente, el índice de democracia igualitaria revisa en qué medida todas las personas, aunque pertenezcan a grupos sociales diferentes, pueden ejercer sus derechos y libertades, considerando también la equidad en la distribución de los recursos sociales. Se evalúa positivamente la posibilidad de que las personas participen, sea vía mecanismos de democracia directa, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil o elección directa de las candidaturas al gobierno de instituciones locales y subnacionales.

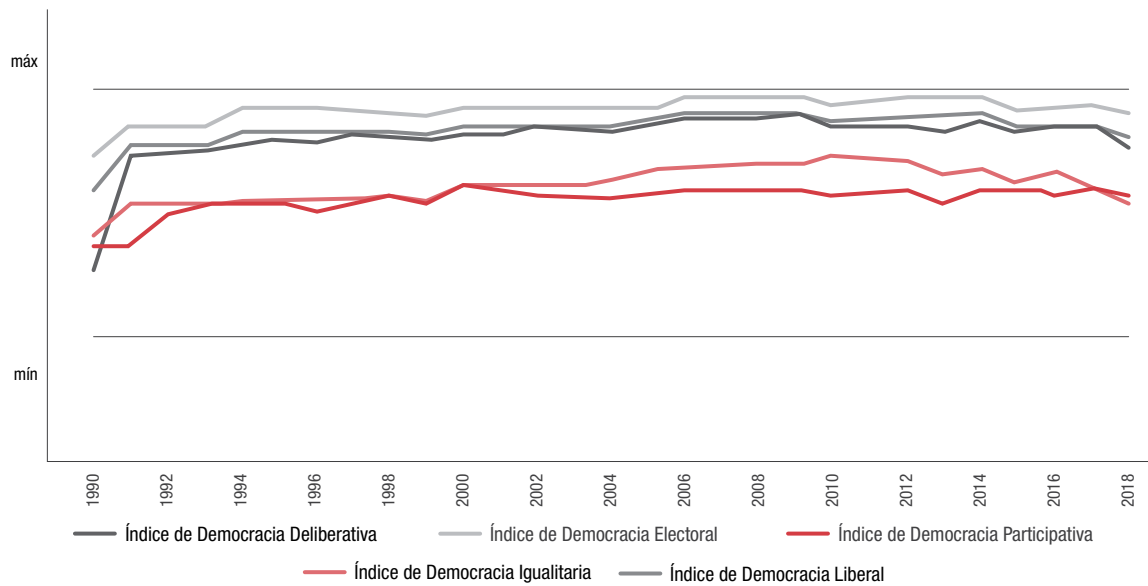
Como puede observarse al comparar los gráficos 1.13 y 1.14, el desempeño de la democracia chilena en los cinco índices incorporados en la medición de V-DEM es, desde el retorno a la democracia en 1990, superior al promedio registrado para América Latina y el Caribe. Los principales déficits relativos de la democracia chilena tienen relación con los índices de democracia participativa e igualitaria,

GRÁFICO 1.12 Índice de democracia liberal, Chile y América Latina y el Caribe, 1900-2018



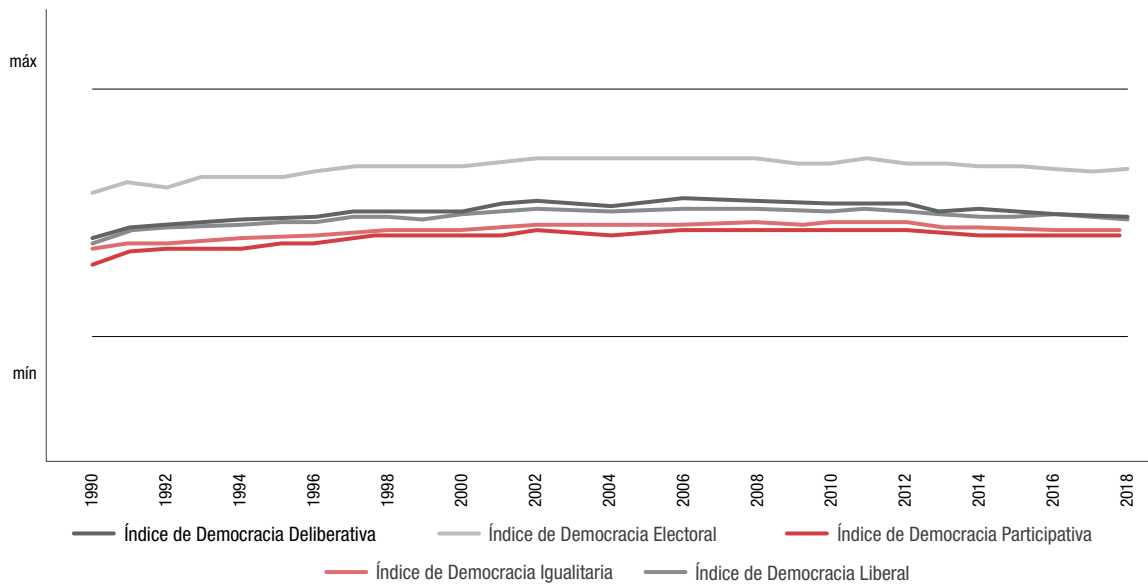
Fuente: Elaboración del PNUD a partir de datos de V-DEM, años respectivos.

GRÁFICO 1.13 Índices de democracia liberal, deliberativa, participativa, equitativa y electoral en Chile , 1990-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de datos de V-DEM, años respectivos.

GRÁFICO 1.14 Índices de democracia liberal, deliberativa, participativa, equitativa y electoral en América Latina y el Caribe, 1990-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de datos de V-DEM, años respectivos.

los que reflejan una baja participación de la ciudadanía en el proceso democrático, así como la inequidad socioeconómica que no solo caracteriza a la sociedad sino que se traduce en una fuerte estratificación de procesos políticos clave, como la participación electoral. En los componentes liberal, electoral y deliberativo de la democracia Chile tiene índices más positivos.

En síntesis, en un contexto regional marcado por una desafección creciente del ideal democrático, y por un aumento significativo de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, la situación de Chile es relativamente favorable. El diagnóstico, basado en indicadores de opinión pública, resulta consistente con la evaluación a partir de índices de calidad democrática construidos por la comunidad experta (V-DEM). La presencia de un conjunto minoritario de personas con actitudes pro-autoritarias, así como la debilidad de los componentes participativo e igualitario de los índices de calidad democrática, son los únicos matices negativos que emergen al analizar el desempeño de Chile en comparación con el resto de Latinoamérica.

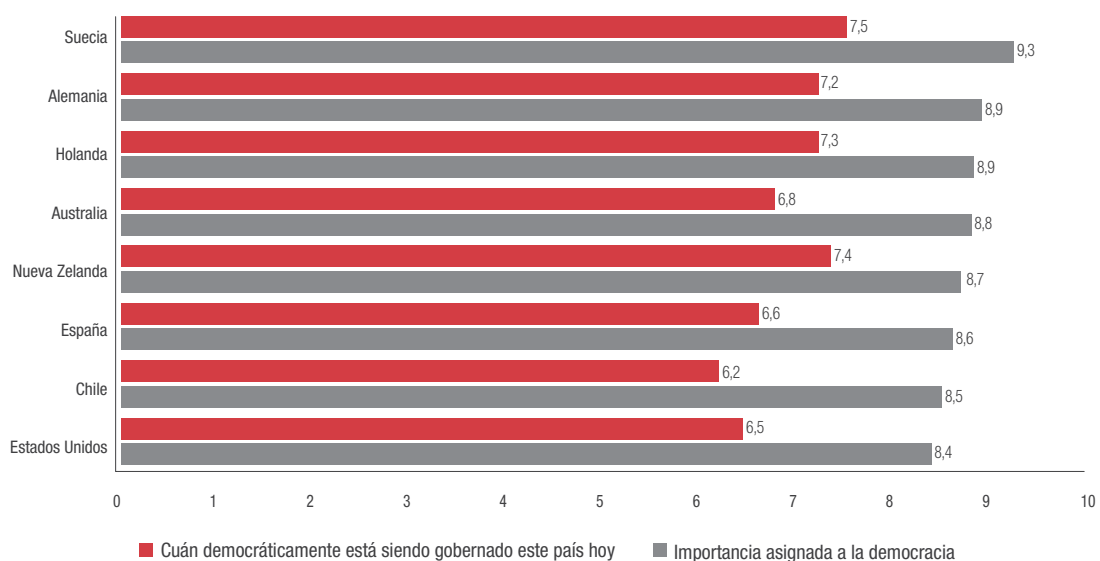
El panorama cambia al compararlo con el grupo de países de la OCDE. La Encuesta Mundial de Valores, en su versión disponible más reciente (2010-2014), incluye dos

preguntas relevantes para analizar la legitimidad y evaluación de la democracia de Chile en perspectiva comparada. La primera pide a las personas encuestadas asignar el grado de importancia que otorga a la democracia en una escala de 1 a 10, y la segunda consulta, también en una escala de 1 a 10, en qué medida el país se encuentra gobernado en forma democrática en la actualidad.

Si bien estas preguntas no son idénticas a las anteriores, constituyen aproximaciones razonables para comparar la situación de la democracia en Chile con aquella en países de alto desarrollo relativo. El Gráfico 1.15 presenta el promedio obtenido por Chile en ambos indicadores y lo compara con Australia, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, España, Suecia y Estados Unidos. Chile presenta promedios comparativamente bajos en ambos indicadores, similares a los de Estados Unidos (antes de la elección de Donald Trump).

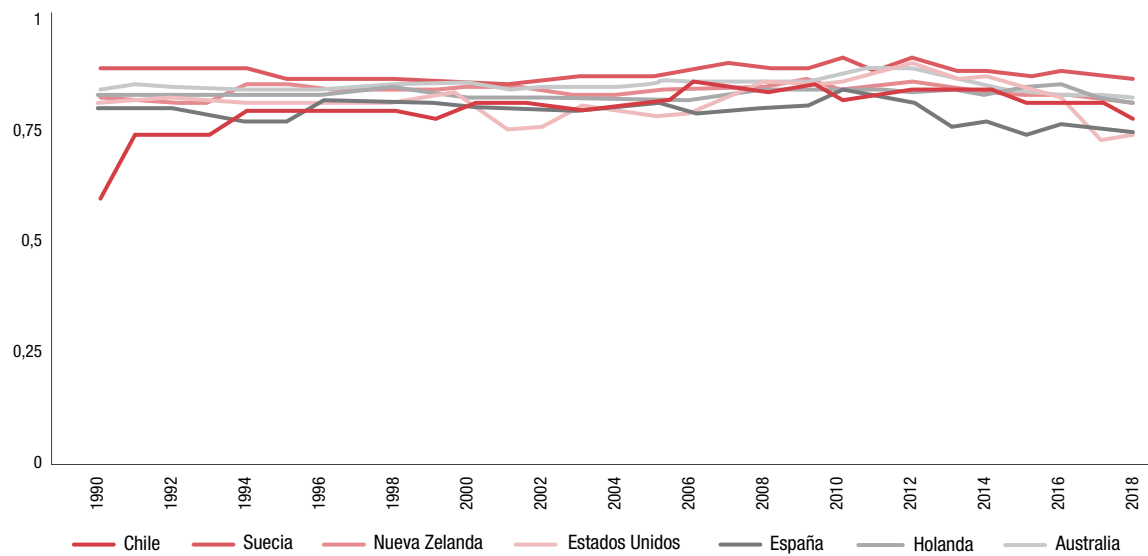
El Gráfico 1.16, por su parte, muestra el índice de democracia electoral de V-DEM para el mismo grupo de países. En este caso, Chile presenta hacia el final del período (2017) una valoración (0,78) levemente superior a la de Estados Unidos (0,72) y España (0,70). Pero queda rezagado respecto de los índices obtenidos por Alemania (0,80), Holanda (0,81), Nueva Zelanda (0,82), Australia (0,82) y Suecia (0,86).

GRÁFICO 1.15 Promedio en una escala de 1 a 10 obtenido por 8 países sobre “importancia de la democracia” y “grado en que el país está siendo gobernado en forma democrática”



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de la Encuesta Mundial de Valores, 2010-2014.

GRÁFICO 1.16 Índice de democracia liberal, 1990-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de datos de V-DEM, años respectivos.

LOS TELONES DE FONDO: PROCESOS POLÍTICOS Y SOCIALES EN EL CHILE CONTEMPORÁNEO

Los datos presentados sobre legitimidad de la democracia y evaluación de su funcionamiento sitúan a Chile en una posición de ventaja relativa respecto de la región. Pero también revelan que los indicadores de satisfacción con la democracia han disminuido y la imagen de futuro es más negativa que en años anteriores. En los siguientes capítulos se exploran tres transformaciones que pueden estar detrás de esa insatisfacción y ese pesimismo: una sostenida caída en la confianza en las instituciones, que se vincula con las evaluaciones negativas de las personas sobre su funcionamiento (Capítulo 2), una ciudadanía diferente de la de hace diez años, más liberal e igualitaria (Capítulo 3), crecientemente distante de la política institucional y que incrementa su participación en acciones políticas no convencionales (Capítulo 4).

En su conjunto, estos cambios sugieren desafíos relevantes en materia de gobernabilidad democrática. En esta sección se presentan, a modo de claves interpretativas de tales desafíos, algunas de las principales lecturas de los cambios sociopolíticos experimentados por el país desde la recuperación de la democracia hasta el presente. Se estructuran en torno a dos momentos: desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta el año 2005, y luego el período 2006-2018. Los datos de la ENAD cubren gran parte de este último momento.

Enclaves autoritarios, adaptación de las elites y una ciudadanía apolítica (1990-2005)

La literatura plantea que, durante este período, Chile experimentó dos grandes procesos: un distanciamiento

creciente entre las personas y la política, especialmente respecto de la institucionalidad representativa (los partidos, el Congreso, los procesos electorales, etc.), y una adaptación de las elites políticas a los constreñimientos introducidos por los “enclaves autoritarios” heredados de la dictadura.

Respecto del primero, las investigaciones han destacado sistemáticamente tres dinámicas. Por una parte, la progresiva pérdida de centralidad de la política en la vida social desde la recuperación de la democracia. A fines de los años noventa, por ejemplo, el 70% de la población en Chile se consideraba a sí misma como “no política” (Lechner, 1998; PNUD, 2002; Madrid, 2005). Por otra, una apatía ciudadana en aumento, en especial entre los segmentos más jóvenes, los que sistemáticamente presentaban una escasa participación e identificación política (Flisfisch et al., 1988; Baño y Faletto, 1992; INJUV, 1996, 1999, 2002; Riquelme, 1999; Toro, 2008). Y, por último, la presencia de un porcentaje relevante de “nostálgicos” del régimen autoritario (Huneus y Maldonado, 2003).

Durante la década de 1990 se propuso una serie de hipótesis para explicar el déficit de legitimidad democrática que caracterizó al período. Manuel Antonio Garretón, por ejemplo, atribuyó la pérdida de relevancia de la política a la herencia institucional y socioeconómica de la dictadura, y sobre todo a los “enclaves autoritarios” que esta legó al país (Garretón, 1989, 1990). Dado que estos “enclaves” impedían a la política modificar la realidad socioeconómica, a la larga limitaron la capacidad de los actores políticos de ejercer la representación política y obtener legitimidad social (Garretón, 2012). Así, uno de los resultados de la transición hacia una sociedad de mercado (o “neoliberal”)

habría sido que la política fue perdiendo su capacidad de mediar en los conflictos sociales y políticos. Norbert Lechner compartía esta tesis y planteó que la noción misma de conflicto social se vuelve superflua con la mercantilización (1985: 310-311). Tomás Moulian también desarrolló la idea: “El gran cambio cultural introducido en estos años de autoritarismo mercantilizador ha sido el debilitamiento de ese espíritu o ánimo societal, cuyas expresiones más importantes eran la tendencia asociativa y la politicidad” (1994: 31).

La creciente apatía ciudadana se vinculó asimismo con el progresivo distanciamiento entre los actores políticos y la sociedad civil. Así, lo que a principios de la transición se interpretó como una tensión emergente entre actores sociales y actores políticos (Garretón, 1990) comenzó a conceptualizarse como un proceso de despolitización y desmovilización concertado y dirigido a alimentar el desgaste y la pérdida de centralidad de los actores de la sociedad civil (Oxhorn, 1994, 2010; Moulian, 1997; Posner, 1999, 2004).

Huneus y Maldonado (2003) reconstruyeron una serie de datos de entre 1991 y 2002 sobre la legitimidad de la democracia, que exploraban el grado de acuerdo con la frase “La democracia es el mejor sistema político para un país como el nuestro”. Los resultados eran sorprendentemente estables: en 1991, el 37% de las personas encuestadas no estaba de acuerdo con la afirmación. En 2002 los “nostálgicos” eran un 30%. Los autores plantearon que el déficit de legitimidad democrática durante este período en parte obedecía a las fuertes divisiones sociales y políticas del pasado, las que dieron lugar a dos grupos sociales, uno pro-autoritario, alineado con los partidos que representan en la post-transición a los adherentes a la dictadura, y otro pro-democrático, alineado con los partidos de centro y de izquierda.

Una de las lecturas más consensuadas sobre las transformaciones ocurridas en este período es que las elites tendieron a focalizarse en la negociación política, desligándose progresivamente de la sociedad civil organizada. Por cierto, esta tendencia no ha sido siempre criticada. Varios autores han destacado el carácter virtuoso de la transición chilena, por su capacidad para garantizar un marco de gobernabilidad y crecimiento económico

(Boeninger, 2003), así como la capacidad del sistema político para desarrollar una serie de instituciones informales que permitieron lidiar con los “enclaves autoritarios” en un contexto democrático (Siavelis, 2009; Navía, 2005, 2008). Desde esta perspectiva, la adaptación de las elites políticas se consideró un complemento funcional a la consolidación del modelo económico-social implantado durante el régimen autoritario (Cortés Terzi, 2000).

Protestas, reformas y repolitización (2006-2018)

Aunque exitosa en el corto plazo, la adaptación de la clase política a los constreñimientos de una transición pautada por la herencia autoritaria generó también otros resultados menos positivos. Así, la institucionalización de negociaciones “a puertas cerradas” entre las elites políticas pasó de entenderse como clave de un proceso de adaptación exitoso a verse como causa directa del deterioro del vínculo entre la ciudadanía y sus representantes (Rovira, 2007).

En particular, se señaló la creciente incapacidad del sistema de partidos para movilizar a un electorado cada vez más apático y escéptico del sistema político, especialmente en segmentos jóvenes (Riquelme, 1999; Luna y Altman, 2011). A su vez, el avance de la personalización de la política y del faccionalismo al interior de los partidos y coaliciones (Luna y Mardones, 2010; Luna, 2014) abrió una fisura en la cooperación en el nivel de las elites. Con el correr del tiempo, ambos movimientos (en la sociedad civil y en las elites políticas) decantaron en el concepto de “crisis de representación”, que alude simultáneamente a la apatía ciudadana y al “encapsulamiento” y alejamiento de las elites políticas de sus bases sociales (Castiglioni y Rovira, 2016; Luna, 2016; Bargsted y Maldonado, 2018).

Sin embargo, en el primer momento (1990-2005) la tesis de la crisis de representación careció de un desenlace tangible. Pues, aunque apática, durante este período la sociedad civil no opuso desafíos abiertos al sistema político. Y si bien este último estaba tensionado y había perdido legitimidad, aún se le consideraba uno de los sistemas políticos más estables e institucionalizados de la región (Mainwaring y Scully, 2010). Y con la elección

de Sebastián Piñera como Presidente de la República en 2009 la tesis de la “adaptación exitosa” se fortalecía, al registrarse la primera alternancia democrática entre las dos coaliciones que estructuraron el sistema político desde 1990 (Luna, 2016).

Los alcances del proceso de cambio en curso en la sociedad chilena son todavía difíciles de evaluar. No obstante, la información que presentamos en los próximos capítulos sugiere que las transformaciones son profundas.

En este período se producen dos interrupciones significativas respecto de la dinámica sociopolítica observada entre 1990 y 2005. Por un lado, una repolitización de un segmento importante de la ciudadanía; aunque, como se describe en el Capítulo 4, este proceso discurre mayormente por canales extrainstitucionales. Esta repolitización logra instalar en la agenda pública nuevas demandas que el sistema político tradicional tiene dificultades para procesar. Así, si bien ya a finales de la década de 1990 la desigualdad de la sociedad chilena y la aparente incapacidad de la democracia para generar mayor justicia social surgieron como claves interpretativas del descontento con el régimen y la apatía, es en este último período que la desigualdad social irrumpe como motor de la nueva politización (Roberts, 2012, 2015; Castiglioni y Rovira, 2016; Luna, 2016). La emergencia de movimientos sociales que, a partir del año 2006, logran desafiar e impugnar el sistema político tradicional en las calles constituye el síntoma más visible de esta nueva politización de un segmento de la sociedad (Donoso y Von Bulow, 2017).

Por otro lado, las elites políticas reaccionan ante las demandas y cuestionamientos de los movimientos sociales iniciando una agenda de reformas político-institucionales que alteran las reglas del juego democrático, desmontando los enclaves autoritarios de carácter institucional e intentando así volver a sintonizar con la ciudadanía. Durante el período de referencia se reforma el sistema de inscripción electoral, se instaura el voto voluntario, se legaliza el mecanismo de primarias para la selección de

candidatos y candidatas, se establece la elección directa de CORES y gobernadores regionales y se reemplaza el sistema binominal por un sistema electoral de representación proporcional que incorpora un rediseño (en muchos casos mediante el aumento de la magnitud) de distritos y circunscripciones electorales e introduce un mecanismo de equilibrio de género o cuotas de género.

Además, se modifica significativamente el sistema de financiamiento electoral y de la política, se regulan las campañas electorales y se introduce una nueva ley de partidos políticos, que los define como entidades públicas, aptas para recibir financiamiento estatal si regulan sus procesos en materia de democracia interna, transparencia y paridad de género, entre otras. Las reformas políticas aprobadas buscaron, además, fortalecer la capacidad del Estado para fiscalizar procesos y actores políticos, entregándole nuevas atribuciones al Servicio Electoral.

No obstante, esta reacción parece tardía y se produce en un contexto de escándalos de corrupción que erosionan muy fuertemente la confianza de la población en las instituciones políticas y republicanas (ver Capítulo 2). Aunque los escándalos catalizan la agenda de reformas, el cambio de las reglas de juego y la apertura del sistema a nuevos actores, que emergen de la movilización social, no parecen haber sido suficientes para revertir la pérdida de confianza en el sistema político. A ello se suma la persistente incapacidad de este para revertir la caída de la participación electoral y, en consecuencia, la progresiva estratificación del voto en términos geográficos, etarios, socioeconómicos y de género. Un análisis reciente de las elecciones municipales de 2016 realizado por el PNUD señala que quienes ejercen el derecho a sufragio provienen en mayor medida de comunas pequeñas y con baja densidad de población, es decir, de sectores predominantemente rurales (PNUD, 2017: 30). El mismo estudio detectó sesgos socioeconómicos significativos en la participación electoral en la Región Metropolitana, donde el porcentaje de votación tiende a incrementarse en comunas de mayor nivel socioeconómico.

CONCLUSIONES

En varios países la democracia se encuentra tensionada por la baja confianza ciudadana en gran parte de las instituciones, políticas o no. En ese marco florecen liderazgos que promueven reconstruir un “pasado feliz” mediante la articulación de agendas de corte xenófobo y nacionalista, de mano dura o de extremo conservadurismo valórico. En América Latina diversos países enfrentan crisis sociales, políticas y económicas que amenazan la salud de la democracia en la región. En ese contexto, a juzgar por los indicadores de la valoración de la democracia, la situación de Chile parece relativamente satisfactoria.

No obstante, el análisis de los indicadores derivados de los datos de la serie ENAD detecta algunos síntomas de alarma. Por un lado, en los últimos años se asiste a una reversión de la tendencia positiva que se vio tras la alternancia entre coaliciones políticas del 2010 respecto de la legitimidad y evaluación del funcionamiento de la democracia. Además, un porcentaje relativamente estable de la población en Chile considera que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a uno democrático. Finalmente, en 2018 la ciudadanía se muestra más pesimista respecto del futuro de la democracia en el país que en las mediciones anteriores. Estos indicios sugieren la presencia de nuevas fuentes de descontento social.

Cabe destacar que la tendencia “pesimista” se consolida durante un período en que la elite política reacciona ante el descontento y la apatía de la sociedad, acometiendo una serie amplia de reformas institucionales que terminan por desmontar los enclaves autoritarios heredados del período de transición a la democracia. El pesimismo coincide a su vez con un período en que no solo hubo alternancia en el poder sino también irrupción de nuevos partidos políticos,

varios de ellos impulsados por el incremento de la movilización social (especialmente juvenil) que ha caracterizado la dinámica del país desde 2005 hasta la actualidad.

El período de referencia para este trabajo es uno entonces en que el sistema político se encuentra bajo presión, a raíz de la irrupción de movimientos sociales con creciente autonomía, y también como consecuencia de una serie de escándalos que involucran a buena parte de los actores clave del sistema. En este contexto, el sistema procesa una serie de cambios muy significativos. Primero, con la elección de Sebastián Piñera en 2009 se produce la inédita alternancia entre las coaliciones políticas. Segundo, el sistema acomete reformas de política pública y de regulación de la política y el régimen electoral, las que facilitan, junto al descontento social, la llegada de nuevas fuerzas políticas a partir de la última elección presidencial y parlamentaria. Sin embargo, parece mantenerse e incluso profundizarse la crisis de confianza que aqueja al sistema político-institucional, más allá de su capacidad de respuesta y de su renovación. Como se verá en el capítulo siguiente, el impulso reformista del sistema aparentemente no ha podido contrarrestar la caída de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En lo que sigue, el Informe aborda tres aspectos clave para comprender los alcances de la rápida transformación ocurrida en el decenio 2008-2018: la caída de la confianza institucional (Capítulo 2), el acelerado cambio cultural experimentado por la sociedad chilena (Capítulo 3) y las transformaciones en el involucramiento político (Capítulo 4). Finalmente, en el Capítulo 5, a partir de estos cambios se examinan las diferencias en la valoración de la democracia entre distintos grupos sociales y políticos, y los principales desafíos para la democracia en Chile.

2.

**CONFIANZA Y
EVALUACIÓN CIUDADANA
DE LAS INSTITUCIONES**

En el capítulo anterior se analizó, desde la perspectiva de las personas, la evolución de la legitimidad y de la evaluación del funcionamiento de la democracia en Chile. En este se explora, a partir de la serie de encuestas ENAD, los cambios en la confianza ciudadana en las instituciones durante la década 2008-2018. Se describe, además, cómo la ciudadanía evalúa los partidos políticos, el Congreso y los tribunales de justicia, y la relación entre estas evaluaciones y la confianza que tiene en estas instituciones. Por último, se explora la relación entre la confianza institucional y la valoración abstracta del régimen democrático y de sus instituciones.

Durante la última década se ha instalado en el debate público y en el mundo académico un diagnóstico preocupante: la confianza ciudadana en las instituciones del país, especialmente aquellas vinculadas con el sistema político, disminuye de manera sostenida. Recientemente, escándalos de corrupción, colusión y abusos han alcanzado también a instituciones que hasta hace un tiempo despertaban bastante confianza en la población, como Carabineros, las Fuerzas Armadas o la iglesia católica. Esta pérdida de confianza institucional no es una particularidad del sistema chileno sino un fenómeno global, registrado al menos desde la segunda mitad del siglo XX en aquellos países que contaban con encuestas de opinión pública, y que se ha ido problematizando en los debates sobre la “crisis de la democracia” o las “crisis de representatividad” de los sistemas democráticos. Como se verá, Chile no muestra una caída más aguda que el resto de los países latinoamericanos. No obstante, la erosión de la confianza ciudadana comienza tempranamente en el país: a mediados de los años noventa.

Las señales de alarma son válidas, pues la confianza institucional desempeña varias funciones centrales para la calidad de las democracias. La literatura sugiere que es fundamental para la legitimidad democrática, pues garantiza la capacidad de las autoridades para ejercer el poder que se les ha conferido y preservar logros democráticos en tiempos de crisis (van der Meer y Zmerli, 2017). Además, la confianza promueve el involucramiento y la cooperación de la ciudadanía en el espacio cívico, participando en organizaciones o en acciones colectivas (Warren, 2018). Asimismo, se ha demostrado que facilita la labor de las instituciones (Hetherington, 1998). Un informe reciente de la OCDE (2017b) destaca que quienes manifiestan mayor confianza en las instituciones tienden, en mayor medida que las personas que confían menos, a apoyar iniciativas que requieren de su cooperación (por ejemplo, campañas de salud pública), a cumplir las normas (por ejemplo, pago de impuestos) e incluso a hacer sacrificios en el presente con vistas a beneficios colectivos futuros. Al contrario, la falta de confianza institucional, particularmente en el sistema de justicia y en las instituciones de orden y seguridad, puede afectar negativamente la disposición de las personas a cumplir la ley y favorecer la normalización de la corrupción (Morris y Klesner, 2010; Jones, 2015; Uslaner, 2017; Robinson y Robinson, 2018; You, 2018).

Es importante destacar que no toda desconfianza institucional tiene efectos negativos sobre la calidad de las democracias. Rosanvallon (2008) y Warren (2018) sugieren que los sistemas democráticos requieren de cierto escepticismo ciudadano, que impulse el control y la vigilancia de las acciones y decisiones de autoridades e instituciones, esto es, que fuercen la rendición de cuentas o exijan su reemplazo

en caso de evaluaciones deficientes. Además, la caída en la confianza puede, en ciertos contextos, resolverse mediante el voto o la implementación de reformas. Por ello el surgimiento de una ciudadanía crítica (Norris, 1999) y el deterioro de la confianza institucional no siempre constituyen una amenaza al sistema democrático, sino que pueden incluso fortalecerlo (Dalton y Shin, 2014).

El problema surge cuando la desconfianza se generaliza y va más allá de las evaluaciones del desempeño de ciertos líderes, de eventos concretos o de aspectos institucionales específicos. En estos casos puede devenir en “escepticismo político” (*political cynicism*), esto es, la percepción de que “el proceso político y sus actores son inherentemente corruptos, incompetentes e interesados en sí mismos” y que, por ende, nada bueno puede provenir de ellos (van de Meer y Zmerli, 2017: 5).

De los análisis contenidos en este capítulo se desprenden varios hallazgos relevantes. Los datos muestran que durante la última década se ha mantenido una tendencia a la baja en la confianza institucional. Esta caída no se limita a las instituciones políticas, sino que se extiende a otras como los tribunales de justicia, las Fuerzas Armadas y de Orden, los municipios, las iglesias y los medios de comunicación. De hecho, hoy casi no existen instituciones (salvo Bomberos) que gocen de la confianza de más de un tercio de la población. Además, mientras a inicios del período estudiado existían diferencias en los niveles de confianza expresados por distintos grupos sociodemográficos, estas han tendido a borrarse: la baja confianza en instituciones es hoy un fenómeno generalizado.

Un análisis más detallado de los datos evidencia que el declive en la confianza en las instituciones peor evaluadas (los partidos políticos, el Congreso y los tribunales de justicia) está altamente correlacionado con la evaluación ciudadana respecto de qué tan bien estas instituciones desempeñan sus funciones, cuánto responden a los intereses de las personas y qué tan extendida está la corrupción en ellas. Finalmente, pese a la evaluación negativa y escasa confianza en estas instituciones, las personas mantienen una valoración abstracta de ellas, así como de la democracia. Ello sugiere la presencia de un “*ethos* republicano” que impide que la desconfianza se traduzca en una pérdida generalizada de legitimidad del entramado institucional que cimienta el sistema democrático.

El capítulo se organiza en cuatro secciones. En la primera se describe la evolución en Chile, durante la última década (2008-2018), de la confianza en diferentes instituciones y sus variaciones según diferencias de género, educacionales, políticas, religiosas, territoriales y generacionales. En la siguiente se comparan los niveles de confianza observados para Chile con los de otros países de América Latina y de la OCDE. A continuación se muestra cómo evalúa la ciudadanía a tres instituciones centrales para la democracia –los partidos políticos, el Congreso y los tribunales de justicia–, y se vinculan estas evaluaciones con los niveles de confianza observados. En la penúltima sección se explora, a la luz de los resultados anteriores, la valoración abstracta de estas instituciones y del sistema democrático. El capítulo finaliza con una sección de conclusiones y discusión de los principales hallazgos.

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EN INSTITUCIONES, 2008-2018

A través de la serie de Encuestas de Auditoría a la Democracia (ENAD) es posible explorar la evolución de la confianza ciudadana en un conjunto de instituciones del país. Desde 2008, la encuesta pregunta a las personas “¿Cuánta confianza tiene usted en...?”, mencionando luego diversas instituciones del país. Las personas encuestadas deben escoger entre “nada de confianza”, “poca confianza”, “bastante confianza” o “mucho confianza”.

Los datos revelan que, luego de un leve aumento entre 2008 y 2010, la confianza ha descendido en Chile de manera sostenida, para todas las instituciones analizadas (Gráfico 2.1).¹ Las Fuerzas Armadas y de Orden, así como las organizaciones religiosas, muestran las mayores caídas en el período, lo que coincide temporalmente con la amplia cobertura mediática que tuvieron los casos de corrupción y de abusos sexuales que han involucrado a estas instituciones.

Como se observa en el gráfico, Bomberos es la única institución que goza de la confianza de una amplia mayoría, ubicándose casi cincuenta puntos porcentuales por sobre las instituciones que le siguen: los radios y los sindicatos. Estos últimos son la única institución analizada que no presenta una caída en el período.

Se aprecia, además, que instituciones centrales de la democracia –el Congreso, los partidos políticos, así como

aquellas que forman parte del sistema de justicia– son las que suscitan menor confianza, situación que se ha mantenido estable en todo el período. La caída de la confianza en el Congreso y los partidos se detuvo en la última medición, pero habrá que esperar nuevas mediciones para saber con certeza si esto representa el inicio de un cambio de tendencia.

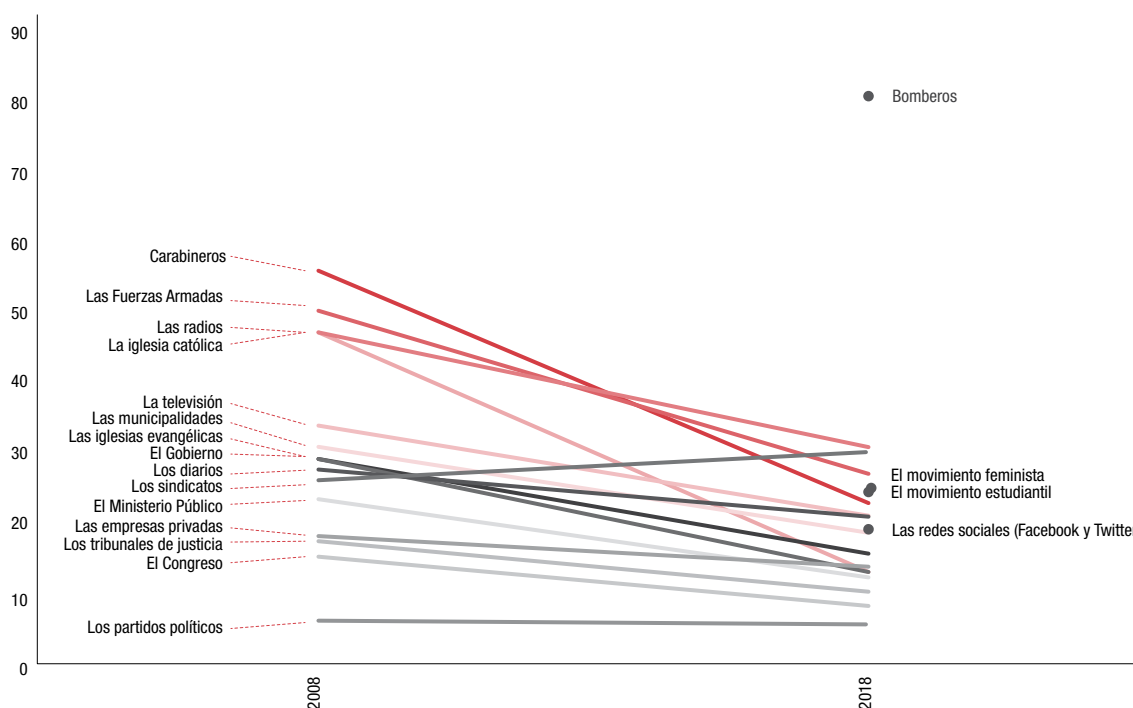
Otro hallazgo a partir de estos primeros datos sobre confianza es que las diferencias entre instituciones han tendido a disminuir en el tiempo.² Se explica porque algunas de las caídas más pronunciadas se han producido en instituciones que al inicio del período destacaban por un nivel relativamente alto de confianza (como la iglesia católica, Carabineros o las Fuerzas Armadas) y en otras que ocupaban posiciones intermedias (como el Gobierno). En consecuencia, la poca confianza es cada vez menos una característica exclusiva de las instituciones políticas. De hecho, al año 2018, salvo Bomberos, no existen instituciones que gocen de la confianza de más de un tercio de la población.

Finalmente, en esta materia los datos agregados muestran una jerarquía estable en el tiempo de las principales instituciones políticas –Gobierno, partidos políticos y Congreso–, es decir que sus niveles de confianza tienden a moverse de manera colineal, con el Gobierno en una posición más alta, el Congreso en un nivel intermedio y

¹ Los valores del gráfico, para todos los años de la encuesta Auditoría para la Democracia, se incluyen en el Anexo 4 al final del Informe.

² Considerando la medida de porcentaje de personas que dicen tener “mucho” o “bastante” confianza en cada una de las instituciones (cuyos valores se ubican, por tanto, en el rango de 0 a 100), y considerando todas las instituciones para las cuales existen datos tanto en 2008 como en 2018, la desviación estándar de la medida entre ellas pasó de 14,3 a inicios del período a 7,8 en la última medida.

GRÁFICO 2.1 Confianza en instituciones, 2008 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

los partidos políticos en la parte más baja. Pese a que las diferencias se han reducido, esta jerarquía se ha mantenido estable y es transversal a toda la población. La confianza en los tribunales de justicia aparece en un nivel intermedio entre el Congreso y el Gobierno, aunque con una trayectoria temporal diferente.

Al desagregar la confianza según variables sociodemográficas, territoriales, religiosas y políticas surgen varios hallazgos relevantes.³ El primero es que la falta de confianza se ha generalizado tanto que las diferencias que se apreciaban hace diez años entre distintos grupos de la población tienden a desaparecer hacia el final del período. En 2018, las chilenas y los chilenos, independientemente de su sexo, edad, nivel educacional y lugar en que habitan, confían muy poco en las instituciones.

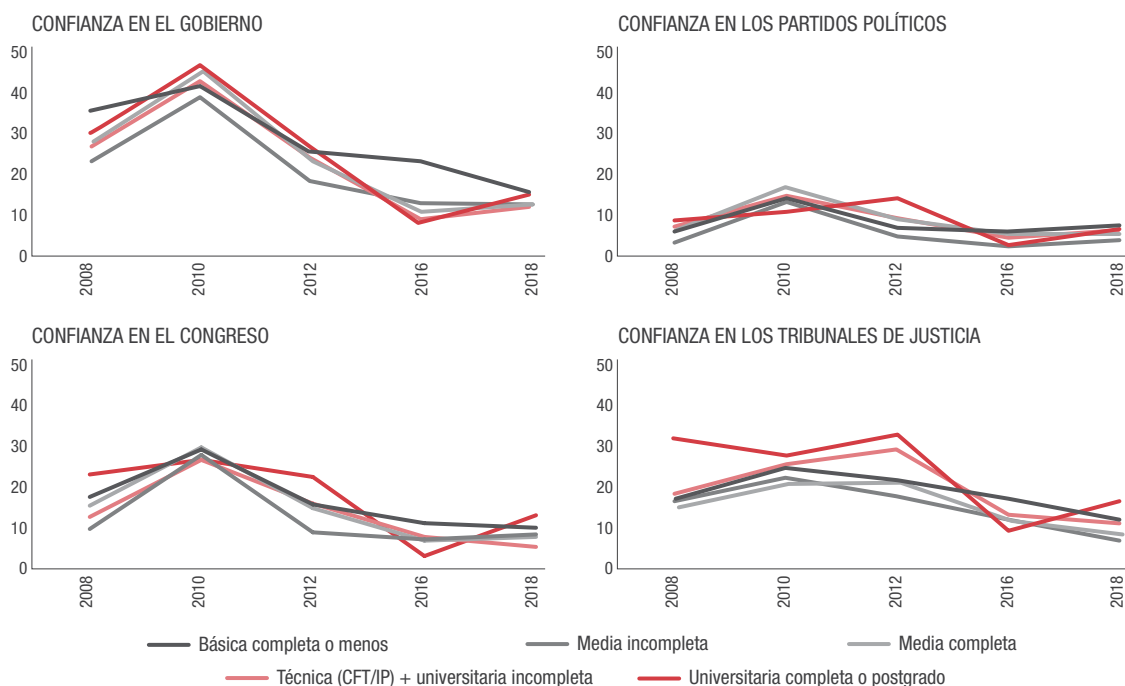
Esto se aprecia claramente al analizar las instituciones políticas, que, como se señaló, suscitan la menor confianza

ciudadana. Entre 2008 y 2012 era posible observar diferencias importantes. Sin embargo, a partir de 2016 esa heterogeneidad se reduce significativamente. Así, por ejemplo, al inicio del período las mujeres mostraban menor confianza en las instituciones políticas que los hombres, con diferencias de hasta siete puntos porcentuales; diez años más tarde esta heterogeneidad casi ha desaparecido. Lo mismo ha sucedido con las diferencias entre personas que habitan zonas urbanas y rurales, y entre personas que viven en la Región Metropolitana y otras regiones.

Lo anterior no supone una homogeneidad plena entre los grupos. Por ejemplo, los de mayor educación (universitaria completa o más) muestran una confianza institucional levemente superior al resto de la población. La confianza en los partidos políticos es tan baja (en torno al 5%) que prácticamente no se aprecian diferencias entre grupos con diferente nivel educacional (Gráfico 2.2).

³ Estas mismas variables serán utilizadas más adelante como controles para el análisis estadístico de los niveles de confianza institucional y sus variables asociadas.

GRÁFICO 2.2 Confianza en instituciones políticas por nivel educacional, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

Una tendencia similar se aprecia al comparar los niveles de confianza institucional según identificación política, aunque presentan mayor variabilidad temporal y entre grupos, y son más dependientes del ciclo político que las diferencias observadas entre otros grupos poblacionales. Como se ve en el Gráfico 2.3, las personas que se declaran sin posición política muestran menos confianza que quienes se identifican con alguna posición en el eje izquierda-derecha. A su vez, quienes se definen de centro tienen mayor confianza que las personas independientes o que no se identifican con ninguna corriente, y menos que quienes se identifican en los polos del eje. La única institución respecto de la cual las personas de centro se muestran menos confiadas que otras son los partidos políticos. En 2016 y 2018 la confianza de este segmento se acerca a cero.

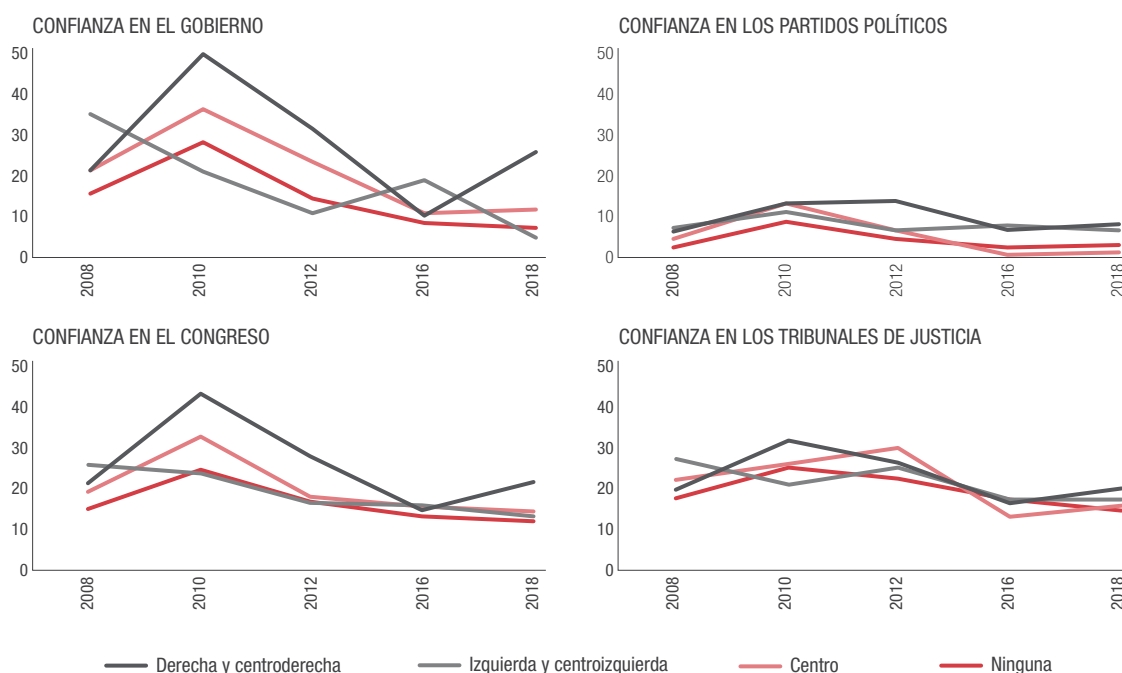
Cabe destacar que, en las personas que se identifican como de derecha y centroderecha o de izquierda y

centroizquierda, la confianza en el Gobierno es altamente dependiente de la coalición que esté en el Poder Ejecutivo.⁴ En el caso de las personas de centroderecha, el carácter procíclico de la confianza se refleja también en su actitud hacia el Congreso. Finalmente, se observa que la baja confianza en los partidos políticos y en los tribunales de justicia no resulta particularmente sensible al ciclo político.

En cuanto a las diferencias por generaciones, no parece haber un patrón claro. En términos generales, todas las generaciones definidas para esta publicación presentan un patrón temporal de aumento y caída de confianza similar al observado para la población en general (Gráfico 2.4). La única generación que se diferencia son las personas que eran adultas al momento del golpe de Estado de 1973 y en 2018 tenían más de 67 años. Este grupo presenta mayor confianza en el Gobierno a lo largo del período (2008-2018) y en el Congreso al inicio de este (2008).

⁴ A lo largo del informe los análisis presentados agrupan la posición “derecha” con “centroderecha” y la posición de “izquierda” con “centroizquierda”. Esto se hace porque ambas por separado tienen pesos muy bajos en las poblaciones encuestadas, y agrupadas presentan mayor robustez estadística.

GRÁFICO 2.3 Confianza en instituciones políticas por identificación política, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

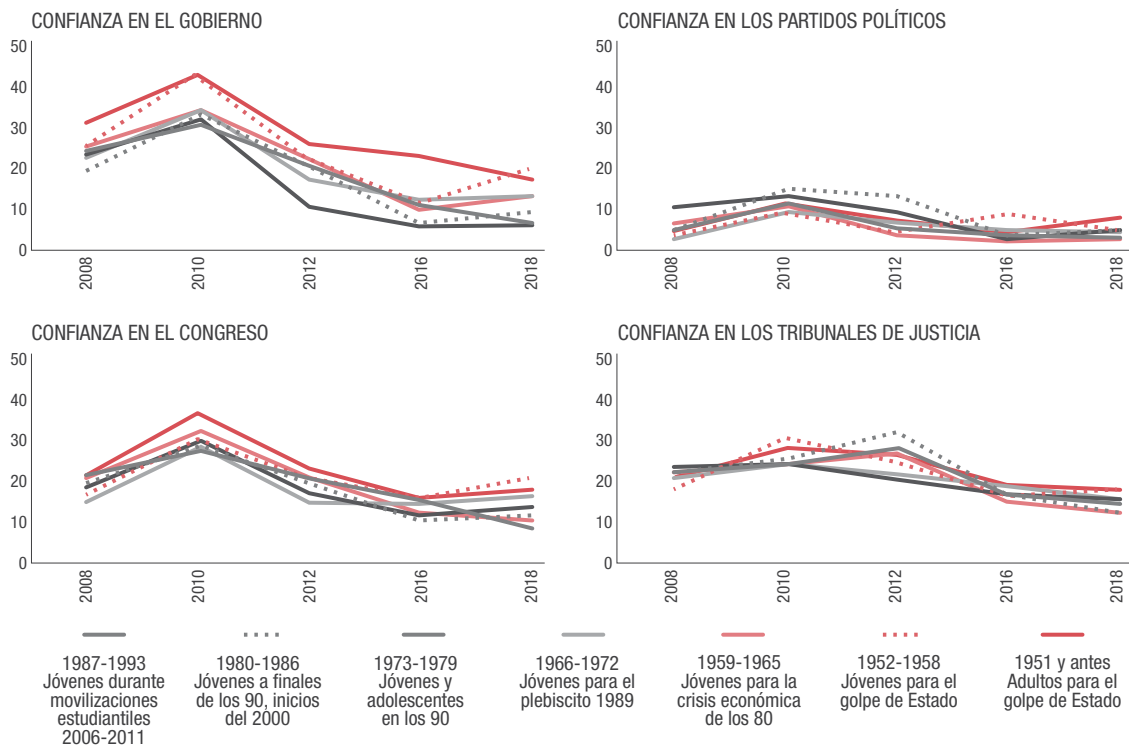
Por el contrario, las generaciones más jóvenes, nacidas después de 1973, confían menos en el Gobierno, pero no se distinguen del resto de la población en términos de confianza en otras instituciones. Por su parte, la generación nacida entre 1959 y 1965, que eran niños y niñas a la fecha del golpe militar y vivieron su juventud durante la crisis económica de principios de los años 80, es la que menos confía en estas instituciones. Esa desconfianza se agudiza hacia el final del período.

Por último, la adhesión religiosa parece asociarse a niveles diferenciados de confianza durante todo el período, aunque esta heterogeneidad se reduce levemente en el tiempo. Como se observa en el Gráfico 2.5, quienes se declaran católicos presentan desde el año 2010 niveles de confianza institucional consistentemente más altos que otros grupos.

Las personas ateas, agnósticas y que se declaran sin religión confían menos. La población evangélica se sitúa en una posición intermedia en el caso del Gobierno y el Congreso. La excepción a esta tendencia son los tribunales de justicia: la confianza en ellos se ha mantenido estable entre las personas evangélicas, pero ha caído entre las católicas y quienes no profesan ninguna religión.

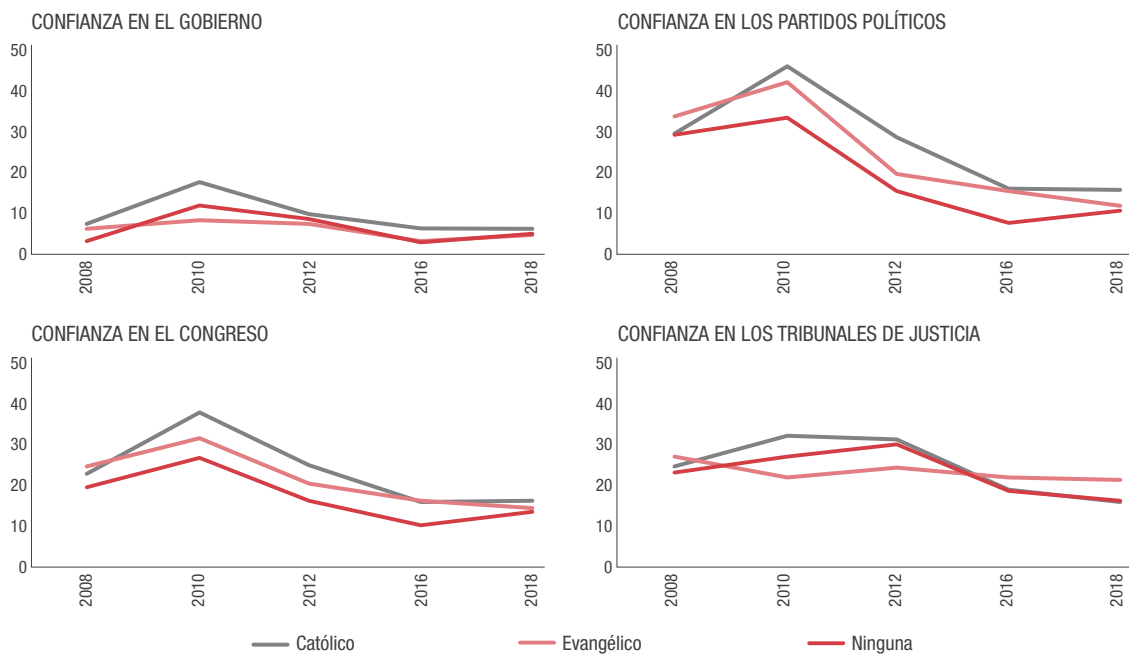
En suma, durante el período de referencia la falta de confianza se ha generalizado a tal punto que las diferencias que se apreciaban hace diez años entre grupos de la población han tendido a desaparecer en la última medición. En 2018 las chilenas y los chilenos, independientemente de su sexo, edad, nivel educacional y lugar en que habitan, confiaban en las instituciones en una proporción muy baja.

GRÁFICO 2.4 Confianza en instituciones políticas por generación, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 2.5 Confianza en instituciones políticas por adhesión religiosa, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

CONFIANZA EN INSTITUCIONES POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA Y EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

Esta creciente desconfianza institucional no es un fenómeno exclusivo de Chile, aunque en el país se inició más temprano que en el resto de Latinoamérica. La Encuesta Latinobarómetro ofrece información sobre la evolución de la confianza en diversas instituciones políticas en 18 países, en un período similar al de las Encuestas de Auditoría a la Democracia. Si bien la pregunta y las categorías de respuesta de Latinobarómetro sobre confianza institucional son levemente diferentes, lo que se traduce en porcentajes de confianza mayores, los datos permiten comparar la tendencia observada en Chile con el resto de la región.

Como se ve en el Gráfico 2.6, en 2008-2018 la caída de la confianza en instituciones políticas observada en Chile se replica en toda la región. Para la ciudadanía, el Gobierno, el Congreso, los tribunales de justicia y los partidos políticos son de las instituciones menos confiables. Ahora bien, aunque los partidos políticos son la institución que genera menos confianza en América Latina, la caída es menor que para el resto de las instituciones.⁵ La razón es que parten de un nivel de confianza más bajo.

De hecho, al analizar los datos del período para estas cuatro instituciones, se constata que Chile presenta valores cercanos a la mediana regional de confianza en el Congreso, los partidos políticos y el poder judicial, y la confianza en el Gobierno se sitúa en la parte alta de la distribución regional. Así, la situación de Chile dista de ser una anomalía en la región. Países como El Salvador,

Venezuela o Brasil presentan caídas más pronunciadas, y la confianza institucional es en general más baja que en Chile. No obstante, una mirada de más largo plazo revela diferencias entre Chile y el promedio de América Latina: la caída de la confianza en el país es de mayor magnitud y comienza antes. Los datos de las encuestas Latinobarómetro para 1995-2018 (Gráfico 2.7) muestran que, al principio, Chile registraba niveles significativamente más altos que el resto de la región, los que experimentaron una caída importante entre 1995 y 2003, para posteriormente asimilarse a la tendencia regional.

En definitiva, y como se describió en el Informe *Auditoría a la democracia* del PNUD (2014), la caída de la confianza ciudadana es un problema que comienza tempranamente en Chile, poco después de la recuperación de la democracia, y que en forma paulatina ha tendido a acoplarse al comportamiento del resto de la región.

La comparación de Chile con los demás países pertenecientes a la OCDE muestra un escenario aun más complejo. Si bien no abundan los instrumentos que permitan este tipo de comparaciones, la encuesta World Gallup (Gráfico 2.8) entrega datos sobre la confianza en el Gobierno. Como se aprecia, en el período 2007-2016 muchos países desarrollados experimentaron una disminución de la confianza en esta institución. En este contexto, Chile es el cuarto país con la mayor merma del período, y en 2016 era el segundo país con menor confianza en el Gobierno.

⁵ Además de en las instituciones políticas mencionadas, en 2018 la encuesta Latinobarómetro midió la confianza en instituciones nacionales como la autoridad electoral, la iglesia, la policía y las Fuerzas Armadas; instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas, entre otros; y otras instituciones como ONG, compañías nacionales e internacionales, sindicatos, medios de comunicación y bancos. Datos disponibles en www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.

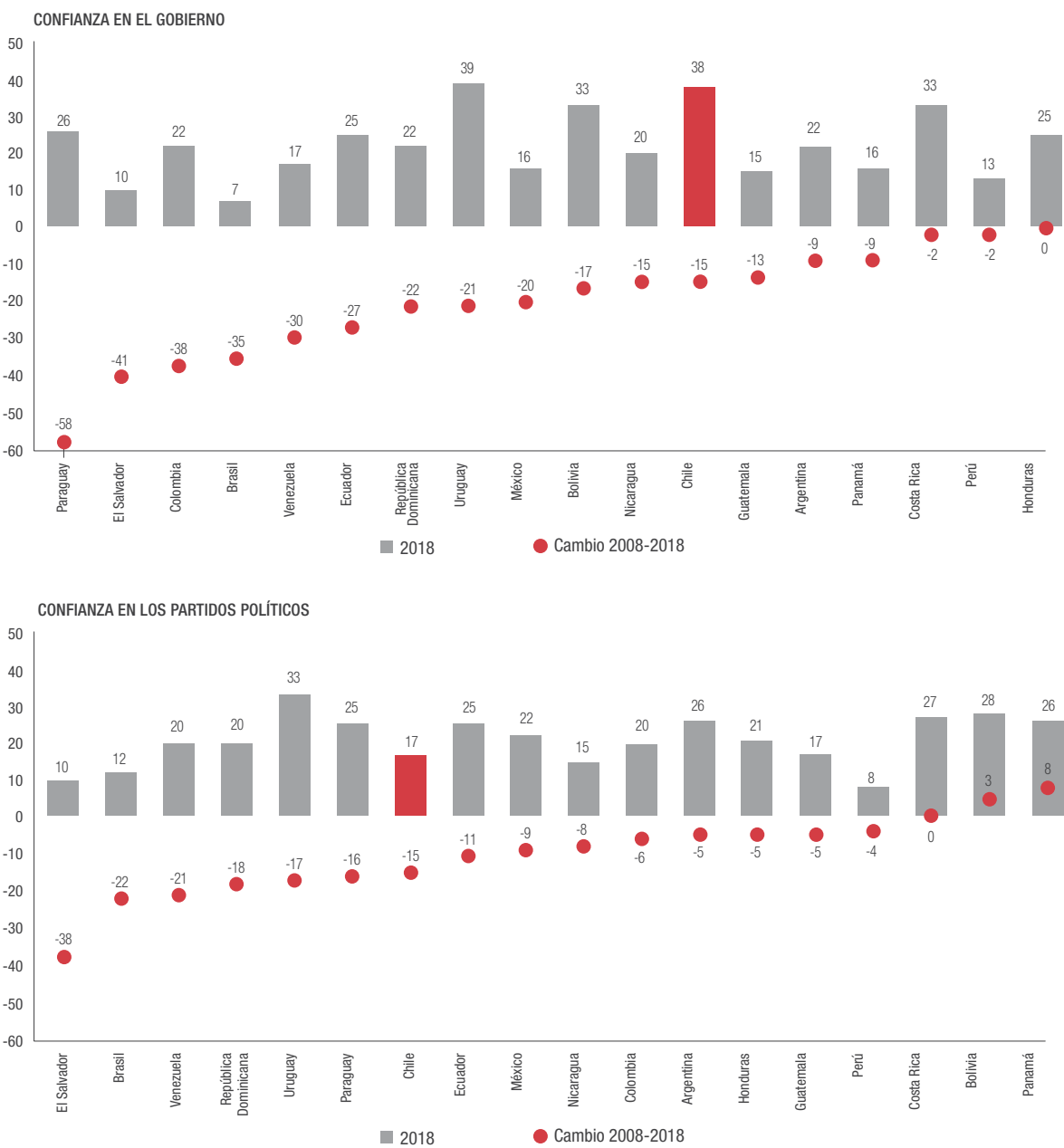
Únicamente lo superaba Grecia, que ese año atravesaba una grave crisis económica y política.

En suma, los datos comparados muestran que la caída en confianza institucional es un fenómeno extendido, especialmente en América Latina, donde todas las instituciones políticas han visto descender la confianza que

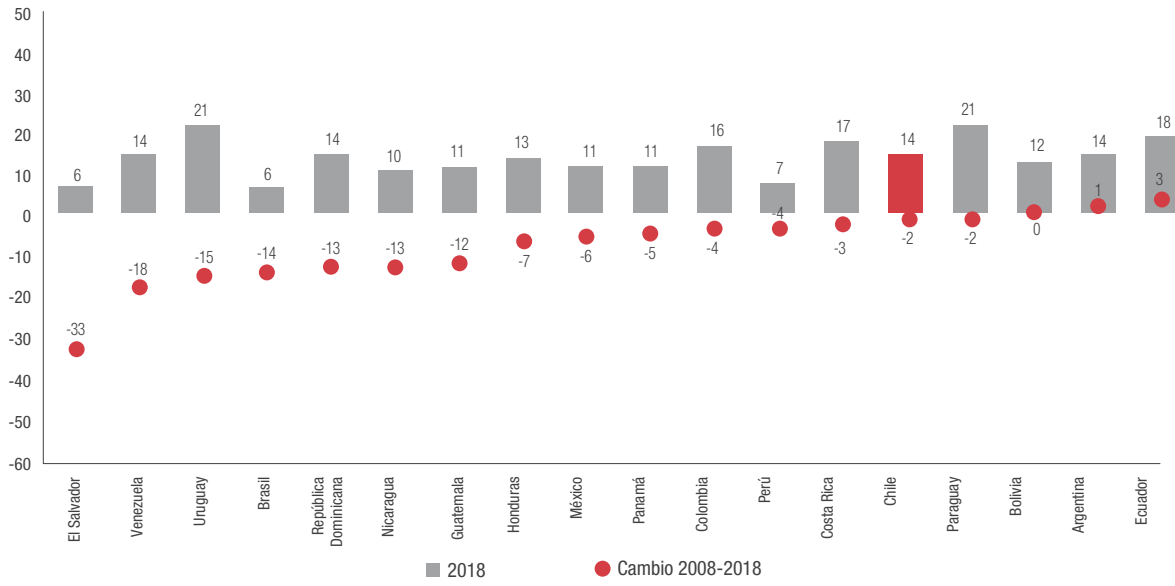
les tiene la ciudadanía, en algunos casos de manera muy notoria. Evidencian, además, que la caída en Chile antecede al resto de la región. Aunque menos pronunciado, el fenómeno se replica en muchos países de la OCDE. En este escenario, aunque con una dinámica propia, menos reciente, Chile es parte de un fenómeno que trasciende sus fronteras.

GRÁFICO 2.6 Confianza en instituciones políticas en América Latina, 2018 y cambio 2008-2018

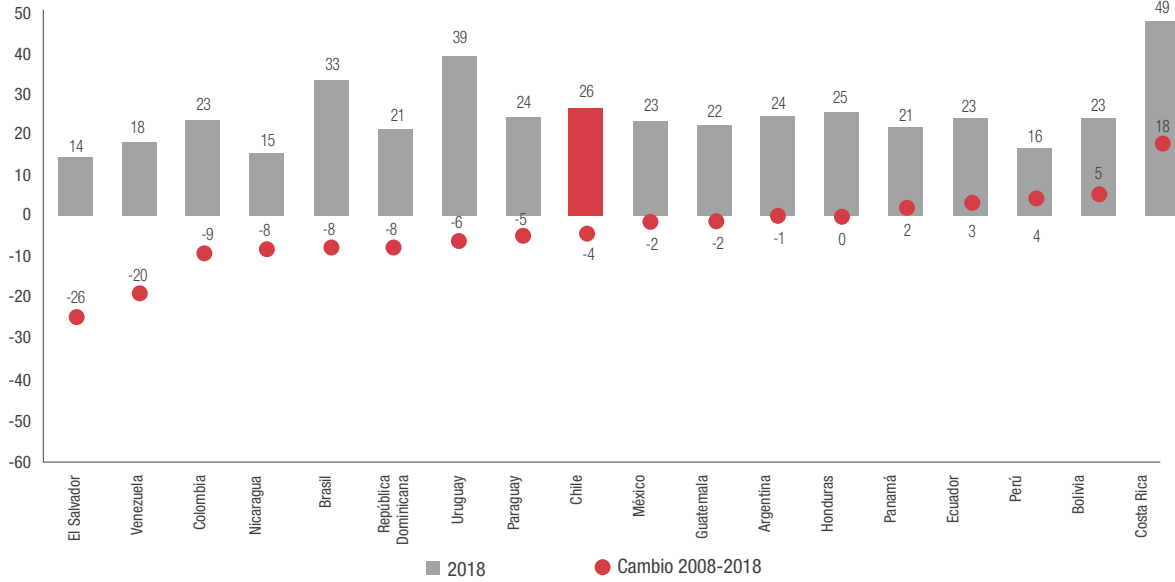
Porcentaje que declara tener “algo” o “mucho” confianza en cada institución



CONFIANZA EN EL CONGRESO

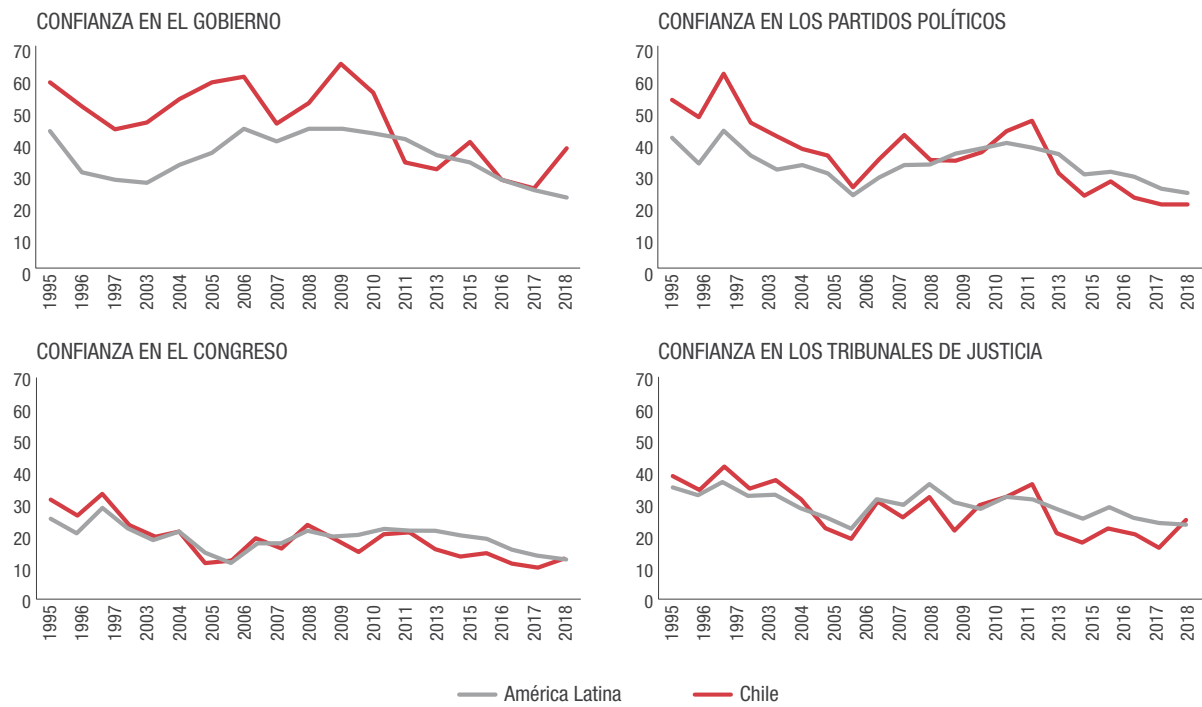


CONFIANZA EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA



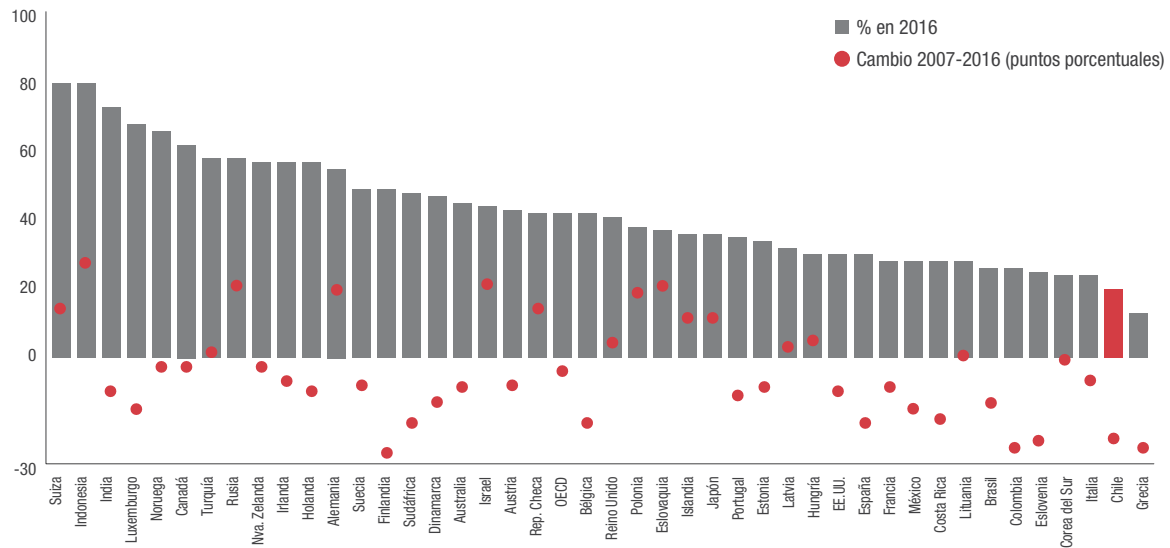
Fuente: Latinobarómetro, años respectivos.

GRÁFICO 2.7 Evolución de la confianza en instituciones políticas en América Latina y Chile, 1995-2018



Fuente: Latinobarómetro, años respectivos.

GRÁFICO 2.8 Confianza en el Gobierno en países de la OCDE, 2016 y cambio 2007-2016



Fuente: OCDE (2017a).

EVALUACIÓN CIUDADANA Y (DES)CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

En esta sección se describen las evaluaciones ciudadanas sobre el Congreso, los partidos políticos y los tribunales de justicia, y su relación con los niveles de confianza institucional.

¿Por qué analizar específicamente estas instituciones? Las razones son normativas y funcionales. En términos normativos, estas instituciones representan la base del sistema democrático. La existencia de un poder legislativo y un sistema judicial activos y autónomos, que complementen y establezcan límites al poder ejecutivo, así como de un sistema de partidos robusto que intermedie y represente los intereses de la ciudadanía ante el Estado, es clave para la sostenibilidad democrática. Por ello, con frecuencia la ausencia o el debilitamiento de estas instituciones constituyen señales inequívocas de un quiebre democrático y del surgimiento de gobiernos autoritarios (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2013).

En términos funcionales, y como se ha visto, estas son las tres instituciones que presentan los menores niveles de confianza ciudadana. Además, la literatura sugiere que existe una relación entre las evaluaciones que realizan las personas sobre las instituciones y la confianza o desconfianza que les generan (ver recuadro). Se plantea que la confianza institucional se vincula con las evaluaciones relativas a, al menos, tres aspectos: (a) el desempeño de las instituciones o los resultados atribuibles a ellas, (b) los objetivos que persiguen quienes trabajan en las instituciones y especialmente el carácter justo e imparcial que se atribuye a sus acciones, y (c) la percepción de corrupción asociada a ellas (Morris y Klesner, 2010; You, 2018).

Las páginas que siguen exploran las evaluaciones ciudadanas de estas tres instituciones, vinculando luego –con modelos de regresión logística– estos juicios con la confianza institucional. Las preguntas incluidas en la serie ENAD, que en algunos casos varían de una institución a otra, indagan en las evaluaciones relativas a su desempeño, la justicia o ecuanimidad con que actúan y qué tan corruptas son a ojos de las personas encuestadas.

Los resultados revelan que las caídas en los niveles de confianza institucional descritas se producen en un contexto en el que las evaluaciones ciudadanas sobre estas instituciones han ido empeorando. Se demuestra para cada institución que las evaluaciones están relacionadas con el grado de confianza observado, lo que sugiere que el fenómeno de la pérdida de confianza institucional responde a juicios negativos sobre su funcionamiento.

Partidos políticos

Antes de la promulgación en 2016 de reformas a la ley de partidos políticos, la ley de votaciones y escrutinios y la ley de financiamiento electoral, Chile se caracterizaba por la presencia de bloques políticos estables, con “altos niveles de institucionalización” (Luna, 2008: 75). En dicho contexto, el PNUD planteó que el desafío más relevante que enfrentaba el sistema de partidos políticos no tenía que ver con su estabilidad o eficacia, sino con la distante relación con la ciudadanía y, en particular, con sus dificultades para representar políticamente intereses diversos (PNUD, 2014). Eso se expresaba en una baja identificación

¿QUÉ EXPLICA LAS DIFERENCIAS EN LA CONFIANZA?

Los aspectos que inciden en las variaciones de la confianza institucional han sido un foco de atención recurrente de las ciencias sociales. Se ha explorado el efecto de los cambios culturales (Inglehart, 1997; Dalton, 1999), de los patrones de asociatividad (Putnam, 2000) y de aspectos como el desempeño económico, el contexto institucional (por ejemplo, el sistema electoral) y la percepción de corrupción y eficacia, entre otros. Las explicaciones también se han centrado en las variables individuales que llevan a algunas personas a confiar más que otras en contextos similares (para una revisión detallada ver van der Meer y Zmerli, 2017; Uslaner, 2018).

En cuanto a Chile, hay estudios sobre diversos aspectos. Morales (2008), por ejemplo, demostró que la confianza de las personas en las instituciones se correlaciona con la evaluación sobre su desempeño, y en particular con los esfuerzos que estas despliegan para solucionar problemas. Segovia et al. (2008) señalan que la capacidad

de las instituciones para hacer lo que se espera de ellas y la orientación al bien común que se les atribuye son centrales para la confianza institucional. Otros destacan la influencia del desempeño macroeconómico de los países, de la evaluación presidencial y del Gobierno en la confianza (Bargsted, Somma y Castillo, 2017; Segovia, 2015), así como la participación en asociaciones, la confianza interpersonal y los niveles de compromiso político (Segovia, 2015). Carlin (2011), a partir de datos para Argentina y Chile, sostiene que la confianza en los partidos políticos depende de la evaluación que realizan las personas sobre su competencia, integridad y capacidad para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Finalmente, la baja confianza en instituciones del sistema político y en los partidos políticos también se ha atribuido a elementos del diseño institucional chileno, como la existencia hasta el año 2016 de un sistema electoral binominal o la escasa regulación del financiamiento de partidos y de campañas políticas (PNUD, 2014; Siavelis, 2016).

con partidos políticos, en una negativa evaluación de esta institución y en una escasa confianza ciudadana.

Los cambios que se concretaron con el proceso electoral de 2017 han modificado el escenario, generando nuevas configuraciones y alianzas, y aumentando significativamente el número de partidos (inscritos o en proceso de formación). En 2008 existían 8 partidos legalmente reconocidos por el Servel. Diez años más tarde, la cifra se eleva a 21. Como consecuencia, las alternativas de representación y la diversidad de visiones políticas en el Congreso –más en la Cámara de Diputados que en el Senado– experimentaron un notable incremento. Los cambios en la ley orgánica de partidos buscaron también perfeccionar la democracia interna, aumentar la transparencia e incentivar la actividad política más allá de las

elecciones (formación de militantes, educación cívica, realización de estudios).

Pese a ello, los datos de la ENAD muestran que la distancia entre ciudadanía y partidos políticos se ha profundizado. Así, por ejemplo, si en 2008 un 42% se identificaba con algún partido, en 2018 solo un 23% lo hace (como se verá en el Capítulo 4, algo similar ocurre con las coaliciones políticas). Esta afinidad es mayor entre quienes se identifican en el eje izquierda-derecha (donde alcanza valores entre un 45% y un 60%, mientras que entre las personas que no se identifican es inferior al 20%), y es levemente mayor en los grupos de mayor edad y de mayor nivel educacional. Es importante destacar que en 2018 apenas un 3,2% de las personas encuestadas declara pertenecer a algún partido político.

En este contexto, la percepción de que en Chile los partidos funcionan bien se ha mantenido estable durante la última década, llegando apenas a un 12% en 2018. La evaluación es aun más negativa entre las generaciones más jóvenes y en quienes tienen más educación. Además, casi la mitad de las personas encuestadas considera que los partidos solo sirven para dividir a la gente (en la medición de 2010 esta opinión era compartida por menos de un tercio). Esta percepción es particularmente intensa entre las mujeres, entre las generaciones de más edad, en personas con menor educación, en quienes se identifican con la religión evangélica y en aquellas no se identifican en el eje izquierda-derecha.

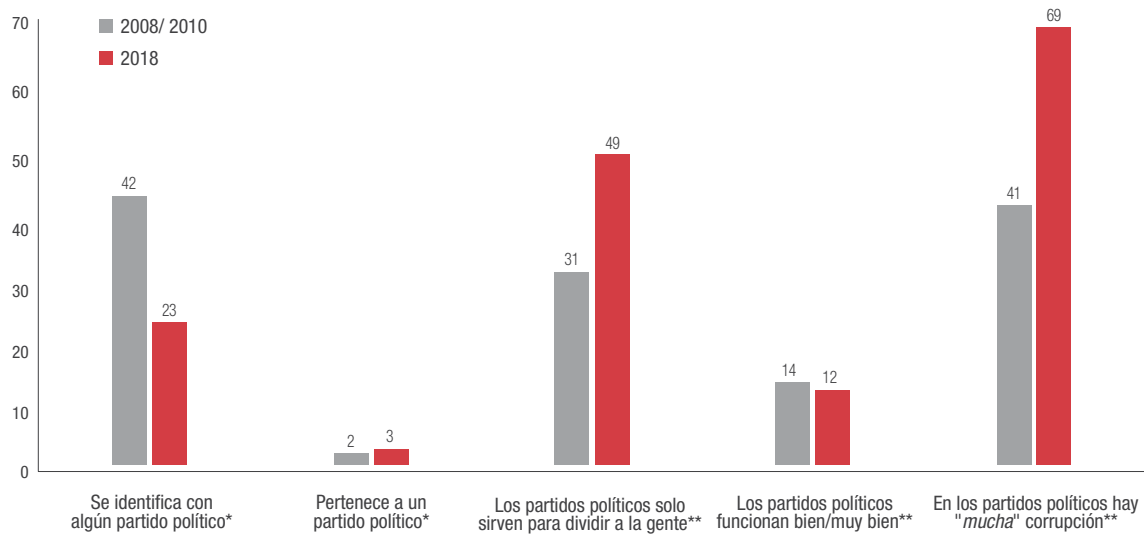
Finalmente, la percepción de que hay “muchísima” corrupción en los partidos políticos ha aumentado de un 41% en 2010 a un 69% en 2018. Esto evidencia que, con algunas variaciones menores, la percepción de corrupción es transversal en la población chilena. Cabe recordar que las reformas de 2016 al sistema de partidos fueron posibles, en buena medida, precisamente gracias a la crisis política gatillada por los escándalos de financiamiento ilícito de las campañas electorales, que afectaron a todos los sectores políticos. Los procesos judiciales y el trabajo periodístico

dejaron en evidencia ante la ciudadanía prácticas ilegales generalizadas y de larga data, que facilitaban una influencia desproporcionada de grandes intereses económicos sobre el proceso político (Comisión Engel, 2015).

En suma, pese a las reformas recientes, solo una de cada ocho personas cree que los partidos funcionan bien, ha habido una marcada disminución en la identificación partidaria, un aumento significativo en la percepción de que estas instituciones solo sirven para dividir a la gente y una creciente opinión de que en ellas hay mucha corrupción. Los datos son consistentes con la literatura sobre el rol de los partidos en la crisis de representación en Chile (Luna, 2016).

¿Cómo se relacionan estas opiniones con los juicios de confianza institucional de las personas? Se vio que los partidos políticos son consistentemente la institución que menos confianza despierta en la ciudadanía, con valores bajo el 10% desde 2012. El análisis econométrico (regresiones logísticas, no reportadas) muestra que, controlando por todas las variables sociodemográficas mencionadas más arriba, el juicio de eficacia institucional tiene una alta correlación con la probabilidad de que las personas confíen: quienes

GRÁFICO 2.9 Actitudes y juicios respecto de los partidos políticos, 2008/2010 y 2018



*Dato inicial: 2008. **Dato inicial: 2010.

Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

consideran que los partidos funcionan bien (solo un 12% de las personas encuestadas) tienen una probabilidad de confiar en ellos 84% mayor que quienes no comparten esta evaluación.

La opinión de que los partidos no aportan al bien común también se relaciona con la falta de confianza: quienes no concuerdan con la idea de que los partidos “solo sirven para dividir a la gente” tienen 2,2 veces más probabilidad de confiar en esta institución que quienes sí sostienen ese juicio crítico. Llama la atención que la percepción de corrupción no aparece como un factor significativamente correlacionado con la confianza en los partidos políticos. Además, y de forma consistente con la observación de los datos descriptivos, el análisis econométrico muestra que quienes se identifican como de derecha y centroderecha o izquierda y centroizquierda tienen 9 y 11 veces mayor probabilidad de confiar en los partidos, respectivamente, que quienes se identifican con el centro político y quienes no se identifican en este eje.

Congreso

En 2014, el Informe *Auditoría a la democracia* planteó que la relación entre representantes políticos y ciudadanía en Chile estaba marcada por tensiones y desencuentros, los que se reflejaban en una baja confianza y una mala evaluación ciudadana del Congreso. Los datos de la serie de encuestas ENAD hasta 2018 confirman que, durante los últimos años, y pese a los esfuerzos institucionales por concretar reformas, estas tendencias se han intensificado. Por una parte, las personas evalúan negativamente el desempeño del poder legislativo, consideran que no responde a sus demandas y necesidades y perciben crecientemente que en esta institución existe corrupción.

En 2018, para las personas encuestadas la tarea más importante del Congreso es representar los intereses de las personas (43%), seguida por elaborar y aprobar leyes (34%) y, por último, fiscalizar los actos del Gobierno (14%). Estas proporciones se han mantenido relativamente constantes durante la última década, aunque la tarea de legislar ha ganado relevancia en la opinión de las personas (+7 puntos porcentuales respecto de 2010).

Si bien las opiniones sobre las tareas principales del Congreso no han cambiado mucho, sí ha sufrido una merma importante la evaluación sobre su funcionamiento. Consultadas sobre qué tan bien realiza el Congreso aquella tarea que cada persona consideraba más importante, en 2010 un 35% respondía que “bien” o “muy bien”. En 2018 la evaluación positiva se redujo casi a la mitad, llegando a un 18%. Esto significa que menos de una de cada cinco personas tiene una buena evaluación del Congreso en aquella labor que considera central para esta institución. El deterioro en la evaluación de funcionamiento se observa en todos los grupos sociales y especialmente en las personas jóvenes, en las más educadas, en quienes se identifican con la izquierda, en aquellas que declaran no identificarse con ninguna posición política, en las que habitan en la Región Metropolitana y en quienes profesan la religión evangélica.

El hecho de que más de cuatro de cada diez personas encuestadas considere que la principal labor del Congreso es representar los intereses de la ciudadanía pone en el centro de la evaluación su capacidad para considerar y responder a las demandas ciudadanas. Para que ello ocurra, es necesario que las personas puedan acceder a la institución, la que debe tener tanto la capacidad como el interés de procesar sus inquietudes y necesidades. A ojos de la ciudadanía, ninguna de estas condiciones se cumple satisfactoriamente.

Por una parte, solo un 25% considera que “la gente como yo no tiene nada que decir sobre lo que el Congreso hace”: la ciudadanía cree importante su propia opinión sobre el proceso legislativo. Sin embargo, una amplia mayoría (78%) considera que, en caso de manifestar desacuerdo con un proyecto de ley que les parezca injusto, el Congreso no prestaría realmente atención a sus demandas. Entre 2010 y 2018 disminuye, además, el porcentaje de quienes creen que sí lo haría, pasando de 21% a 11%.

Por otra, al año 2018, más de dos tercios (68%) de la población está de acuerdo con la frase “no creo que al Congreso le importe mucho lo que piensa la gente como yo”. Consultadas sobre quién tiene influencia sobre el Congreso, un 71% de las personas encuestadas piensa que los empresarios tienen “mucho” o “bastante” influencia. En contraste, solo un 22% considera lo mismo respecto de los trabajadores y un 18% respecto de los pueblos indígenas.

En términos de acceso, enfrentadas a la pregunta por cuál sería el mejor medio para influir en el Congreso, más de la mitad de las personas encuestadas (51%) menciona vías indirectas (cartas a medios de comunicación, campañas en redes sociales, protestas) por sobre contactos formales con sus representantes o con la institución. Y una de cada cinco (22%) simplemente no sabe cuál es el mejor medio para influir en el Congreso. Destacan en este grupo las personas de menor nivel educacional (34%).

Por último, la percepción de que existe “muchísima” corrupción en el Congreso ha aumentado notoriamente entre 2010 y 2018, pasando de un 25% a un 62%. Este incremento, que oscila entre 30 y 40 puntos porcentuales en prácticamente todos los subgrupos estudiados, se da en un contexto en que varios miembros del parlamento han estado en el centro de casos de corrupción, asociados al financiamiento de campañas.

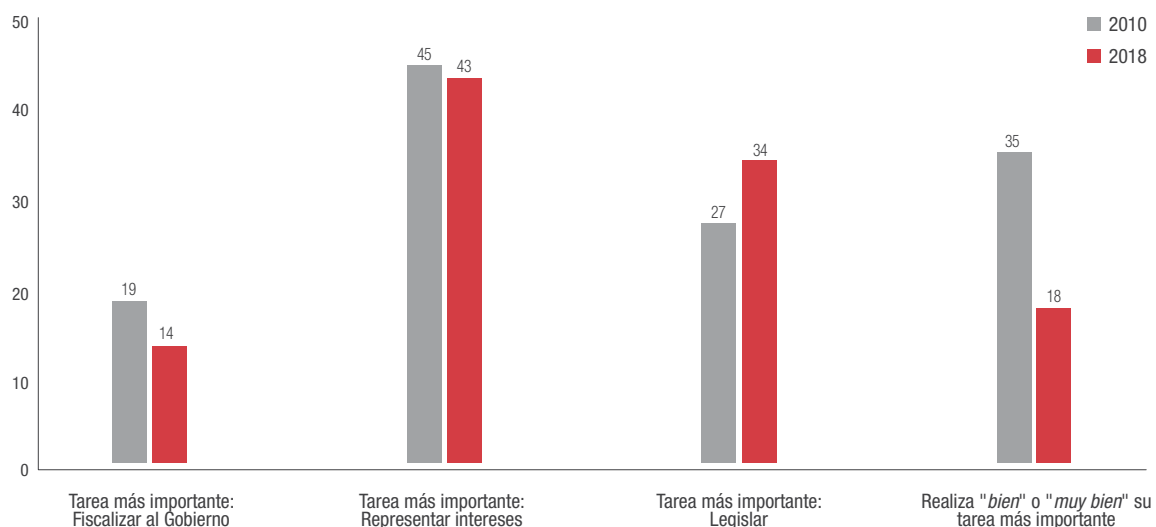
En suma, pese a que las opiniones respecto de las funciones más importantes del Congreso se han mantenido estables, la evaluación de cómo cumple dichas tareas se ha deteriorado bastante: menos de una de cada cinco personas considera que el Congreso realiza “bien” o “muy bien” la función que estima principal para esta institución. La mayoría considera que acceder a las y los parlamenta-

rios de manera directa es ineficaz, que al Congreso no le importa lo que las personas piensan, y que si hicieran oír sus demandas no se les tomaría en cuenta. Por último, la percepción de corrupción en el Congreso ha aumentado en casi 30 puntos porcentuales en una década.

Al analizar estadísticamente la relación entre las evaluaciones y percepciones sobre el Congreso y la confianza en esta institución, después de controlar por factores sociodemográficos, se observa que la percepción de eficacia institucional impacta de manera importante en la probabilidad de confiar. Así, quienes evalúan de manera positiva el trabajo de este poder del Estado (en aquella tarea que cada uno considera más importante) tienen casi 4 veces más probabilidad de declarar que confían en la institución, comparado con quienes no evalúan positivamente su desempeño.

A su vez, la percepción de que el Congreso escucha a la ciudadanía es muy relevante para la confianza. Comparadas con quienes creen que al Congreso no le importa lo que piense la gente, las personas que no piensan así tienen casi un 75% más de probabilidad de confiar en la institución (aunque la variable asociada a la pregunta de si el Congreso tomaría en serio sus demandas no resulta significativa). Por último, y al contrario de lo que sucede

GRÁFICO 2.10 Juicios respecto del Congreso, 2010 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

con los partidos políticos, en cuyo caso la percepción de corrupción no parecía influir en la confianza, quienes no perciben que hay “muchas” corrupción en el Congreso tienen una probabilidad 2,8 veces mayor de confiar en esta institución, comparado con quienes perciben niveles de corrupción altos. Las variables de control confirman que personas mayores y personas con educación superior tienden a confiar más en este poder del Estado.

Tribunales de justicia

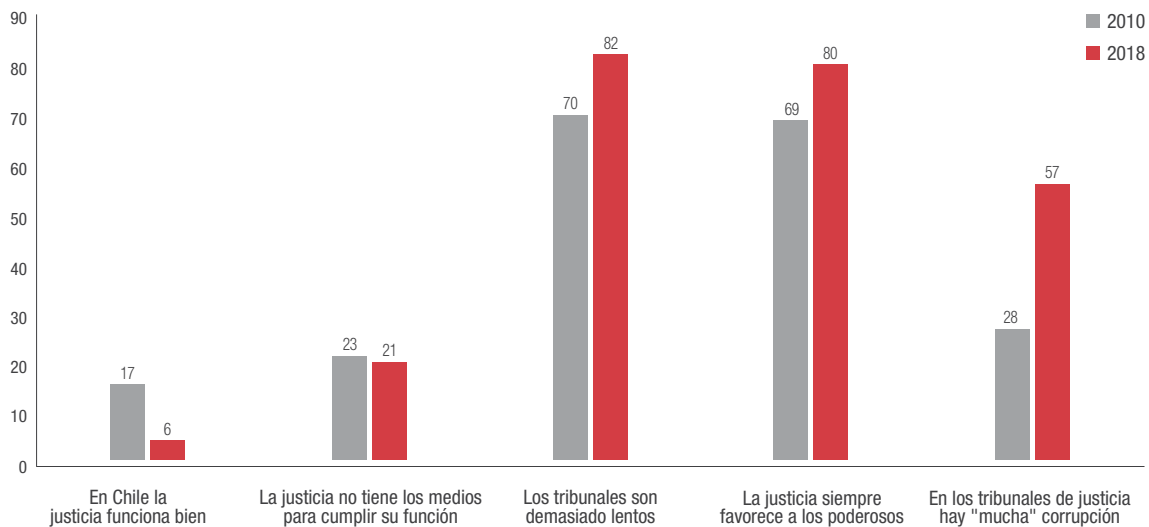
Los órganos de justicia aparecen en 2018 como la tercera institución con menos confianza ciudadana. Como se describió respecto del Congreso y los partidos políticos, las evaluaciones acerca de la eficacia institucional de los tribunales de justicia, su ecuanimidad y nivel de corrupción desempeñan un rol central en la confianza que se les tiene. Los datos de la ENAD muestran que durante el período 2010-2018 empeoró la evaluación ciudadana sobre el funcionamiento de este poder del Estado. Si en 2010 solo un 17% de las y los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que en Chile la

justicia funciona bien, en 2018 esa cifra no alcanzaba el 6%. Esta evaluación es, además, transversal, aunque menos pronunciada en las generaciones más antiguas, en las personas de menor educación, en quienes se identifican con la derecha y la centroderecha, entre quienes habitan sectores rurales y en las personas católicas. La opinión sobre el mal funcionamiento de la justicia se asocia con la idea cada vez más extendida de que los tribunales son demasiado lentos. El acuerdo con esta frase en 2010 era del 71%, ocho años más tarde alcanza el 82%.

Por otra parte, la idea de que la justicia siempre favorece a los poderosos está muy extendida: el acuerdo con esta afirmación se incrementó de un 70% a un 80% en el período. Se asocia a ello la percepción de que en los tribunales de justicia existe “muchas” corrupción, que se ha duplicado, pasando de un 28% en 2010 a un 57% en 2018. Este aumento ha sido generalizado: impacta a todos los grupos analizados.

A modo de síntesis, al año 2018 los datos revelan un consenso sobre la idea de que la justicia en el país no funciona bien. Además, la opinión de que los tribunales son demasiado lentos es generalizada y la percepción de corrupción

GRÁFICO 2.11 Juicios respecto de los tribunales de justicia, 2010 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

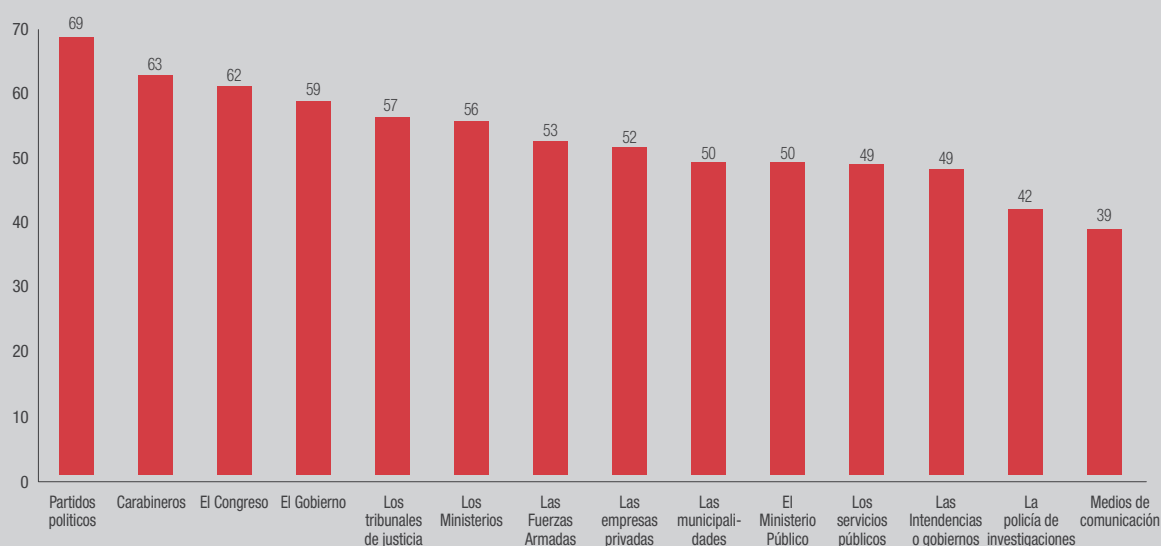
Nota: Los primeros cuatro pares de columnas representan el porcentaje de personas que responde "de acuerdo" o "muy de acuerdo" a la afirmación. En el caso de la pregunta por corrupción, es el porcentaje que responde "hay mucha corrupción" a la pregunta "¿cuán extendida cree Ud. que está la corrupción en [institución]?".

CORRUPCIÓN Y EROSIÓN DE LA CONFIANZA

La percepción de corrupción ha aumentado para todas las instituciones en Chile y en mayor medida para Carabineros y las Fuerzas Armadas (ver Gráfico 2.12). Es un dato muy relevante, dado el impacto de la percepción de corrupción en la erosión de la confianza, no solo en las instituciones

sino en el sistema democrático en general. El Gráfico 2.13 presenta la relación entre el cambio (en puntos porcentuales) en la percepción de “mucho” corrupción institucional y el cambio en el porcentaje de “poca” o “nada” confianza en esas instituciones, entre 2010 y 2018.

GRÁFICO 2.12 Percepción de corrupción en instituciones (porcentaje que reporta percibir “mucho” corrupción), 2018

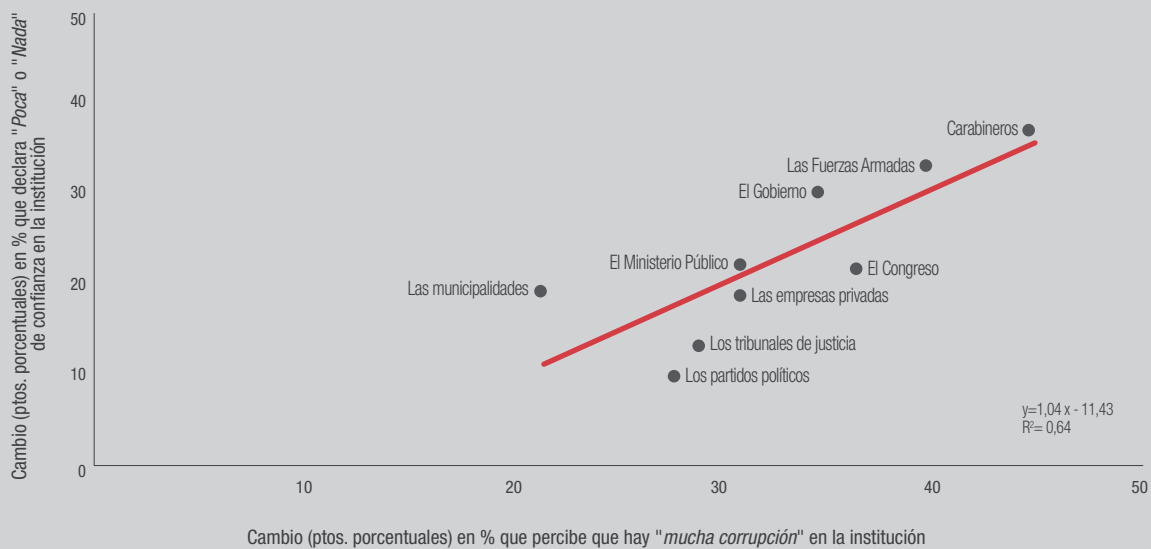


Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

Nótese que los mayores incrementos en la percepción de corrupción coinciden con las mayores caídas en los niveles de confianza, y que corresponden a instituciones que han estado involucradas en escándalos de gran visibilidad pública. Este aumento en la percepción de corrupción contrasta con los muy bajos porcentajes de

experiencias de corrupción concretas reportadas por las personas encuestadas; en efecto, estas cifras no han crecido en el tiempo: tanto en ENAD 2008 como en 2018, alrededor de un 6% de la población reportó haber tenido que pagar una coima o un favor para conseguir que le solucionen un problema en un servicio público.

GRÁFICO 2.13 Confianza en instituciones y percepción de corrupción, 2010-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

se ha duplicado, llegando casi al 60%, aunque todavía es más baja que para los partidos políticos y el Congreso.

El análisis econométrico muestra que los juicios de confianza se relacionan fuertemente con las percepciones de eficacia, pues quienes sostienen que en Chile la justicia funciona bien tienen más de 4 veces más probabilidad de confiar en los tribunales que quienes no opinan así. La percepción de que la justicia siempre favorece a los poderosos también correlaciona negativamente con la confianza: comparado con la gran mayoría de personas que así lo creen, quienes no tienen esa opinión tienen un 50% más de probabilidad de confiar en esta institución. La percepción de corrupción también tiene un papel central en esta dinámica: quienes no perciben que hay “mucho” corrupción tienen una probabilidad 4,3 veces más alta de confiar que quienes sí perciben mucha corrupción en la institución.

En esta sección se mostró que existe una relación positiva entre la evaluación que las personas hacen del desempeño institucional y la confianza que declaran respecto de cada institución. Las que perciben que una institución

hace bien su trabajo tienen una probabilidad de entre el doble y cuatro veces de confiar en ella, comparadas con quienes sostienen evaluaciones negativas sobre la eficacia institucional.

Por otra parte, luego de controlar por factores sociodemográficos, la evaluación de ecuanimidad también afecta los niveles de confianza. Como se describió, las percepciones de que el Congreso no considera las opiniones de las personas, que los tribunales benefician a los poderosos o que los partidos solo sirven para dividir a la gente reducen a la mitad la probabilidad de confiar respecto de quienes no tienen esas percepciones.

Por último, los datos muestran, en el caso del Congreso y los tribunales de justicia, una fuerte correlación entre las percepciones de corrupción y los niveles de confianza institucional. La caída en la probabilidad de confiar asociada a las percepciones de corrupción es la más pronunciada de todas las estudiadas (ver recuadro para observar el efecto en el conjunto de las instituciones). En el caso de los partidos políticos esta correlación no es significativa.

UN *ETHOS* REPUBLICANO

La abrupta caída en muchos de los indicadores de evaluación de las instituciones centrales del sistema democrático durante el decenio 2008-2018, así como la disminución generalizada de la confianza institucional, constituyen, sin duda, motivos de preocupación para el sistema político. Por una parte, la erosión de la confianza en el sistema judicial puede tener efectos nocivos sobre la disposición de las personas a actuar dentro de la legalidad. De hecho, como muestra el capítulo siguiente, el ideal de obedecer y cumplir las leyes ha bajado paulatinamente su relevancia en el período 2008-2018. Asimismo, la pérdida de confianza en el Congreso puede afectar la gobernabilidad y la legitimidad del sistema político como un todo, mientras que la desafección con los partidos puede facilitar el surgimiento de liderazgos contrarios al sistema político y sus instituciones.

Como se mencionó al inicio del capítulo, si bien cierto grado de desconfianza es sano para la democracia, pues promueve la vigilancia activa de la ciudadanía a autoridades e instituciones, cuando la desconfianza se generaliza, desacoplándose de eventos específicos, representa un riesgo para la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

En el caso chileno, los datos revelan que, pese a las negativas evaluaciones ciudadanas, la creciente percepción de corrupción y la caída abrupta de la confianza institucional, se mantiene la valoración abstracta de las instituciones democráticas, una valoración que trasciende las evaluaciones concretas sobre su desempeño y confiabilidad.

Así, en 2018, cerca de un 43% de las personas encuestadas consideraba que los partidos políticos eran indispensables

para la democracia, cifra que se ha mantenido estable desde 2010 y es particularmente alta (alrededor de 60%) entre quienes se identifican en el eje izquierda-derecha. Incluso en el marco de la negativa evaluación del Congreso y los partidos presentada en las páginas anteriores, en la última medición un 64% de las personas considera que “la forma como uno vota puede influir en lo que pasa en el país”, y un 46% opina que debiera ser obligatorio votar en las elecciones.

Además, pese a los juicios críticos sobre los tribunales de justicia, en 2018 se aprecia un importante apoyo al estado de derecho: casi un 55% de las personas afirma que se debe obedecer las leyes siempre, sin excepciones, y casi un 67% desaprueba que las personas hagan justicia por sus propias manos. Por último, como se observó en el capítulo anterior, más de la mitad de la población (52%) considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y el porcentaje de personas que cree que un gobierno autoritario es preferible en algunas circunstancias se ha mantenido estable a lo largo del período, siempre por debajo del 20%.

En suma, los datos indican que el aumento marcado del escepticismo hacia las instituciones no se traduce, al menos por ahora, en una reducción similar de la legitimidad democrática. Por el contrario, la desconfianza ciudadana se acompaña de una alta valoración abstracta de los partidos, del voto y del estado de derecho. Esto sugiere la existencia de un “*ethos* republicano”, a partir del cual la demanda de la ciudadanía parece ser contar con *mejores* instituciones democráticas, no con *otras* instituciones o preferir su desaparición.

CONCLUSIONES

Los datos presentados en este capítulo revelan un panorama complejo y desafiante: en el período Chile ha experimentado una caída sostenida y generalizada de la confianza ciudadana en las principales instituciones del sistema democrático. Ya casi no existen instituciones políticas o no políticas que gocen de la confianza de más de un tercio de la población. De hecho, las diferencias que existían entre ellas hace una década se han atenuado. Instituciones que no han sufrido escándalos de corrupción parecen haberse “contagiado”, perdiendo buena parte de la confianza ciudadana que tenían a inicios del período. Además se han diluido las diferencias que a comienzos del período marcaban las personas mayores, con más educación, residentes en zonas urbanas y que se identificaban políticamente en el eje izquierda-derecha, todas las cuales mostraban mayores niveles de confianza institucional que ya casi no se observan. La escasa confianza es en el presente un fenómeno generalizado.

Junto a lo anterior, los análisis muestran que han aumentado las evaluaciones negativas sobre el funcionamiento de tres instituciones centrales del sistema democrático: los partidos políticos, el Congreso y los tribunales de justicia. En particular, se ha incrementado la percepción de que estas instituciones no desempeñan bien sus funciones, que tanto el Congreso como el poder judicial no escuchan ni están interesados en escuchar los intereses y demandas de la ciudadanía, y que los tribunales de justicia no son imparciales ni eficientes. Por otra parte, se ha extendido la opinión de que en las tres instituciones hay mucha corrupción.

Esta opinión no se limita a los partidos políticos, el Congreso o los tribunales de justicia. En un contexto

marcado por escándalos de corrupción y abusos, desde el financiamiento irregular de campañas hasta casos de colusión entre empresas privadas, pasando por casos de malversación de dineros públicos en el Ejército y Carabineros, la percepción de corrupción ha alcanzado a todas las instituciones para las cuales hay datos en la serie de encuestas ENAD. Los análisis estadísticos muestran, además, que los bajos niveles de confianza ciudadana en las principales instituciones del sistema democrático están fuertemente relacionados con estas evaluaciones.

No obstante, muestran también ciertos aspectos positivos: el descenso en la confianza institucional y las evaluaciones negativas de las principales instituciones del sistema político conviven con un “*ethos* republicano” que se expresa en una alta valoración abstracta de la democracia, el voto, los partidos políticos y el estado de derecho.

¿Puede entonces detenerse o revertirse la tendencia a la baja de la confianza, antes de que este *ethos* de valoración abstracta de la democracia y sus instituciones resulte también afectado? La respuesta excede los alcances de este Informe, pero la relación observada entre confianza, evaluaciones y percepciones sobre las instituciones permite especular que la caída en la primera responde a las negativas evaluaciones y percepciones. Si fuera así, es probable que mecanismos orientados a mejorar ese desempeño, a prevenir la corrupción y a incrementar la sintonía con las necesidades ciudadanas pudieran revertir la tendencia, y de ese modo evitar que evaluaciones relacionadas con el contexto y con acciones institucionales específicas deriven en un déficit absoluto de confianza en las instituciones y, por extensión, en la democracia como régimen de gobierno.

Las recientes reformas al sistema político, que buscaron fortalecer su representatividad y generar mayores controles sobre la actividad política, parecen no haber tenido un efecto mayor en la evaluación de instituciones como el Congreso y los partidos, al menos en el corto plazo. Esto no implica que haya que abandonar los esfuerzos. Incrementar la transparencia y construir instituciones sensibles a las demandas ciudadanas deben seguir siendo prioridades para el Congreso y los partidos. En materia de justicia, por ejemplo, es urgente avanzar hacia una reforma procesal civil, que agilice los procesos judiciales que atañen a la mayor parte de la ciudadanía. En todos los casos, establecer mecanismos que permitan prevenir,

fiscalizar y sancionar la corrupción en todas sus formas resulta indispensable.

Es posible que el proceso de revertir la pérdida de confianza no dé frutos inmediatos, pues es más difícil recuperarla que perderla. Una reforma mal implementada o que no cumpla con las expectativas puede socavar aun más el estado de las cosas. Un escándalo de corrupción puede hacer desaparecer avances reputacionales que tomó años construir. El acelerado deterioro de la confianza en instituciones como Carabineros da cuenta de ello. Por eso la tarea de reconstrucción de las confianzas institucionales promete ser un proceso arduo y de largo plazo. Pese a todo, la tarea no debe abandonarse.

3.

CAMBIOS CULTURALES Y CIUDADANÍA

En el capítulo anterior se describieron la caída sostenida que afecta a la confianza en las instituciones en Chile y los riesgos para la democracia que esa caída supone. En este, se analiza parte de la trama cultural que es el telón de fondo de este proceso. En concreto se aborda el cambio en las actitudes hacia los roles tradicionales de género, la homosexualidad, el aborto y la inmigración, las causas colectivas con mayor adhesión en la población y la transformación de los ideales de ciudadanía.

¿Por qué examinar estos aspectos en el presente Informe? Existen al menos tres razones. Primero, la literatura plantea que, en las últimas décadas, diversos procesos globales de cambio –desarrollo económico, aumento del nivel educacional, más pluralismo en las fuentes de información y conectividad digital, entre otros– han propiciado orientaciones culturales más igualitarias e inclusivas, asociadas al respeto de la autonomía y la dignidad humana (Dalton y Welzel, 2014). En algunos contextos estas orientaciones han generado demandas ciudadanas cada vez más complejas y exigentes para la democracia (Norris, 2011), las que en Chile tras el retorno a la democracia se expresan en expectativas de mayor democratización y horizontalidad en el trato social (Araujo y Martuccelli, 2012), así como mayor igualdad y justicia social, expectativas que plantean desafíos crecientes a las agendas programáticas del sistema de partidos (Rovira, 2019).

Por otro lado, el cambio de valores y normas cívicas es central para comprender el comportamiento político de la población (Dalton, 2017, 2006; van Deth, 2012). Diversos autores plantean que los repertorios de participación política que caracterizan a las democracias contemporáneas obedecen, en parte, a cambios en las

percepciones de la ciudadanía respecto de su propio rol en la esfera pública (Denters, Gabriel y Torcal, 2006; Castillo et al., 2015).

Por último, Przeworski (2019) sostiene que las transformaciones culturales recientes, especialmente en temas valóricamente sensibles, pueden dar lugar a tensiones y polarizaciones difícilmente procesables por los sistemas democráticos, lo que afectaría la cohesión social y, en algunas ocasiones, la calidad y estabilidad de los regímenes democráticos. Estos cambios pueden, además, cristalizar y posibilitar que la discriminación, la xenofobia y el nacionalismo se canalicen en opciones programáticas a través de movimientos y partidos. Desde esta perspectiva, explorar el cambio cultural, los ideales de ciudadanía y las causas colectivas es una vía para acceder a algunas de las tensiones que enfrenta actualmente la democracia en diversas partes del mundo.

De la evidencia empírica que proporciona este capítulo, destaca la intensa transformación en favor de la igualdad de género, la creciente aceptación de la homosexualidad y el aborto, el cambio en la valoración de la migración reciente, así como una acentuación, durante los últimos diez años, de las diferencias valóricas entre personas con diferentes niveles educacionales, orientaciones políticas, entre generaciones y entre creyentes y no creyentes. En otras palabras: en esta década, Chile no solo ha experimentado un acelerado cambio cultural, también ha aumentado la distancia entre distintos grupos sociales. A esto se suma la consolidación del cuidado ambiental como principal ideal ciudadano y causa colectiva, en un contexto en que predominan ideales cívicos que no requieren, para ser puestos en práctica, de un compromiso asociativo ni

de soportes institucionales de carácter político. También disminuyen ideales tradicionales como “servir a las Fuerzas Armadas” y “siempre obedecer leyes y normas”.

El capítulo se estructura en dos apartados. En el primero se analiza un conjunto de cambios culturales y su relación con los desafíos de la democracia chilena. Y en el segundo

se describen los ideales ciudadanos y las causas colectivas que al año 2018 despiertan mayor simpatía e identificación en el país. En ambos se analizan las variaciones observadas, principalmente en términos de diferencias de género, educativas, políticas, religiosas, territoriales y generacionales. El capítulo culmina con una breve síntesis de los hallazgos principales.

CAMBIOS CULTURALES RECIENTES EN LA SOCIEDAD CHILENA

En esta sección se analizan transformaciones en representaciones, valores y actitudes sobre aspectos diversos de la realidad social que evidencian un cambio cultural en el Chile reciente: las actitudes hacia los roles tradicionalmente asociados a hombres y mujeres, la justificación del matrimonio de personas del mismo sexo y el aborto, y la valoración de la inmigración. En cada uno de ellos es posible encontrar expresiones de cambio, así como diferenciaciones sociales que especifican qué grupos cambian más aceleradamente y quiénes sostienen posiciones más tradicionales.

Cabe recordar que el cambio cultural no ocurre en el vacío, ni al margen de las instituciones o de las estructuras económicas de una sociedad. Tampoco es inmune a las disputas de poder. Más bien al contrario, se configura a partir de las relaciones económicas, de las trayectorias de desarrollo, de los debates ideológicos y políticos, de las leyes y arreglos institucionales, y de los discursos que logra imponer la sociedad civil. A su vez, los medios de comunicación y las nuevas redes digitales (Castells, 2008) tienen un papel central en el cambio cultural por su capacidad de relevar o invisibilizar ciertas posiciones del debate (Fraser, 1992, 2007).

Género: representaciones menos tradicionales

Buena parte de la historia del siglo XX estuvo marcada por la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, y por

logros efectivos en la materia. Los esfuerzos impulsados por diversos movimientos de mujeres se tradujeron en un paulatino ingreso de estas en la vida pública y en un incremento de su autonomía física, financiera y política (Cepal, 2011). Como parte de este proceso se lograron cambios institucionales y acuerdos internacionales, que marcaron la agenda pública en el mundo y en Chile. Sin duda subsisten obstáculos y resistencias, pero es relevante constatar que se han ido transformado las representaciones culturales sobre lo que significa ser hombre y mujer en la sociedad chilena, y que durante los últimos diez años este cambio ha sido acelerado.

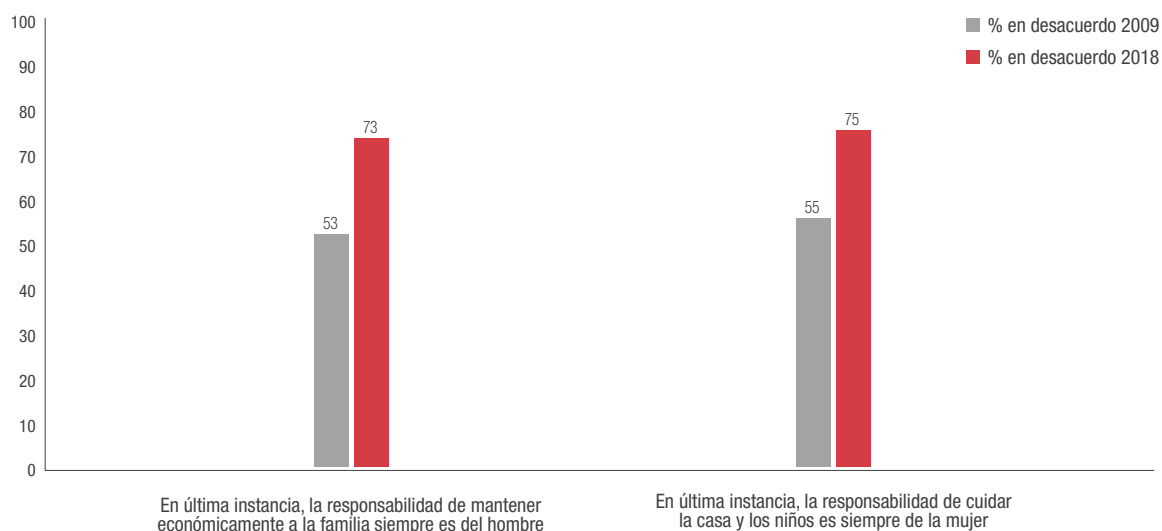
Así lo confirman los datos de las Encuestas del PNUD realizadas entre 2009 y 2018.¹ Como se observa en el Gráfico 3.1, durante este período ha aumentado sustantivamente el desacuerdo con aquellas frases que sostienen una posición tradicional sobre los roles de género, sea la idea de que la responsabilidad de mantener económicamente el hogar es siempre de los hombres (el modelo de masculinidad tradicional en que el hombre es el proveedor) como la de que la responsabilidad de cuidar la casa y los niños es siempre de las mujeres (el modelo de la “buena madre”).² El desacuerdo con ambas afirmaciones aumenta en 20 puntos porcentuales en un período de 10 años, un cambio a todas luces radical.

El análisis revela además que el cambio ha sido transversal. En 2009, si bien buena parte de los grupos ya favorecía levemente una representación más igualitaria,

¹ Ver PNUD (2010) para un análisis más extenso sobre las representaciones de género en Chile, y PNUD (2019b) para el análisis estadístico en profundidad de esta transformación.

² Ambas preguntas son escalas Likert que varían desde el valor 1 (muy de acuerdo) a la opción 4 (muy en desacuerdo). Para el análisis se han recodificado 1-2 como “de acuerdo” y 3-4 como “en desacuerdo”. Las dos preguntas tienen una alta correlación: 0,7.

GRÁFICO 3.1 Porcentaje de *desacuerdo* con representaciones tradicionales de género, 2009 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Desarrollo Humano 2009 y Auditoría a la Democracia 2018.

las representaciones tradicionales de género sintetizadas en las dos afirmaciones citadas predominaban entre los habitantes de sectores rurales, las personas con educación básica, quienes profesaban la religión evangélica y los nacidos antes de 1960. Diez años más tarde, en todos los grupos es mayor el desacuerdo que el acuerdo con ambas afirmaciones. Aunque no hay que desestimar que un quinto de la población concuerda con ellas.

Esto no implica una homogeneidad en todos los grupos. Por un lado, la diferencia entre hombres y mujeres aún es significativa. Un tercio de los hombres está de acuerdo con que ellos deben ser siempre responsables de mantener económicamente a la familia, mientras la cifra se reduce a un quinto en el caso de las mujeres. Asimismo, un 20% de las mujeres está de acuerdo con que, en última instancia, la responsabilidad de cuidar la casa y los niños es siempre de la mujer. Ello evidencia que tanto hombres como mujeres pueden adherir a representaciones tradicionales de género (PNUD, 2019b).

Aun más aguda es la diferencia entre grupos con diferentes niveles educacionales. Mientras un 60% de personas con educación básica está en desacuerdo con la imagen del

hombre proveedor, esa cifra aumenta a un 85% entre quienes tienen formación universitaria completa. En cuanto al eje derecha-izquierda, si en 2009 existían leves diferencias, nueve años después esa distancia se incrementa: ambos grupos aumentan su desacuerdo con los roles tradicionales, pero en 2018 quienes se definen de izquierda y centroizquierda manifiestan representaciones más igualitarias. Así, mientras el 82% de este grupo declara estar en desacuerdo con la idea de que la responsabilidad principal de los hombres es ser proveedores, entre quienes se identifican como de derecha y centroderecha el porcentaje es de 68%. Como el PNUD señalaba a principios de este año: "... la identificación política, que a inicios del período era irrelevante, se ha vuelto un factor significativo, particularmente porque quienes se autoidentifican del centro a la izquierda del espectro político-ideológico han reducido significativamente su apoyo a las visiones tradicionales de género" (2019b: 13). Es una tendencia que se repite en las otras dimensiones observadas en este capítulo.

En cambio las diferencias entre las confesiones religiosas han perdido relevancia en este punto, especialmente entre personas no creyentes versus católicas y evangélicas.³ Lo mismo sucede entre los habitantes de territorios rurales y urbanos.

³ La pregunta sobre las confesiones religiosas no distingue entre los distintos grupos evangélicos, por lo que no se pueden hacer distinciones más finas. Y aunque se pregunta por otras confesiones, su proporción en la muestra es tan pequeña que resulta inapropiada para realizar inferencias estadísticas.

Por último, en términos generacionales se observa que el cambio ha sido transversal. En el Gráfico 3.2 se muestran siete cohortes sintéticas (se observan las respuestas de personas nacidas en las mismas fechas), que en su mayoría superan el 70% de desacuerdo con la representación de las mujeres como principales encargadas del hogar. Solo las personas nacidas antes de 1950 registran un incremento algo menor (18 puntos porcentuales) que el resto de las generaciones en el grado de desacuerdo. En el resto de los grupos de edad las orientaciones tienden a igualarse.

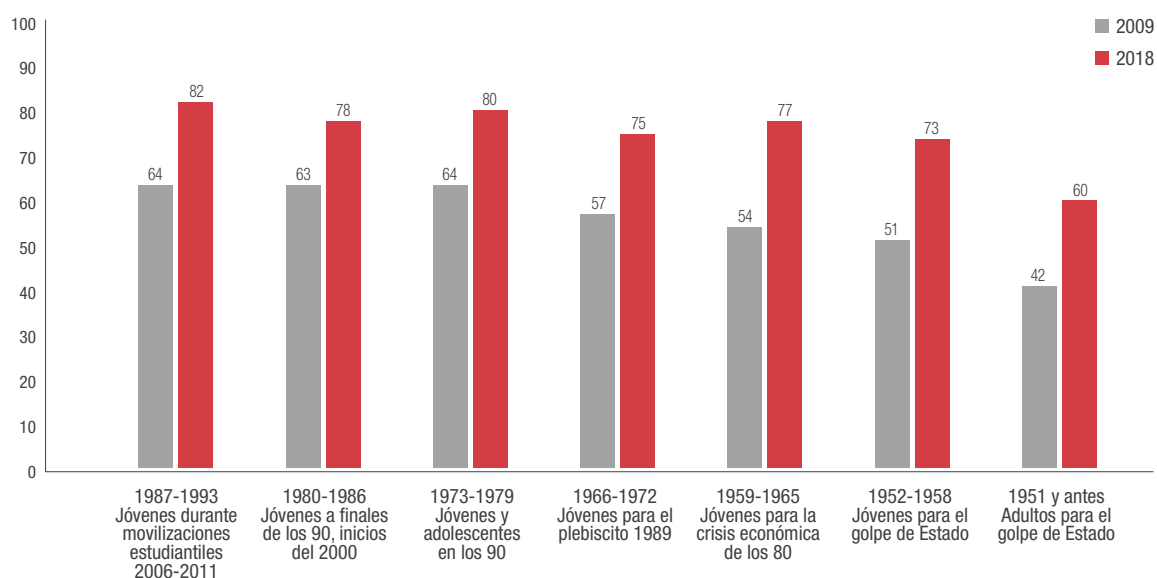
La literatura académica plantea que el desarrollo económico, diversos cambios institucionales, las demandas de movimientos sociales y la secularización han favorecido representaciones de género más igualitarias (Inglehart y Norris, 2003). En Chile, los cambios culturales descritos se dan a la par con otras múltiples transformaciones de la última década, entre las que destacan la intensificación y masificación de las demandas para acabar contra las distintas formas de violencia y abuso hacia las mujeres; el mayor acceso de las mujeres a la educación superior (actualmente en Chile superan a los hombres) y el aumento constante del porcentaje de mujeres en el mercado laboral remunerado, que en el país se profundiza en las nuevas generaciones (ComunidadMujer, 2018), aunque

se mantiene una gran desigualdad socioeconómica tanto en la inserción como en las brechas de salarios (PNUD, 2017a). A su vez, en Chile ha habido cambios institucionales que han posibilitado sistemas de protección y pisos de oportunidades más equitativos, desde la ley de divorcio hasta el posnatal de seis meses.

Los cambios en las representaciones de los roles de género descritos no cubren, por supuesto, todas las aristas que abarcan las relaciones de género, ni reflejan lo que acontece en las prácticas, donde las mujeres siguen desempeñando un rol preponderante en las tareas de cuidado y del hogar, propias del espacio privado (INE, 2016), y los hombres siguen teniendo una mayor participación en el mercado laboral (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017). Pero no por eso hay que desestimar el profundo avance que implica que las representaciones tradicionales sobre los roles de género sean hoy minoritarias en la sociedad chilena.

El consenso en las representaciones culturales facilita que el sistema democrático canalice con mayor agilidad nuevas demandas que emergen de la sociedad civil, o que se intensifiquen los esfuerzos dirigidos a modificar las prácticas que impiden una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es

GRÁFICO 3.2 Porcentaje de personas en *desacuerdo* con la idea de que las mujeres deben hacerse cargo de las tareas del hogar, por generación, 2009-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Desarrollo Humano 2009 y Auditoría a la Democracia 2018.

también probable que esto se traduzca en presiones sobre las instituciones para que pongan fin a cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, se fomenten estrategias efectivas para promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y el trabajo doméstico entre los hombres, y se ofrezcan mecanismos concretos para reducir las desigualdades de género que persisten a lo largo del ciclo de vida de las mujeres. Sin embargo, no es fácil prever la capacidad de ese quinto de la población más conservador para imponer barreras o cuestionar estas iniciativas, tanto públicas como privadas, o si incluso ciertos actores de la esfera política lograrán visibilizar en la agenda pública estas últimas representaciones.

Homosexualidad y aborto: disminución del prejuicio y apertura del debate

Un segundo conjunto de transformaciones culturales corresponde al cambio de las actitudes hacia la homosexualidad y el aborto, dos realidades que en todo el mundo se consideran temas morales de gran carga política (Jelen y Wilcox, 2003), pues suscitan intensos debates públicos y una fuerte polarización en los grupos sociales. Aunque son dos temas no relacionados, que invocan sensibilidades y enfrentan resistencias diferentes, en este apartado se abordan de manera conjunta por una razón eminentemente técnica: los resultados de las distintas encuestas analizadas indican que estadísticamente se comportan de manera similar. Es decir, en términos generales, las actitudes hacia el aborto tienden a estar positivamente correlacionadas con las actitudes hacia la homosexualidad.

A diferencia de las representaciones tradicionales de género, que desde los primeros movimientos de mujeres y la obtención del sufragio femenino experimentaron avances paulatinos, las actitudes hacia la homosexualidad y el aborto sufrieron en el mismo período importantes reveses en Chile. Las dictaduras de Carlos Ibáñez del Campo y de Augusto Pinochet persiguieron a las personas homosexuales (Correa et al., 2001). En 1954 se promulgó la ley 11.265 sobre estados antisociales, que instruía la rehabilitación forzosa y el sometimiento a quienes practicasen la homosexualidad, y que se derogó recién en 1994. Y si bien en los años treinta el aborto era considerado una alternativa legítima para controlar la elevada tasa de mor-

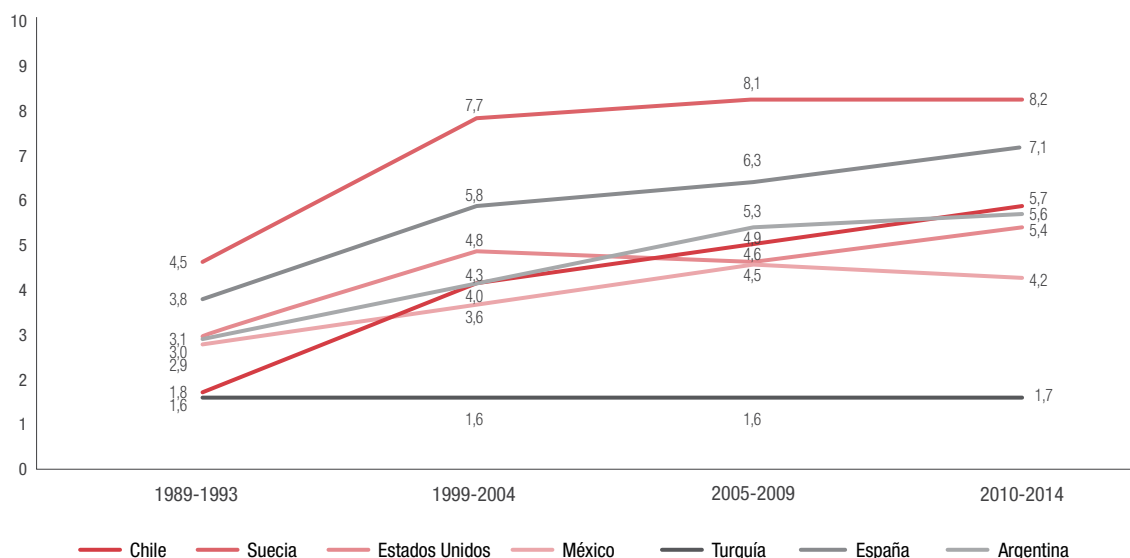
talidad infantil, cuarenta años después, bajo la influencia de grupos afines a la teología moral católica, pasó a ser conceptualizado como homicidio, aduciendo el derecho a la vida de los nonatos (Herrera y Teitelboim, 2010). Como consecuencia, en 1989, en los últimos momentos del régimen de Pinochet, se derogó el artículo 119 del Código Sanitario, que permitía el aborto terapéutico.

Como resultado, el Chile de inicios de los noventa era un país institucionalmente y culturalmente intolerante a la diversidad sexual y al aborto. Lo confirman distintas encuestas internacionales. El Gráfico 3.3, elaborado en base a los datos de la Encuesta Mundial de Valores, muestra que en 1990 Chile se encontraba entre los países con menor aceptación de la homosexualidad. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que la homosexualidad nunca puede ser justificada y 10 siempre, la población chilena marcaba en promedio 1,8 puntos a principios de la década, similar a países como Turquía y distante de otros países de la región como México o Argentina. Veinticinco años después, Chile evidencia un sistemático y acelerado cambio, superando a países como Estados Unidos o México (que registran oscilaciones en el período).

En el caso de las actitudes hacia el aborto, en 1990 las cifras eran similares: Chile promediaba 1,8 en la escala de justificación del aborto de la Encuesta Mundial de Valores, cifra que aumentó paulatinamente entre 1990 y 2008; aunque en este caso el cambio no fue tan acelerado. Los datos de la Encuesta de Auditoría a la Democracia siguiendo la misma pregunta (Gráfico 3.4) constatan que más bien se intensificó en la última medición, en 2018. Durante una década, el país no solo incrementó la justificación del aborto, pasando de 2,7 a 4,9, sino que la mediana (el valor central de la muestra) pasó de 1 a 5. A su vez, como evidencia la medida de desviación estándar, la dispersión entre las opiniones de las personas encuestadas se incrementó, lo que da cuenta de una creciente distancia de las posturas en este tema. La mayor justificación del aborto se produce después de la aprobación de la ley de aborto en tres causales, que comenzó a regir en 2017. El debate previo evidenció la distancia entre las posturas sobre este tema.

Los datos anteriores no deben llevar a desestimar que cerca del 40% de la población manifiesta en la medición del 2018 una baja tolerancia hacia ambos temas, ni que

GRÁFICO 3.3 Justificación de la homosexualidad en siete países, 1989-2014



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de datos de la Encuesta Mundial de Valores, años respectivos.

existan matices según el aspecto específico sobre el que se consulta. En el caso de la homosexualidad, por ejemplo, es mayor la justificación del matrimonio que la de la adopción, mientras que la aceptación del aborto aumenta cuando el embarazo conlleva un riesgo para la madre y en casos de violación, pero desciende en cualquier otra circunstancia (ver, por ejemplo, los resultados de la Encuesta CEP 2017, abril-mayo).

El análisis de las encuestas Auditoría a la Democracia arroja luces además sobre qué grupos han incrementado su aceptación y quiénes mantienen posiciones intolerantes hacia ambos fenómenos (en este caso, a diferencia de la Encuesta Mundial de Valores, se pregunta específicamente por el matrimonio entre personas del mismo sexo). Para realizar ese examen se dividieron las respuestas de las personas encuestadas según los niveles de aceptación; la

clasificación dio lugar a tres grandes categorías: baja justificación (posición del 1 al 4 en la escala), justificación media (5-6) y alta justificación (posiciones del 7 al 10). La Tabla 3.1 resume la categorización para los dos años en cuestión.

Tomando estas dos preguntas, entonces, y teniendo en cuenta especialmente el aumento de la distancia en las opiniones (medido por la desviación estándar), se analiza cómo varían las posiciones según las distintas categorías de personas.

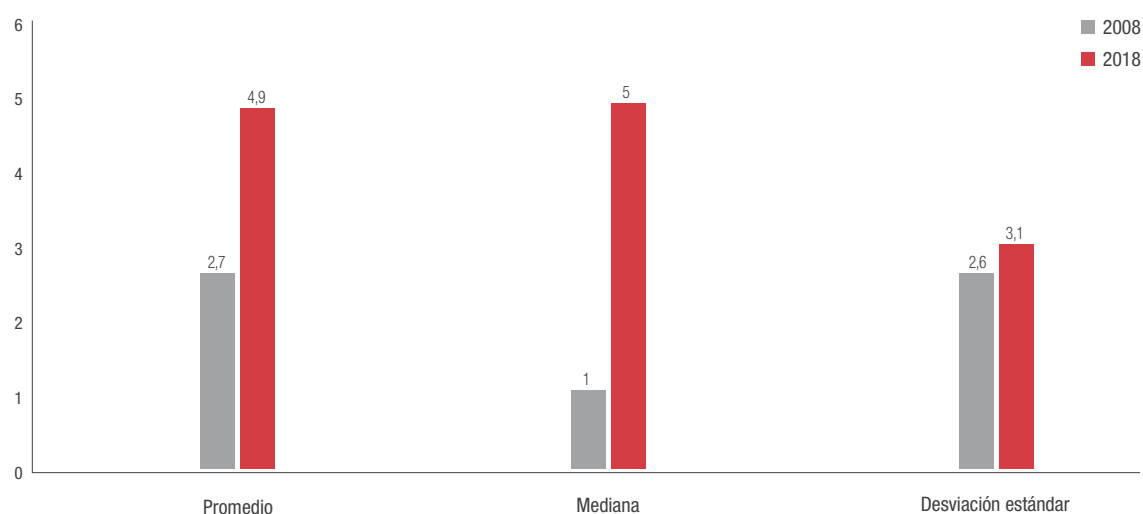
Una primera diferencia importante se aprecia al comparar a quienes adhieren a confesiones religiosas con aquellas personas que declaran no profesar ningún credo. Si bien en los primeros, sin excepción, se observa un aumento de la justificación de la homosexualidad y el aborto, aún

TABLA 3.1 Justificación del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, agrupados

Justificación	Matrimonio entre personas del mismo sexo (%)			Aborto (%)		
	2008	2018	Dif	2008	2018	Dif
Baja (1-4)	68	39	-29	73	43	-30
Media (5-6)	16	26	+10	16	28	+12
Alta (7-10)	16	35	+19	11	29	+18

Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 3.4 Justificación del aborto (escala del 1 al 10), 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

predomina la baja tolerancia. En particular, entre las personas evangélicas aumenta la justificación del matrimonio homosexual de un 13% a un 20%, pero un 58% lo considera injustificado; respecto del aborto, un 60% no lo acepta, pero crece la justificación de un 6% a un 18%. En el caso de los católicos hay una mayor dispersión, aunque todavía una mayoría mantiene posiciones contrarias: entre un 40% y un 45% no justifican ni el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el aborto. En el caso de las personas que se declaran sin religión es interesante notar que su posición se invierte: al principio del período en este grupo predominaba la baja aceptación. Luego de diez años, un 44% presenta una alta justificación del matrimonio homosexual y un 38% del aborto. En este contexto, la diferencia más importante se produce entre la población evangélica y el resto de la población, controlando los efectos de distintas variables.⁴

Similar a lo observado en las representaciones de género, un segundo factor de diferenciación que arroja un cambio especialmente significativo son las orientaciones políticas.

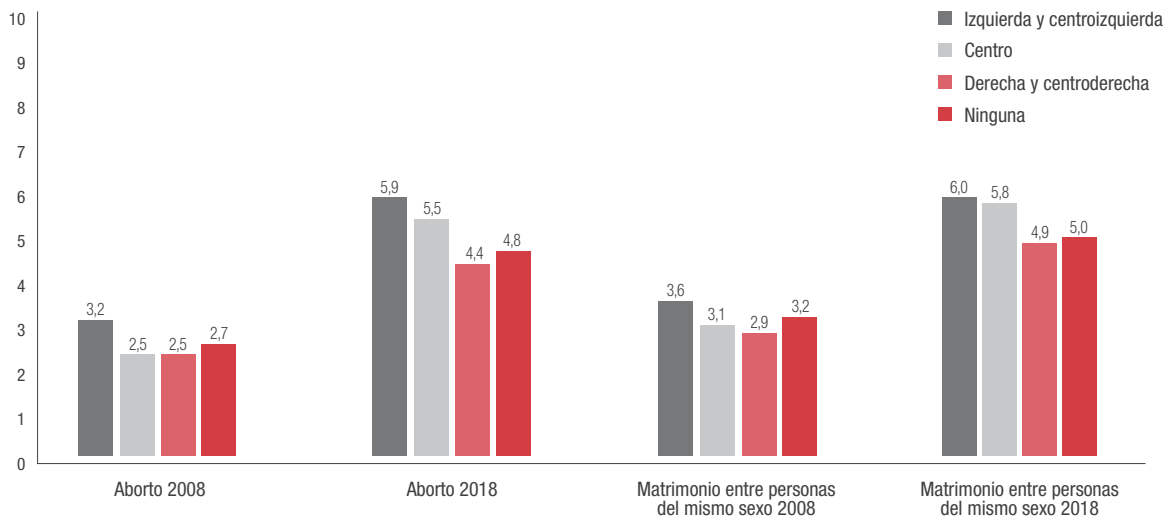
El Gráfico 3.5 muestra el promedio (en una escala de 1 a 10) de la justificación del aborto y la homosexualidad, para personas de distintas orientaciones políticas.

Si bien en 2008 las personas que se identificaban con la izquierda registraban una mayor aceptación relativa, la mayoría de sus adherentes sostenía una posición intolerante en ambos temas: 65% de este grupo marcaba entre 1 y 4 en ambas escalas. En 2018, si bien en todas las personas aumenta la aceptación del aborto y de la homosexualidad, quienes adhieren a la izquierda y centroizquierda se distancian tanto de las personas de centro y de aquellas que adhieren a la derecha y centroderecha como de aquellas que no se alinean en este eje político (especialmente en la justificación del aborto; en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo no hay diferencias significativas con las personas de centro).

Mientras en 2018 alrededor de un 45% de las personas de izquierda y centroizquierda manifiesta una aceptación alta (7-10) del matrimonio entre personas

⁴ A través de modelos de regresión logística se analizó el efecto de distintas variables (religión, edad, identificación política, educación, macrozonas y sexo) para controlar las diferencias observadas. Se realizaron dos dicotomías: una entre aquellos que tenían una baja justificación en la escala (1-4) y el resto, y otra en la que se dividió a los que tenían una alta justificación (7-10) del resto. En el caso de la adhesión religiosa, la variable a contrastar eran los adherentes católicos. Como no es fácil mostrar todos los resultados a la vez, se enuncian las mayores significaciones: las diferencias con la población evangélica son siempre significativas para los dos temas. Al compararlas con las personas encuestadas que profesan la religión católica, quienes no se identifican con una religión presentan diferencias significativas solo en el aborto.

GRÁFICO 3.5 Justificación del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo según orientación política (promedios de escala del 1 al 10), 2008 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

del mismo sexo y el aborto, en torno a un 45% de las personas de derecha y centroderecha tienen una baja tolerancia (1-4) a ambos temas. Esta diferencia entre adherentes de derecha e izquierda es significativa luego de controlar el efecto de distintas variables.⁵ Por el contrario, no se aprecian diferencias relevantes entre la gran mayoría que no adhiere a este eje y las personas de derecha. Así, tal como respecto de las representaciones de género, todas las personas cambian pero las de izquierda y centroizquierda se distancian más del resto.

Una tercera brecha se produce según el nivel educacional, que en Chile está altamente correlacionado con las posiciones socioeconómicas. Como se observa en el Gráfico 3.6, el aumento promedio de esta justificación es transversal y notorio en ambos temas. De hecho, el grupo con educación universitaria en 2008 tenía opiniones más conservadoras que el grupo con educación básica en 2018, en ambos temas, lo que ilustra claramente la magnitud del cambio.

No obstante el cambio, las diferencias entre niveles educacionales continúan. La literatura plantea que la variable

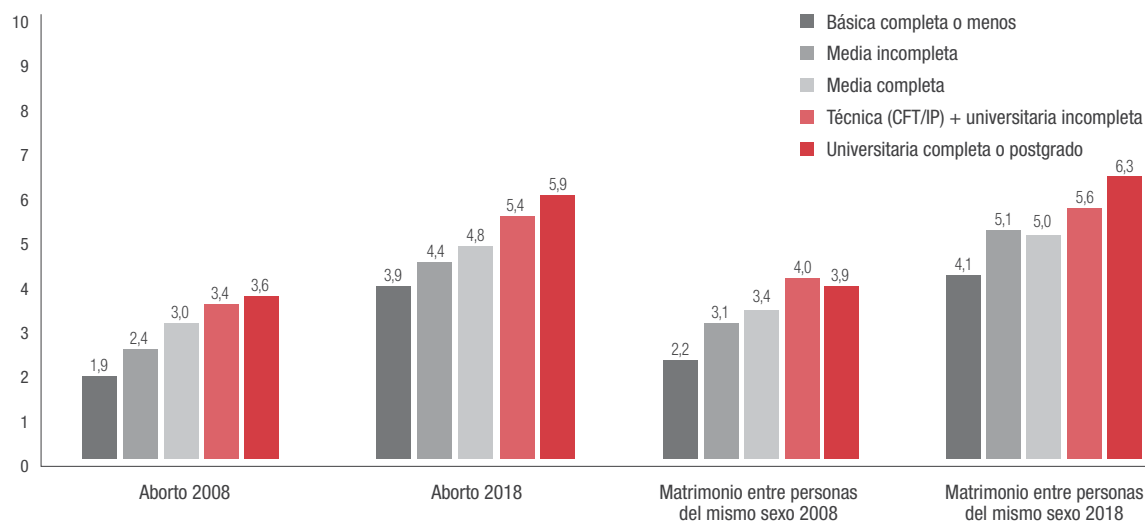
educacional –y el nivel socioeconómico en general– es un factor relevante en los grados de aceptación de estos temas (Farías, 2016). En la actualidad, el peso de esta variable no solo se mantiene sino que se intensifica la distancia entre los grupos con menor y mayor educación. En 2018, el porcentaje que manifiesta una alta justificación (7-10) del matrimonio entre personas del mismo sexo alcanza un 49% en quienes culminaron la enseñanza universitaria completa, versus un 25% entre las personas que solo cursaron educación básica (en aborto es 41% vs. 21%), una diferencia que casi duplica la observada en 2008, medida en puntos porcentuales.⁶

La cuarta diferencia que es interesante destacar es la generacional. Nuevamente, todas las generaciones muestran mayor justificación en estos temas y, de hecho, la tolerancia del matrimonio entre personas del mismo sexo en las cohortes nacidas antes de 1960 aumenta más rápido que el resto, como se observa en el Gráfico 3.7. Pese a ello, se mantiene la distancia entre los grupos etarios, y son los más jóvenes los que registran una mayor justificación de estos temas. En el caso del aborto, la brecha se acentúa.

⁵ Las regresiones logísticas en estos casos operan contrastando la posición de los que adhieren a la derecha y centroderecha frente al resto.

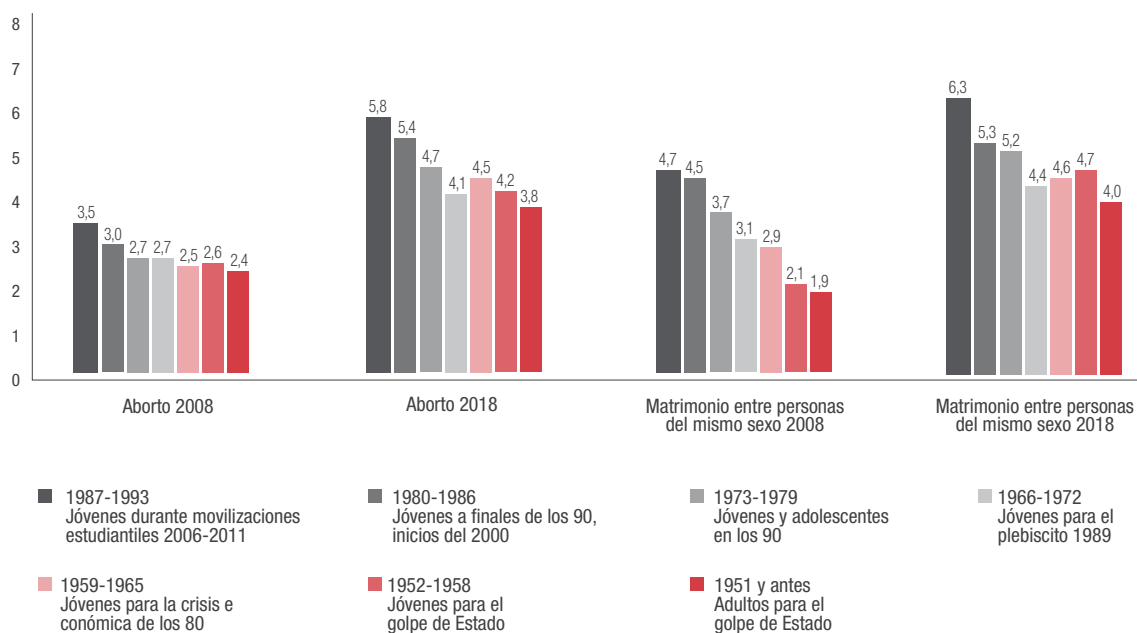
⁶ A medida que aumenta el nivel educacional aumenta la significación, controlando los otros factores. La excepción la constituye la diferencia entre personas con educación media incompleta y básica en el tema del aborto, que no es significativa.

GRÁFICO 3.6 Justificación de aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo según nivel educacional (promedios escala del 1 al 10), 2008 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 3.7 Justificación de aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo según generaciones (promedios de escala del 1 al 10), 2008 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

En los grupos más jóvenes (nacidos entre 1994 y el 2000, no graficados al no poder hacerse la comparación en el tiempo), el promedio de aceptación del aborto es

idéntico al de aquellos nacidos entre 1987 y 1993, y en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, se eleva a un 6,5. Pero, en el agregado, las diferencias

son significativas entre los grupos de 18 a 30 años versus el resto de las generaciones, controlando el efecto de otras variables.

Por último, al igual que en las representaciones de género, la diferencia entre personas que viven en sectores urbanos y rurales deja de ser significativa. Asimismo, hombres y mujeres presentan solo una leve diferencia en la tolerancia de la homosexualidad: los hombres aparecen levemente más intolerantes que las mujeres (41% vs. 38%, diferencia estadísticamente significativa en los análisis realizados). En aborto no se observan diferencias significativas.

Detrás de estos cambios confluyen varios procesos. A la luz de la literatura comparada, se sabe que el desarrollo económico incide al ofrecer un piso de seguridades que promueve el respeto por las libertades individuales y la autoexpresión (Inglehart y Welzel, 2005). Asimismo, el mayor acceso a la información producto de la masificación de los medios de comunicación y el aumento de la educación en general promoverían lo que algunos autores denominan la “movilización cognitiva”, un desplazamiento de los prejuicios y una mayor tolerancia a las diferencias

fundadas en opciones de vida (Dalton, 1984). Como se demostró en este apartado, gran parte de estos cambios en el caso chileno cristalizan en las nuevas generaciones, que son más tolerantes. Por último, los procesos generales de secularización (ver recuadro) tienden a disminuir la intolerancia a la homosexualidad y el aborto (Inglehart y Norris, 2003; Adamczyk y Pitt, 2009).

Además de fenómenos y productos culturales que han contribuido a la promoción del respeto a la diversidad sexual, desde la obra del escritor Pedro Lemebel a la telenovela *Machos* (2003) o el galardonado filme *Una mujer fantástica* (2017), hay factores institucionales que acompañan estas transformaciones. Destacan la promulgación el 2012 de la ley 20.609 contra la discriminación, así como la ley de Unión Civil, que entró en vigencia en 2015 (Araya, 2019). Por otro lado, la discusión sobre la despenalización del aborto y su posterior regulación en la ley de aborto en tres causales ha sido un factor decisivo en el debate en esta materia. De hecho, como se observó, es solo en la medición de 2018 que la justificación del aborto aumenta considerablemente. En ambos casos, movimientos sociales locales y globales, ya

CAMBIOS EN LAS ADHESIONES RELIGIOSAS

De acuerdo con los datos de la serie ENAD 2008-2018, el porcentaje de personas que no profesa ninguna religión se ha más que duplicado en el período de referencia, pasando de 13% a 28%. El incremento se explica especialmente por la caída de la población católica, que disminuye de 65% a 50%. Si bien los recientes escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y la baja confianza en las instituciones eclesiales (ver Capítulo 2) han incidido en este declive, la merma de las personas que se declaran católicas se inicia antes de estos hechos. Según el Censo de 2002, la población católica chilena ese año era de un 77%, es decir, cae 12 puntos entre 2002 y 2008.

En cambio, el porcentaje que profesa la religión evangélica se ha mantenido estable en un 15% entre 2002 y 2018 (según datos del Censo y la ENAD; el censo 2017 no pregunta por confesión religiosa). Lo que sí aumentó dentro de este grupo entre 2008 y 2018 es el porcentaje de quienes declaran asistir “más de una vez a la semana” a servicios religiosos, que pasa de un 6% a un 15% (ENAD). Esto demuestra que el incremento de quienes se declaran sin religión no afecta a todas las confesiones. Además, la tendencia secularizadora no implica que ciertos componentes de la cultura religiosa desaparezcan: un 64% de quienes no profesan ninguna religión en Chile declara creer en Dios (Valenzuela, Bargsted y Somma, 2013) y un 65% cree en los milagros (CONICYT, 2016).

sea LGBTI o feministas, han presionado por el cambio institucional en favor del respeto de los derechos de las minorías sexuales y la autodeterminación de las mujeres (Barrientos, 2016; Zerán, 2018).

En términos de los nuevos desafíos que enfrenta la democracia, Przeworski (2019: 90) plantea que cambios culturales como los descritos pueden no solo conducir a la valoración de diferentes estilos de vida, sino también a una polarización de las posiciones valóricas. Por ejemplo, en temas como la discusión sobre el aborto, las posturas pueden tornarse irreconciliables si para ciertos grupos la interrupción del embarazo representa, en cualquier circunstancia, un homicidio, mientras que para otros constituye un derecho inalienable de las mujeres.

Si bien el desplazamiento hacia un mayor respeto por las libertades individuales ha sido transversal, la creciente distancia en las posturas sobre el aborto y la homosexualidad entre distintos grupos (evangélicos versus el resto, izquierda versus el resto, así como entre niveles educacionales y de edad) puede conducir también a una polarización de la población y dificultar la deliberación

democrática sobre estos temas. En otras palabras, el debate sobre temas morales puede tensionar a la sociedad chilena como lo ha hecho en otros países, sea por las disputas sobre la institucionalidad del matrimonio homosexual y las dificultades de la adopción homoparental (Herrera et al., 2018), o bien por la discusión sobre la objeción de conciencia frente a las solicitudes de aborto.

Hasta ahora, el sistema político chileno ha tendido a neutralizar las distancias que emergen de estas controversias (Luna, 2008). Un estudio reciente de Madariaga y Rovira (2019) muestra que la presencia de definiciones en temas morales en los programas presidenciales de las mayores coaliciones ha sido sumamente escasa en todas las elecciones desde la vuelta a la democracia (entre un 0% y un 4%), en parte porque al interior de cada conglomerado político conviven fuerzas liberales y conservadoras (piénsese, por ejemplo, en el rol de la Democracia Cristiana en la coalición de centroizquierda y, más recientemente, en Evópoli en la coalición de centroderecha) que dificultan los consensos e impiden la polarización. Sin embargo, ello no implica que a futuro no se intensifiquen las diferencias.

EL CAMBIO EN EL CLIVAJE ESTADO-MERCADO

Gran parte de las diferencias observadas en los datos de justificación de la homosexualidad y el aborto, así como el cambio en las representaciones sobre los roles tradicionales de género, se vinculan al clivaje clerical-secular, que desde el siglo XIX dividió a las fuerzas políticas en Chile (Luna, 2008). La literatura sostiene que, además de este, el clivaje Estado-mercado ha estructurado la división política chilena entre derecha e izquierda, con los primeros tradicionalmente a favor de una mayor presencia del mercado y los segundos de una mayor redistribución de bienes a través del Estado. ¿Cómo ha cambiado la ciudadanía chilena en estos temas? Los datos de la Encuesta Mundial de Valores revelan que ha ido inclinándose hacia posturas más igualitarias y redistributivas. Así, en el período comprendido entre 1990 y 2012, y en una escala de 1 a 10, donde 1 significa

que debería haber mayor igualdad de ingresos y 10 que debería haber mayor diferencia de ingresos como incentivo al esfuerzo individual, se ha pasado de un promedio de 6,0 a uno de 3,5. Esta tendencia se observa en todos los niveles educacionales, lo que sugiere que el cambio ha sido transversal (la desviación estándar se redujo de 3,19 a 2,49) y más acelerado que en otros países (Rovira, 2019). Si bien otras investigaciones han demostrado que en Chile la legitimidad de la desigualdad de ingresos es alta (Castillo, 2011), la publicación *Desiguales* del PNUD (2017a) también confirmó el incremento de preferencias redistributivas entre los años 2000 y 2016, que se expresaba especialmente en la demanda de que el Estado garantice mayor seguridad en ámbitos como la salud y la educación.

JUICIOS VALÓRICOS SOBRE LA INMIGRACIÓN

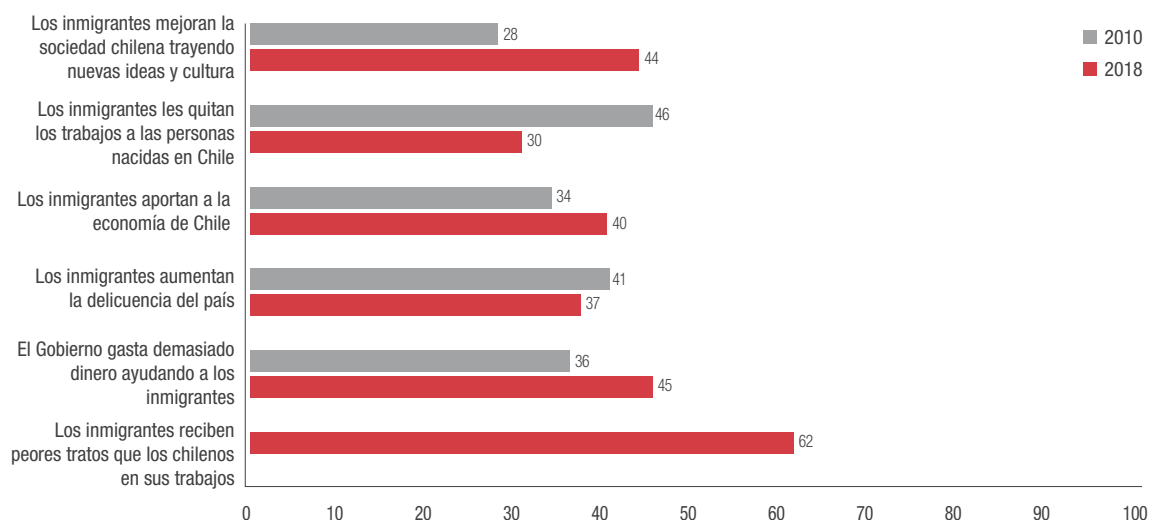
El tercer cambio cultural constituye una reacción a un fenómeno que ha ido transformando la fisonomía de la sociedad chilena en los últimos diez años. No cabe duda de que la reciente inmigración internacional ha impactado la vida cotidiana, más o menos intensamente dependiendo del barrio, ciudad y territorio, en un país que nunca recibió población extranjera de forma masiva. De hecho, si bien floreció un campo de estudios sobre la migración a partir de la llegada de población boliviana y peruana en los años noventa del siglo XX (Stefoni y Stang, 2017), a principios de los 2000 la población migrante aún era baja en perspectiva internacional (1,3% del total de la población, según el Censo 2002). Lo ocurrido durante los últimos diez años, especialmente con la llegada de migrantes de Colombia, Venezuela y Haití, ha modificado esta tendencia. Según el último censo, la migración internacional actual asciende a un 4,4% (INE, 2018). Y aunque esta cifra es todavía baja en comparación con la de los países de la OCDE (con porcentajes del 16% en Alemania o 28% en Australia), es bastante alta en relación con los indicadores disponibles para Latinoamérica (Cepal, 2019). A este panorama hay que añadir que el 66,7% de los inmigrantes que actualmente habitan en Chile llegó durante el período 2010-2017 (INE, 2018), en algunas regiones del norte el porcentaje de migrantes supera el 10% de la población, y en comunas de la Región Metropolitana como Independencia y Santiago Centro la cifra gira en torno al 30%.

Esta última ola migratoria ha suscitado un álgido debate respecto de la pertinencia de la actual legislación en estas materias, de los cambios propuestos para mejorarla y de los temores de algunos grupos de la población frente al fenómeno. Diversas instituciones y estudios han ma-

nifestado también su preocupación por la emergencia del racismo. Según María Emilia Tijoux (2016: 15-16): “En Chile la ‘inmigración’ se construye como idea y se detiene en su uso solo en algunas personas, dejando de expresar su definición más amplia y constriéndose para devenir un *estigma* que etiqueta a ciudadanos de países específicos (Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití) (...) los inmigrantes canalizan las aprensiones provenientes de los problemas que vive gran parte de la sociedad chilena y se convierten en los culpables de ‘algo’ que no han cometido, como sucede por ejemplo con la carencia o la precarización del empleo...”. Este racismo se alimenta también del encuentro con migrantes afrodescendientes, quienes han sufrido tradicionalmente mayor estigmatización y discriminación en el continente americano.

A través de la serie ENAD se pudo realizar un seguimiento de las actitudes de la población chilena hacia la inmigración justo en el período de mayor cambio en la cantidad y composición de la población migrante. Como muestra el Gráfico 3.8, entre 2010 y 2018 cambian todas las actitudes hacia la migración y se registra un aumento de las valoraciones tanto positivas como negativas. Ejemplo de las primeras es el paso de 28% a 44% de personas que consideran que la migración es un aporte al país (ver también González, Muñoz y Mackenna, 2019), y ejemplo de las segundas, el alza de 36% a 45% de personas que están de acuerdo con que el Gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes. Más allá de esta ambivalencia, el aspecto que más concita acuerdo en la población es que los migrantes son víctimas de malos tratos en el trabajo. Si bien no es posible comparar esta percepción con datos del 2008, en grupos de discusión realizados por

GRÁFICO 3.8 Porcentaje de personas de acuerdo con distintas opiniones acerca de la inmigración internacional en Chile, 2010 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

el PNUD durante 2016 la imagen del migrante como víctima de malos tratos convive con percepciones que asocian la migración a riesgos epidemiológicos (portarían enfermedades ya erradicadas entre la población chilena) y otras que destacan su trato más cálido en comparación con los chilenos. Así, en la discusión es posible encontrar desde empatía y compasión por las personas migrantes hasta el racismo más flagrante.

Para examinar detalladamente estas posturas se construyó un índice con aquellas preguntas que pueden ser comparadas en el tiempo. Dado que la orientación de la formulación de estas preguntas no es igual, se recodificaron aquellas que incluían juicios negativos de los inmigrantes para que tuvieran el mismo sentido con aquellas

que resaltaban aspectos positivos. A continuación, se calculó el promedio de respuesta por encuestado en las 5 preguntas, con un rango de 1 a 5.⁷ Finalmente, para mayor claridad de la exposición, se dividió este índice en tres tramos: valoración positiva (1-2), intermedia (3) y negativa (4-5). El resultado se presenta en la Tabla 3.2.

Se ve que las valoraciones positivas de la migración han aumentado entre 2010 y 2018, aunque un cuarto de la población tiene valoraciones negativas tanto al inicio del período como en la última medición. El cambio se explica entonces por la reducción de las posiciones intermedias, que de todos modos siguen siendo mayoritarias en el país (40%). En cualquier caso, se mantienen diferencias importantes que merecen mayor atención.

TABLA 3.2 Valoración de la inmigración internacional agrupada (%)

	2010	2018	Dif.
Positiva	25	35	10
Intermedia	48	40	-8
Negativa	27	25	-2

Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

⁷ Dado que no todas las personas encuestadas responden a las 5 frases, se calculó el promedio individual de cada una en relación con el total de preguntas efectivamente contestadas, excluyendo los “no sabe” y “no responde”.

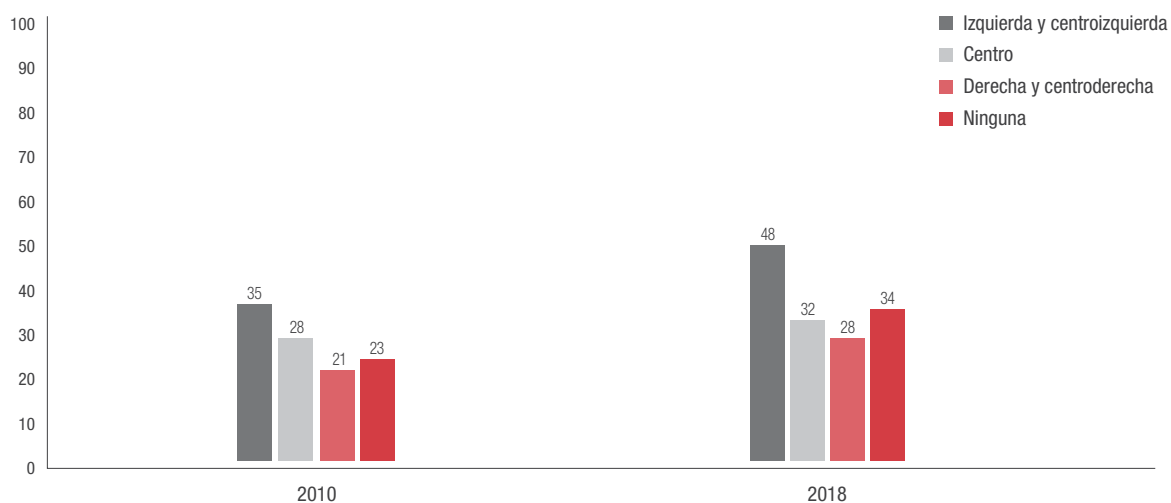
Las diferencias intergrupales replican en cierta manera lo reportado sobre la justificación del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Por un lado, quienes no declaran adhesión religiosa han aumentado en forma más notoria sus valoraciones positivas de la migración en comparación con aquellos que profesan una religión, pasando de un 30% a un 45% de valoración positiva, en contraste con los grupos evangélicos, que aumentan solo de un 23% a un 28%. En el caso de las orientaciones políticas, quienes adhieren a la izquierda y centroizquierda presentan también un fuerte aumento en su valoración positiva. Como se observa en el Gráfico 3.9, este grupo pasa de un 35% a un 48% de valoración positiva.

En 2010 la variable generacional no arrojaba diferencias significativas, lo que sí sucede en el presente. Las generaciones más jóvenes, especialmente las nacidas en democracia, presentan mayor valoración positiva. En términos de los niveles educacionales, tanto en 2010 como en 2018, a mayor grado de escolaridad la valoración tiende a ser más positiva. Si bien aumentó en casi todos los grupos (la excepción son las personas con educación media incompleta), en 2018 la distancia entre los niveles educacionales altos y bajos se incrementa significativamente (Gráfico 3.10). La valoración positiva de los primeros pasa de 35% a 56%. La baja valoración

en los grupos con menor nivel educacional puede gatillar un clima poco propicio para el debate democrático. Si actores políticos o de la sociedad civil incentivan la xenofobia a partir de los temores que tienen estos grupos, como la pérdida del empleo, es probable que el rechazo a la inmigración entre ellos se mantenga o incluso se incremente. El estudio reciente de González, Muñoz y Mackenna (2019) mostró que el nativismo –el discurso que postula la necesidad de proteger a los nacionales de supuestas amenazas derivadas de la inmigración– aumenta entre aquellas personas que evalúan negativamente la situación económica del país.

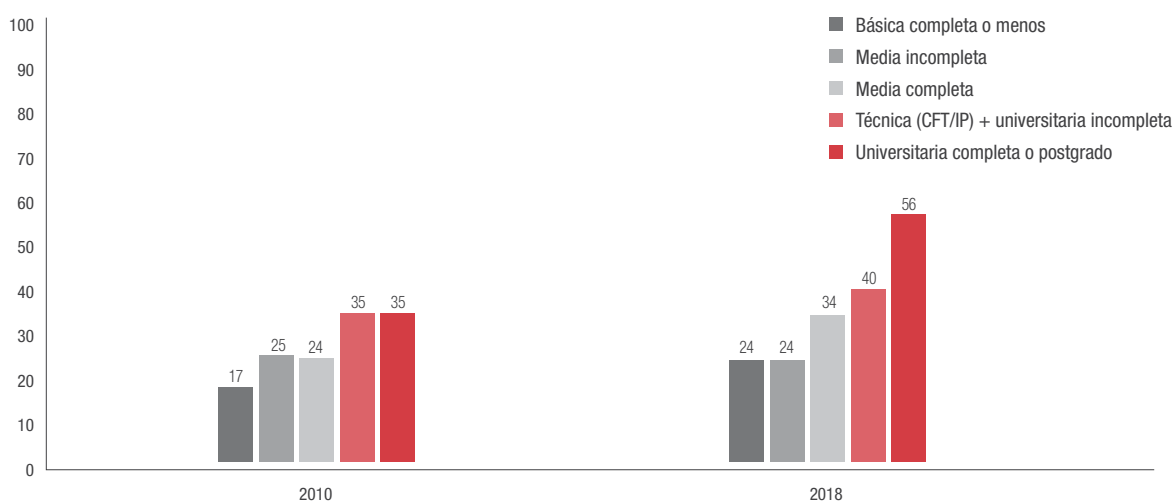
Por último, una característica del tema migratorio en Chile es la disminución de las valoraciones positivas en la zona norte y su aumento en la zona sur (Gráfico 3.11). En la zona norte los flujos migratorios siempre han sido una característica del territorio, como también la alta conflictividad desde la Guerra del Pacífico, y las secuelas de la división entre Tacna y Arica en la década de 1920 (Tapia, 2012). La conflictividad resurgió tras la llegada de población peruana y boliviana durante la década de 1990. No obstante, según estudios recientes, el incremento de los actuales juicios negativos puede tener relación con que una parte de la población local asocia los nuevos flujos a los problemas de narcotráfico y comercio sexual (Pavez, 2016). El 60%

GRÁFICO 3.9 Alta valoración de la inmigración internacional según orientación política (%), 2010 y 2018



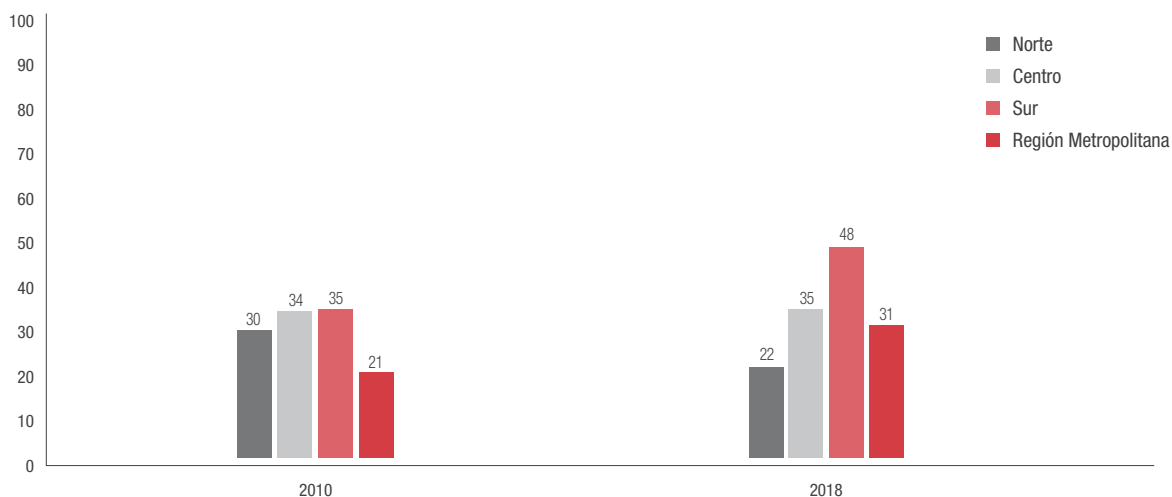
Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 3.10 Alta valoración de la inmigración internacional según nivel educacional, 2010 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 3.11 Alta valoración de la inmigración internacional según macrozona⁸, 2010 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

de los residentes en la zona norte manifiesta acuerdo con la afirmación de que los inmigrantes aumentan la delincuencia en el país, versus el 25% en las zonas centro y sur.

La literatura sobre discursos referidos a la inmigración internacional ha revelado el importante papel de los medios de comunicación en la difusión de la discrimi-

nación y el racismo (por ejemplo Musolff, 2011, 2015). Para el caso chileno no existe evidencia categórica sobre este efecto, pero no hay que desestimar el peso creciente de la digitalización y los medios de comunicación en los cambios culturales (ver recuadro). Y si bien en todos los temas analizados los datos de la ENAD indican un desplazamiento hacia un mayor respeto por las libertades

⁸ En el Anexo 1 se describen las regiones que corresponden a cada macrozona.

individuales, también se observa un incremento de la distancia entre las posturas de grupos religiosos, políticos, educativos y etarios. Es difícil prever si esta tendencia impactará en la discusión sobre políticas públicas. Sin

embargo, como muestran las disputas sobre el fenómeno migratorio en Europa y Estados Unidos, la polarización en temas políticos se ha ido incrementando a lo largo del tiempo y ha dificultado la deliberación democrática.

DEMOCRACIA Y REDES DIGITALES

De acuerdo con la ENAD, al año 2008 un 33% de las personas encuestadas usaba Internet para informarse. Diez años después esta cifra supera el 70%. Es un cambio radical en la forma en que se accede a la información en Chile. Al respecto, la literatura reconoce al menos tres consecuencias relevantes de la masificación del uso de Internet con fines informativos para la democracia.

1) *El uso de redes favorece la pluralización de la información disponible.* A través de las redes digitales es posible acceder a contenidos e interpretaciones diversas acerca del acontecer nacional e internacional, lo que se opone a la alta concentración que caracteriza a los medios de comunicación tradicionales en Chile, especialmente en la prensa escrita (Gronemeyer y Porath, 2017). Por supuesto, este efecto no impacta a todas las personas por igual. El uso de Internet está claramente segmentado por nivel educacional: a mayor educación, mayor utilización. Sin embargo, de forma creciente los contenidos e información que difunden redes como Twitter inciden en las agendas de los medios tradicionales (prensa escrita, radio y televisión abierta), lo que incrementa su potencial de influencia masiva.

2) *Internet facilita la acción colectiva.* Existen múltiples ejemplos, internacionales (como la Primavera Árabe) y nacionales (la masiva marcha feminista el 8 de marzo de

2019), de acciones colectivas que han sido convocadas y organizadas a través de redes digitales. Y si bien gran parte de ellas corresponde a prácticas democráticas, en el último tiempo también se han usado para organizar actividades violentas y antidemocráticas (V-DEM, 2019).

3) *El uso de Internet como medio de información puede favorecer la polarización de los usuarios.* Diversos autores han destacado el potencial de redes sociales como Twitter o Facebook para fragmentar ideológicamente a la opinión pública (Vaidhyanathan, 2018). Y atribuyen en parte este efecto a los motores de búsqueda y especialmente a los algoritmos de búsqueda que usan, los que tienden a crear redes altamente homogéneas entre quienes comparten creencias y opiniones (Gruzd y Roid, 2014), lo que favorecería evaluaciones estereotipadas sobre quienes manifiestan opiniones contrarias (Settle, 2018), así como una mayor receptividad a noticias falsas que confirman los atributos positivos del propio grupo o los rasgos negativos del grupo opuesto (V-DEM, 2019).

Por todo lo anterior, el impacto de la masificación del uso de Internet en la calidad de los regímenes políticos es incierto, pues el diagnóstico esperanzador de la e-democracia que se sostenía a principios del siglo XXI ha dado paso a uno ambivalente que destaca los riesgos para la democracia en la era digital (van Dijck, 2013).

IDEALES DE CIUDADANÍA Y ADHESIÓN A CAUSAS COLECTIVAS

En la sección anterior se describió un conjunto de cambios culturales experimentados por la sociedad chilena durante la última década, que apuntan a una mayor igualdad de género y a un incremento de la tolerancia y el respeto por las libertades individuales. En esta, se examinan los cambios en los ideales de ciudadanía –o normas cívicas– y en la adhesión a causas colectivas. Con ello el capítulo se abre al análisis de un elemento central para toda cultura democrática: la percepción que tiene la ciudadanía sobre su propio rol en la escena pública. Aunque no los agotan, tanto los ideales de ciudadanía como la adhesión a causas contribuyen a comprender los ámbitos de incidencia que las personas consideran valiosos y posibles, los deberes que definen el ejercicio ciudadano y las reivindicaciones sociales a las que adhieren. El análisis de estos aspectos arroja dos tendencias en la sociedad chilena durante la última década: la relevancia del cuidado ambiental y la consolidación de ideales de ciudadanía que pueden ser puestos en práctica individualmente, al margen de la asociatividad y de las instituciones políticas.

La sección se divide en dos partes. En la primera se analizan los ideales de ciudadanía y su evolución durante el período de referencia (2010-2018). En la segunda se describen las causas colectivas que al año 2018 despiertan mayor simpatía e identificación en Chile. En ambos casos se revisa la variación en términos sociodemográficos, territoriales y políticos.

Ideales de ciudadanía

En tanto principio de organización social, el pilar de una democracia es siempre la ciudadanía. Pero es una

categoría dinámica que cambia en el tiempo (Cuevas y Gamboa, 2013; Mitchell, 2016). En América Latina, tras las transiciones democráticas de la década de 1980 el debate se concentró en los mecanismos de consolidación de los regímenes emergentes, en la necesidad de ampliar los derechos ciudadanos –cívicos, políticos, sociales y culturales– y en la relevancia de la participación ciudadana para el fortalecimiento de las democracias actuales (PNUD, 2004, 2007, 2014). En este contexto, se recalcó la necesidad de comprender las imágenes y representaciones culturales de las personas en torno al ejercicio ciudadano (Lechner, 2007). Siguiendo esa línea, aquí se analizan los “ideales de buena ciudadanía” entendiéndolos como el conjunto de expectativas compartidas acerca del rol de los ciudadanos en la vida pública (Dalton, 2008).

La literatura sobre los ideales de ciudadanía o normas cívicas y sus tendencias en el tiempo se puede agrupar analíticamente en dos grandes perspectivas. La primera postula la erosión sostenida de los ideales ciudadanos tradicionales, basados en obligaciones y responsabilidades formales –como votar en las elecciones, obedecer leyes o pagar impuestos–, y, en consecuencia, el creciente desinvolucramiento cívico y la crisis de ciudadanía que afecta a las democracias contemporáneas (Macedo, 2005; Putnam, 2000).

La segunda perspectiva acepta el declive de los ideales tradicionales, pero cuestiona el diagnóstico de la pérdida de las virtudes cívicas y postula en cambio su diversificación, el consiguiente surgimiento de nuevos parámetros normativos para el ejercicio de la ciudadanía, basados en el involucramiento (Dalton, 2008), la solidaridad y

la deliberación (Denters, Gabriel y Torcal, 2006), y los efectos potencialmente emancipadores de este pluralismo (Inglehart y Welzel, 2005).

¿Qué caracteriza hoy a la buena ciudadanía?

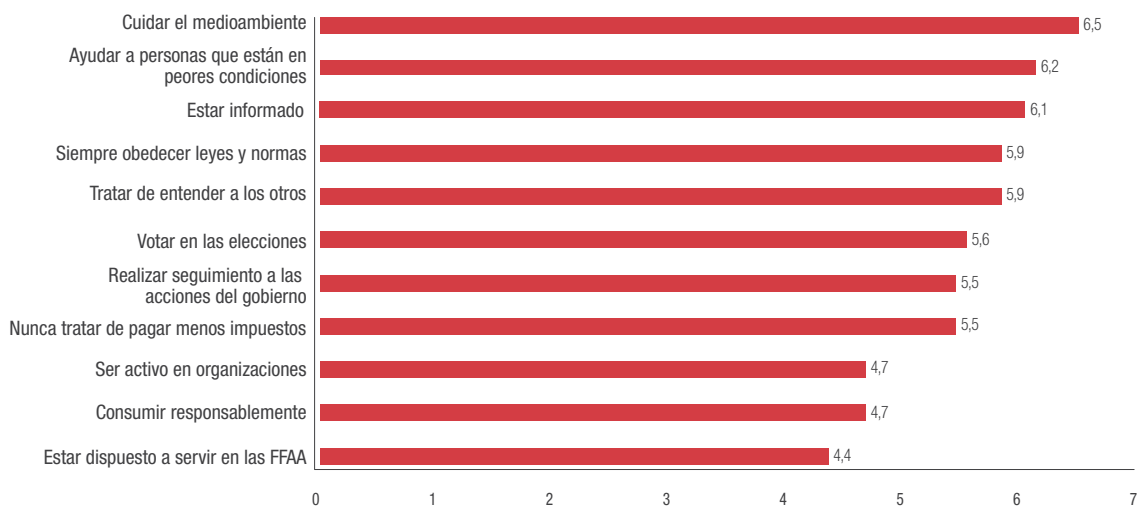
Desde el año 2010 el PNUD ha monitoreado distintos ideales de ciudadanía en las Encuestas Auditoría a la Democracia, desde atributos tradicionalmente asociados al ejercicio ciudadano hasta otros cuya relevancia es más reciente. A la luz de los datos de 2018 es posible destacar dos resultados generales. Por un lado, los ideales se evalúan y jerarquizan de distinta manera: algunos gozan de una alta valoración, otros concitan bajo apoyo (Gráfico 3.12). En segundo lugar, y a diferencia de los cambios culturales descritos en la sección anterior, en esta década los ideales de ciudadanía permanecen relativamente estables, salvo “siempre obedecer las leyes” y “estar dispuesto a servir en las Fuerzas Armadas”, cuya importancia disminuye estadísticamente (Gráfico 3.13).

Los ideales que mayor preferencia concitan son “cuidar el medioambiente”, “ayudar a personas en Chile que

están en peores condiciones que Ud.” y “estar informado sobre lo que pasa en el país”. Estas valoraciones no han variado en los últimos diez años. Además, los tres ideales poseen la menor desviación estándar, lo que indica una escasa heterogeneidad en las respuestas y da cuenta del apoyo transversal que reciben. De hecho, no se aprecian diferencias intergrupales relevantes, salvo en el ideal “estar informado”, que aumenta en aquellas personas con formación universitaria completa.

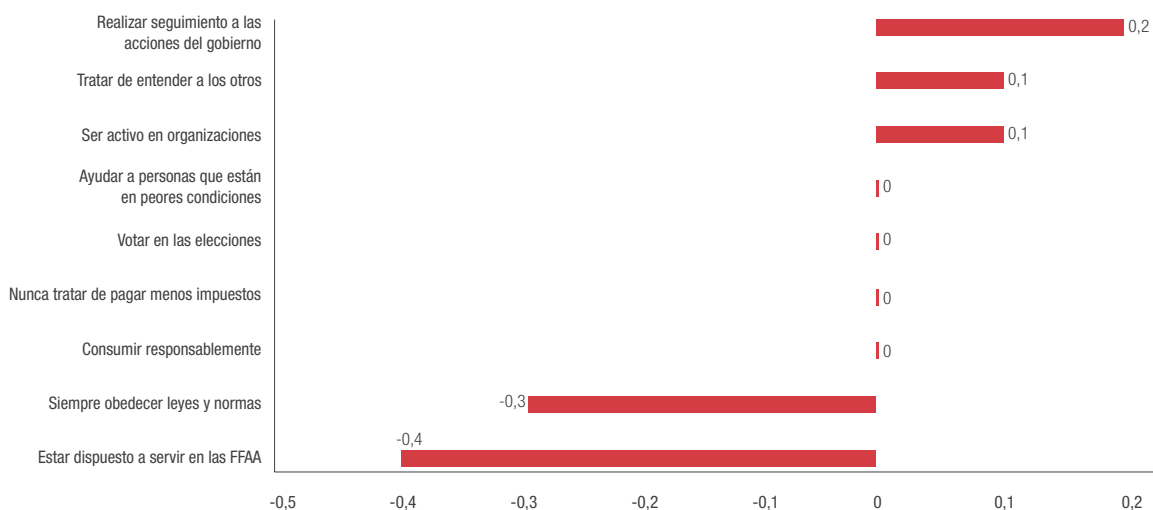
En la literatura, el incremento de este tipo de ideales cívicos se ha asociado a diversas dimensiones del cambio cultural que experimentan las democracias estables occidentales. El cuidado del medioambiente se ha vinculado a la creciente relevancia que otorgan las personas a la calidad de vida, a la conciencia cada vez más extendida de los riesgos ecológicos de carácter global (Inglehart y Welzel, 2005) y a la ampliación de la escala del ejercicio ciudadano (Jelin, 2000). Por su parte, ayudar a otros, un ideal que expresa la dimensión social de la ciudadanía y que enfatiza la responsabilidad moral frente a situaciones de inequidad, se ha asociado a la expansión de los derechos civiles y políticos en las democracias occidentales, y a la creciente preocupación por el bienestar de otros (Dalton y Welzel, 2014). Finalmente, mantenerse informado,

GRÁFICO 3.12 Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que hace un buen ciudadano. De acuerdo a la siguiente escala de 1 a 7, donde 1 significa que no es importante y 7 significa que es muy importante, ¿cuán importante es para usted?, promedio 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 3.13 Cambio en los ideales de ciudadanía, 2008-2018⁹



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

un ideal que tempranamente se asoció al nacimiento de la esfera pública moderna (Habermas, 1981), expresa el aspecto crítico, autónomo y deliberativo del ejercicio ciudadano que caracteriza a las democracias contemporáneas (Dalton, 2006, 2008; Denters, Gabriel y Torcal, 2006).

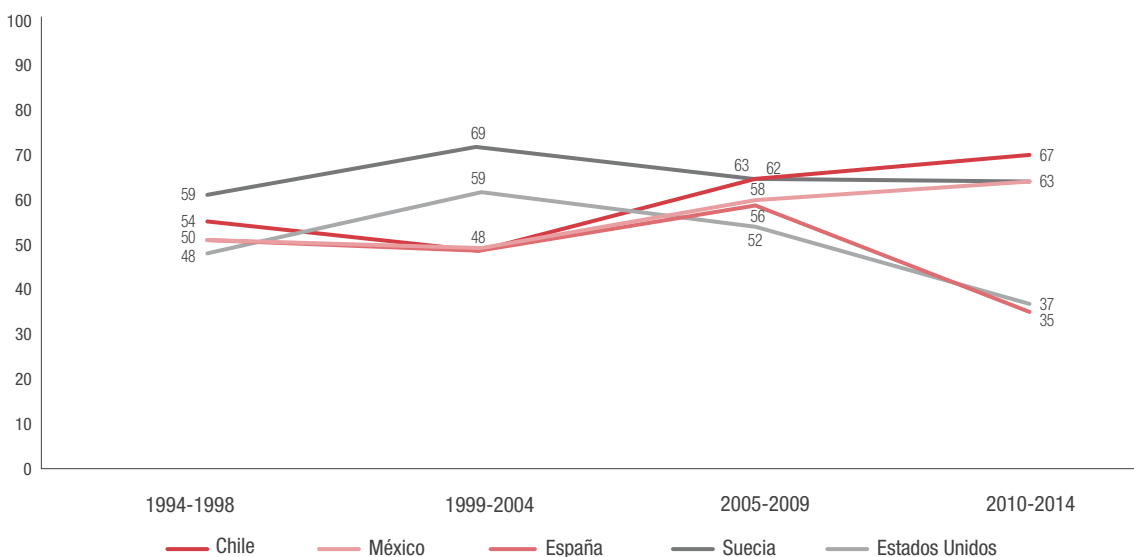
Sería necesario contar con mayor información para comprender cabalmente los significados que adoptan estos ideales en la sociedad chilena. Por ejemplo, algunas investigaciones sobre desigualdad social muestran que en Chile la solidaridad se entiende en términos de ayuda a las personas cercanas —especialmente familiares o amigos—, o bien como una solidaridad reactiva en casos de catástrofe natural o tragedias nacionales. Pero es muy baja su presencia en la discusión sobre inequidades o problemas asociados a la redistribución (Guzmán, Barozet y Méndez, 2017). En cuanto a la protección del medioambiente, los datos de la Encuesta Mundial de Valores (Gráfico 3.14) evidencian que en los últimos años la importancia que le otorga la población chilena a este tema experimentó un incremento sustantivo, especialmente tras la crisis asiática: un 67% se declaró a favor de priorizar el cuidado del medioambiente por sobre el crecimiento económico,

superando a países como Suecia, mientras que países como España y Estados Unidos registraron un declive tras la crisis *subprime*. Estudios nacionales han mostrado que esa importancia se traduce especialmente en la preocupación por el manejo de la basura y la contaminación del aire (Ministerio del Medio Ambiente, 2018).

A pesar de la diversidad aparente entre los tres ideales cívicos con más alto promedio (“cuidar el medioambiente”, “ayudar a personas en Chile que están en peores condiciones que Ud.” y “estar informado sobre lo que pasa en el país”), lo cierto es que comparten varios atributos. El primero es la distancia entre el carácter voluntario de estos ideales y las normas cívicas tradicionales basadas en deberes, como pagar impuestos. Segundo, ninguno exige para su cumplimiento canales institucionales de carácter político. Es posible contribuir a la causa ambiental con acciones circunscritas al espacio privado, por ejemplo, con el reciclaje cotidiano de residuos o el uso de la bicicleta como principal medio de transporte. Aunque eso no significa que prescindan por completo de soportes institucionales. Por ejemplo, para reciclar adecuadamente se requiere de un sistema de recolección diferenciado, mientras que

⁹ Ni “cuidar el medioambiente” ni “estar informado” se preguntaron el 2008, sino a partir del 2012 el primero y 2016 el segundo. Ninguno sufre cambios estadísticamente significativos.

GRÁFICO 3.14 Se debería dar prioridad a la protección del medioambiente aun si eso causa un menor crecimiento económico y la pérdida de algunos empleos (%), 1994-2014



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de datos de la Encuesta Mundial de Valores, años respectivos.

para estar informado se necesita contar con medios de comunicación plurales. Por último, estos tres ideales pueden desplegarse de manera individual, por lo que la asociatividad o la acción colectiva tampoco constituyen condiciones indispensables para su cumplimiento.

Al contrario de los ideales descritos, “ser activo en organizaciones”, “consumir responsablemente” y “estar dispuesto a servir en las FF.AA.” concitan el menor apoyo: obtienen, en la escala de 1 a 7, promedios inferiores a 5. Este es un punto clave a la luz de la comparación internacional: mientras la literatura estadounidense sobre ideales de ciudadanía postula un desplazamiento desde ideales tradicionales a otros participativos, dentro de los cuales ser activo en organizaciones sociales y políticas desempeña un rol central (Dalton, 2017), en Chile los ideales asociativos se mantienen bajos. Como se muestra en el Capítulo 4 sobre prácticas de identificación y participación, si bien los repertorios de acción se diversifican, la politización chilena continúa alejada de las organizaciones.

Ahora bien, medidos por la desviación estándar, estos ideales presentan una mayor dispersión, lo que significa que hay una mayor diferenciación de las personas encuestadas según variables etarias, políticas, territoriales o socioeco-

nómicas. Así, por ejemplo, “estar dispuesto a servir en las FF.AA.” aumenta en los hombres y en quienes se definen de derecha y centroderecha, y disminuye entre las personas más jóvenes y en la población rural.

En cuanto a la evolución de estos ideales, “estar dispuesto a servir en las FF.AA.” experimenta desde el año 2016 una disminución, lo que probablemente se vincula a los escándalos de corrupción que han protagonizado los altos mandos, a la amplia cobertura mediática que han recibido estos hechos y al impacto consecuente en la confianza pública en dicha institución (ver Capítulo 2). Cabe recordar también que, si bien el servicio militar en Chile continúa siendo obligatorio, desde 2005 se privilegia la voluntariedad para el reclutamiento, lo que probablemente haya incidido en la menor relevancia otorgada a este tema. La literatura internacional sugiere que el declive de este ideal, que se observa en las democracias contemporáneas, se vincula con la erosión del respeto a la autoridad que caracteriza a los ideales cívicos basados en deberes formales (Dalton, 2008).

Los datos analizados revelan además que el descenso que experimenta esta norma cívica en parte se explica por la menor adhesión de personas con nivel educacional

medio incompleto o completo. En el año 2010 este grupo superaba al resto. Ocho años después, el apoyo de este segmento se acerca al promedio. Por el contrario, en los sectores más bajos (con educación básica incompleta o completa) la preferencia aumenta, lo que reitera una constante histórica en Chile, donde esos grupos ven en las Fuerzas Armadas una posibilidad de ascenso social y una vía de escape ante las amenazas del entorno.

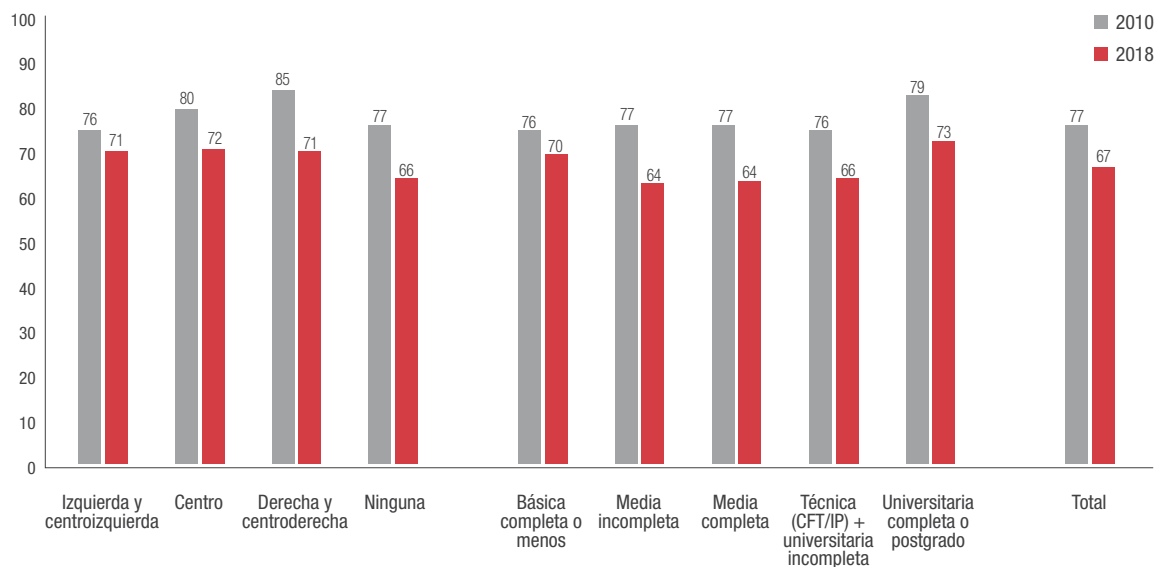
Por último, los ideales “siempre obedecer leyes y normas”, “nunca tratar de pagar menos impuestos”, “votar en elecciones”, “tratar de entender a los otros” y “realizar seguimiento a las acciones del gobierno” concitan un apoyo intermedio (obtienen notas mayores o igual a 5 pero menores a 6 en la escala de 1 a 7). Los tres primeros resultan consistentes con la imagen tradicional de ideales de ciudadanía basada en deberes y obligaciones formales, y de hecho son los únicos que se asocian entre sí en los análisis factoriales: exhiben una cierta coherencia interna,

aunque no necesariamente se dan las mismas diferencias intergrupales.¹⁰

Cabe destacar que el ideal “siempre obedecer leyes y normas” ha disminuido de manera sostenida a lo largo del período. En 2010, un 77% de la población le otorgaba alta importancia (nota entre 6 y 7). Ocho años después, la preferencia alcanza un 67%. Se observa que la disminución es mayor en los grupos de orientación política de derecha y centroderecha (de un 85% a un 71%), en aquellos que no presentan una orientación política en el eje izquierda-derecha (que pasan de un 77% a un 66%) y especialmente en los grupos con educación media completa e incompleta, donde desciende desde un 77% a un 64% (Gráfico 3.15). Es similar a lo ocurrido con el ideal de servir en las Fuerzas Armadas.

Es interesante notar, además, que tras una década en que se sucedieron diversos escándalos de corrupción y colusión

GRÁFICO 3.15 ¿Cuán importante es para usted obedecer siempre las leyes? Porcentaje de personas que responden 6 y 7 (en escala 1 a 7) según nivel educacional y orientación política, 2010 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

¹⁰ En los distintos modelos de regresión logística realizados, “votar en elecciones” se asocia positivamente con las generaciones de mayor edad, el nivel universitario completo y una identificación política en el eje izquierda-derecha. El ideal “nunca tratar de pagar menos impuestos” se asocia positivamente con las zonas centro y norte del país (vs. Región Metropolitana) y negativamente con los que no se alinean en el eje izquierda-derecha (vs. orientaciones de derecha y centroderecha). “Siempre obedecer leyes y normas” presenta una relación positiva con las personas que residen en zonas rurales. Como se observa, no hay un patrón común en las significaciones intergrupales.

de las elites políticas y económicas, las clases medias bajas evalúan como menos importante el respeto hacia las leyes y normas. Este cambio de valoración es relevante y puede vincularse con múltiples aspectos de la realidad nacional, entre otros la consideración de que las leyes y normas son ineficaces o injustas, y el debilitamiento del principio de autoridad en los entornos laboral y familiar (Araujo, 2016).

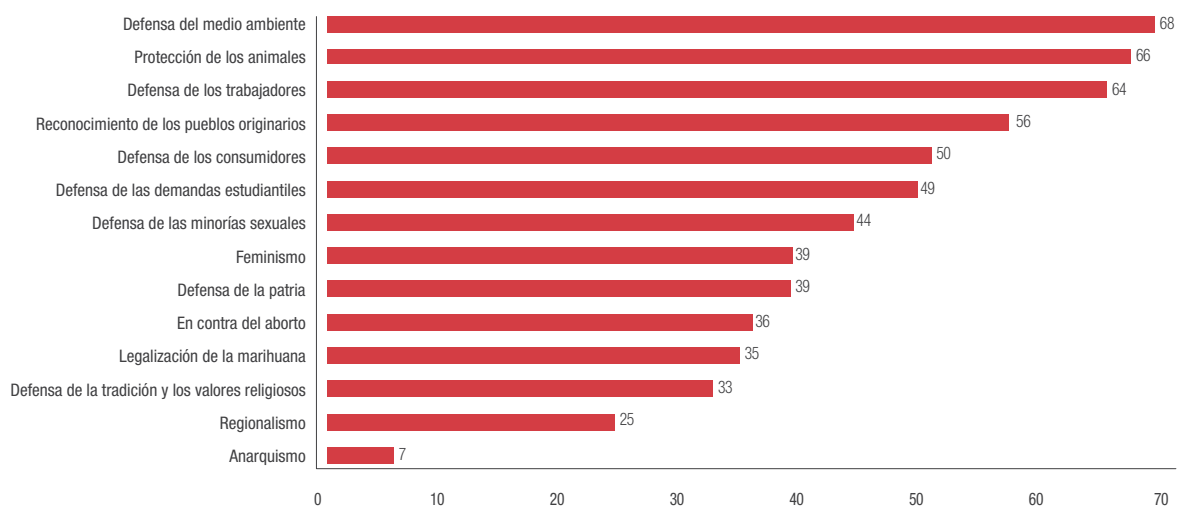
Por su parte, el ideal “votar en elecciones” evidencia una trayectoria en forma de U, pues disminuye entre 2012 y 2016 y aumenta en 2018. En grupos de discusión realizados por el PNUD el año 2017 se evidenció que, normativamente, el voto aún se consideraba una herramienta necesaria y legítima para gatillar cambios sociales. No obstante, la desconfianza en los partidos y en la clase política tendía a aminorar su valor y eficacia real. En síntesis, aunque la confianza en las instituciones políticas y sus actores ha descendido, como se observó en el Capítulo 2, el voto como ideal democrático no ha tenido un descenso en el período. De hecho, en 2018 un 64% estaba de acuerdo con la frase “la forma como uno vota puede influir en lo que pase en el país”.

Adhesión a causas colectivas

Junto a los ideales ciudadanos, el apoyo a causas colectivas constituye otro elemento para comprender cómo ciertos valores y reivindicaciones se han ido instalando en la ciudadanía. El análisis de las causas que mayor adhesión concitan en la población permite observar los temas que subyacen a los actuales repertorios de participación en la vida pública, así como los problemas que más interesan a la ciudadanía, y que pueden traducirse en demandas y conflictos sociales. Si además estas causas colectivas concitan mayor adhesión y cobertura mediática, tienen la capacidad de intensificar la distancia entre personas que mantienen posiciones disímiles, o de acelerar cambios culturales en segmentos sociales ambivalentes.

En este apartado no se analizan prácticas concretas ni involucramientos políticos efectivos (ver Capítulo 4 para eso), sino los grados de simpatía e identificación que declara la población chilena hacia reivindicaciones de índole diversa. La Encuesta de Auditoría para la Democracia realizada durante 2018 registra que existe un conjunto de demandas con elevado apoyo de la sociedad chilena hoy (Gráfico 3.16):

GRÁFICO 3.16 ¿Usted se identifica o simpatiza con alguna de las siguientes posturas o causas? (porcentaje de personas que responden “sí, me identifico o simpatizo con la causa”), 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

el cuidado del medioambiente (68%), la protección de los animales (66%) y la defensa de los trabajadores (64%) son causas que más del 60% de la ciudadanía apoya. Consistente con los ideales de ciudadanía que mayor preferencia concitan, la preocupación por el medioambiente es la causa que más identificación o simpatía suscita. Por otra parte, el hecho de que la defensa de los trabajadores esté también entre las primeras parece indicar que, al menos como expresión de adhesiones, conviven demandas y conflictos de viejo y de nuevo cuño.

Con menos de 30% de adhesión, las causas colectivas menos populares en 2018 son el anarquismo (7%) y el regionalismo (25%), entre otras. Y el grueso de las causas presenta un nivel medio, entre un 30% y un 60% de adhesión, e incluyen desde la defensa de la tradición y los valores (33%) hasta el reconocimiento de los pueblos originarios (56%).

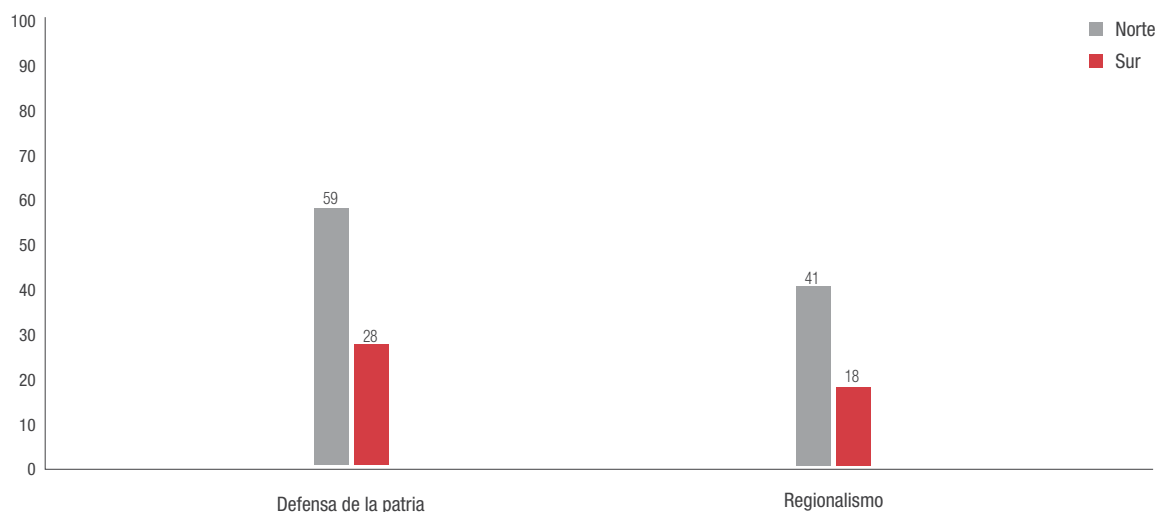
Se observa bastante diferenciación en función de factores territoriales, religiosos, etarios o socioeconómicos. Una primera diferencia es entre las personas que habitan el norte (entre Arica y Coquimbo) y el sur del país (desde Talca hasta Magallanes). Un ejemplo claro son las causas “defensa de la patria” y “regionalismo” (Gráfico 3.17), en las que el norte duplica al sur, mientras que la zona centro y la Región Metropolitana se acercan al promedio nacional.

Las razones de la elevada adhesión a la causa “defensa de la patria” en la zona norte son diversas e incluyen el histórico conflicto bélico entre Chile y las naciones limítrofes, conflicto que se ha renovado por las disputas sobre la territorialidad marítima, y la ola de inmigración reciente que, como se vio, ha generado un incremento de valoraciones negativas en esa zona. En cuanto a la mayor adhesión relativa al regionalismo en el norte, puede vincularse con las disputas por la redistribución de los beneficios económicos derivados de su economía minera, y a la demanda de compensación a sus habitantes dados los costos ambientales que esta actividad se cobra en el territorio.

Las diferencias territoriales son también visibles en otras causas. Por ejemplo, en el norte, la causa que más adhesión alcanza es la defensa de los trabajadores (81%), aspecto que la literatura ha asociado históricamente a las organizaciones nacidas al alero de la producción minera (Pinto, 2007). Pero, más allá de causas puntuales, las personas que habitan en la zona norte presentan una disposición mayor a adherir a causas colectivas.

Un segundo factor de diferenciación es la religión, que, como observamos en la sección de cambios culturales, es un ejemplo para comprender las polarizaciones en torno a temas valóricos. Esta variable es importante en las

GRÁFICO 3.17 Porcentaje de apoyo a las causas “regionalismo” y “defensa de la patria” en el norte y en el sur, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

causas vinculadas a controversias morales y distingue especialmente a aquellas personas que pertenecen a la religión evangélica y a quienes no profesan religión. Controlando el efecto de distintas variables, la mayor diferencia se da en la defensa de las minorías sexuales. El Gráfico 3.18 muestra que quienes no pertenecen a ninguna religión adhieren o simpatizan especialmente con esta causa. Lo mismo sucede con “legalización de la marihuana”. Las personas de religión evangélica manifiestan, en contraste, un mayor apoyo hacia las causas “contra el aborto” y “defensa de valores y tradiciones”. Como se describió en la sección de cambios culturales, el clivaje religioso/secular es relevante para comprender las transformaciones en las actitudes hacia la homosexualidad y el aborto. Dado que estas posiciones se han polarizado a lo largo del tiempo, no es de extrañar que también la adhesión a las causas mencionadas difiera entre ambos grupos.

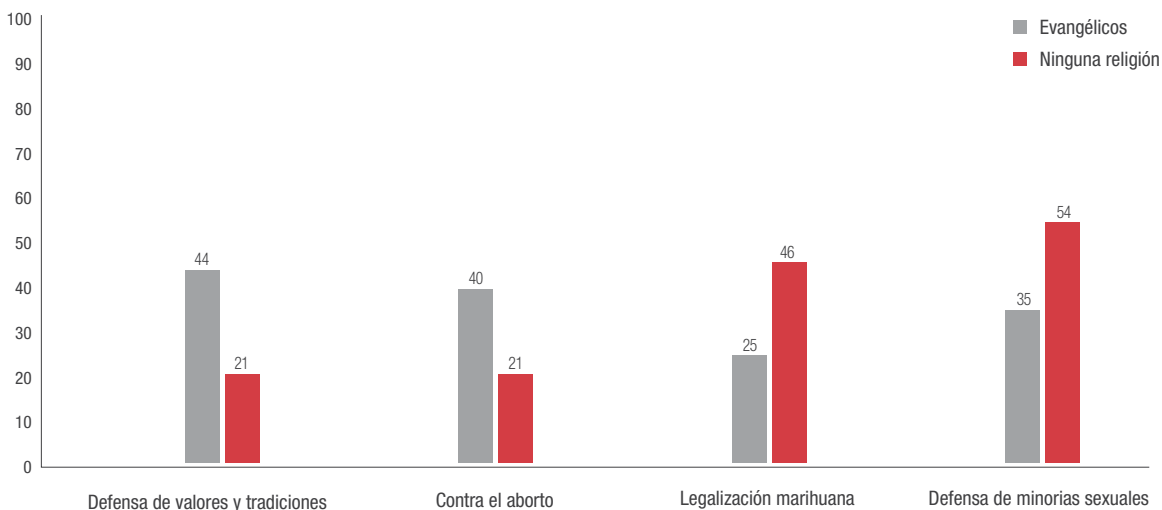
La diferencia entre quienes no profesan religión y las personas de religión católica es también significativa en las mismas causas, pero la intensidad de la diferencia es mucho menor que con el grupo evangélico. Esto replica los resultados descritos en la sección anterior.

Una tercera diferencia se observa entre quienes declaran ser de derecha y centroderecha y de izquierda

y centroizquierda (Gráfico 3.19). Es visible, primero, en la identificación y simpatía hacia “defensa de las demandas estudiantiles” y “feminismo”, con diferencias de apoyo de 26 y 22 puntos porcentuales, respectivamente, ambas a favor de quienes se declaran afines al polo progresista. Estas dos causas han marcado el ciclo político de los movimientos sociales de los últimos diez años, enmarcadas por demandas de igualdad de derechos y fin a la violencia.

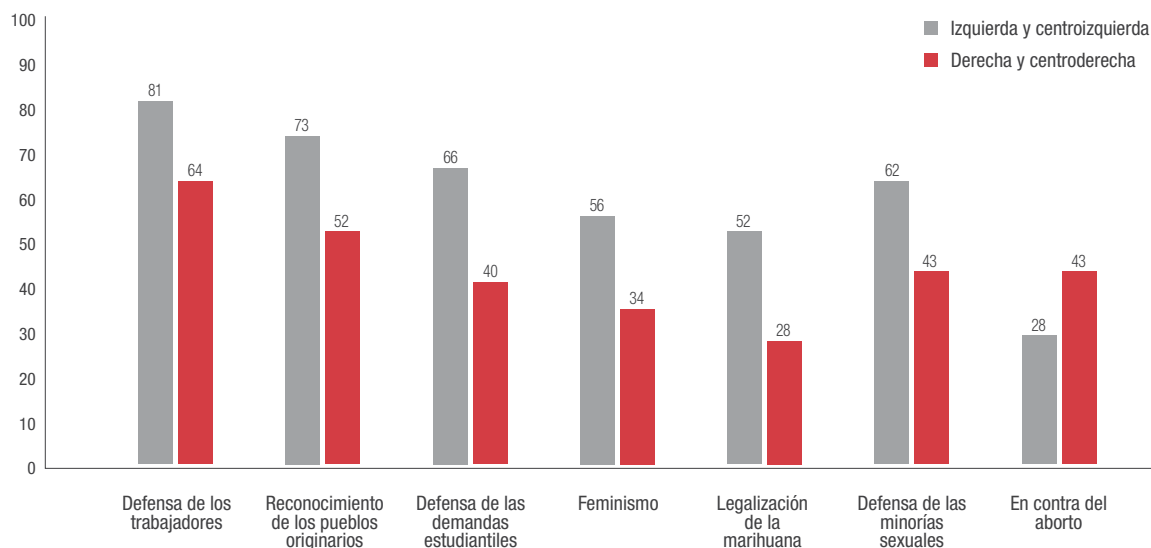
Ahora bien, tanto en estas causas como en “defensa de los trabajadores”, “reconocimiento de los pueblos originarios” y “legalización de la marihuana” se da una alineación entre quienes manifiestan afinidad por el centro y quienes se posicionan en la izquierda y centroizquierda. De hecho, las personas de centro adhieren más a “defensa de los trabajadores” que las de izquierda y centroizquierda. A su vez, la gran mayoría de las personas encuestadas que manifiesta no orientarse en el eje izquierda-derecha declara proporcionalmente una menor adhesión o simpatía a las causas mencionadas, por lo que sus porcentajes se acercan a los de las personas de derecha y centroderecha. En las regresiones no aparecen diferencias estadísticamente significativas entre la orientación de derecha y la gran masa de personas que no se orientan en el eje izquierda-derecha.

GRÁFICO 3.18 Porcentaje de apoyo a temas de controversia moral según evangélicos y grupos que no adhieren a ninguna religión, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

GRÁFICO 3.19 Porcentaje de apoyo a causas según orientación política, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

Una alineación similar se observa al analizar la diferencia según identificación política en las causas asociadas a temas morales. Así, mientras un 62% de las personas de izquierda y centroizquierda adhiere a la causa “defensa de las minorías sexuales”, la adhesión se reduce a un 43% en las personas de derecha y centroderecha, y a un 37% en las personas que no se identifican con ninguna orientación política. A la inversa, en la causa “contra el aborto” la adhesión se reduce a un 28% en las personas de izquierda y centroizquierda, mientras un 43% de las personas que se declara afín a la derecha y centroderecha se identifica o simpatiza con ella. En quienes no se identifican con ninguna orientación la adhesión se mantiene en torno a un 36%. Nuevamente, no se aprecian diferencias significativas en los modelos utilizados (regresiones logísticas) entre quienes se posicionan en la derecha y quienes declaran ninguna orientación política. Tal como se observó en la sección de cambios culturales, en estos temas las personas que adhieren a la izquierda se distancian del resto.

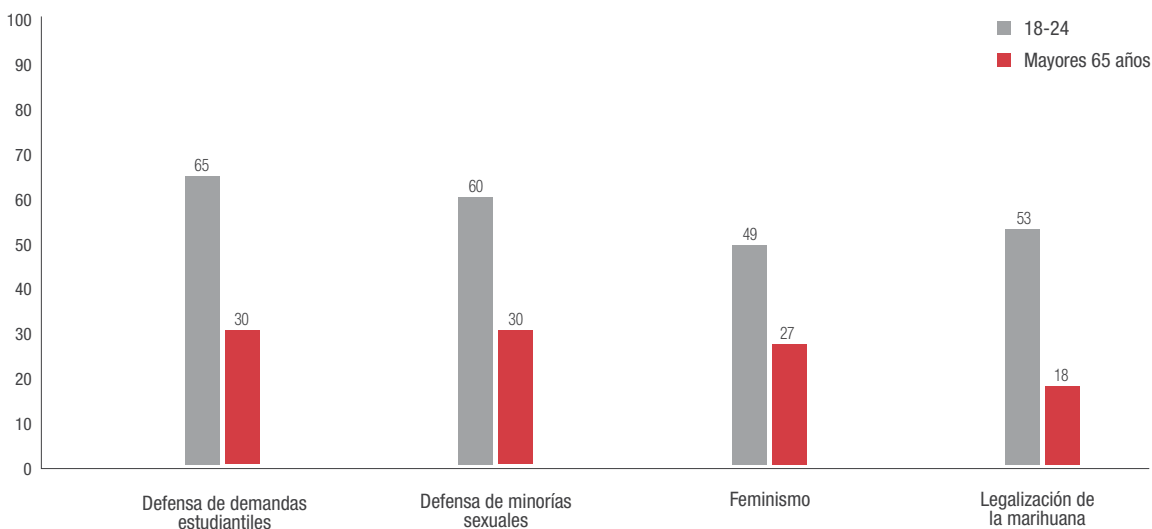
Un cuarto factor de diferenciación es la edad. El Gráfico 3.20 muestra cuatro causas en que la edad distingue a los grupos de manera significativa. Si bien la diferencia etaria en el gráfico muestra los dos extremos de la población encuestada, en términos generales todas las personas nacidas en democracia (es decir, las personas que al

momento de responder la encuesta tenían entre 18 a 30 años) manifiestan una mayor adhesión a estas causas, la que disminuye progresivamente conforme se incrementa la edad. El hecho de que cubra a todos los nacidos en democracia tiene sentido especialmente para la primera causa del gráfico, “defensa de demandas estudiantiles”, ya que esa generación (18-30 años) incluye a quienes han vivido movilizaciones estudiantiles masivas, desde la revolución pingüina hasta la actualidad.

La segunda causa donde se observa el efecto de los grupos etarios como factor de diferenciación es “defensa de las minorías sexuales”. Esto es consistente con el cambio generacional que se ve en la tolerancia hacia la homosexualidad y el aborto. También resulta significativa la diferencia en la adhesión a “legalización de la marihuana”. En el grupo de edad de 65 años o más, es la segunda causa que genera menor simpatía después del anarquismo.

Por último, el apoyo al feminismo es mayor en jóvenes (aunque aquí las diferencias estadísticamente significativas se observan entre personas menores de cuarenta años y el resto). Esto indicaría que la adhesión al feminismo no se explica del todo por el desacuerdo con los roles tradicionales de género, ya que, como se describió en

GRÁFICO 3.20 Porcentaje de adhesión a cuatro causas colectivas según edad, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

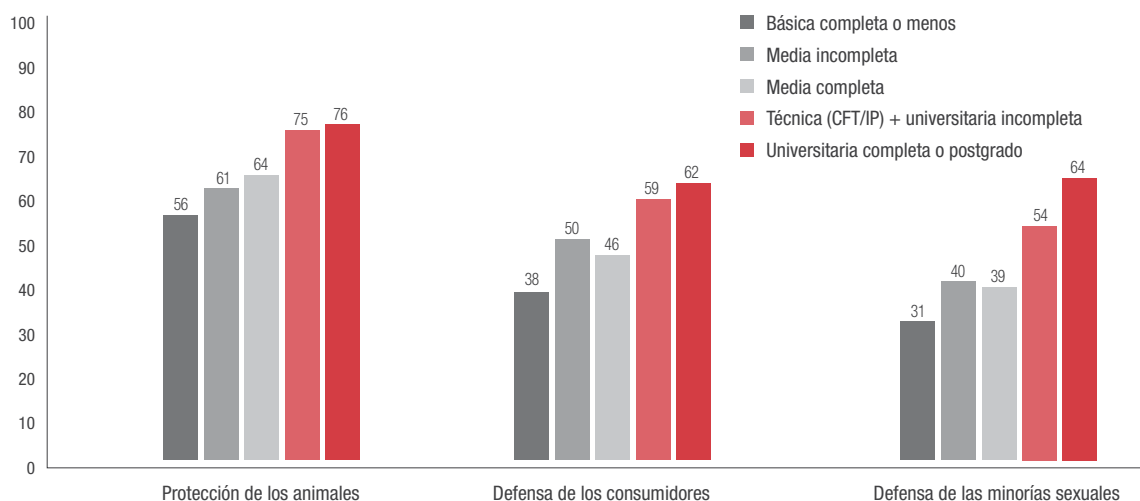
el apartado anterior, este aspecto es transversal a todos los grupos de edad. En este caso, es probable que una pregunta por la defensa de los derechos de las mujeres o de la igualdad de género haya concitado niveles más elevados de apoyo, ya que la palabra *feminismo* posee una connotación negativa para algunos grupos de la sociedad.

El nivel educacional es el último factor de diferenciación estadísticamente significativo. Por un lado, las personas con menor educación tienden a adherir en menor medida a todas las causas colectivas. La adhesión a la causa feminista es particularmente baja entre quienes tienen educación básica o menos, en comparación con todos los otros niveles educacionales (25% vs. 39% promedio general). Lo mismo sucede con “defensa del medio ambiente” (54% vs. 68%) o “legalización de la marihuana” (19% vs. 35%).

En el caso de “reconocimiento de los pueblos originarios”, al contrario, las personas con educación universitaria completa o más se alejan del resto y registran apoyos superiores (69%) versus el promedio general (56%). Entre quienes declaran pertenecer a un pueblo originario la identificación con esta causa aumenta solo a un 65%. En otras causas la brecha adquiere una gradiente más clara, donde a mayor educación mayor adhesión (Gráfico 3.21).

En cualquier circunstancia, y de modo consistente con los ideales de ciudadanía, el cuidado del medioambiente y de los animales son las causas colectivas que despiertan mayor adhesión en todos los grupos revisados, salvo entre quienes se posicionan en el centro político y en las personas que habitan la zona norte del país, donde la primera causa es la defensa de los trabajadores.

GRÁFICO 3.21 Porcentaje de apoyo a cuatro causas colectivas según nivel educacional, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

ADHESIÓN A CAUSAS EN HOMBRES Y MUJERES

La variable sexo también produce diferencias en el tipo de causas que concitan mayor identificación. Las diferencias más relevantes y estadísticamente significativas (controlando el efecto de la religión, la edad, la identificación política y la educación) se observan en el apoyo al feminismo y la oposición al aborto. En el primer caso, 42% de las mujeres declara simpatía o adhesión, mientras que en los hombres el apoyo llega al 36%.

Respecto de la causa “contra el aborto”, las mujeres superan a los hombres (40% vs. 31%). Los hombres adhieren en mayor medida a “regionalismo” (31% vs. 20%), “defensa de la patria” (42% vs. 36%) y “defensa de los trabajadores” (68% vs. 59%). En este último caso, es probable que si se hubiese preguntado por la defensa de las trabajadoras la adhesión de las mujeres habría sido más alta.

CONCLUSIONES

Los datos presentados revelan que la población chilena ha experimentado un acelerado cambio cultural. En un período de diez años la sociedad transitó hacia representaciones más igualitarias sobre los roles de género, aumentó la tolerancia hacia la homosexualidad y el aborto, y también la valoración de la inmigración. Estos cambios han sido transversales, por lo que es posible plantear que el Chile de hoy es más igualitario, más respetuoso de las libertades individuales y más tolerante que lo que era a inicios del período. La masiva movilización de mujeres el 8 de marzo del 2019 es un indicador que estos cambios pueden intensificarse con el paso de los años, pues el consenso en materia cultural facilita que los sistemas democráticos canalicen las demandas provenientes de la sociedad civil a favor de la igualdad, la autonomía y la no discriminación. Y, a su vez, promueve la transformación de las prácticas que atentan contra estos horizontes normativos.

Sin embargo, los análisis de este capítulo también muestran una acentuación, durante los últimos diez años, de la distancia valórica según los niveles educacionales, orientaciones políticas, generaciones, y entre grupos evangélicos y personas no creyentes. Eso es un riesgo para la calidad de la democracia. Por una parte, si esta distancia decanta en posturas radicales, puede impedir la deliberación democrática y legitimar prácticas discriminatorias y estigmatizadoras hacia ciertos grupos. A su vez, si algunos segmentos de la población no se sienten representados por las tendencias de cambio cultural, pueden demandar agendas contrapuestas. El fenómeno ya se ha observado en países de alto desarrollo, en los debates en torno al aborto y la migración, en los que resurgen posturas tradicionalistas y nacionalistas como respuesta a la difusión de posiciones más liberales e igualitaristas.

El análisis de los ideales y causas muestra también potencialidades y riesgos. Por una parte, la relevancia del cuidado del medioambiente como ideal ciudadano y causa colectiva revela la creciente conciencia ciudadana de la crisis ambiental que afecta al planeta y a una parte importante del territorio nacional, así como el interés transversal por construir una sociedad más sostenible. En términos de riesgos, se observa la consolidación de una imagen de democracia donde el ejercicio ciudadano no requiere de un compromiso asociativo ni de soportes institucionales de carácter político. Esto da cuenta de una redefinición de la escala del espacio político (Lechner, 2007). Se evidencia, además, un declive de lo que tradicionalmente constituyó un orgullo de las elites chilenas: el respeto por las normas y leyes o la disposición a servir en las Fuerzas Armadas (Correa et al., 2001). Y si bien los ideales más tradicionales de ciudadanía –como la importancia de votar en las elecciones– no desaparecen del horizonte ciudadano, es evidente que aquellos que concitan mayor aceptación apelan a una ciudadanía cotidiana, no asociativa y políticamente desinstitucionalizada. Esto se confirma en el Capítulo 4 tras el análisis de las prácticas de participación declaradas por las personas.

Lo anterior tiene implicaciones para los procesos democráticos de representación y gobernanza. Como consistentemente ha planteado el PNUD (2004, 2008, 2014), la democracia, para ser plena, requiere de una ciudadanía capaz de implicarse en la toma de decisiones colectivamente vinculantes, a través tanto del voto como de la conformación de una sociedad civil fuerte y activa. Sin ello, la democracia no es capaz de arribar a decisiones legítimas, ni de representar la diversidad de intereses y expectativas ciudadanas.

4.

INVOLUCRAMIENTO POLÍTICO EN CHILE

En la última sección del Capítulo 3 se describen las causas colectivas que mayor adhesión concitan en la sociedad chilena, y la consolidación de algunos ideales ciudadanos a lo largo del decenio 2008-2018. En este capítulo se analizan los cambios en el involucramiento político durante el período. Específicamente se describe la evolución de la participación en acciones políticas, tanto convencionales como no convencionales, y sus principales diferenciaciones sociales. También los niveles de asociatividad de la sociedad chilena y la relación que establece la ciudadanía con la política institucional. Con ello el Informe profundiza el diagnóstico sobre la calidad de la democracia contenido en los capítulos previos.

Examinar estas materias es relevante por varias razones. Como se planteó en el Capítulo 1, la calidad de las democracias no es solo el resultado de factores institucionales, sino que depende en gran medida de la existencia de una sociedad civil fuerte y activa, una ciudadanía que se haga partícipe de las decisiones colectivas. Por ello analizar el involucramiento político es una vía para dimensionar la salud de la democracia en el país.

Por otra parte, como se vio en los Capítulos 1 y 2, la relación de la ciudadanía con la política institucional experimenta en el presente múltiples tensiones. La caída sostenida de la confianza en las instituciones y los actores políticos (Bargsted y Somma, 2018), la sistemática disminución de la participación electoral (PNUD, 2017c) y, en términos más generales, la creciente desafección con las instituciones centrales del sistema político (como partidos políticos, Congreso, Gobierno) constituyen expresiones de lo que varios autores han denominado “crisis de representación política” (Luna, 2016). Una crisis

cuyos orígenes se remontan a los inicios de la transición democrática (Menéndez-Carrión y Joignant, 1999), y que no ha logrado revertirse con la aparición de otros partidos políticos ni con las reformas políticas de los últimos años (nueva ley de partidos políticos y de elecciones, entre otras). A ello se añaden los profundos cambios culturales de la sociedad chilena durante el período de referencia, y el fortalecimiento de ideales ciudadanos cuyo ejercicio no requiere necesariamente un compromiso asociativo ni soportes políticos de carácter institucional (ver Capítulo 3).

Al mismo tiempo, se multiplican las señales que indican un mayor involucramiento político de la ciudadanía, que se expresa en la emergencia de movimientos sociales y acciones colectivas de carácter extrainstitucional (PNUD, 2014). Así, por ejemplo, Somma y Medel (2017) mostraron que entre 2003 y 2012 aumentó sistemáticamente en el país el número de protestas (pasando de 100 eventos anuales a inicios del período a 400 al final), así como la cantidad de personas que participaron en ellas. También el número de huelgas ha experimentado un notable incremento. Lo anterior contrasta con la escasa participación que caracterizó a Chile durante la década de 1990, cuando la desmovilización, la apatía política y el escaso protagonismo de los movimientos sociales eran la tónica (Salazar, 2012; Donoso, 2016). De hecho, los años 2011 y 2018 fueron testigos, a través de las marchas del movimiento estudiantil y la movilización feminista, de las mayores demostraciones públicas de acción colectiva desde la recuperación de la democracia. Demandas en otros ámbitos de la vida social, como el sistema de pensiones (No + AFP) y el medioambiente (No a HidroAysén, Quinteros-Puchuncaví), también han movilizado a la ciudadanía durante la última década. Y en la mayoría de

los casos las protestas han transcurrido al margen de los partidos políticos (Somma, 2018; Albala y Tricot, 2019).

El principal hallazgo de este capítulo es ese: durante el decenio 2008-2018, el involucramiento político en Chile ha experimentado profundas transformaciones y hoy nos encontramos ante un nuevo escenario.

Por una parte, aumentaron las personas que participan en distintos tipos de acciones políticas, así como el apoyo normativo hacia esas acciones. Por otra, creció la desafección con la política institucional, lo que se expresa en el aumento de quienes no se interesan en la política y de quienes no se identifican con partidos ni con posiciones políticas en el eje izquierda-derecha. Esto ocurre en un contexto de baja asociatividad. Se constata, además, que

el involucramiento político en Chile no es un fenómeno transversal sino que se concentra en ciertos grupos sociales, como quienes han recibido más educación. A la vez, tiene un carácter desorganizado, pues se produce al margen de las organizaciones sociales y de los partidos políticos.

El capítulo se organiza en cuatro secciones. En la primera se revisan los cambios en la participación política y en la asociatividad. A continuación se describe la desafección ciudadana con la política institucional. Luego se examinan distintas formas de involucramiento con una tipología que combina la participación en acciones políticas y los grados de identificación con partidos y con posiciones políticas. Una breve conclusión repasa los desafíos que emergen de estos hallazgos de cara a construir una democracia sostenible e inclusiva.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ASOCIATIVIDAD: AMPLIACIÓN DE REPERTORIOS, SIN PERTENENCIA A ORGANIZACIONES

En esta sección se analizan los cambios en la participación política y en la asociatividad durante el decenio 2008-2018. Ambos fenómenos son clave para sostener una democracia sólida e inclusiva. Los datos de la serie ENAD revelan un aumento considerable de la participación política, una diversificación de sus expresiones y una estabilización de los bajos niveles de asociatividad.

Participación política

En el siglo XX la participación política se concibió de diversas maneras (van Deth, 2012). Inicialmente, comprendía solo la participación electoral, el trabajo en campañas políticas o la militancia en partidos políticos. Es decir, su significado se restringía a acciones vinculadas a la política institucional o a lo que posteriormente se denominó “formas convencionales de participación”. En las décadas de 1960 y 1970 la noción se amplió para incluir otras acciones, por ejemplo la pertenencia a grupos comunitarios o el contacto directo entre ciudadanos, funcionarios públicos y políticos. Más tarde se consideró también la participación en protestas y en movimientos sociales como expresiones no convencionales de participación política. En la década de 1990 se diluye la diferencia entre esferas políticas y no políticas de participación, expandiéndose la participación política hacia acciones como el voluntariado. A partir del año 2000 y hasta la actualidad el concepto nuevamente se reformula para incluir expresiones individualizadas, como las prácticas de consumo ético o el involucramiento político a través de redes sociales.

Hay distintas opiniones respecto de las consecuencias de esta diversificación de las acciones de participación política. Para algunos es un signo de una “democracia vibrante” en la que muta el concepto mismo de participación (Dalton, 2008; Theocharis y van Deth, 2018). Para otros (como Putnam, 2000), cuando esta participación es desarticulada, cuando no se vincula con organizaciones sociales y políticas, aumentan las posibilidades de que se individualice y pierda capacidad de incidencia, como también las dificultades para encauzarla en el marco de la institucionalidad democrática.

En este Informe se considera participación política toda actividad o acción voluntaria que involucra a las personas que no son profesionales de la política y que concierne al Gobierno, al proceso político o a la acción del Estado (van Deth, 2014). Es decir, en esta definición no constituyen participación política acciones que no impactan al Gobierno, el proceso político o la acción del Estado; por ejemplo, conversar de política. Además, se ha decidido diferenciar la asociatividad –el hecho de participar en alguna organización social– de las acciones políticas, ya que no necesariamente constituye participación política, a pesar de que es una dimensión fundamental para entender los cambios y continuidades en las formas de involucramiento político.

Las encuestas de la serie ENAD han medido en Chile distintas acciones de participación política desde 2008. Diez años después, constatan que ha aumentado la proporción de personas que ha participado en al menos una acción política, que pasa de 24% a 52%.¹ Se aprecia

¹ Para efectos comparativos, solo se consideraron las seis formas de participación que aparecen en cada una de las encuestas aplicadas en el período. Ver Gráfico 4.1 en el cuerpo del texto.

claramente al comparar el promedio de acciones en las que participó la ciudadanía al inicio y al final del período de referencia. Si al 2008 el promedio de participación de las personas de 18 años o más era de 0,5 acciones políticas, en 2018 esta cifra más que se duplica, llegando a 1,2. Al mismo tiempo, disminuyó la cifra de quienes no han participado en ninguna acción política (de 75% el 2008 a un 47% el 2018).

La participación política no solo ha aumentado, sino que se ha diversificado (Gráfico 4.1). A pesar de que ninguna de las acciones políticas consultadas convoca a más del 50% de la población de 18 años y más durante el período, en todas aumentó la proporción de personas que declara haberlas realizado. La acción política con mayor incremento fue la donación de dinero o recolección de fondos para actividades sociales o políticas (+29 puntos porcentuales). Le sigue un grupo de actividades vinculadas a lo que la literatura (Dalton, 2008; Theochairs y van Deth, 2018) denomina “acciones de protesta”, como la participación en huelgas (+18), la firma de peticiones (+12) y la asistencia a marchas o manifestaciones públicas

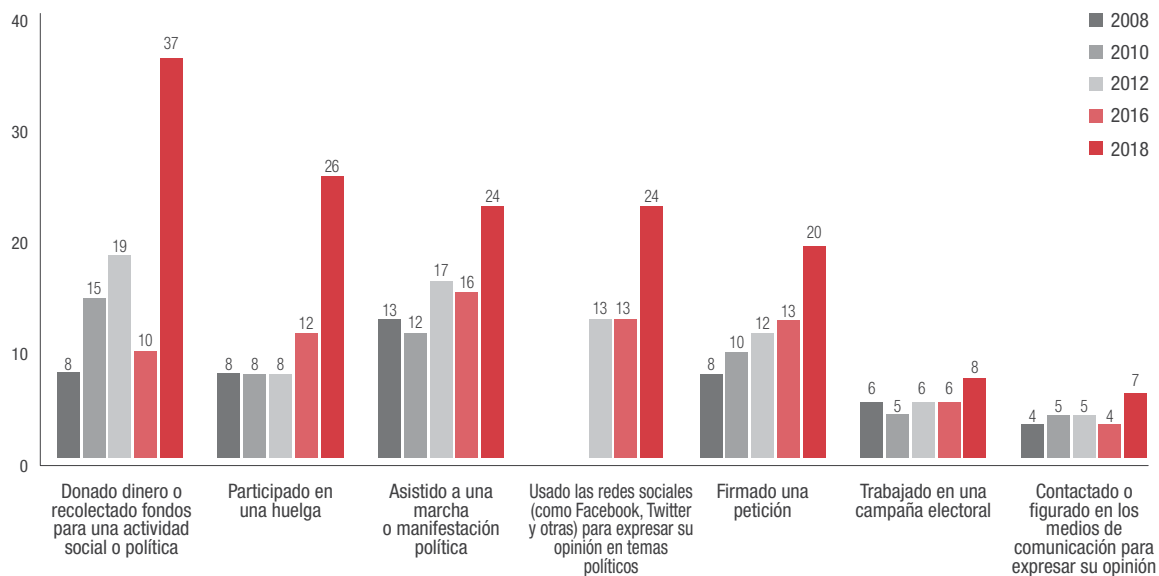
(+11). También ha aumentado el uso de redes sociales para expresar opiniones políticas (+11, desde el 2012, cuando comenzó a medirse esta acción). Por último, la participación en campañas electorales y la figuración o el contacto con medios de comunicación como forma de expresar opiniones registraron un aumento leve (+2 y +3, respectivamente).

El año 2018 se incluyeron en la encuesta formas de acción política no contempladas en la medición de 2008. Como se aprecia en el Gráfico 4.2, destacan la participación en actividades solidarias o voluntarias (32%), el boicot de determinados productos por razones éticas o ambientales (20%), los reclamos formales a empresas (19%) y la creación o apoyo a campañas en Internet (19%). Bastante más atrás está la participación en tomas (10%).

Al agrupar todas las acciones consultadas, al año 2018 las dos principales acciones políticas que emprende la ciudadanía en Chile son “donar dinero o recolectar fondos para una actividad social o política” y “participar en actividades de voluntariado”. Entre 3 y 4 de cada 10 personas

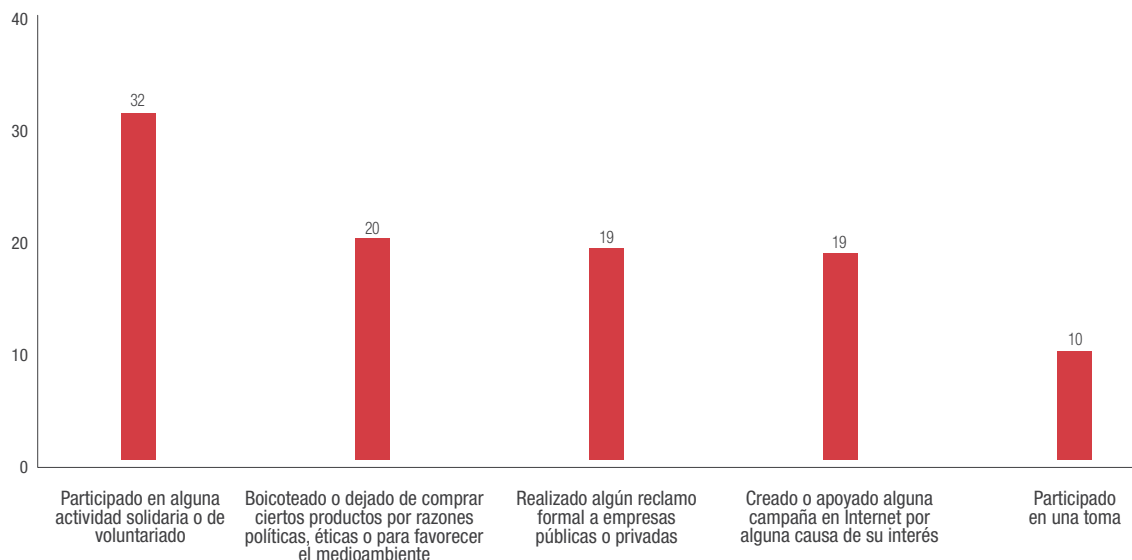
GRÁFICO 4.1 Proporción de personas que responde que ha participado en distintas acciones políticas, 2008-2018

Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si Ud. lo ha hecho, o no lo ha hecho. Veamos, ¿Ud. ha...?



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

GRÁFICO 4.2 Proporción de personas que responde que ha participado en distintas acciones políticas, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

encuestadas, respectivamente, se han involucrado en estas acciones. A la inversa, la proporción es muy baja para “trabajar en una campaña electoral”, “haber contactado o figurado en medios de comunicación para expresar una opinión sobre temas políticos” y “participar en una toma” (menos de 1 de cada 10 personas encuestadas).

Dos resultados relevantes surgen del análisis de la participación en las 12 acciones políticas consultadas el 2018. Primero, hay una correlación positiva y significativa (entre 0,165 y 0,512) entre las distintas acciones políticas, esto es, la participación en una no es independiente sino que tiende a realizarse en conjunto con otras.

Segundo, se aprecia una pequeña (inferior a 0,14 en todas las acciones), aunque positiva, correlación entre la participación electoral y 11 de las 12 acciones políticas. El porcentaje de quienes participan en elecciones y además en otro tipo de acciones es reducido. Esto se produce

en un contexto en que ha disminuido la participación electoral pero se ha mantenido alta la valoración abstracta del voto (ver recuadro).

A través de modelos de regresión logística (no presentados), y considerando variables sociodemográficas y políticas, se indagó en los factores asociados a las diferentes acciones políticas. Los resultados muestran que participan más las personas con mayor nivel educacional, especialmente quienes tienen educación universitaria completa, las más interesadas en la política,² quienes pertenecen a organizaciones sociales y quienes se identifican con la izquierda o centroizquierda (en comparación con quienes no se identifican políticamente).³ Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con la participación electoral, en el resto de las acciones consultadas los jóvenes no participan menos que las otras generaciones, e incluso en varias superan a las de mayor edad.⁴ Es el caso de la participación política a través de redes sociales, donde

² Con la excepción de la donación o recolección de dinero, donde no hay diferencias significativas.

³ Esta relación positiva se encuentra presente en 8 de las 12 acciones políticas. Por el contrario, no resultan significativas las relaciones con la figuración en medios de comunicación, la participación en tomas, la creación o apoyo de campañas por Internet y el reclamo en empresas públicas o privadas.

⁴ La referencia a generaciones tiene como supuesto que aquellas personas nacidas y socializadas en un mismo período histórico han compartido ciertos acontecimientos y experiencias que con el tiempo pueden dar lugar a una narrativa social compartida (Frei, 2017) o un habitus generacional (Eyerman y Turner, 1998). Es indudable que como categoría está cruzada por temas de género, clase, etnia, pero aun así los análisis de comportamiento político muestran diferencias relevantes según el período de socialización (Madrid, 2005).

PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y VALORACIÓN DEL VOTO

Contrariamente al incremento de la proporción de personas que participa en acciones políticas en Chile, la participación electoral ha experimentado desde el retorno de la democracia una sistemática disminución. La creciente abstención electoral constituye hoy un rasgo característico del sistema político chileno, que se agudizó a partir de la elección de 2012, fecha en que se implementaron la inscripción automática y el voto voluntario. Es una de las más altas de Latinoamérica, incluso al compararla con países con voto voluntario como Guatemala, donde en la primera vuelta de la última elección presidencial (2019) participó un 62,2%.

El Gráfico 4.3 muestra que entre 1989 y 2017 la participación electoral descendió de un 87% a un 50%. El fenómeno no se distribuye homogéneamente en la sociedad, sino que se concentra en las generaciones más jóvenes y en los sectores de menores ingresos (PNUD, 2017c).

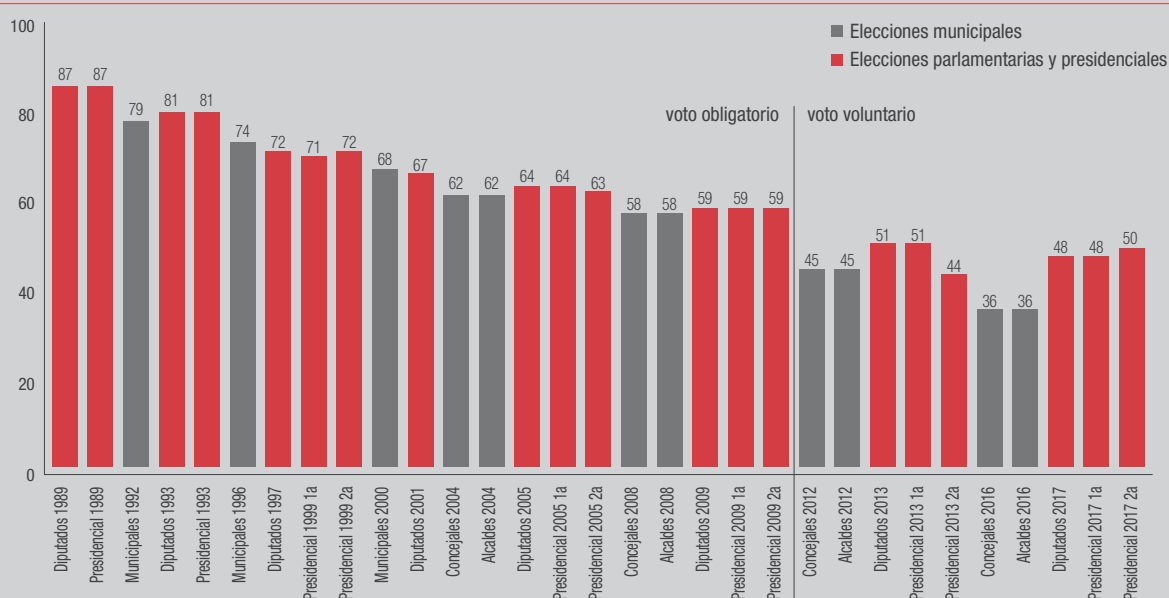
A pesar de esta sistemática disminución de la participación electoral, la valoración abstracta del voto se ha mantenido. Así, por ejemplo, una mayoría de la población está de acuerdo con que “la forma como uno vota puede influir en lo que pase en el país” (63% en 2008 y 64% en 2018).

Además, han aumentado a más del doble quienes prefieren que el voto sea obligatorio (de 21% en 2008 a 46% en 2018), como se aprecia en el Gráfico 4.4.

También la valoración de los plebiscitos como mecanismo de toma de decisiones experimentó un incremento sustantivo. El 2010 un 62% de las personas encuestadas consideraba que eran una “buena forma de decidir asuntos políticos importantes”; ocho años más tarde (2018), esta cifra aumentó en seis puntos porcentuales (68%). Dicho apoyo es transversal e independiente del nivel educacional y la identificación política.

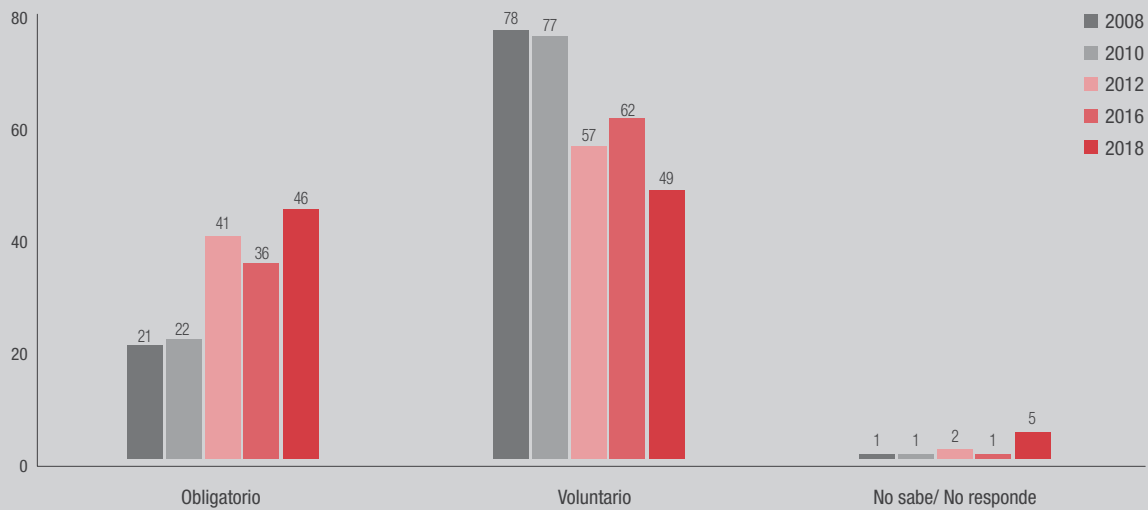
En este sentido, en materia de participación electoral, el decenio 2008-2018 en Chile se caracteriza por el declive sistemático de la participación electoral, que coexiste sin embargo con un “*ethos* republicano” que se expresa en la amplia valoración del voto como mecanismo para incidir en lo que sucede en el país, como se describió en el Capítulo 2. Es interesante además que, en un contexto donde crece la desconfianza en las instituciones representativas, aumente la valoración de los plebiscitos y el porcentaje de quienes prefieren que el voto sea obligatorio.

GRÁFICO 4.3 Participación electoral entre 1989 y 2017, población en edad de votar (PEV)



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de datos del Servel y del INE.

GRÁFICO 4.4 En general, ¿Ud. cree que en Chile el voto debería ser obligatorio o voluntario?, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

las generaciones crecidas en la post-transición (nacidas entre 1987 y 2000) participan más que aquellas socializadas políticamente en la época de la Unidad Popular (nacidas en 1951 o antes). Los jóvenes participan más en huelgas que la generación de mayor edad, pero no se aprecian diferencias entre ambos grupos en la participación en marchas. Por el contrario, las generaciones de mayor edad, especialmente quienes nacieron en 1951 o antes, participan más en campañas electorales. Lo anterior refuta a quienes sostienen que los más jóvenes no participan en política y demuestra que, a excepción de la participación electoral, este grupo presenta una participación similar y en algunos casos superior a la de las generaciones de mayor edad.

En cuanto a las diferencias de género, los datos muestran que las mujeres participan en una proporción similar a los hombres en gran parte de las acciones políticas consultadas. Y solo participan significativamente menos que los hombres en acciones de protesta, como marchas o manifestaciones políticas, huelgas y tomas.

A modo de síntesis, al analizar los datos para 2018 de las Encuestas de Auditoría a la Democracia se observa que la participación política no es un fenómeno transversal en la sociedad chilena, sino que se concentra en ciertos grupos sociales. También que efectivamente algunas acciones políticas presentan diferencias generacionales importantes, pero ello no implica que los más jóvenes participen menos.

Otro importante incremento durante el decenio 2008-2018 es el de la legitimidad que la ciudadanía otorga a gran parte de las acciones políticas consultadas (Gráfico 4.5). Destaca la aprobación de las manifestaciones públicas (+23 puntos porcentuales), lo que puede vincularse con la fuerte legitimidad social que alcanzaron el movimiento estudiantil (2011) y el movimiento feminista (2018-2019) durante la última década en Chile. Por su parte, las acciones políticas disruptivas (Medel y Somma, 2016), como el bloqueo de calles, las ocupaciones de terrenos y las huelgas de hambre, experimentaron también un aumento sostenido del apoyo ciudadano, aunque de menor magnitud. De hecho, quienes consideran muy

importante que “los ciudadanos puedan protestar cuando se opongan a acciones oficiales” pasaron de 30% a 57% entre 2008 y 2018.⁵ Es un cambio sustantivo. Evidencia la creciente legitimidad de la protesta como vía para plantear demandas. Es interesante que ello no se produzca en desmedro de la legitimación del trabajo en campañas electorales, pues este también se incrementa durante el decenio, aunque en menor medida que las manifestaciones públicas.

En síntesis, tanto acciones políticas de carácter convencional como no convencionales recibieron en 2018 una elevada aprobación. Participar en manifestaciones políticas, trabajar en campañas electorales, hacer huelgas y participar en organizaciones políticas alcanzaron una “muy alta aprobación” (valores 7 a 10 en una escala de 1 a 10) por más del 50% de la población.

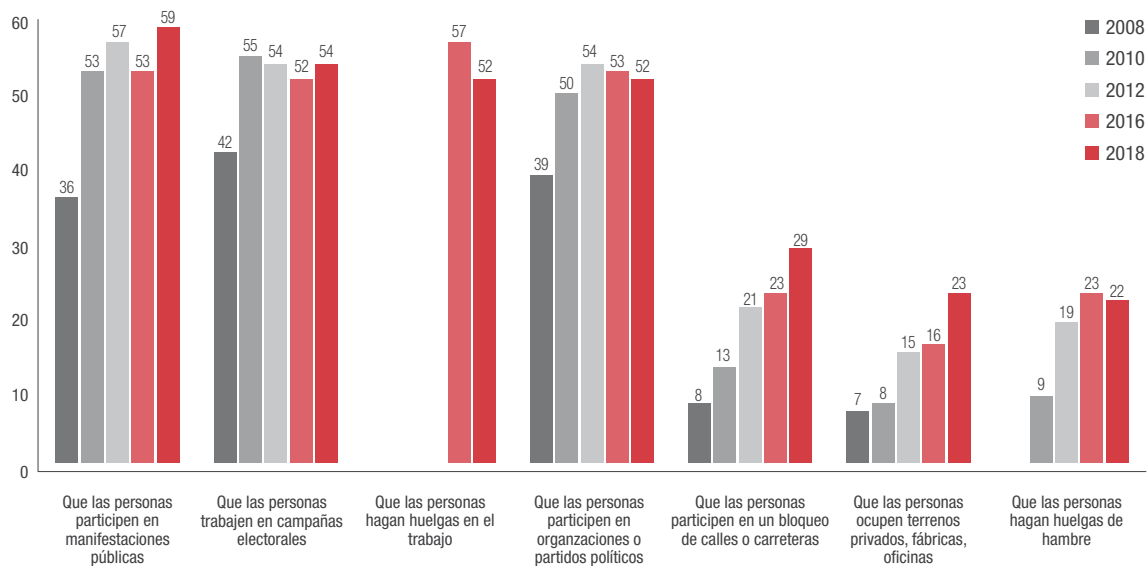
Asociatividad

La asociatividad es la pertenencia de la ciudadanía a organizaciones sociales. Tradicionalmente se le asignan distintos efectos, como incrementar el capital social y la capacidad de incidencia de la ciudadanía en temas públicos y de la agenda política (PNUD, 2014: 251).

Al analizar los datos de la serie ENAD se aprecia que la asociatividad en el período es escasa. Las organizaciones sociales con mayores tasas de pertenencia no superan el 20% de la población, y corresponden a las iglesias y otras organizaciones religiosas en 2008 y a las juntas de vecinos en 2018, mientras que las tasas más bajas afectan al conjunto de las organizaciones políticas (como partidos o movimientos políticos) y gremiales o profesionales (asociación empresarial y asociación profesional), todas ellas con cifras en torno a 3% y 4%.

GRÁFICO 4.5 Evolución de la aprobación de acciones políticas, 2008-2018

Voy a leerle una lista de acciones que las personas pueden realizar para lograr sus objetivos políticos. Usando esta tarjeta, donde 1 significa “desaprueba totalmente” y 10 significa que “aprueba totalmente” Ud. ¿aprueba o desaprueba que...? Porcentaje que responde valores 7 a 10.



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

⁵ En una escala de 1 a 7, donde 1 es nada importante y 7 muy importante. Los porcentajes son de personas que declararon el valor 7.

Las organizaciones que experimentaron mayores declives en sus tasas de pertenencia son las iglesias y otras organizaciones religiosas: pasaron de un 21% en 2008 a un 14% en 2018 (Gráfico 4.6). Esta disminución es consistente con el impacto en la confianza ciudadana de los escándalos de abuso sexual que han involucrado a la iglesia católica durante los últimos años (ver Capítulo 2) y con los cambios culturales que caracterizan al Chile actual (ver Capítulo 3). También la pertenencia a clubes deportivos experimentó una disminución,⁶ pasando de un 13% al inicio del período a un 11% al final. Por el contrario, entre 2016 y 2018 aumentó la proporción de personas que pertenece a una junta de vecinos (de 14% a 19%).

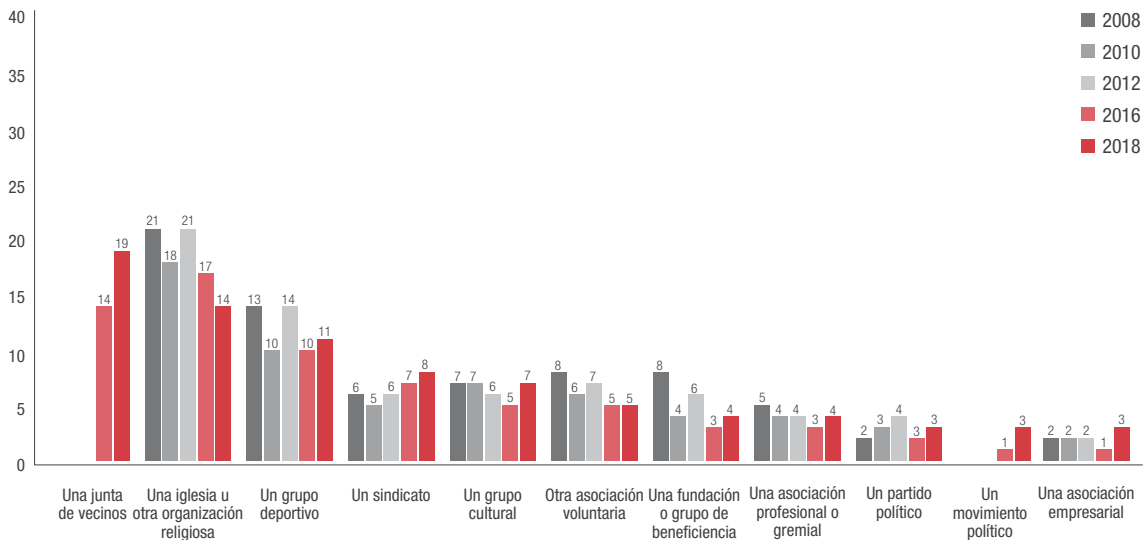
En la medición del 2018 se agregó a la pregunta “otras organizaciones sociales” (Gráfico 4.7), y en este caso la participación de la ciudadanía también es baja. La mayor tasa de pertenencia supera levemente el 8% (club de interés, hobbies o pasatiempo), y las menores se sitúan en torno a 2% y 3%, como las asociaciones de pueblos originarios.

Llama la atención la escasa pertenencia a grupos ecologistas o ambientalistas (3,7%) y de protección y defensa de los animales (2,7%), considerando que las causas colectivas que esas organizaciones defienden son las que mayor identificación concitan en la población chilena en 2018 (Capítulo 3). Esta combinación entre alta adhesión a causas colectivas y baja membresía en las organizaciones respectivas es otra de las formas de involucramiento político del Chile actual. El análisis de la evolución de los ideales de ciudadanía realizado en el Capítulo 3 contribuye a comprender el carácter desorganizado del involucramiento político del presente. Como se vio, al año 2018 ser activo en asociaciones sociales o políticas es uno de los atributos de la buena ciudadanía que puntúa más bajo entre las personas encuestadas. De ahí que el apoyo a estas reivindicaciones tienda a desplegarse de manera individual, al margen de las organizaciones sociales.

En términos agregados, entre 2008 y 2018 ha habido una leve disminución en los niveles de asociatividad de

GRÁFICO 4.6 Evolución de la pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, 2008-2018

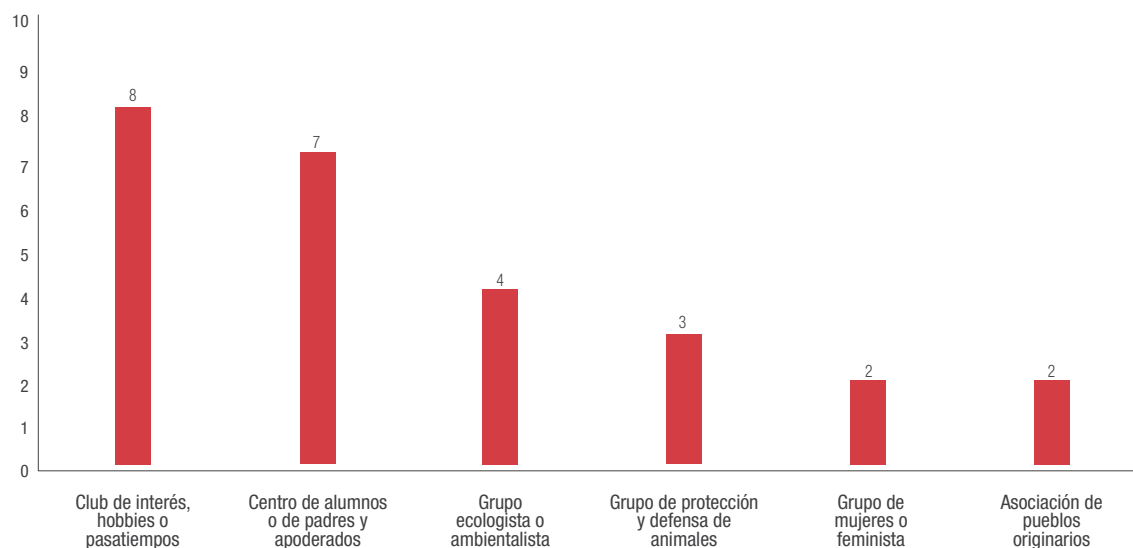
La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para cada tipo de grupo, por favor dígame si Ud. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. ¿Pertenece Ud a...?



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

⁶ El declive en la pertenencia a clubes deportivos se produce en un contexto en el que aumenta la proporción de personas que declara realizar individualmente alguna actividad física.

GRÁFICO 4.7 Pertenencia a otras organizaciones sociales, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

la ciudadanía, que ya al inicio del período eran bajos. La proporción de personas que declara no pertenecer a ninguna organización aumentó de 58% a 61%. Quienes participan en al menos una organización social disminuyeron de 41% a 36%.⁷

Finalmente, al analizar el fenómeno de la asociatividad con variables sociodemográficas y políticas (a través de regresio-

nes no presentadas aquí), se aprecia que quienes más declaran pertenecer a una organización de la sociedad civil suelen ser hombres, con mayor educación (universitaria completa) y quienes se identifican con alguna posición política, especialmente la izquierda o centroizquierda y la derecha o centroderecha. No se observan diferencias significativas entre generaciones. En síntesis, la asociatividad no solo es baja sino que se distribuye desigualmente en la población.

⁷ Estos resultados son similares a los encontrados a finales de los años 90. Según la Encuesta de Desarrollo Humano, en 1999 un 34% de las personas encuestadas pertenecía al menos a una organización social (PNUD, 2000).

PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMPARADA CON AMÉRICA LATINA

Con datos del 2015 de la Encuesta Latinobarómetro es posible comparar la participación en algunas acciones políticas en Chile con lo observado en otros países de la región. En la Tabla 4.1 se aprecia que los números

son similares al promedio de América Latina, excepto en el caso de reunirse con otras personas para tratar un tema o firmar una petición, que se sitúa bajo el promedio.

TABLA 4.1 Porcentaje de personas que han realizado alguna de las siguientes acciones políticas, según países de América Latina, 2015

País	Asistir a manifestaciones autorizadas, protestas, marchas	Juntarse con otras personas para tratar un tema o firmar una petición	Hacer un reclamo a través de los medios de comunicación	Hacer un reclamo a través de las redes sociales
Promedio América Latina	11	17	7	8
Argentina	15	21	7	8
Bolivia	14	12	7	4
Brasil	13	26	14	17
Chile	10	13	5	9
Colombia	16	24	9	10
Costa Rica	13	21	7	13
República Dominicana	16	26	12	9
Ecuador	3	6	4	3
El Salvador	6	16	5	6
Guatemala	9	16	3	3
Honduras	8	16	4	4
México	9	18	6	7
Nicaragua	9	14	5	5
Panamá	12	19	11	10
Paraguay	10	17	5	6
Perú	8	10	8	6
Uruguay	16	24	9	9
Venezuela	7	12	4	4

Fuente: Elaboración del PNUD en base a Encuesta Latinobarómetro 2015.

DESAFECCIÓN POLÍTICA: DESINTERÉS Y DESIDENTIFICACIÓN

Como se planteó en la introducción de este capítulo, la literatura ha destacado sistemáticamente la creciente distancia o desafección que caracteriza a la relación que establece la ciudadanía en Chile con la política institucional (Torcal y Montero, 2006). En esta sección se analiza la evolución de esa desafección política durante la década 2008-2018. Para ello se exploran dos indicadores determinantes de la relación entre las personas y la política: el desinterés ciudadano por la política en términos generales, y la desidentificación política institucional, tanto con las posiciones en el eje izquierda-derecha como con los partidos políticos. Estos dos indicadores dan cuenta, según Torcal y Montero, del desinvolucramiento político, el que a su vez constituye una de las dimensiones de la desafección.⁸

El desinterés por la política

Una de las características de la democracia chilena es el bajo y decreciente interés de la ciudadanía por la política institucional. Los datos de las encuestas ENAD confirman esta tendencia. Como se aprecia en el Gráfico 4.8, a lo largo del período 2008-2018 se ha mantenido relativamente estable la proporción de personas que señala estar muy, bastante o algo interesada en la política. Por el contrario, se observa, a partir del 2010, un aumento de quienes no están nada interesados, que llegan a seis

de cada diez personas encuestadas entre las mediciones de 2016 y 2018.

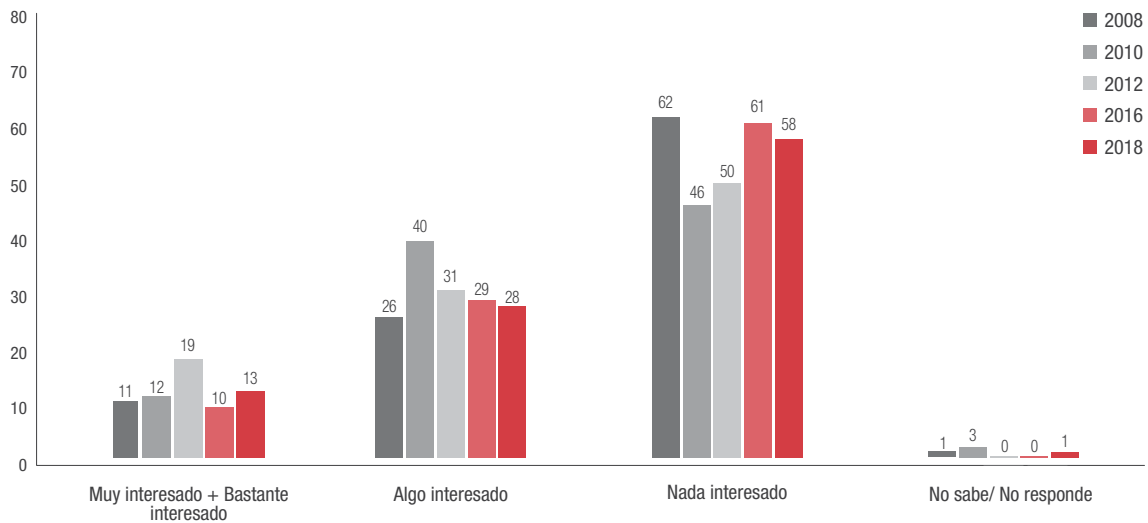
Es interesante notar que entre la de 2008 y 2010 disminuyó la proporción de personas que no se interesaban nada en política y aumentaron en una proporción similar quienes declaraban estar algo interesadas. Puede obedecer a que, entre estas dos mediciones, y por primera vez desde el retorno de la democracia, se produjo una alternancia en el signo político del Gobierno; además hizo una incursión electoral una tercera fuerza política entonces relevante, liderada por Marcos Enríquez-Ominami. Es posible que ambos aspectos hayan incrementado el interés y las expectativas ciudadanas sobre el sistema político. Aparentemente el efecto de esta novedad desapareció con el tiempo.

Al comparar los niveles de interés en la política en Chile con los indicadores para el resto del continente americano, se constata que el país presenta cifras bastante bajas. Según la última encuesta LAPOP, de 2014, en Chile únicamente un 29% de quienes tienen 18 años o más están muy o algo interesados en la política,⁹ cifra similar a Guyana (28%), inferior a países como Venezuela, Costa Rica, Uruguay (48%, 45% y 43%) y más baja que Perú y Haití (29% y 30%). Lideran la lista Estados Unidos y Canadá con 64% y 54%. La posición de Chile, además, no ha variado desde el inicio de las encuestas LAPOP en 2004 (Toro et al., 2016: 95).

⁸ A la segunda dimensión de la desafección la llaman “desafección institucional” y se relaciona con la desconfianza hacia instituciones y actores políticos (ver Capítulo 2).

⁹ Las encuestas LAPOP utilizan una escala distinta de las ENAD. Mientras en las primeras la escala es *mucho interés, algo, poco y nada*, en las segundas es *muy interesado, bastante, algo y nada*.

GRÁFICO 4.8 Evolución del grado de interés en la política, 2008-2018

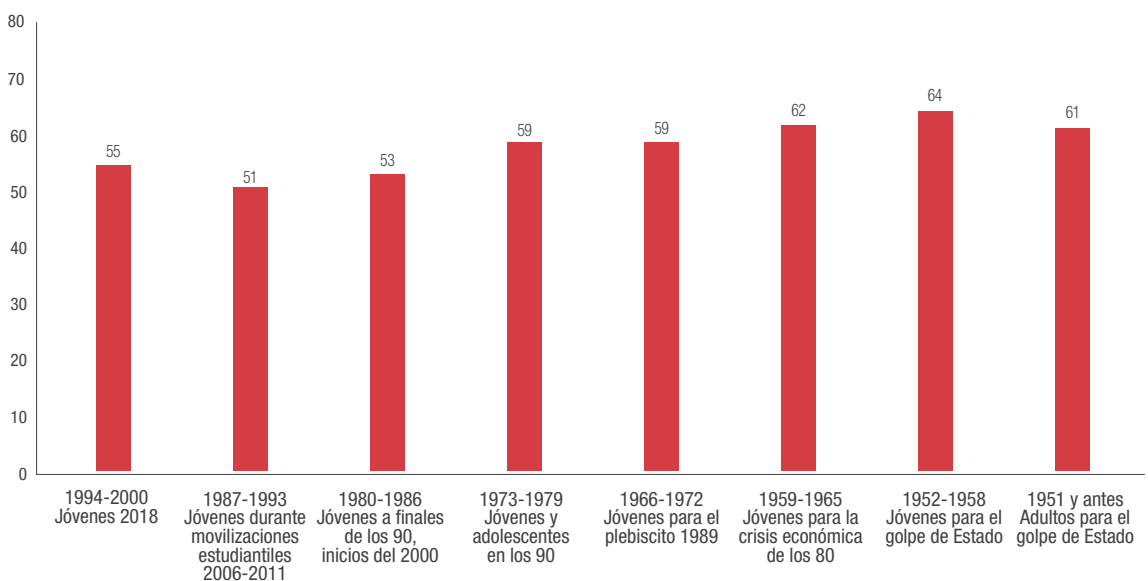


Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

A partir de distintos modelos de regresión logística (no presentados), se indagó en las características de las personas que menos se identifican con la política, y los datos arrojan que en 2018 quienes presentan menor interés son las mujeres, quienes solo tienen educación básica y quienes no se identifican con una posición política. No se aprecian diferencias territoriales ni según generaciones.

En consecuencia, y al igual que lo observado respecto de la participación política, no es posible sostener que las generaciones jóvenes se interesan menos por la política que las de mayor edad. De hecho, al año 2018, la proporción de jóvenes (personas nacidas entre 1994-2000) que señalan que la política no les interesa nada es de 55%, cifra que se incrementa a 61% en la generación de mayor edad y

GRÁFICO 4.9 Proporción de personas encuestadas que señala estar nada interesada en la política, por generación, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

que agrupa a las personas que eran adultas para el golpe de Estado, es decir nacidas en 1951 o antes. En términos bivariados, la generación de quienes eran jóvenes durante el movimiento pingüino (2006) o las siguientes movilizaciones estudiantiles (2011) es la que está más interesada en política. Sin embargo, al controlar por otras variables, como sexo o posición política, esta diferencia desaparece. Es decir, en términos generacionales, el desinterés por la política es un fenómeno transversal en la sociedad chilena (Gráfico 4.9).

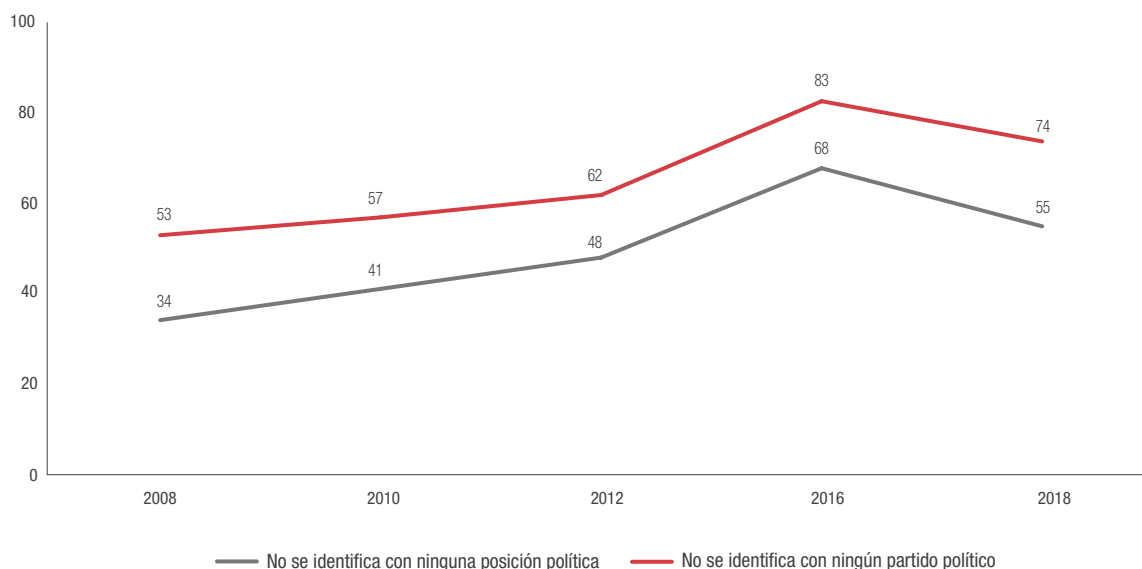
La Encuesta de Auditoría a la Democracia de 2018 exploró las circunstancias que harían que las personas se interesaran más en política, y les hizo esta pregunta a todas las que respondieron una alternativa diferente de estar “muy interesado”. Al comparar los resultados de esta medición con los de la Encuesta de Desarrollo Humano 2013, se constata que en el período se mantienen estables quienes no se interesan en política, pero aumentan (de un 19% a un 33%) quienes señalan que bajo ninguna circunstancia podrían llegar a interesarse en ella. A la inversa, la principal circunstancia que haría que la gente se interese más es “si viera que la política genera cambios en sus vidas”, seguido

de “si hubiese buenos políticos”. Esto último es consistente con los hallazgos de varios grupos focales realizados por el PNUD con anterioridad a la elección presidencial de 2017. En ellos, ante la pregunta de qué motivaría a las personas a votar, la respuesta fue unánime: en primer lugar, votarían si la política reportara beneficios en sus vidas cotidianas, y en segundo lugar, si surgiera una figura política nueva, no contaminada con los problemas de la política institucional.

Desidentificación con posiciones y partidos políticos

La identificación tanto con posiciones políticas (eje izquierda-derecha) como con partidos políticos presenta algunas diferencias respecto del interés en la política. El Gráfico 4.10 muestra varios datos relevantes. Primero, entre 2008 y 2018, ha habido un incremento sostenido de quienes no se identifican con una posición política¹⁰ o con partidos políticos. Este aumento ha sido sistemático desde 2008 y alcanzó su máxima expresión en junio de 2016,

GRÁFICO 4.10 Evolución de la desidentificación con la política institucional, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

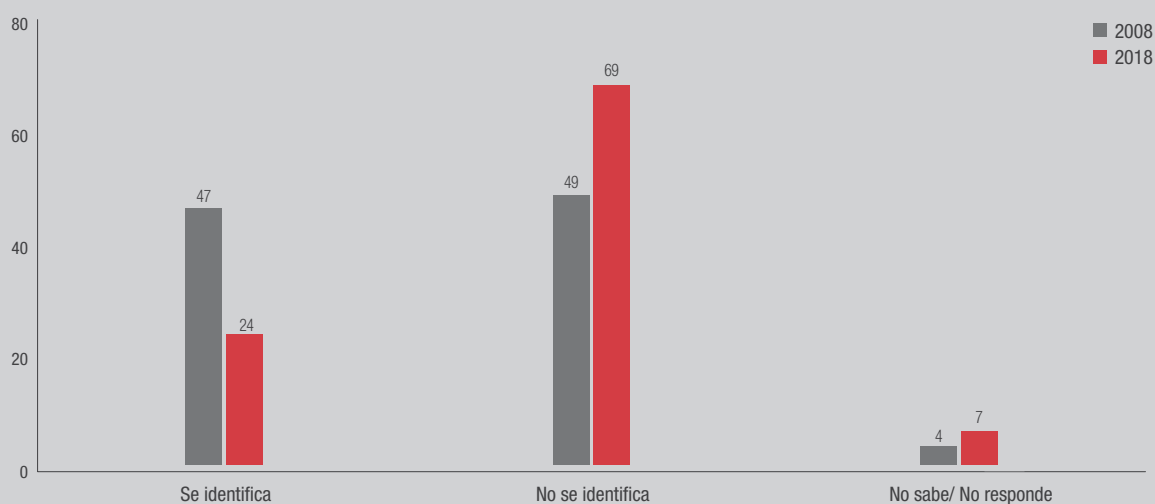
¹⁰ En las ENAD se usa una escala referencial que pregunta por 5 posiciones políticas: izquierda, centroizquierda, centro, centroderecha y derecha. Como categorías de respuesta no marcadas en la escala que se muestra a los encuestados, pero consignadas en la base de datos a partir de sus respuestas espontáneas, están “independientes” y “ninguna” posición. Esta forma de codificar la posición política es distinta de la que se ocupa en otras encuestas, donde se pregunta en una escala de 1 a 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha.

EVOLUCIÓN DE LA (DES)IDENTIFICACIÓN CON CONGLOMERADOS POLÍTICOS

Una de las explicaciones que se ha planteado para la desidentificación con partidos es la creciente identificación ciudadana con coaliciones políticas, las que en términos de representación e identificación actuarían como una suerte de “superpartidos”. Sin embargo, la evidencia no apoya esta afirmación. De hecho, el aumento de la desafección partidaria se produce en conjunto con un incremento notable de quienes no se identifican con ningún conglomerado político: de un

49% el 2008 a un 69% en la última medición (2018). Como se observa en el Gráfico 4.11, si bien en Chile las personas se identifican más con coaliciones que con partidos políticos, la desidentificación con ellas es sumamente alta también, y ha aumentado 20 puntos porcentuales. En consecuencia, no es posible afirmar que las personas no se identifican con partidos pero sí con coaliciones. Los datos revelan que la identificación con ambas está en declive.¹¹

GRÁFICO 4.11 Proporción de personas que se identifican con alguna coalición política, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

un mes antes de que la encuesta del Centro de Estudios Públicos de ese año mostrara que el segundo gobierno de Michelle Bachelet alcanzaba el porcentaje más alto de desaprobación de su mandato, un 66% (Encuesta CEP 2016, julio-agosto).

Segundo, la desidentificación con partidos políticos es mayor que la desidentificación con el eje izquierda-de-

recha. A lo largo del período, las personas que no se identifican con un partido político superan en 20 puntos porcentuales a quienes no se identifican con una posición política en el eje. Esta distancia, que se observa en todas las mediciones del decenio, permite concluir que durante ese tiempo se ha mantenido una proporción de personas que, a pesar de no identificarse con partidos, se identifica con alguna posición política.

¹¹ El 2008 las alternativas eran Concertación, Alianza, Juntos Podemos Más y otros. El 2018, las alternativas fueron Chile Vamos, (ex) Nueva Mayoría, Frente Amplio y otro

Tercero, y relacionado con el punto anterior, al año 2018 la proporción de quienes no se identifican políticamente es muy similar a la de las personas que no se interesan nada en política (55% y 58%, respectivamente). Esto se explica porque el 76% de quienes no se interesan en la política tampoco se identifican con alguna posición política. En el caso de los partidos políticos, la proporción es incluso mayor: el 83% de quienes no se interesan en política tampoco se identifica con algún partido. La relación sugiere que la desafección se relaciona sobre todo con los cuestionamientos ciudadanos a la forma de hacer política de los partidos (ver en el Capítulo 2 los datos sobre evaluación del funcionamiento de los partidos políticos).

Similar al desinterés en la política, la desidentificación en Chile es un proceso de largo aliento, con importantes puntos de inflexión durante la dictadura y la transición democrática. Datos de la época muestran que entre 1958 y 1973 la proporción de personas de 21 años o más que residían en el Gran Santiago y que no se identificaban con alguna posición en la escala izquierda-derecha era bastante baja, fluctuando entre un 28% y un 15%. Quienes no se identificaban con partidos políticos eran incluso menos, y ese porcentaje se mantuvo relativamente estable en torno al 20% en el mismo período (Madrid, 2005). La desidentificación se mantuvo escasa luego del plebiscito del 5 de octubre

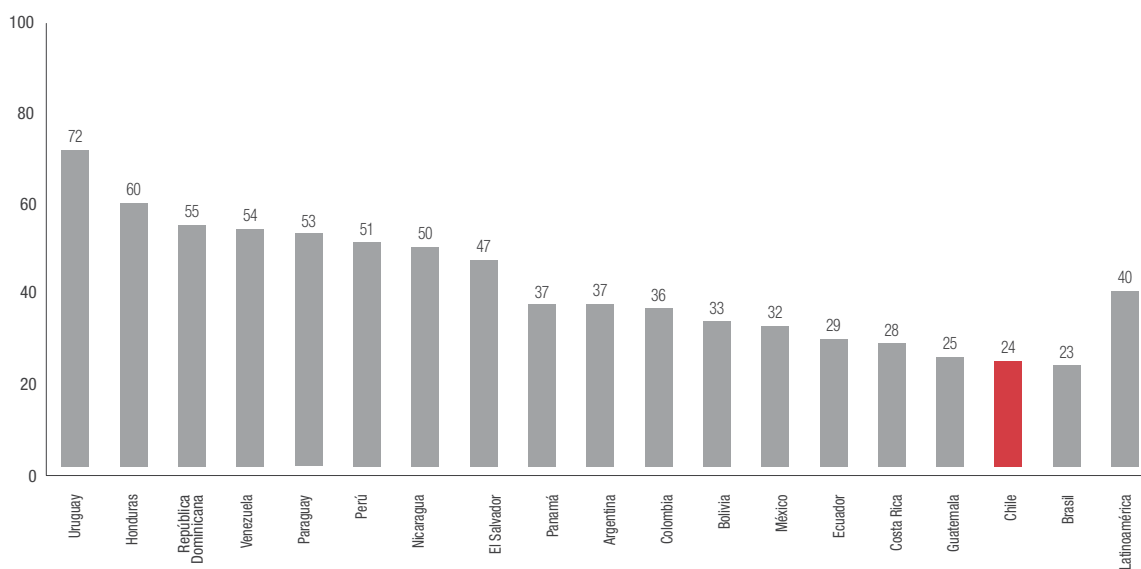
de 1988, y comenzó a incrementarse sistemáticamente tras el primer gobierno democrático en 1990 (PNUD, 2015a).

La identificación con partidos políticos es clave para la representación política y la legitimidad de la democracia representativa (Lupu, 2015). La literatura sugiere que la creciente desidentificación con ellos en parte obedece a la erosión del sistema de partidos tradicionales, proceso que convive con el surgimiento de nuevos partidos. Este problema ya ha sido observado en algunos países de la OCDE (Przeworski, 2019).

Al contrario de lo que podría suponerse, la desidentificación con partidos no parece ser un problema de oferta política. Como se describió en el Capítulo 1, una de las principales transformaciones políticas en este período ha sido la creación de partidos. Si el 2008 existían ocho partidos políticos reconocidos legalmente por el Servel, en 2018 habían aumentado a 21. Sin embargo, la identificación partidaria ha disminuido de manera sostenida. Si en 2008 entre un 1% y un 9% de las personas encuestadas se identificaba o simpatizaba con alguno de los partidos que había, en 2018 ninguno superaba el 3% y nueve partidos contaban con menos de un 1% de identificación o simpatía.

La tendencia, en todo caso, es regional, no una especificidad chilena. Entre 2010 y 2015 América Latina

GRÁFICO 4.12 Cercanía hacia los partidos políticos en América Latina, 2015



Fuente: Latinobarómetro 2015.

experimentó una leve disminución –del 45% al 40%– en los grados de identificación con partidos políticos (Latino-barómetro, 2015). La caída se da en un contexto regional de fuerte disminución de la afiliación partidaria (Lupu, 2014). Con todo, el nivel de identificación en Chile es de los más bajos de la región, 15 puntos porcentuales menos que el promedio latinoamericano (Gráfico 4.12).

La literatura chilena sostiene que el alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos en parte obedece a las dinámicas de los propios partidos (PNUD, 2015a; Luna, 2016; Castiglioni y Rovira, 2016; Siavelis, 2016). Dinámicas como la incongruencia entre las prioridades de la elite política y las de la sociedad civil (Albala y Tricot, 2019; PNUD, 2015a), la pérdida de raíces sociales que afecta a los partidos (Luna y Altman, 2011) y la tendencia de los partidos chilenos a actuar como un sistema “encapsulado” (Bargsted y Maldonado, 2018), y como una “oligarquía competitiva” (Luna y Mardones, 2010) que escasamente renueva a sus actores y cuya preocupación principal es mantenerse en el poder. A lo anterior se suma una tendencia a la convergencia ideológica entre los partidos, que caracteriza al Chile actual (Gamboa, López y Baeza, 2013).

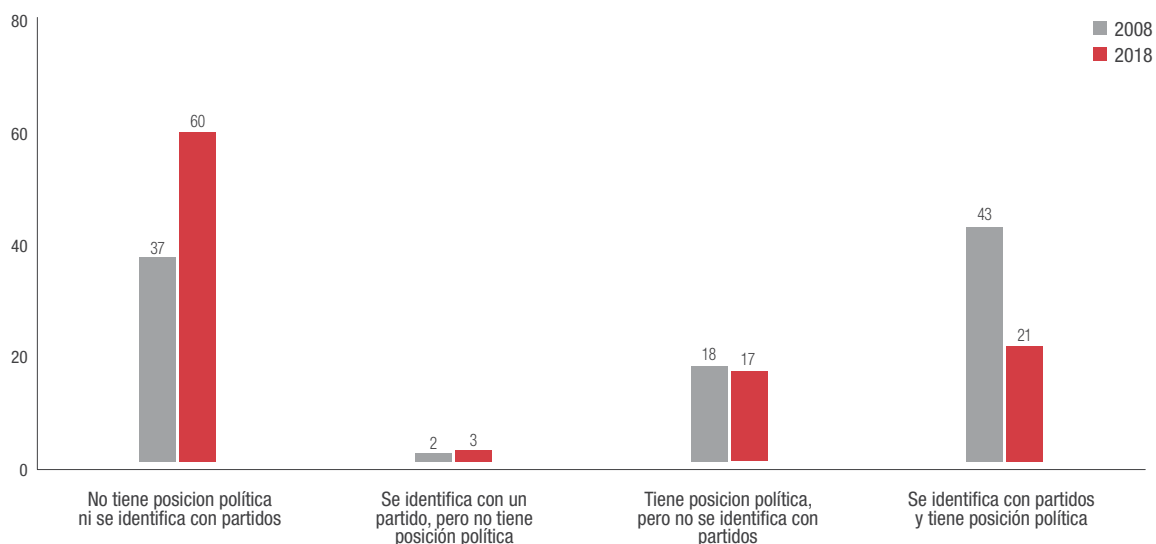
Con el propósito de medir el efecto conjunto de la desidentificación con partidos y con posiciones políticas en el eje izquierda-derecha se creó una variable que combina

ambas disposiciones. El resultado permite perfilar cuatro grupos. En uno de sus extremos se ubican quienes no se identifican ni con posición política ni con partidos políticos, y en el otro las personas que se identifican con ambos. El Gráfico 4.13 muestra que entre 2008 y 2018 los primeros aumentaron en 23 puntos porcentuales y los segundos disminuyeron en una proporción similar. Es un cambio significativo en un período de tan solo diez años, y evidencia la magnitud de la distancia entre la ciudadanía y la política institucional.

El alza de quienes no se identifican ni con partidos políticos ni con posición política es un fenómeno transversal: se manifiesta en todos los grupos sociodemográficos. A pesar de ello, al controlar los datos de 2018 por distintas regresiones logísticas (no presentadas) se aprecia que el fenómeno se da más en mujeres, entre quienes residen en sectores urbanos y en las regiones del centro y sur del país, y entre personas con menor nivel educacional (enseñanza media o menos).

En síntesis, al igual que en el caso de la participación política y de la asociatividad, la desafección política está desigualmente distribuida en la población chilena. Las mayores diferencias se aprecian al comparar a personas con distinto nivel educacional. En la próxima sección se retoma este punto.

GRÁFICO 4.13 Desidentificación política, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

UNA TIPOLOGÍA DE INVOLUCRAMIENTO POLÍTICO

Con el objeto de examinar las distintas formas de involucramiento político se construyó una tipología que combina las variables de participación en acciones políticas y las de desafección política. La tipología se elaboró en dos etapas. Primero, con las seis acciones políticas comparables entre 2008 y 2018 se creó una variable dicotómica que segmentó a la población en dos grupos: quienes han participado en al menos una acción política y quienes no han participado en ninguna.¹² Luego se combinó la variable de identificación con posiciones políticas en el eje izquierda-derecha y la variable de identificación con partidos, lo que creó una variable que también tiene dos categorías: no se identifica (ni con partidos ni con posición política) y sí se identifica (con una o con ambas posibilidades). Esta tipología permitió delinear cuatro tipos de involucramiento político, que se sintetizan en la Tabla 4.2.

Un primer tipo de involucramiento corresponde a los *desafectados*. Forman parte de este grupo las personas que

no se identifican con partidos ni con posiciones políticas, y que tampoco han participado en ninguna acción política. Un segundo tipo son los *fragmentados*, personas que han realizado al menos una acción política pero que no se identifican con partidos ni con posiciones en el eje izquierda-derecha. El tercer tipo de involucramiento lo conforman los *espectadores*, personas que no han participado en ninguna acción política pero que se identifican con posiciones o partidos políticos. Finalmente, el grupo de los *involucrados* incluye a quienes han realizado alguna acción política y se identifican con alguna posición política y/o con un partido político.

Al analizar la evolución de estos tipos de involucramiento político a lo largo del decenio se aprecia que los *desafectados* son el grupo predominante desde inicios del período, con casi un tercio de la población (Gráfico 4.14). También se observa una aguda disminución de los *espectadores*—grupo que hoy es el más pequeño en el país tras

TABLA 4.2 Tipología del involucramiento político¹³

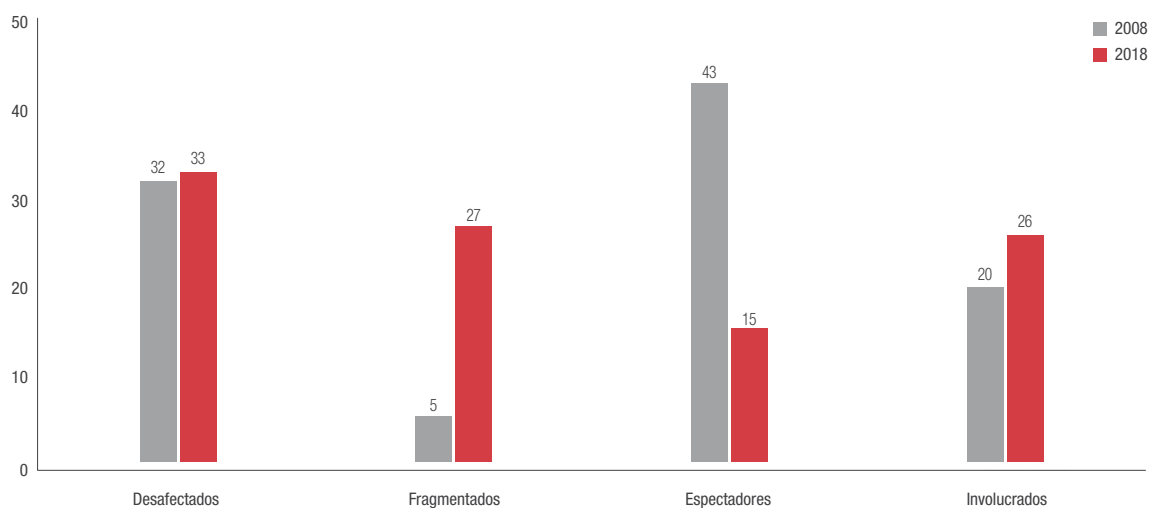
	No ha participado	Ha participado
No se identifica	Desafectados	Fragmentados
Se identifica	Espectadores	Involucrados

Fuente: Elaboración del PNUD.

¹² Las acciones políticas comparables son: haber donado o recolectado dinero para actividades sociales o políticas, haber participado en huelgas, haber asistido a manifestaciones o marchas, haber firmado peticiones, haber trabajado en campañas electorales y haber contactado o figurado en medios de comunicación como forma de expresar opiniones. No se incluye en la tipología la participación electoral ya que el 2008 no se preguntó si las personas habían ido a votar en la elección inmediatamente anterior, sino solo si estaban o no inscritas en los registros electorales.

¹³ Aunque en este documento se intenta usar sistemáticamente un lenguaje no discriminatorio mediante el uso recurrente de sustantivos epicenos y fórmulas neutras, los nombres de estas categorías, aunque aluden a todos los géneros, figuran en masculino para mantener la uniformidad con documentos anteriores del PNUD que han desarrollado tipologías similares.

GRÁFICO 4.14 Evolución de los tipos de involucramiento político, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

reducirse a menos de la mitad—, un leve aumento de los involucrados y un gran incremento de los fragmentados, que en una década pasaron de ser el grupo más pequeño al segundo mayor en el país.

De lo anterior se desprenden dos conclusiones relevantes para la democracia en Chile. La primera es la alta proporción de personas desafectadas, es decir que no se identifican ni participan políticamente. La estabilidad de este grupo en el decenio indica que el distanciamiento de la política obedece a problemas estructurales y de largo aliento, que ni las reformas recientes al sistema de partidos ni el surgimiento de nuevas fuerzas políticas han logrado revertir. Por otro lado, es sumamente relevante el incremento de los fragmentados, este grupo de personas que participan en acciones políticas y que al mismo tiempo experimentan una desafección con la política institucional. El crecimiento de este grupo es una de las principales transformaciones en las formas de involucramiento político en el país, y evidencia la consolidación de nuevas formas de acción colectiva.

La desigual distribución de la politización

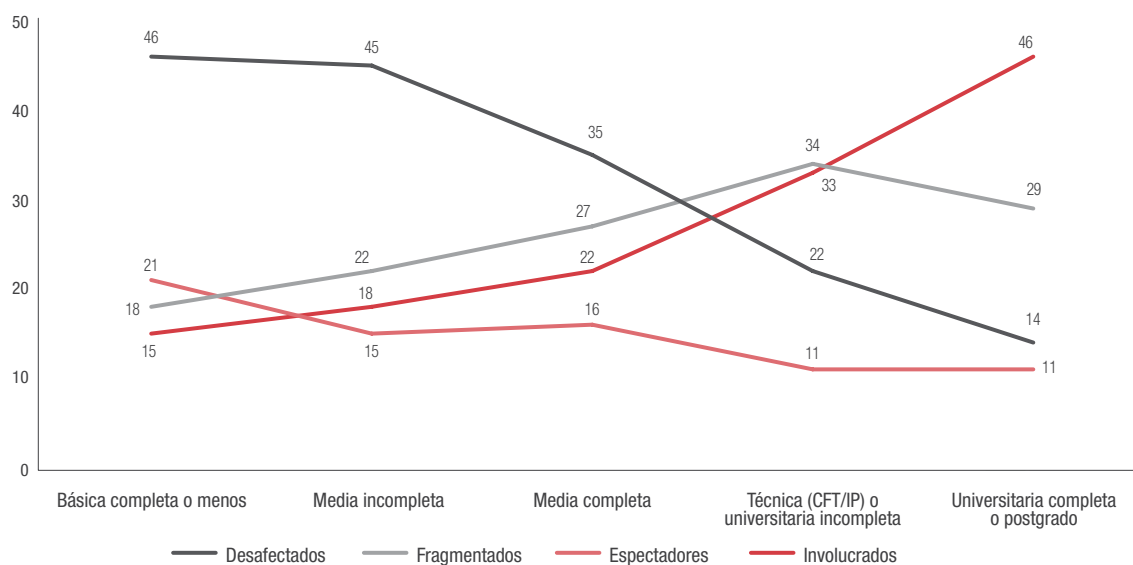
Como se ha descrito a lo largo de este capítulo, el involucramiento político está desigualmente distribuido

en Chile. Esta heterogeneidad se aprecia claramente al analizar la composición de los cuatro tipos de involucramiento. La diferencia más relevante corresponde al nivel educacional predominante en cada tipo, aunque también resultan importantes las diferencias de género. A continuación se describen, a partir de distintos modelos de regresión logística (no presentadas), a través de los cuales se controlaron para la encuesta ENAD del 2018 las variables que inciden en la probabilidad de pertenecer a cada uno de ellos, los perfiles sociodemográficos y políticos de los tipos de involucramiento político observados en Chile en 2018.

Desafectados

Este grupo reúne a quienes se encuentran más alejados de la política pues no se identifican y tampoco participan. Se compone principalmente de mujeres, de quienes tienen menor nivel educacional (especialmente educación media o menos), de quienes residen en las regiones del centro del país y de personas nacidas entre 1952 y 1958 (jóvenes durante el gobierno de la Unidad Popular y principios de la dictadura militar), entre 1966 y 1979 (jóvenes hacia fines de la dictadura y principios de la transición) y entre 1987 y 1993 (jóvenes durante

GRÁFICO 4.15 Tipología de involucramiento político por nivel educacional, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

las movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011). En general, tampoco participan en organizaciones sociales. Son quienes menos conversan de política todos los días, que más están de acuerdo con la idea de que los partidos solo sirven para dividir a la gente, y que menos ocupan Internet para informarse.

Fragmentados

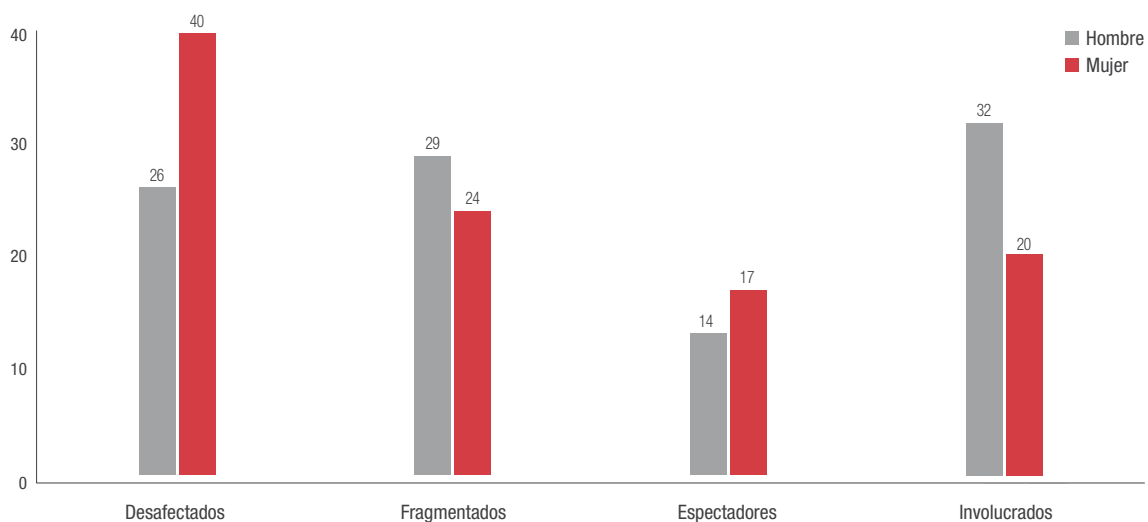
Por su novedad, porque supone una nueva forma de involucramiento político –personas políticamente activas pero distantes de la política institucional–, es un grupo muy poco estudiado. No solo no se identifican con partidos, sino que tampoco con posiciones políticas, pero ello no implica que sus acciones carezcan de sentido, sino que probablemente se orientan por marcos normativos e interpretativos no alineados con el eje político predominante durante el siglo XX, el de izquierda-derecha. Este alejamiento de las ideologías tradicionales puede traducirse en un comportamiento electoral volátil, poco predecible. El grupo está conformado principalmente por personas con un nivel educacional medio-alto (especialmente por quienes tienen educación técnica o universitaria incompleta) y por jóvenes (nacidos el año 2000 o después).

No se observaron diferencias significativas según sexo o nivel de asociatividad. Es importante destacar que entre 2008 y 2018 las personas que integran este grupo pasaron de haber realizado 1,4 acciones políticas en promedio a 2,2. De hecho, en la última medición, la mitad de ellas declaró haber participado en una huelga, el 42% en una marcha o manifestación y un 72% haber recolectado fondos para una causa social o política. En este grupo están las personas que menos se sienten orgullosas del funcionamiento de la democracia chilena, más piensan que la mayoría de los políticos solo son políticos por interés, y más preferirían ser representadas por un ciudadano común que por un político experimentado, tienen la peor percepción del funcionamiento de la justicia, menor confianza en los partidos y el Congreso, y mayor percepción de corrupción en ellas.

Espectadores

Este grupo lo integran personas que, pese a identificarse políticamente, no participan en acciones políticas: se comportan como espectadoras de lo que otros hacen. Su proporción aumenta a medida que disminuye el nivel educacional y se incrementa la edad (y aumenta

GRÁFICO 4.16 Tipología de involucramiento político por sexo, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

especialmente entre quienes nacieron en 1951 o antes). Predominan en la Región Metropolitana y entre quienes no pertenecen a ninguna organización social. Son quienes más ven noticias por TV todos los días, se sienten más orgullosos de la forma como funciona la democracia en el país y los segundos que más conversan de política todos los días, después de los involucrados.

Involucrados

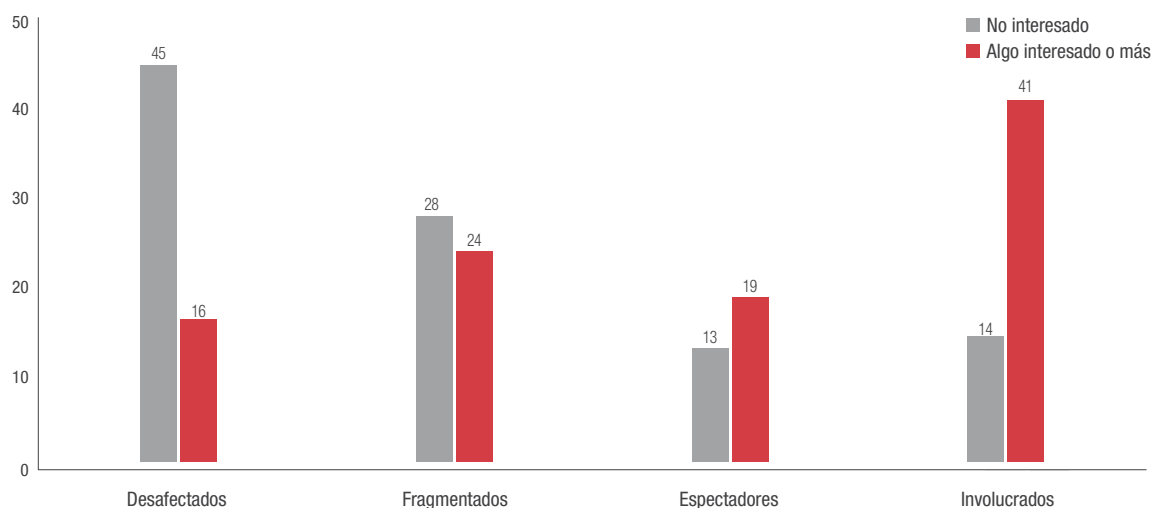
Agrupar a quienes no solo se identifican sino que también participan en política. A diferencia del grupo anterior, pueden canalizar sus demandas a través del sistema político. Son en mayor medida hombres, con mayor nivel educacional (particularmente, educación universitaria completa), residen en la Región Metropolitana y en el norte del país, y nacieron entre 1980 y 1986 (jóvenes durante los 2000) y entre 1959 y 1965 (jóvenes entre finales de los 70 y principios de los 80, es decir, durante las primeras movilizaciones sociales en dictadura). En general se interesan por la política y participan en mayor medida en organizaciones sociales. Entre 2008 y 2018, pasaron de participar en 2,1 acciones políticas en promedio a 2,5. Y en la última medición un 46% señaló haber participado en una huelga, el 53% en una marcha o manifestación, un

69% haber recolectado fondos y un 20% haber trabajado en una campaña electoral, más del doble que el promedio de la población (8%). Son quienes más usan todos los días las redes sociales o Internet para informarse de lo que pasa en el país. También son quienes más están de acuerdo con que los partidos son indispensables para la democracia, y tienen también mayor confianza en ellos y el Congreso.

De los datos previos surgen varios fenómenos relevantes. Primero, la gran desigualdad educativa que se observa en los tipos de involucramiento político. A medida que disminuye el nivel educacional aumentan los desafectados (casi la mitad de quienes tienen educación básica o menos está en este grupo), y a medida que se eleva crecen los involucrados (casi la mitad de quienes tienen educación universitaria completa está en este grupo). Los fragmentados también son más a medida que se incrementan los años de educación, pero, a diferencia de los involucrados, aquí predominan quienes tienen educación técnica o universitaria incompleta.

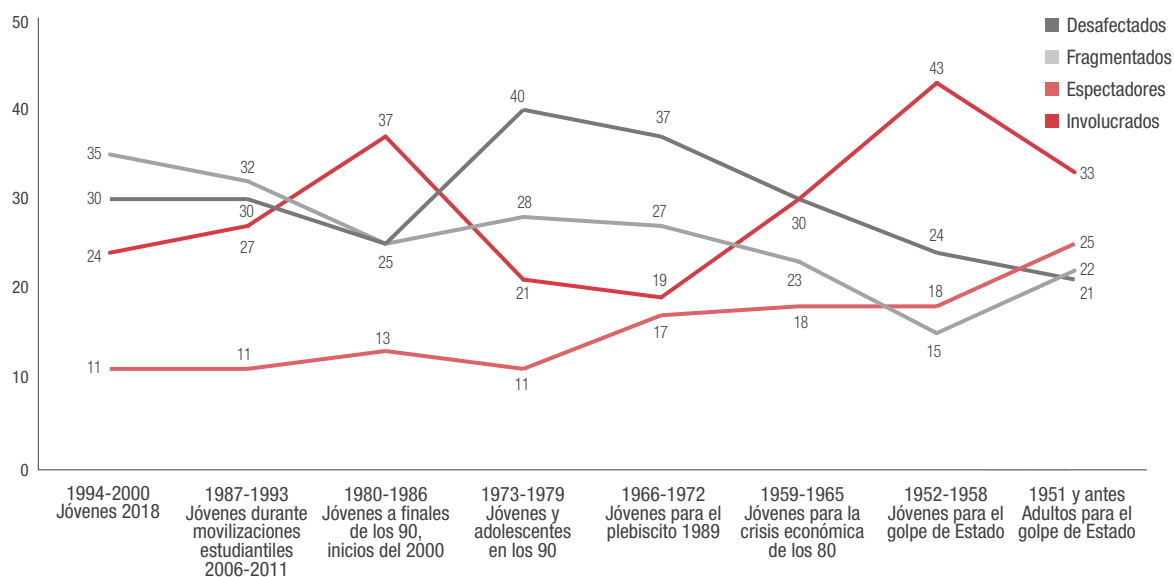
Los datos son coincidentes con la literatura sobre participación política, tanto nacional (Bargsted et al., 2017) como internacional (Gallego, 2007), que destacan sistemáticamente el hecho de que los grupos más educados son los que más participan en política. Más educación formal se asocia a mayores recursos cognitivos, de información y de

GRÁFICO 4.17 Tipología de involucramiento político por interés en la política, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

GRÁFICO 4.18 Tipología de involucramiento político por generación, 2018



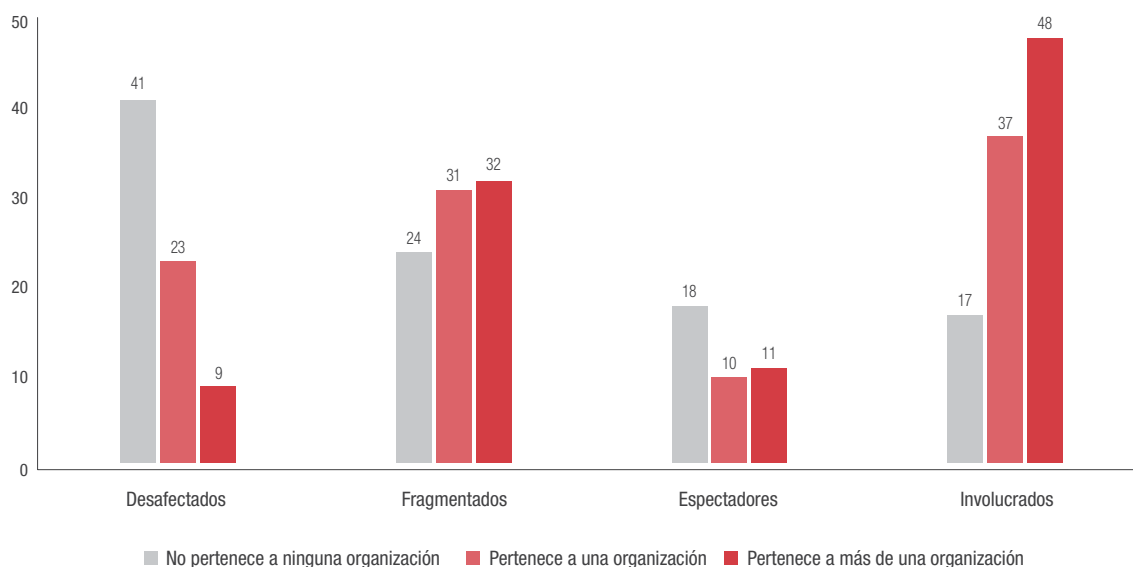
Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

percepción de influencia (eficacia), lo cual se traduce en un incremento de la motivación para participar en política. Además es consistente con la mayor participación electoral que se observa en los grupos socioeconómicamente más favorecidos (Corvalán y Cox, 2015; PNUD, 2017c), lo que refleja, en consecuencia, la fuerte desigualdad en la

voz política que caracteriza a la sociedad chilena (PNUD, 2017a, Bargsted et al., 2017).

Segundo, los tipos de involucramiento político presentan también importantes diferencias de género, especialmente en los extremos de la tipología. Mientras las mujeres

GRÁFICO 4.19 Tipología de involucramiento político por nivel de asociatividad, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

predominan entre los desafectados, los hombres son mayoría entre los involucrados. Este hallazgo es coincidente con los resultados de otras investigaciones sobre Latinoamérica (Espinal y Zhao, 2015) y otros países de la OCDE (Coffé y Bolzendahl, 2010), que postulan el menor involucramiento político de las mujeres en comparación con los hombres. Cabe destacar que la desafección de las mujeres se da en un contexto en que aumenta la proporción de mujeres en cargos de poder político (PNUD, 2020), las mujeres superan levemente a los hombres en participación electoral y en 2019 tuvo lugar la mayor marcha feminista desde el retorno a la democracia en Chile. Así, su predominio en el grupo de los desafectados se explica por su menor identificación política en comparación con los hombres, como se vio más arriba en este capítulo.

Finalmente, los resultados no permiten sostener que las personas más jóvenes son el grupo políticamente menos involucrado. El involucramiento parece depender, en cambio, del período histórico en que las personas fueron socializadas, es decir, de la generación a la cual pertenecen. No es casual que entre los desafectados predominen las personas que vivieron durante su juventud los costos de la politización (jóvenes para el golpe de Estado, nacidos entre 1952-1958), las generaciones cuyas expectativas asociadas a la democracia dieron paso a la desilusión (jóvenes para el plebiscito de 1989, nacidos entre 1966-1972) y las generaciones que eran jóvenes a principios de la transición (nacidos entre 1973-1979). Sin embargo, es también relevante que entre los fragmentados predominen las generaciones más jóvenes, que participan en acciones políticas pero no se identifican con la política institucional.¹⁴

¹⁴ Para una comparación entre narrativas generacionales, ver Frei (2015).

CONCLUSIONES

En este capítulo se mostró que, respecto del involucramiento político, en el período 2008-2018 Chile experimentó dos cambios en direcciones opuestas. Por una parte, aumentaron las personas que participan en distintos tipos de acciones políticas, y creció también el apoyo a estas acciones. Por otra, se expandió la desafección con la política institucional, lo que se expresa en el aumento de quienes no se identifican con partidos ni con posiciones políticas en el eje izquierda-derecha. Todo ello en un contexto de escasa asociatividad.

Lo anterior es parte de un proceso más amplio de repolitización de la sociedad chilena, que ha transformado las formas de involucramiento político predominantes hasta hace algunos años en el país, y que viene a superar períodos de mucha apatía, como la década de 1990. A diferencia de otros procesos de politización en el pasado (décadas de 1960 y 1970), el actual se caracteriza por ocurrir al margen —e incluso en contra— de la política institucional. Además, la repolitización no es un fenómeno transversal sino que se concentra en grupos específicos de la sociedad. Por ello la desigualdad política es otro de sus atributos centrales.

Esta repolitización se expresa en el declive de los *espectadores* y en el leve aumento de los *involucrados*, pero

sobre todo en el incremento de los *fragmentados*, un grupo políticamente activo pero distante de la política institucional. La irrupción de los *fragmentados* constituye una de las principales novedades de la democracia chilena en el período 2008-2018, y una clara evidencia del cambio en las formas de involucramiento político en el país.

Junto a estos cambios, se mantienen otros rasgos presentes en la sociedad chilena a inicios del período. Es el caso de los *desafectados*, un grupo que refleja un fenómeno de larga data en el país (Salazar, 2012).

El cuadro descrito manifiesta la dificultad de la institucionalidad política actual (incluidos los nuevos partidos políticos) para sintonizar con la ciudadanía, procesar las demandas sociales y alcanzar un funcionamiento político que integre distintas visiones y genere espacios efectivos de participación. Es probable que detrás de estos cambios en las formas de involucramiento político esté la demanda por nuevas formas de representación política. Entender y conectar con las nuevas formas de involucramiento político constituye no solo un desafío para el sistema político en su conjunto, sino también un aspecto clave en la búsqueda de una democracia más sólida e inclusiva.

5.

**BRECHAS Y CAMBIOS EN
LA VALORACIÓN DE LA
DEMOCRACIA EN CHILE**

En el Capítulo 1 se analizó la valoración ciudadana de la democracia chilena a través de varios indicadores tradicionalmente utilizados para este propósito. Las tendencias revelan que, durante el período estudiado, la democracia en Chile enfrentó un conjunto de tensiones. Por una parte, si bien entre 2008 y 2012 aumentó la proporción de quienes la prefieren como forma de gobierno, luego esa preferencia experimentó una baja sostenida. A pesar de lo anterior, el apoyo a la democracia es mayor en 2018 que en 2008. Al mismo tiempo, aumentó la evaluación negativa de su funcionamiento y, en comparación con la medición del 2010, el año 2018 muestra una importante disminución de quienes consideran que Chile será muy democrático en 10 años más. Además, se aprecia una leve pero significativa disminución del porcentaje de personas que considera muy importante vivir en una sociedad democrática.

Finalmente, una de cada cinco personas considera que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a uno democrático, proporción que se ha mantenido prácticamente inalterada durante todo el período y es una de las más altas de América Latina.

En este capítulo se aborda nuevamente la valoración de la democracia en Chile, observando ahora cómo varía

entre grupos sociales y políticos, y según los niveles de confianza institucional, variables culturales y formas de involucramiento político. Se explora, así, la valoración de la democracia a la luz de variables clave en la descripción de la fisonomía del país, y de las transformaciones en el decenio 2008-2018: caída de la confianza institucional (Capítulo 2), acelerado cambio cultural (Capítulo 3) y transformaciones en el involucramiento político (Capítulo 4). Para ello se utilizan los cuatro indicadores descritos en el Capítulo 1: legitimidad del régimen democrático, evaluación de su funcionamiento, optimismo o pesimismo sobre cuán democrático será el país en 10 años más e importancia asignada a vivir en un régimen democrático.¹

Se estructura en tres secciones. En la primera se analiza la valoración de la democracia en función de las variables sociopolíticas utilizadas a lo largo de este Informe. En la segunda se replica este análisis considerando los cambios en la confianza institucional, las orientaciones valóricas y los tipos de involucramiento político. Para ambas secciones se realizó un conjunto de regresiones logísticas y multinomiales (no presentadas) con el objetivo de determinar qué variables resultan más determinantes para la valoración de la democracia. En la sección final se plantean los desafíos que enfrenta la democracia chilena a partir de los hallazgos de este Informe.

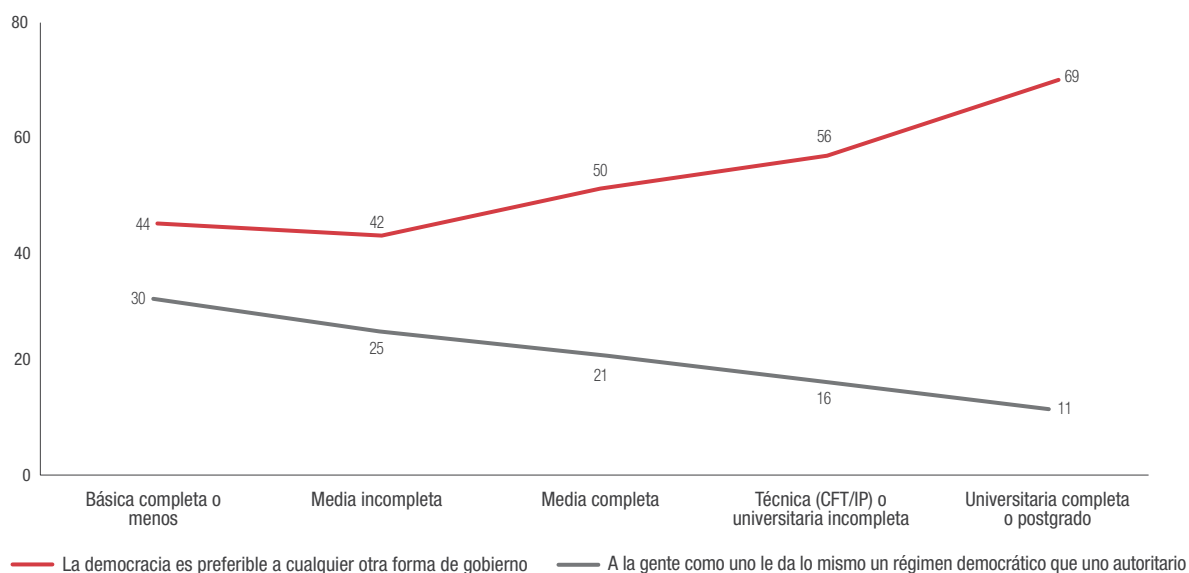
¹ El primero de estos indicadores explora la legitimidad del régimen a través del acuerdo o desacuerdo con las frases “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, “a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático o uno autoritario”. El segundo indicador examina la evaluación del funcionamiento de la democracia que hacen las personas mediante la pregunta “¿qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que funciona la democracia en Chile?”. El análisis se centra en aquellos que responden “mal” y “muy mal”. El tercer indicador corresponde a la pregunta “¿qué tan democrático cree que será Chile en 10 años más?”, en una escala de 1 a 10 donde 1 es “para nada democrático” y 10 “muy democrático”. El cuarto indicador corresponde a la pregunta “¿qué tan importante es para usted vivir en una sociedad democrática?”, en una escala de 1 a 10 donde 1 es “nada importante” y 10 “absolutamente importante”. En estos últimos dos casos, el análisis se centra en aquellos que se situaron entre el 7 y el 10.

VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN TÉRMINOS SOCIOPOLÍTICOS

En esta sección se analiza la variación de los cuatro indicadores utilizados para medir la valoración de la democracia según diferencias sociales y políticas. Específicamente se considera el nivel educacional, el sexo, la adhesión religiosa, la generación a la que pertenecen las personas, así como la variación en función de la identificación con alguna posición en el eje izquierda-derecha. Esta diferenciación permite identificar quiénes valoran más y menos la democracia en Chile y cómo ha cambiado este panorama en la última década.

Los cuatro indicadores de valoración de la democracia correlacionan entre sí de manera moderada pero significativa. Así, por ejemplo, quienes valoran la democracia tienden a considerar más importante vivir en una sociedad democrática, son más optimistas sobre el futuro de la democracia y evalúan mejor su funcionamiento. A pesar de ello se observan diferencias importantes entre distintos grupos de la sociedad.

GRÁFICO 5.1 Legitimidad de la democracia según nivel educacional, 2018



Nota: Se omiten porcentajes de quienes responden "en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático" y de quienes no saben o no responden.

Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, 2018.

Dimensión social

La legitimidad de la democracia tiene una fuerte correlación con el nivel educacional. En el Gráfico 5.1 se aprecia que a medida que aumenta la educación recibida hay una mayor preferencia por la democracia. Y a la inversa, a medida que disminuye aumentan quienes se muestran indiferentes al tipo de régimen. Este patrón se ha mantenido inalterable entre 2008 y 2018. No hay diferencias por nivel educacional entre quienes están de acuerdo con la afirmación “en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” (no graficado).

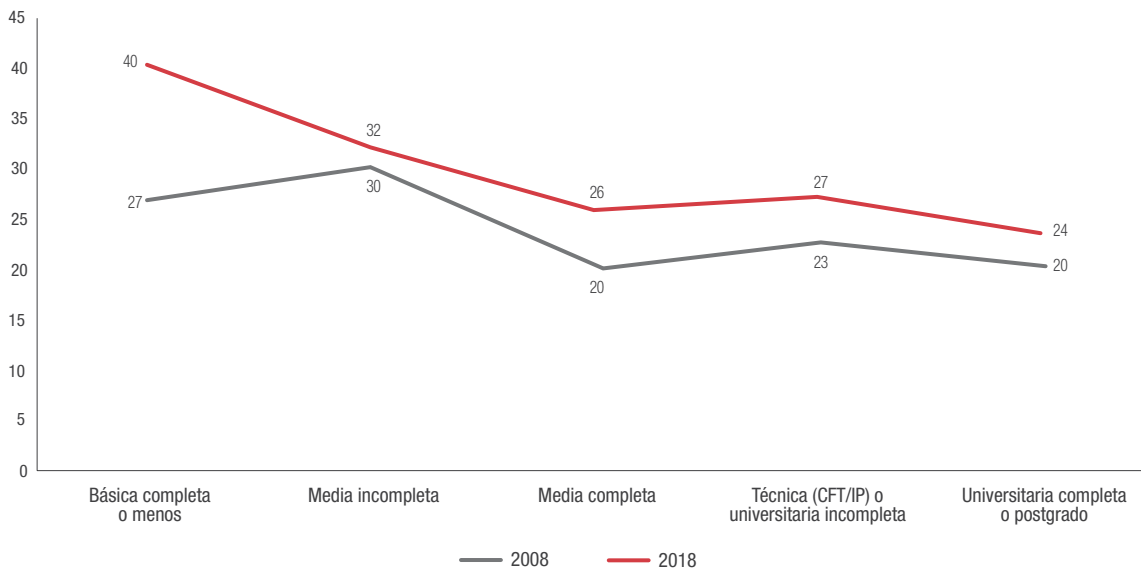
A medida que disminuye el nivel educacional también baja la proporción de personas para quienes es importante vivir en una sociedad democrática. En la escala de 1 a 10 donde uno es nada importante y diez absolutamente importante, un 78% de quienes tienen educación universitaria completa o más marcó entre 7 y 10, cifra que desciende a un 54% en las personas con educación básica o menos. Asimismo, quienes tienen mayor nivel educacional son más optimistas respecto del futuro de la democracia. No obstante, ese optimismo ha caído en los últimos años, fenómeno que se describió en términos generales en el Capítulo 1. En efecto, si el 2008 un 57%

de las personas con mayor educación pensaban que el país iba a ser muy democrático en el futuro (respondían con valores 7 a 10 en la escala), en 2018 esa cifra cae a un 44% en el mismo grupo.

La evaluación del funcionamiento de la democracia también se asocia a la educación formal recibida, pero ahora en un sentido inverso: a medida que disminuye el nivel educacional aumenta la proporción de personas que evalúa que la democracia funciona mal o muy mal en el país. Esta tendencia, como se observa en el Gráfico 5.2, se ha acentuado en la última década: aumenta de manera significativa la mala evaluación del funcionamiento de la democracia entre quienes tienen educación básica o menos (+13 puntos porcentuales).

En suma, los datos muestran que las personas con menor educación, característica que en este Informe se usa como una variable *proxy* de menor nivel socioeconómico, legitiman menos la democracia como forma de gobierno, otorgan menos importancia a vivir en este tipo de régimen, son menos optimistas respecto del futuro de la democracia y evalúan peor su desempeño en el país. Cabe recordar que, desde el retorno de la democracia en Chile, en el imaginario ciudadano esta forma de gobierno

GRÁFICO 5.2 Proporción de personas que evalúan mal o muy mal el funcionamiento de la democracia en Chile según nivel educacional, 2008 y 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

se ha asociado con mayor igualdad y justicia social (ver recuadro). No resulta extraño, entonces, que los grupos menos favorecidos por el modelo de desarrollo evalúen su funcionamiento no solo a la luz de sus mecanismos formales –como la existencia de elecciones libres y justas–, sino desde la perspectiva de promesas, muchas veces incumplidas, de inclusión y justicia social.

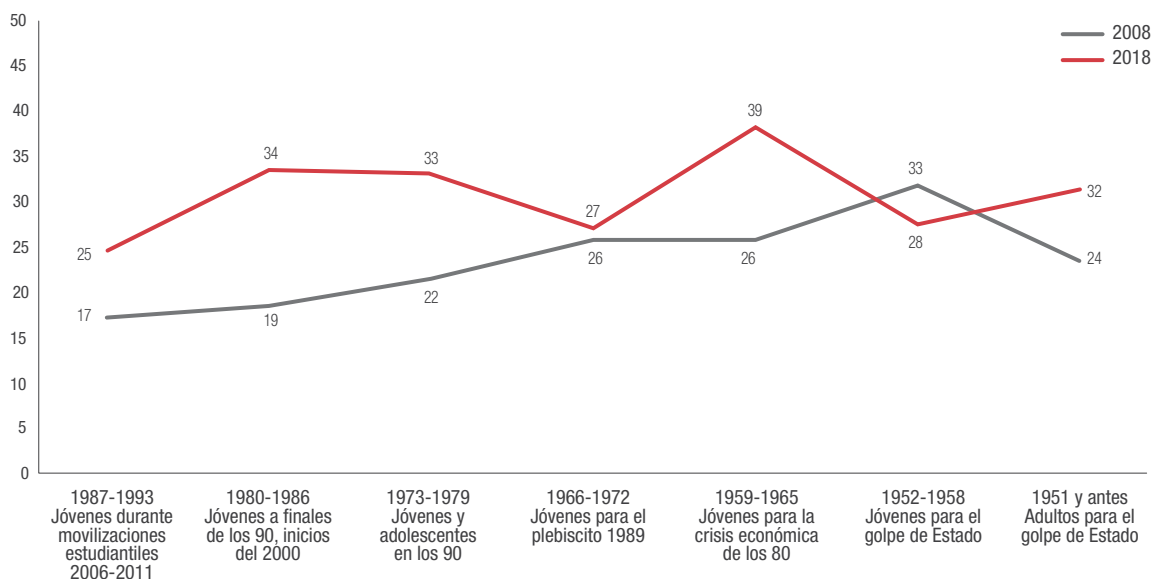
En términos generacionales, en 2018 no se observan diferencias significativas en la legitimidad de la democracia ni en la importancia de vivir en ella. Donde sí se aprecian diferencias es en las expectativas futuras y en la evaluación del funcionamiento de la democracia actual. Las generaciones más jóvenes se declaran más optimistas sobre qué tan democrático será Chile en 10 años más. Por ejemplo, la generación de quienes eran jóvenes para la “revolución pingüina” y las movilizaciones estudiantiles del 2011 (nacidos entre 1987 y 1993) promedia 6,3 en una escala de 1 a 10 donde 1 es “nada democrático” y 10 “muy democrático”, mientras que la generación que era adulta para el golpe de Estado (nacidos en 1951 o antes) promedia un 5,7. En el período, la generación cuyo optimismo más disminuye es la de quienes eran jóvenes durante la crisis económica de los ochenta (nacidos entre

1959 y 1966), que pasa de un promedio de 6,1 en 2008 a 5,6 en 2018.

En la evaluación del funcionamiento de la democracia, se observa en el Gráfico 5.3 que aquellas personas que lo evalúan mal o muy mal aumentan en más de 10 puntos porcentuales entre quienes nacieron entre 1973 y 1986 (jóvenes en las décadas de 1990 y 2000) y entre quienes crecieron en torno a la crisis económica a principios de los ochenta. Este último grupo es el que peor evalúa el funcionamiento de la democracia en el presente, siendo una generación que experimentó con fuerza la lucha por su recuperación –crecieron en torno a las protestas contra la dictadura durante 1983 y 1986–, así como las distintas formas de desilusión frente a las debilidades de la transición chilena.

Respecto de las diferencias entre hombres y mujeres en la década estudiada, se observa que los hombres aumentaron su preferencia por un régimen democrático, pasando de un 43% a un 55%, al tiempo que aumentó de 15% a 20% la proporción de mujeres que en algunas circunstancias prefieren un gobierno autoritario. No obstante, si bien al año 2018 se aprecia que los hombres

GRÁFICO 5.3 Porcentaje de personas que evalúa que la democracia en Chile funciona mal o muy mal según generaciones, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuestas Auditoría a la Democracia, años respectivos.

DEMOCRACIA, JUSTICIA SOCIAL Y ELECCIONES

Las encuestas del PNUD han consultado, irregularmente, sobre el significado de la palabra “democracia”. Así, el año 1999 la encuesta del Informe sobre Desarrollo Humano preguntó qué es lo más importante para que exista democracia en Chile (PNUD, 2002). Más de un tercio (37%) de las personas encuestadas respondió “justicia social”, le siguió “ley y orden” con un 26% y en tercer lugar “elecciones regulares” con 18%.

Quince años después, en la misma serie de encuestas del Informe sobre Desarrollo Humano en Chile (PNUD, 2015a) se preguntó qué características son esenciales para que una sociedad sea verdaderamente democrática. Nuevamente, la justicia social apareció en primer lugar (46%), seguida por la libertad de expresión (36%) y elecciones libres (11,6%).

Más tarde, la encuesta Auditoría a la Democracia 2016 consultó a través de una pregunta abierta las razones tras las evaluaciones sobre el funcionamiento de la democracia. Para el 40% que consideró que la democracia en Chile funcionaba “mal” o “muy mal” la primera razón era la desigualdad (18%), seguida por el hecho de que no se considere la opinión ciudadana, la ausencia de derechos de ciudadanía, la corrupción, la desconfianza

y la inseguridad (todas con menciones en torno al 16%). Así, si bien las preguntas son diferentes y no es posible establecer una comparación estricta, se observa un patrón: la evaluación que hacen chilenas y chilenos de la democracia se relaciona con la justicia social, lo que sugiere que su evaluación negativa del funcionamiento de la democracia en el país se asocia en gran medida con la elevada desigualdad que lo caracteriza (ver PNUD, 2017a).

No siempre fue así. Por ejemplo, en una encuesta de FLACSO-Chile de 1988, poco antes del plebiscito, la mayoría identificaba la democracia con elecciones regulares (42%). Bastante más atrás aparecía la justicia social (19%). Pero a medida que se consolida el sistema democrático el sentido de la democracia cambia (PNUD, 2000), y no puede ya entenderse exclusivamente como la elección periódica de representantes, del modo como se concebía en el pasado. Es más –y así lo ha sostenido consistentemente el PNUD–, la democracia debe avanzar hacia una forma de organización de la sociedad que promueva la expansión de la ciudadanía social, civil y política, que reconozca y garantice el conjunto de derechos que hacen posible el ejercicio ciudadano; es decir, pasar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanía (PNUD, 2004).

prefieren la democracia en una mayor proporción que las mujeres, esta diferencia desaparece al ser controlada estadísticamente por otras variables.

En términos de adscripción religiosa, las personas que se declaran evangélicas prefieren menos la democracia como forma de gobierno, en comparación con personas de otras confesiones y con quienes no se identifican con ninguna religión, y señalan en mayor proporción que les da lo mismo un régimen democrático o uno autoritario. A la inversa, quienes no se identifican con ninguna religión prefieren más la democracia y, consecuentemente,

son menos indiferentes al tipo de gobierno. Este patrón es similar al observado en 2008.

Dimensión política

La identificación con una posición política también se relaciona fuertemente con la legitimidad que las personas le asignan a la democracia. Quienes se identifican con la derecha o la centroderecha adhieren en menor proporción a la democracia como mejor forma de gobierno, y

consideran en mayor medida que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Lo inverso sucede con las personas que se identifican con la izquierda o la centroizquierda (Gráfico 5.4). El mismo patrón se registró en la medición de 2008.

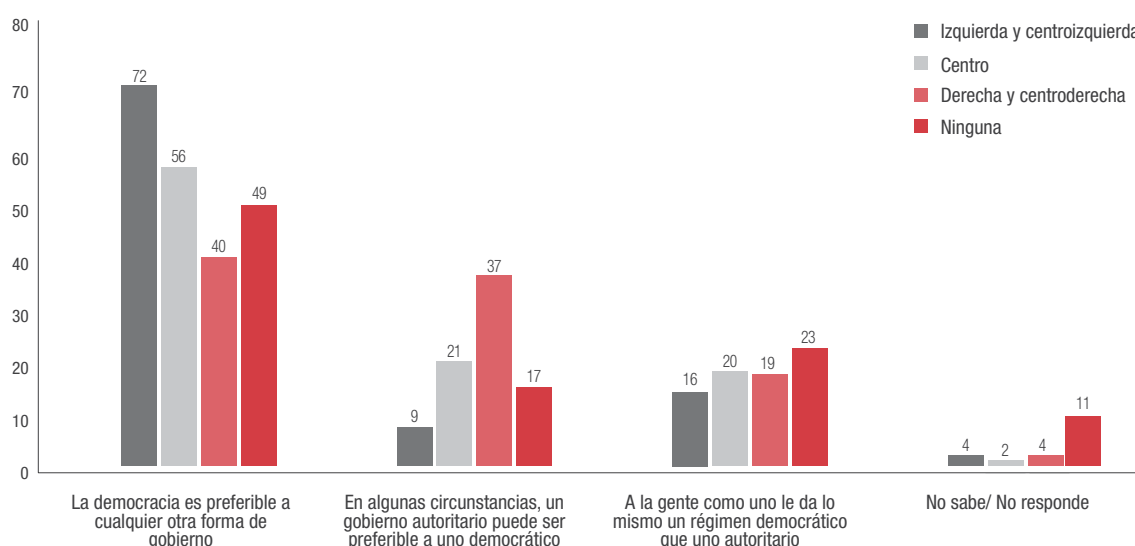
La identificación política también se relaciona con la importancia otorgada a vivir en una sociedad democrática. En la medición de 2018, un 82% de quienes se identifican con la izquierda o centroizquierda asignó un puntaje entre 7 y 10 en la escala, proporción que disminuye a un 62% entre las personas que se identifican con la derecha o centroderecha, y a un 57% entre quienes no se identifican con ninguna posición.

A pesar de lo anterior, quienes se identifican con la derecha y la centroderecha son más optimistas respecto del futuro de la democracia que las personas que se identifican con la izquierda o centroizquierda. Así, en 2018 las primeras promedian 6,2 y las segundas 5,8 en la escala de 1 a 10. La situación difiere de la observada en la medición de 2008, donde no se registraban diferencias en los promedios de ambos grupos. Esta brecha emergente en los grados de optimismo sobre el futuro de la democracia es producto de la importante disminución (de un 52% a un 37%) de la proporción de personas de izquierda o centroizquierda que respondieron valores entre 7 a 10.

Respecto de la evaluación del funcionamiento de la democracia, quienes se identifican con la izquierda o centroizquierda o no se identifican con ninguna posición política evalúan en una proporción mayor que la democracia funciona mal o muy mal (32% en ambos casos), respecto de aquellos que adhieren a la derecha o centroderecha. Entre los adherentes a la izquierda o centroizquierda el porcentaje aumentó de 16% a 32% en el decenio.

En síntesis, respecto de las dimensiones sociopolíticas al año 2018, quienes más prefieren un régimen democrático son las personas más educadas, las que no se identifican con ninguna religión y las que se identifican con la izquierda o la centroizquierda. A su vez, quienes consideran más importante vivir en una sociedad democrática son las personas con mayor educación y quienes se identifican con la izquierda o la centroizquierda. En términos del optimismo respecto de la democracia dentro de 10 años, destacan las personas más jóvenes, las que tienen mayor educación y aquellas que se identifican con la derecha o la centroderecha. Finalmente, quienes peor evalúan el funcionamiento de la democracia son las personas nacidas entre 1959 y 1965 (jóvenes durante la crisis económica de los ochenta y las protestas contra la dictadura), quienes tienen menor educación, quienes no se identifican con ninguna religión, las personas evangélicas y quienes se identifican con la izquierda o la centroizquierda.

GRÁFICO 5.4 Legitimidad de la democracia según posición política, 2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA SEGÚN CONFIANZA INSTITUCIONAL, VARIABLES CULTURALES E INVOLUCRAMIENTO POLÍTICO

En los capítulos anteriores se analizó la evolución de varios aspectos clave para la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible: confianza en instituciones, cambios culturales y nueva ciudadanía, y formas de involucramiento político. En esta sección se relacionan las principales variables de esos análisis con los cuatro indicadores de valoración de la democracia recién descritos, controlando estadísticamente por la influencia de variables sociopolíticas y territoriales (modelos de regresión no presentados).

Un primer resultado es que la confianza institucional ha dejado de ser relevante para la valoración de la democracia, pues en todos los grupos sociales se ha extendido notoriamente la desconfianza en el conjunto de las instituciones políticas. En otras palabras, la confianza institucional no hace diferencia en la probabilidad de que una persona apoye o no el sistema democrático. En particular, en 2018 la confianza no se correlaciona con el apoyo a la democracia, ni con la importancia que se atribuye a vivir en democracia, ni con el pesimismo ni con la evaluación del funcionamiento de la democracia. La excepción es la confianza en los tribunales de justicia, que muestra una correlación positiva, aunque débil, con la probabilidad de que las personas apoyen el sistema democrático. Además, quienes más confían en la justicia evalúan mejor el funcionamiento de la democracia en el país.

Como se vio en el Capítulo 2, la caída generalizada en la confianza institucional no se ha traducido en una

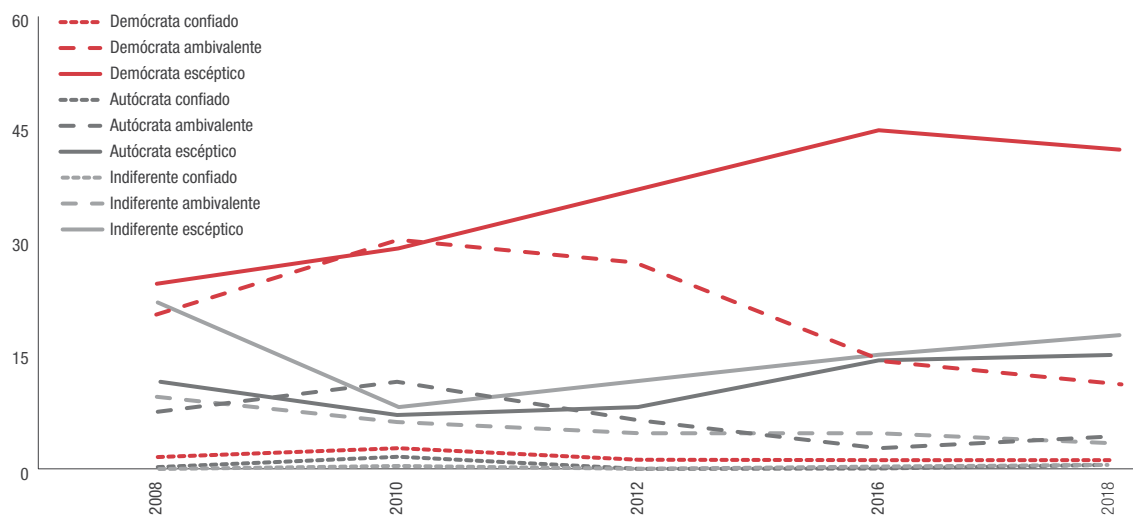
reducción similar del apoyo al régimen democrático en abstracto, y una buena parte de la ciudadanía valora la democracia a pesar de desconfiar de las instituciones. Un análisis conjunto de los datos de confianza institucional y de apoyo a la democracia ayuda a ilustrar este punto. Para ello se construyó una tipología de nueve categorías a partir de dos variables: legitimidad de la democracia y confianza en instituciones políticas.

Se dividió a las personas en *demócratas* si consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, *autócratas* si opinan que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible a uno democrático e *indiferentes* si afirman que les da lo mismo cualquiera de los dos. Por otra parte, se les adjetivó como *confiados* si declaran confiar mucho o bastante en las cuatro instituciones centrales del sistema democrático (gobierno, Congreso, partidos políticos y tribunales de justicia), *escépticos* si no confían en ninguna de las cuatro y *ambivalentes* si confían en alguna(s) pero no en todas.² En conjunto ello construye la tipología de nueve posiciones que se observa en el Gráfico 5.5.

Se aprecia que en estos diez años no se ha producido un desplazamiento de la población hacia posturas autocráticas, las que permanecen, en el agregado, en niveles similares a los del inicio del período. Sin embargo, se observa un aumento importante del grupo de los *demócratas escépticos*, esto es, personas que apoyan el sistema democrático pero

² La tipología se inspira en la taxonomía propuesta por Dalton y Shin (2014), que categoriza a las personas en cuatro grupos: *demócratas leales*, *autócratas leales*, *demócratas insatisfechos* y *autócratas insatisfechos*. Se agregó la categoría *indiferentes* y se etiquetaron las categorías de confianza como *confiados*, *ambivalentes* o *escépticos*, pues la falta de confianza no equivale necesariamente a insatisfacción con el régimen democrático. Ver nota 13 en Capítulo 4 sobre la categorización con palabras de género masculino.

GRÁFICO 5.5 Tipología de ciudadanas y ciudadanos según apoyo a la democracia y confianza institucional, 2008-2018



Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia, años respectivos.

no confían en ninguna de sus instituciones centrales. Esta categoría pasa de un 25% en 2008 a un 43% en 2018, y su incremento se produce principalmente a costa de los *demócratas ambivalentes*, que descienden de 21% a 12%.

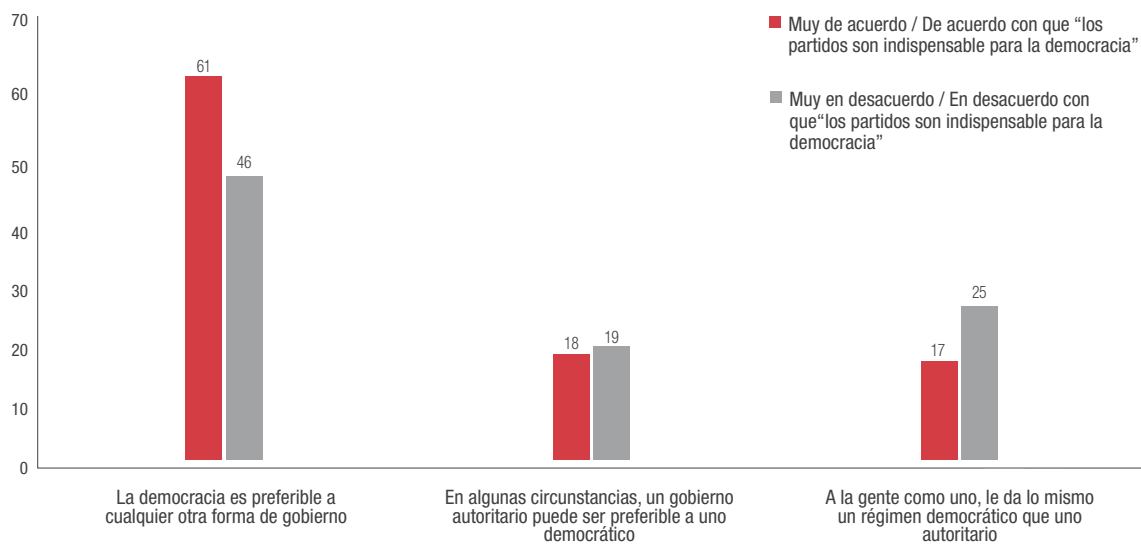
Estos resultados confirman el “*ethos* republicano” que se describe en el Capítulo 2 y que se expresa en la valoración abstracta de las instituciones democráticas. En efecto, tanto las personas que concuerdan con que los partidos políticos son indispensables para la democracia como aquellas que creen que la forma como uno vota puede influir en lo que pasa en el país prefieren en mayor proporción el régimen democrático, valoran más vivir en una sociedad democrática, son más optimistas respecto del futuro de la democracia y tienen una mejor evaluación del funcionamiento del régimen. La situación es similar en las mediciones anteriores, y se confirma tras controlar por distintas variables sociopolíticas y territoriales.

A modo de ejemplo, en la medición del 2018 quienes están de acuerdo con que los partidos políticos son indispensables para la democracia superan en 15 puntos porcentuales su valoración de la legitimidad del régimen democrático en comparación con aquellas personas que están en desacuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (Gráfico 5.6). En el

caso de la importancia asignada a vivir en una sociedad democrática, un 73% de las personas que están de acuerdo con que los partidos políticos son indispensables para la democracia otorga los valores más altos (7-10), mientras que quienes están en desacuerdo solo lo hacen en un 61%. A la vez, quienes están de acuerdo con que los partidos son indispensables para la democracia tienen una mejor evaluación del funcionamiento de esta: solo en un 22% señalan que la democracia en Chile funciona mal o muy mal, proporción que sube al doble (44%) entre quienes no están de acuerdo con la primera afirmación.

Las variables que describen la posición de las personas en temas culturales y valóricos también presentan relaciones significativas con la evaluación que hacen de la democracia. Las personas que justifican el matrimonio entre personas del mismo sexo y/o el aborto tienen más probabilidad de apoyar el sistema democrático y considerar importante vivir en él. El índice de valoración de la inmigración aparece también como una variable particularmente relevante para estudiar la relación entre aspectos culturales y apreciaciones sobre la democracia: quienes tienen una mirada positiva o muy positiva de la inmigración tienden a preferir el régimen democrático por sobre cualquier otro, a considerar importante vivir en una sociedad democrática y a afirmar que la democracia

GRÁFICO 5.6 Legitimidad de la democracia según grado de acuerdo con que los partidos políticos son indispensables para la democracia, 2018



Nota: El 100% se completa con quienes no saben o no responden en ambas preguntas.

Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

en Chile funciona bien o muy bien. Quienes tienen opiniones negativas sobre la migración tienen visiones contrarias en todas estas variables. Al igual que en el caso de las variables de confianza, ninguna aparece relacionada con el pesimismo respecto del futuro de la democracia.

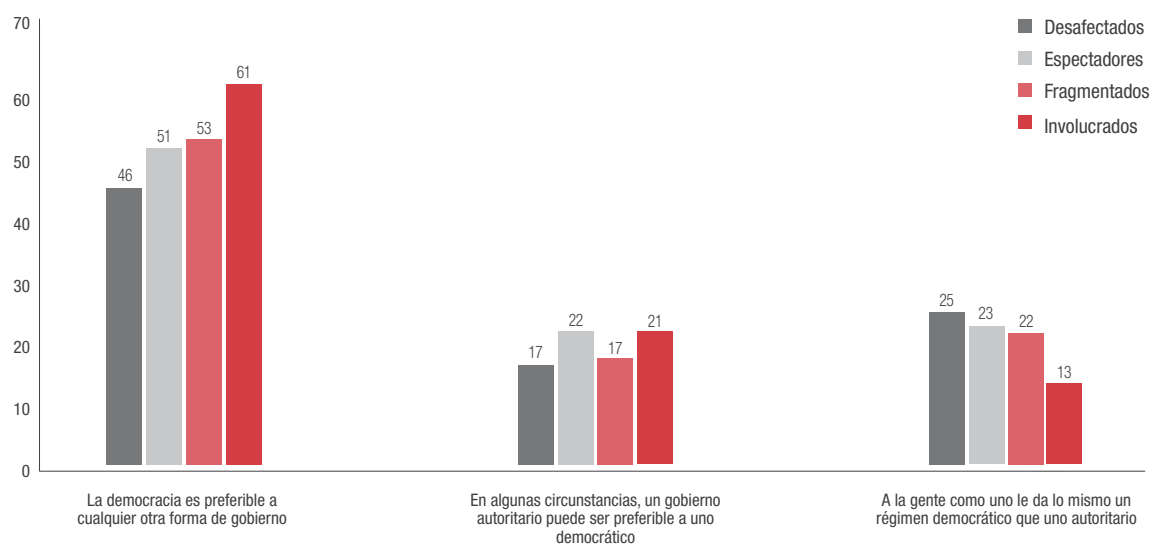
La valoración de la democracia también presenta importantes diferencias según los tipos de involucramiento político de las personas. Los *involucrados*, es decir, quienes se identifican con una posición y/o partido político y que han realizado al menos una acción política, prefieren en una mayor proporción un régimen democrático y son menos indiferentes entre un régimen autoritario o uno democrático. A la inversa, los *desafectados* –no se identifican ni participan políticamente– prefieren en menor proporción la democracia y se declaran en mayor medida indiferentes frente al régimen de gobierno (Gráfico 5.7).

El grupo de los *involucrados* es el que considera más importante vivir en una sociedad democrática (un 76% marca los valores más altos de la escala), mientras que los *fragmentados* son quienes menos señalan los valores más altos (59%). Este último grupo es también el menos optimista respecto del futuro de la democracia en Chile (solo un 34% declaró los valores más altos en esta variable). Los *espectadores*, por su parte, son quienes

evalúan menos negativamente el funcionamiento de la democracia en el país: solo un 24% señaló que funcionaba mal o muy mal (en comparación con el 32% de los *desafectados*).

Cabe destacar que el grupo de los *fragmentados* aumenta claramente su preferencia por la democracia entre 2008 y 2018, de 36% a 53%. El dato muestra que la valoración de la democracia posee sobre todo una connotación normativa y que no depende de la identificación política (en términos del eje izquierda-derecha). Sumado a la relación descrita al inicio de esta sección entre la valoración abstracta de la democracia, de los partidos políticos y de las elecciones, sugiere que en Chile la ciudadanía mantiene una reserva estable de valoración de las instituciones democráticas, que trasciende las evaluaciones negativas sobre su desempeño y confiabilidad en el presente. También muestra que en sectores politizados pero *desafectados* del sistema institucional la democracia es también un anhelo por construir, una expresión de deseo, independientemente de la forma en que funcione en la actualidad. Los cambios culturales descritos apuntan a la misma dirección: el tránsito hacia representaciones y valores más igualitarios y liberales experimentado por la sociedad chilena tiende a fortalecer la valoración de la democracia. No obstante, ello se produce en un contexto

GRÁFICO 5.7 Legitimidad de la democracia según tipos de involucramiento político, 2018



Nota: Para completar el 100% faltan quienes no saben o no responden.

Fuente: Elaboración del PNUD a partir de encuesta Auditoría a la Democracia 2018.

de creciente polarización cultural que podría dificultar la resolución de disputas en temas valóricos.

En síntesis, en la última década ha aumentado la proporción de *demócratas escépticos*, personas que valoran la democracia pero no confían en el funcionamiento de las instituciones políticas. Esta valoración se acompaña de una apreciación positiva de los mecanismos formales de la democracia –como el voto y la existencia de partidos políticos– y de acelerados cambios culturales que han hecho de Chile un país más igualitario, tole-

rante y respetuoso de las libertades individuales de lo que era a inicios del período. Incluso quienes menos se involucran con el funcionamiento de las instituciones políticas, y menos se identifican con los partidos políticos o con el eje izquierda-derecha, como el grupo de los *fragmentados*, hoy valoran más la democracia. Lo que está en cuestión, entonces, no parece ser el apego normativo a un tipo de régimen de gobierno, a un ideal colectivo, sino fundamentalmente la forma concreta en que la democracia representativa y sus instituciones han funcionado en las últimas décadas en el país.

DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA EN CHILE

Durante el decenio 2008-2018 las autoridades políticas implementaron un conjunto de reformas con el propósito de enfrentar algunos de los problemas institucionales del sistema político. Buscaban mejorar el sistema de registro electoral y frenar la caída en la participación electoral, la escasa competencia y la distorsión en la representación que generaba el sistema binominal de representación parlamentaria –sesgado en beneficio de las grandes coaliciones y en desmedro de fuerzas políticas de menor tamaño–, así como la opacidad del sistema de financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. La falta de transparencia no solo abría la puerta a la colusión entre intereses privados con capacidad de financiar la política (lo que en la última década motivó sendos escándalos, con impacto en la opinión pública y ramificaciones judiciales), sino a dinámicas de funcionamiento interno en los partidos altamente centralizadas, que reproducían estructuras tradicionales de poder, atentaban contra la inclusión de mujeres y dificultaban la renovación generacional de los liderazgos.

Las reformas permitieron aumentar la competencia electoral, abrir progresivamente el sistema político a nuevos actores y mujeres, y con ello ir renovando el Congreso. Mejoraron las condiciones en que los partidos políticos pueden funcionar como entidades públicas, a cambio de mayor transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de sus finanzas y funcionamiento interno. Las dinámicas para organizar campañas electorales se modificaron de manera significativa. Cambiaron numerosas reglas del juego político-electoral, y se aumentaron las facultades y los recursos para que el Servicio Electoral asumiera, por primera vez en la historia del país, la fiscalización de la actividad política y electoral. Se comenzó también un disputado proceso de discusión sobre una nueva reforma constitucional (ver recuadro).

Todas estas transformaciones han tenido efectos esperados y deseados, pero también otros imprevistos o cuestionados. La reforma del sistema de inscripción y obligatoriedad del voto –que convirtió al voto en voluntario en vez de obligatorio– contribuyó a profundizar el sesgo socioeconómico en la participación electoral, reduciéndose especialmente en los segmentos socioeconómicos bajos. Asimismo, y a pesar de lo que muchos esperaban, no logró aumentar sustantivamente la participación electoral de los jóvenes (PNUD, 2017c). Los cambios en la representación política, si bien trajeron consigo una mayor competencia y la disminución de barreras de entrada, también dieron pie a una mayor fragmentación y fortalecieron la tendencia a la individualización de la política.

Así, las reformas han tenido resultados dispares: en algunos casos han representado un avance, y en su conjunto no han debilitado la valoración de la democracia. La comparación de los niveles de apoyo y legitimidad de ese régimen en Chile con los del resto del mundo, y especialmente con los países de América Latina, confirma esta aseveración. Pese a ello, la evidencia presentada a lo largo de este Informe sugiere que las reformas institucionales acometidas en el decenio responden en buena medida a problemas del pasado más que a los desafíos actuales, desafíos que Chile comparte con gran parte de las democracias consolidadas del mundo occidental. Son reformas que, aunque necesarias e importantes, parecen haber llegado tarde o estar siendo insuficientes, particularmente para mejorar los grados de confianza, apego y participación ciudadana en las instituciones, así como en procesos esenciales para el funcionamiento de la democracia representativa.

CAMBIO CONSTITUCIONAL Y LEGITIMIDAD DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

En los últimos años surgió en el debate público y ciudadano la demanda por un cambio constitucional. Las razones son diversas. Para algunos sectores de la sociedad, el cambio constitucional podría contribuir a aminorar el malestar social, al dotar de mayor legitimidad al sistema político. Otros vinculaban los buenos resultados en materia económica y social a la continuidad del marco constitucional, cuestionando la necesidad de un cambio más profundo en condiciones de estabilidad política. En ese contexto, el segundo gobierno de Michelle Bachelet realizó un proceso de consulta ciudadana orientado a modificar la carta magna. Si bien los resultados no fueron vinculantes, aportaron a la elaboración de un nuevo texto constitucional que se envió al Congreso para su discusión hacia el final de su mandato. El texto finalmente no logró concitar el apoyo transversal de las elites políticas.

Para medir el apoyo de la ciudadanía a un eventual cambio constitucional, y a los diversos mecanismos para llevarlo a cabo, en 2016 la IV Encuesta Auditoría a la Democracia incluyó un conjunto de preguntas sobre la materia y los datos arrojaron que para un 84% de la población era muy importante o bastante importante cambiar la Constitución. Una gran mayoría (88%) señalaba que la

Constitución necesita cambios: para un 66% debieran ser cambios profundos, y para 22%, cambios moderados. La principal razón mencionada para cambiar la Constitución es “porque su contenido no sirve para los desafíos actuales del país” (54%), superando ampliamente a la opción “porque se originó en dictadura” (15%). Además, la mayoría de las personas encuestadas prefiere “una Asamblea Constituyente integrada por miembros elegidos especialmente para esa función” (43%), seguida de “una convención que incluya a senadores, diputados y ciudadanos” (41%) y luego, muy abajo, “una comisión compuesta por un grupo de senadores y diputados” (6%).

En 2015 el PNUD publicó el informe *Mecanismos de cambio constitucional en el mundo*, donde plantea que las constituciones duran 19 años en promedio y que su modificación o reemplazo no tiene por qué ser un proceso socialmente traumático. Por el contrario, un cambio constitucional es una práctica habitual en el mundo, que en muchos casos contribuye a incrementar la legitimidad de la institucionalidad democrática. Entre los años 2000 y 2015 el 41% de los cambios constitucionales realizados en el mundo fueron a través de asambleas constituyentes (PNUD, 2015c: 21).

A la luz de los resultados de este Informe, a continuación se sintetizan cuatro desafíos relevantes para el futuro de la democracia en Chile.

Primer desafío. Confianza y legitimidad

En los últimos diez años la confianza institucional ha caído fuertemente en el país. Se aprecia además en el período una ampliación clara y significativa del espectro de instituciones en las que los chilenos y chilenas simplemente no confían. Si al principio del decenio la desconfianza se concentraba en las principales instituciones del sistema político (como los partidos políticos o el Congreso), diez

años más tarde el país enfrenta un escenario caracterizado por la desconfianza hacia buena parte de las instituciones del Estado, incluyendo, por ejemplo, el sistema de justicia y las fuerzas de orden y seguridad.

Esta caída generalizada de la confianza ciudadana constituye una amenaza para la democracia chilena, pues, por un lado, alimenta escenarios que propician la irrupción de liderazgos populistas y antisistema, capaces de movilizar y articular políticamente el descontento con la política y sus instituciones (Booth y Seligson, 2009; Levitsky y Ziblatt, 2018). La desconfianza institucional en Chile hoy da cuenta de la falta de legitimidad que afecta especialmente al sistema político. De hecho, gran parte de los liderazgos a partir de los cuales se ha comenzado

a discutir en todo el mundo el fenómeno de “recesión democrática” ha surgido en contextos de desconfianza generalizada como este. Estos contextos pueden, por otro lado, dificultar tanto el diseño y la ejecución de agendas de desarrollo como la búsqueda de resolución de conflictos, si la ciudadanía no considera a las instituciones políticas como intermediarias legítimas para responder a sus demandas.

Más aun, la desconfianza institucional generalizada puede inducir comportamientos contrarios al funcionamiento del estado de derecho, y al respeto por las libertades y los derechos individuales y colectivos inherentes a una democracia representativa (Newton, 1999; Newton y Norris, 2000). La literatura muestra que la ciudadanía tiende a ser más tolerante con comportamientos cercanos a la ilegalidad y la informalidad en contextos de escepticismo respecto de la imparcialidad y efectividad de las instituciones del Estado. Por ello la baja confianza en las instituciones no solo puede vincularse con una mala evaluación del funcionamiento de estas —precisamente lo que ha sucedido en el caso chileno—, sino también incentivar prácticas que deterioren todavía más el orden institucional. El declive en Chile del ideal cívico de obedecer leyes y normas durante el decenio puede ser un reflejo de eso.

Con todo, los datos muestran que en Chile un segmento importante de la población aún valora la democracia, el voto y sus instituciones, y apelan a su perfeccionamiento. Este “*ethos* republicano” no es algo natural ni inmutable, y puede reducirse si no se logra fortalecer el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Segundo desafío. Enfrentar las transformaciones culturales y la polarización valórica

Chile ha vivido una transformación cultural profunda y transversal. Entre 2008 y 2018 disminuyó el acuerdo con las representaciones de los roles tradicionales de género, aumentó el porcentaje de personas que justifica el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, y cambió la valoración ciudadana de la inmigración. Como resultado de estos cambios el país es, al menos en los discursos, un país más igualitario, más respetuoso de

las libertades individuales y más tolerante de lo que era diez años atrás.

Junto a la mayor liberalización cultural, los datos revelan ciertos indicios de polarización valórica en temas como homosexualidad y aborto, un fenómeno cada vez más frecuente en las democracias contemporáneas. No es factible por ahora saber si esta incipiente polarización decantará con el paso de los años en posturas más radicales que dificulten la deliberación democrática y legitimen prácticas discriminadoras. No obstante, a partir de lo que se observa en otros países, donde han emergido posturas tradicionalistas y nacionalistas como respuesta a valores crecientemente liberales e igualitaristas, no se puede descartar la posibilidad de que se consoliden liderazgos extremos que no admiten la mediación institucional ni los procesos de negociación de las diferencias que caracterizan a los regímenes liberales-democráticos.

Además, en un contexto de redes sociales y medios de comunicación centrados en nichos muy específicos de la población, la circulación de información se ha segmentado y es posible que se consoliden “burbujas de filtro” o “cámaras de eco” entre quienes poseen opiniones similares. Eso promueve la generación de redes altamente homogéneas y la polarización política (Gruzd y Roy, 2014).

Por último, en estos años se han consolidado ideales ciudadanos que no requieren necesariamente de un compromiso asociativo ni de soportes institucionales de carácter político, como estar informado, ayudar a otros o el compromiso individual por el cuidado medioambiental. Como se describe en el siguiente desafío, estos cambios tienen implicaciones profundas para los procesos de representación y gobernanza.

Tercer desafío. Reconocer y canalizar las nuevas formas de involucramiento político

Uno de los hallazgos clave de este Informe es la profunda transformación de las formas de involucramiento político. Como se describió en el Capítulo 4, en solo diez años ha aumentado de manera muy relevante el grupo de los *fragmentados*, aquellas personas que no se identifican con

partidos ni con posiciones ideológicas pero sí participan en acciones políticas. Es un cambio sustancial en la forma de involucrarse políticamente en Chile: hoy, buena parte de las dinámicas de participación transcurren desconectadas de los referentes de la política institucional.

El incremento de este grupo sintetiza un cambio profundo en la sociedad chilena: la politización “fragmentada”, que se caracteriza por dos fenómenos contrapuestos. Uno es el aumento de la desafección con la política institucional, que se expresa tanto en el declive del interés en la política formal como en el incremento de las personas que no se identifican con partidos ni posiciones políticas. Otro es el alza de quienes participan en diversos tipos de acciones políticas, y del apoyo normativo a estas acciones, incluidas las más disruptivas, como tomas, bloqueos de calles o huelgas de hambre. Esto ocurre, como se ha dicho en el Capítulo 4, en un contexto de escasa asociatividad.

La capacidad de las instituciones políticas —particularmente de los partidos, que cumplen una función esencial de representación— para proveer de canales de expresión y de integración de las dinámicas y los actores hoy desconectados determinará en buena parte si la democracia representativa se logra nutrir o no de estas transformaciones en las formas de participación política en Chile.

Cuarto desafío. Una democracia desigual

El Informe *Auditoría a la Democracia* apuntó ya en 2014 a la desigualdad política como uno de los siete desafíos de la democracia chilena. En ese entonces señaló que “reproduce y profundiza la desigualdad económica, bloqueando la posibilidad de establecer una igualdad efectiva para todos y todas” (PNUD, 2014: 41). El presente Informe muestra que algunas características de esa desigualdad se mantienen, mientras otras se han transformado a lo largo de estos diez años.

Durante la década tendió a desaparecer la brecha etaria que caracterizó la participación en acciones políticas desde la década de 1990 hasta mediados de los 2000. Los datos sobre participación en acciones políticas muestran que, a excepción de la participación electoral, clave para canalizar

intereses y demandas, las generaciones más jóvenes participan en la esfera pública tanto como el resto de las generaciones, y en algunos casos incluso en mayor proporción.

Sin embargo, en el decenio otras brechas parecen haberse mantenido o incluso profundizado. Una de las más evidentes es la brecha socioeconómica. La participación en acciones políticas, la pertenencia a organizaciones sociales y la identificación con partidos y posiciones políticas están significativamente asociadas al nivel educacional de las personas (que en Chile es *proxy* del nivel socioeconómico). Quienes tienen más educación participan más en acciones políticas, se identifican políticamente más y pertenecen en mayor proporción a organizaciones sociales. No es casual, entonces, que en el grupo de los *involucrados* predominen personas con mayor educación y que entre los *desafectados*, a la inversa, haya más personas con menos educación. La situación es similar en la participación electoral, donde se han evidenciado diferencias significativas entre personas que residen en comunas y barrios con distintos niveles de ingresos (PNUD, 2017c). Las brechas en la Región Metropolitana son particularmente evidentes, en tanto existe una clara segregación socioeconómica entre comunas.

También la valoración de la democracia está profundamente segmentada por la realidad socioeconómica de las personas. A medida que disminuye el nivel educacional, menor es la proporción de quienes prefieren un régimen democrático y mayor la evaluación negativa del funcionamiento de la democracia en el país. En este último caso podría deberse a una promesa incumplida de la democracia, la de propiciar una mayor justicia social.

Evidentemente, todas estas brechas implican importantes desafíos para la democracia chilena. Las desigualdades en participación se traducen en capacidades de incidencia disímiles, en una representación desequilibrada que erosiona el sentido de la vida en común y contribuye a reproducir las desigualdades sociales. Por ello, uno de los principales desafíos de la democracia chilena es superar la desigualdad en el plano político, proceso en el cual es fundamental que las personas de grupos socioeconómicos medios-bajos no solo se involucren en los distintos canales de participación existentes, sino que accedan a espacios de representación formal. Una democracia sólida, inclusiva y participativa requiere de la inclusión política de todos los grupos sociales.

ANEXOS

ANEXO 1

Descripción de la construcción de tres variables del estudio: nivel educacional, generaciones y macrozonas

En el transcurso de este Informe se utilizan distintas variables independientes en el análisis –nivel educacional (como *proxy* del nivel socioeconómico), generaciones y macrozonas–, que aquí se describen para que se entienda la forma en que se usan y por qué.

Nivel educacional

En los distintos análisis de este Informe es de interés caracterizar el nivel socioeconómico de las personas encuestadas. Como se señaló en una publicación anterior, “las discusiones respecto de las variables que se usan para estratificar son de larga data, pero son principalmente tres: el ingreso, la educación y la ocupación de las personas. Estas tres variables interactúan entre sí y en conjunto definen la posición de cada persona en el orden socioeconómico que caracteriza a las sociedades modernas” (PNUD, 2017a: 65). En general, se miden para la persona jefa de hogar, y luego el estatus de esta se imputa al resto de los integrantes del hogar.

En esta publicación se usa como variable de estratificación el nivel educacional más alto alcanzado por las personas encuestadas, principalmente por razones de disponibilidad de datos: los datos de ingresos y ocupación del jefe o jefa de hogar solo están disponibles en las ENAD de los años 2016 y 2018. Por eso se usó como variable de estratificación socioeconómica el nivel educacional de las personas entrevistadas, que sí está para todos los años y tiene igualmente una alta correlación con los ingresos y el tipo de ocupación.

En concreto, se dividió a la población en cinco grupos educacionales: 1) educación básica completa o menos, 2) media incompleta, 3) media completa, 4) educación en centros de formación técnica o institutos profesionales (completa o incompleta), más educación universitaria incompleta, y 5) universitaria completa o más. Si bien esta opción dificulta estratificar a las personas más jóvenes, que potencialmente aún se encuentran estudiando, es una limitación menor comparada con las otras opciones.

TABLA A1 Nivel educacional. Tamaños muestrales (sin ponderar) según años aplicación encuestas

	2008	2010	2012	2016	2018
Básica completa o menos	503	463	471	428	406
Media incompleta	203	198	166	194	224
Media completa	415	438	475	467	452
Técnica (IP/CFT) completa o no + universitaria incompleta	248	247	209	275	346
Universitaria completa o más	129	169	136	156	161
NS/NR	7	7	49	12	0
Total	1.505	1.522	1.506	1.532	1.589

Generaciones

Para el tratamiento de la edad de las personas entrevistadas, se clasificó la variable edad en ocho categorías, correspondientes a ocho generaciones. La referencia a generaciones tiene como supuesto que aquellas personas nacidas y socializadas en un mismo período histórico han compartido ciertas experiencias y eventos que en el tiempo pueden dar lugar a una narrativa social compartida (Frei, 2017) o un habitus generacional (Eyerman y Turner,

1998). Es indudable que como categoría está cruzada por temas de género, clase y etnia, pero aun así los análisis de comportamiento político muestran diferencias relevantes según el período de socialización (Madrid, 2005).

Estas generaciones (ver Tabla A2) tienen, además, tamaños muestrales relativamente similares en 2018, lo que permite obtener inferencias estadísticas confiables.

TABLA A2 Año de nacimiento de las generaciones utilizadas

Grupo	Generaciones		ENAD 2018		
	Año de nacimiento		Tramo de edad		N muestral (sin ponderar)
1	2000	1994	18	24	128
2	1993	1987	25	31	181
3	1986	1980	32	38	159
4	1979	1973	39	45	183
5	1972	1966	46	52	205
6	1965	1959	53	59	195
7	1958	1952	60	66	168
8	1951	---	67	+	370
					1,589

La Tabla A3 muestra cómo las distintas generaciones se han socializado políticamente en períodos muy distintos de la historia reciente.

La construcción de generaciones permite, además, tratar a estos grupos como cohortes sintéticas, esto es, “seguir” a una misma generación a lo largo de distintas encuestas,

estudiando cómo cambian (o no), entre una encuesta y otra, determinados atributos para personas nacidas en un mismo intervalo de años. Así, por ejemplo, se podría estudiar cómo evoluciona en la década 2008-2018 la valoración de la democracia entre quienes eran jóvenes para el golpe de Estado, y compararla con la evolución de quienes fueron jóvenes durante los 2000.

TABLA A3 Edades de las generaciones según años de nacimiento e hitos políticos

Año de nacimiento	Actualidad	Movilización estudiantil	Movimiento pingüino	Recuperación de la democracia	Crisis económica	Golpe de Estado	
	2018	2011	2006	1990	1981	1973	
2000-1994	18-24	11-17	6-12				Jóvenes en 2018
1993-1987	25-31	18-24	13-19	0-3			Jóvenes durante movilizaciones estudiantiles 2006-2011
1986-1980	32-38	25-31	20-26	4-10	0-1		Jóvenes a finales de los 90, inicios del 2000
1979-1973	39-45	32-38	27-33	11-17	2-8		Jóvenes y adolescentes en los 90
1972-1966	46-52	39-45	34-40	18-24	9-15	1-7	Jóvenes para el plebiscito de 1989
1965-1959	53-59	46-52	41-47	25-31	16-22	8-14	Jóvenes para la crisis económica de los 80
1958-1952	60-66	53-59	48-54	32-38	23-29	15-21	Jóvenes para el golpe de Estado
1951-antes	67+	60+	55+	39+	30+	22+	Adultos para el golpe de Estado

Macrozonas

Como forma de agrupar a los residentes de las distintas regiones del país en categorías que tuviesen una adecuada representatividad estadística, y con un razonable error muestral, se creó una nueva variable denominada macrozona. En total se construyeron cuatro macrozonas: 1) Región Metropolitana, 2) Macrozona Norte (regiones de

Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo), 3) Macrozona Centro (regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule) y 4) Macrozona Sur (Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes). Los tamaños muestrales de esta clasificación se presentan en la Tabla A4:

TABLA A4 Distribución poblacional de las macrozonas por años de aplicación de encuestas ENAD (sin ponderar)

	2008	2010	2012	2016	2018
Norte	175	174	178	202	228
Centro	320	331	338	333	350
Sur	400	420	437	417	453
Metropolitana	610	597	553	580	558
Total	1,505	1,522	1,506	1,532	1,589

ANEXO 2

Fichas metodológicas de la Encuesta Nacional Auditoría de la Democracia en sus 5 versiones

Nombre oficial	Encuesta Nacional sobre Partidos Políticos y Sistema Electoral	II Encuesta Nacional Auditoría a la Democracia	III Encuesta Nacional Auditoría a la Democracia	IV Encuesta Encuesta Nacional Auditoría a la Democracia	V Encuesta Nacional de Auditoría a la Democracia
Organismo ejecutor	ICCOM Investigación de Mercados y Centro de Microdatos de la Universidad de Chile	ICCOM Investigación de Mercados y Centro de Microdatos de la Universidad de Chile	ICCOM Investigación de Mercados y Centro de Microdatos de la Universidad de Chile	DATAVOZ/STATCOM	Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile - DESUC
Período de la encuesta	26 de marzo al 16 de abril de 2008	25 de septiembre al 25 de octubre de 2010	29 de octubre al 30 de noviembre de 2012	6 de mayo al 30 de junio de 2016	8 de noviembre al 18 de diciembre de 2018
Cobertura geográfica	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional
Diseño muestral	Muestreo estratificado, aleatorio y probabilístico en cada una de sus etapas (manzana-hogar-entrevistado)	Muestreo probabilístico por conglomerados, en múltiples etapas	Muestreo probabilístico por conglomerados, en múltiples etapas	Muestreo estratificado (por región y por zona urbano/rural), aleatorio y probabilístico en cada una de sus etapas (manzanas-hogar-entrevistado)	Muestreo probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico
Tamaño de la muestra	1.505 casos	1.522 casos	1.506 casos	1.532 casos	1.589 casos
Error muestral	±2,7 asumiendo varianza máxima y un 95% de confianza	±2,7 asumiendo varianza máxima y un 95% de confianza	±2,7 asumiendo varianza máxima y un 95% de confianza	±2,7 asumiendo varianza máxima y un 95% de confianza	±2,46 asumiendo varianza máxima y un 95% de confianza
Aplicación	En papel, individual y presencial (cara a cara) en hogares	En papel, individual y presencial (cara a cara) en hogares	En papel, individual y presencial (cara a cara) en hogares	En tablet, individual y presencial (cara a cara) en hogares	En papel, individual y presencial (cara a cara) en hogares
Número de variables	285	277	223	295	301

ANEXO 3

Principales hitos políticos y sociales del período 2008-2018

Año	Conflicto social / otros hitos relevantes	Políticas públicas	Reformas políticas	Procesos electorales / políticos
2008	Destitución de Yasna Provoste como ministra de Educación, acusada de irregularidades en subvenciones en el sistema de educación pública.	Reforma del Transantiago.		Adolfo Zaldívar y otros parlamentarios escindidos de la Democracia Cristiana se integran al Partido Regionalista Independiente (PRI).
	La crisis subprime afecta la economía chilena.			Elecciones municipales. La Concertación se divide en dos listas por primera vez y pierde alcaldías emblemáticas.
		Reforma previsional (pensión solidaria).		Ambas coaliciones (Alianza por Chile y Concertación) bajan en su votación de concejales frente a terceras alternativas, p. ej. Por un Chile Limpio.
2009	Conflicto en torno a píldora del día siguiente, centralidad de temas valóricos en campaña electoral.	Ley de estímulo fiscal ante crisis económica de 2009 // Manejo exitoso de la crisis.		La Concertación realiza primarias presidenciales entre Eduardo Frei y José Antonio Gómez, con baja participación electoral y tensiones internas. Marco Enríquez-Ominami decide competir como independiente en las elecciones presidenciales.
		Ley General de Educación sustituye a LOCE, en respuesta a demanda de movimiento estudiantil.		Elecciones presidenciales y parlamentarias.
		Consolidación de protección social: Sistema Intersectorial de Protección Social.		Elección de Sebastián Piñera, primera instancia de alternancia entre Concertación y Alianza.
	Escándalo de Mónica Madariaga y caso Banco de Talca que afectan a Sebastián Piñera.	Creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.		En las elecciones senatoriales PDC, PPD y PS pierden porcentaje de votos. Suben PRSD, RN y fundamentalmente la UDI. En diputados crece más RN que la UDI, mientras se mantiene el resto de las tendencias.
				Concertación pierde 1.125.630 votos en la elección presidencial, mientras que Alianza (Lavín-Piñera) pierde 302.138. Marco Enríquez-Ominami (ME-O) obtiene cerca del 20% de los votos en primera vuelta.
2010	Terremoto del 27 de febrero.	Políticas públicas orientadas a la "reconstrucción del país".		Se funda el Partido Progresista, liderado por ME-O.
	Rescate de los 33 mineros.			
	Alta popularidad presidencial.			

Año	Conflicto social / otros hitos relevantes	Políticas públicas	Reformas políticas	Procesos electorales / políticos
2011	Movilizaciones sociales (240 marchas en RM).	Creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Desarrollo Social.	Aprobación del voto voluntario y la inscripción automática (nuevos inscritos, fundamentalmente entre 18 y 30 años).	Partidos políticos sin capacidad de mediar conflicto social.
	Baja significativa de la popularidad del gobierno.			
	Movilizaciones locales (Punta Arenas, Calama, HidroAysén).			Renuncia de parlamentarios a sus partidos genera cambios en Cámara de Diputados (RN y PPD pierden 1 diputado cada uno).
	Destacado papel público de la CONFECH y estudiantes secundarios.	Ley de posnatal de 6 meses.		
	Casos Kodama y Van Rysselberghe terminan en renuncia de ministra y de intendenta del Biobío.	Eliminación del 7% de cotización de salud para los jubilados.		
	Escándalo de empresa La Polar, el abuso se asocia al lucro en educación para impugnar a empresarios.			
2012	Muerte de Daniel Zamudio.	Aprobación de la Ley de Pesca, ante protestas de comunidades indígenas y pescadores artesanales. Tribunal Constitucional desestima impugnación.	Ley de Primarias.	Se funda el movimiento político Revolución Democrática.
				Escasa participación electoral en inauguración del voto voluntario en elecciones municipales.
	Continuidad del movimiento estudiantil, Aysén e irrupción de Freirina.			Estratificación social de la participación electoral.
				Alianza pierde alcaldías emblemáticas en Santiago, Providencia y Concepción.
	Polémica con CEPAL por medición de la pobreza del INE.	Reforma impositiva tras largo debate en que la oposición logra atenuar la rebaja a sectores de altos ingresos.		Incertidumbre sobre planes presidenciales de Michelle Bachelet. Se suman a la carrera Andrés Velasco, Claudio Orrego y Ximena Rincón.
	Permanece baja la aprobación presidencial a pesar de buenos resultados económicos.	Ley antidiscriminación.		Candidaturas de Franco Parisi, Marcel Claude, Roxana Miranda. Confirmación de nueva incursión electoral de ME-O.
				Andrés Allamand y Laurence Golborne inician sus precandidaturas presidenciales en representación de la Alianza.

Año	Conflicto social / otros hitos relevantes	Políticas públicas	Reformas políticas	Procesos electorales / políticos
2013		11 nuevas patologías se incorporan al AUGE, Ley de Fármacos (impugnación de ministro Mañalich por lobby de las farmacias).	Ley 20.678 establece elección directa de CORES.	Fundación de la Nueva Mayoría a partir de la alianza conformada por el Partido Comunista, el Movimiento Amplio Social y la Izquierda Ciudadana junto con los partidos de la Concertación.
	Aumento significativo de robos con violencia y robos a viviendas. "Crisis de seguridad pública".			Elección parlamentaria y presidencial.
	Rechazo a la "Ley Hinzpeter" mientras persiste la movilización estudiantil.			La Alianza realiza primarias presidenciales originalmente entre Laurence Golborne y Andrés Allamand. Golborne es reemplazado por Pablo Longueira, quien gana. En las primarias de la Nueva Mayoría triunfa Michelle Bachelet.
	Paro del Registro Civil entre agosto y octubre, paro de funcionarios municipales en octubre y noviembre, paro de recolectores de basura en julio y octubre ("emergencia sanitaria en Valparaíso").			Renuncia de Pablo Longueira a su candidatura. La Alianza nombra a Evelyn Matthei como su carta presidencial.
	Formalización de tres universidades por cohecho en proceso de acreditación, rechazo de acreditaciones por parte de la CNA.			Estreno de la Ley de Primarias, promulgada en 2012, en elecciones de 2013.
	Se cumplen 40 años del golpe de Estado. Presidente Piñera habla de "cómplices pasivos", cierre del Penal Cordillera y traslado de militares a Punta Peuco.	Obligatoriedad del kínder, y obligación del Estado de proveer un sistema gratuito de educación parvularia a partir de los 2 años.		Llegan a la Cámara de Diputados 4 dirigentes estudiantiles (Boric, Jackson, Cariola y Vallejo).
	El exjefe de la CNI Odlanier Mena se suicida para evitar el traslado a Punta Peuco.			Franco Parisi y MEO obtienen 10% cada uno en elección presidencial. Bachelet 47% (y 62% en segunda vuelta) vs. 25% de Evelyn Matthei.
Fracaso del "mejor censo de la historia", realizado en 2012.	Creación del Ministerio de Deportes.		Fuerte crecimiento del PS en votación de senadores.	
2014	Desaceleración económica. Bajo crecimiento, caída de la inversión, aumento de la inflación.		Reforma educacional.	Se funda Amplitud a partir de escisiones de RN.
	Estalla el caso Penta con perjuicios para la UDI y exministro Andrés Velasco.			
			Reforma tributaria para financiar reforma educativa, profundo deterioro de la relación con el mundo empresarial. Impugnación del ministro Alberto Arenas.	Se funda oficialmente Chile Vamos con UDI, RN, Evópoli y PRI.

Año	Conflicto social / otros hitos relevantes	Políticas públicas	Reformas políticas	Procesos electorales / políticos
2014	Empeora la situación económica, cae 15% la aprobación presidencial en un año.		Se acuerda reforma al sistema electoral a promulgarse en 2015.	
			Propuesta de mecanismo para reforma constitucional se pospone para 2015.	
2015	Estalla el caso Caval involucrando directamente a la familia de la Presidenta Bachelet.	Propuesta de creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género aprobada por el Congreso.	Promulgación de Ley 20.840 sobre nuevo sistema electoral (fin del binominal, ampliación del número de diputados y senadores, incorporación de sistema proporcional con lista abierta, con magnitudes entre 3 y 8 a nivel de distritos nuevos para la Cámara de Diputados, y de nuevas circunscripciones senatoriales con magnitudes entre 2 y 5).	
	Estalla el caso SQM de financiamiento irregular de la política (implica a la UDI, ME-0 y las campañas de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.	El gobierno lanza en octubre su iniciativa para la discusión de una reforma constitucional.		
	Otros casos de financiamiento irregular implican a Grupos Angelini y Said, Aguas Andinas, Ripley, Endesa y Banco BCI.	Se promulga la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil (AUC).		
	Estalla el caso Milicogate.	Ley 20.890 de gratuidad en educación y disposición de "fin al lucro". Se crean las universidades estatales de la Región de O'Higgins y Región de Aysén.	Incorporación de "ley de cuotas" en nueva Ley Electoral.	
	Reemplazo de ministros Arenas y Peñailillo.			
	Conflicto con profesores por Estatuto Docente y huelga en el Registro Civil con graves perjuicios para la ciudadanía.			
	Protesta de camioneros por dificultades relacionadas con el "conflicto mapuche".		Comisión Engel emite informe con extensas propuestas para la reforma al sistema de financiamiento de los partidos políticos, la regulación de las actividades partidarias, y la transparencia.	

Año	Conflicto social / otros hitos relevantes	Políticas públicas	Reformas políticas	Procesos electorales / políticos
2015	Continúa el deterioro de la popularidad presidencial, llegando a un mínimo de 24% de aprobación.			
	Caída significativa de aprobación de los principales actores del sistema (partidos políticos, Congreso, tribunales, Ministerio Público y empresas).			
2016	Aprobación presidencial cae a su mínimo desde 1990 (15% de apoyo).	Nueva ley laboral amplía la negociación colectiva, fin del reemplazo en huelga y promoción de la sindicalización y equidad de género en la actividad sindical.	Continuo proceso de discusión de una reforma constitucional con la realización de diálogos ciudadanos, encuentros locales y cabildos provinciales.	Elección municipal: Nueva Mayoría concurre en dos listas, mientras Chile Vamos presenta tres.
	Prosigue la marcada caída en la confianza institucional, con Carabineros, PDI y FFAA como excepción parcial.			
	Sigue cayendo sostenidamente la identificación partidaria, alcanzando un 17%.			Participación electoral en elecciones municipales alcanza mínimo histórico: 35%.
	Nuevos casos de corrupción: 6 diputados reciben créditos sin interés, casos en Ejército y Gendarmería.			
	8 proyectos de ley relativos a la reforma educativa aún pendientes de aprobación.			Error en el domicilio electoral de 485.000 personas por parte del Servel.
	Arista Longueira (Ley de Royalty) del caso SQM.			
	Caso Corpesca y procesamiento de senador Jaime Orpis.			Chile Vamos obtiene 145 alcaldías, Nueva Mayoría 141. Crecen los independientes como tercera fuerza, obteniendo 52 alcaldías (11 más que en 2012).
	Continúa bajo el crecimiento económico.	Propuestas de creación de Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura y las Artes y Asuntos Indígenas. No prosperan.	Se promulga la ley que introduce la elección directa de los intendentes, quienes pasarán a llamarse gobernadores regionales.	
	Colusión en el mercado de pollos (Cencosud, Walmart, Unimarc), colusión del papel confort (Empresas CMPC y Kimberly Clark).			Catorce partidos y movimientos de izquierda negocian creación de Frente Amplio.
	Casos Chang y Garay de estafa a inversionistas.			Se fortalece posicionamiento de Evópoli (surgido en 2012) en la centroderecha.

Año	Conflicto social / otros hitos relevantes	Políticas públicas	Reformas políticas	Procesos electorales / políticos
2016	Marcha No+AFP y anuncio de objetivo de mejorar pensiones de los trabajadores vía aumento de cotización del 10 al 15%, así como un reajuste de pensión básica solidaria.			Fuerte caída del PRO.
2017	Recuperación económica, éxito del proceso de diversificación energética.	Se promulga la reforma Nueva Educación Pública.		Se funda oficialmente el Frente Amplio.
				Revolución Democrática logra legalizarse como partido político.
	Megaincendios forestales en la zona centro-sur de Chile.			Estreno de nuevo sistema electoral para elección parlamentaria.
				Primarias en Chile Vamos con alta exposición mediática por rivalidad entre Piñera y Ossandón, terciada por Felipe Kast.
	Escándalo por fraude en Carabineros, Caso SENAME (muerte de niños internados en hogares de menores).			Primaria del Frente Amplio en que se impone Beatriz Sánchez a Alberto Mayol.
				La Nueva Mayoría no realiza primarias. PDC lanza candidatura presidencial propia con Carolina Goic.
				8 candidatos compiten en elección presidencial.
	Tensión entre el equipo económico del gobierno y el resto del gabinete, renuncia el ministro Valdés.			Consolidación electoral del Frente Amplio y Evópoli, fuerte caída de PDC, PPD y UDI (vs. fortalecimiento de RN).
	Se destapa el caso de redes narco en la comuna de San Ramón y la crisis escala dentro del PS.			Reconfiguración del Congreso: 20 incumbentes no logran la reelección (16 de la Nueva Mayoría), irrupción del Frente Amplio y de Revolución Democrática como principal partido de la coalición.
				Efecto marcado de nueva ley de financiamiento de campañas en elecciones 2017. Se mantiene baja participación electoral y fuerte estratificación socioeconómica.
			Congreso más fragmentado, Sebastián Piñera electo para un segundo mandato con una bancada parlamentaria relativamente reducida.	

Año	Conflicto social / otros hitos relevantes	Políticas públicas	Reformas políticas	Procesos electorales / políticos
2018		Promulgación de la Ley de Educación Superior.		
	Fuerte irrupción del movimiento feminista.	Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.		
	Agenda legislativa con fuerte oposición en el Congreso.	Promulgación de la Ley Aula Segura.		
	Se formaliza al general Blu y a Álex Smith, entre otros, por la fabricación de evidencias falsas en el caso Operación Huracán.			
	Asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.			
	Irrupción de los temas migratorios.			

ANEXO 4
Confianza institucional, 2008-2018

		2008	2010	2012	2016	2018
El Gobierno	Poca/Nada de confianza	68,7	55,3	74,7	85,9	85,5
	Mucha/Bastante confianza	29,5	42,4	23,7	13,4	13,3
	NS/NR	1,8	2,3	1,6	0,7	1,2
El Congreso	Poca/Nada de confianza	81,5	68,8	82,7	90,3	90,5
	Mucha/Bastante confianza	15,5	28,1	15,3	8,2	8,4
	NS/NR	3,0	3,06	2,1	1,5	1,1
Los partidos políticos	Poca/Nada de confianza	91,0	83,5	90,0	94,2	93,4
	Mucha/Bastante confianza	6,3	14,5	8,7	5,1	5,7
	NS/NR	2,7	2,0	1,3	0,8	0,9
Los tribunales de justicia	Poca/Nada de confianza	80,0	75,4	76,0	86,4	88,7
	Mucha/Bastante confianza	17,7	22,9	22,9	12,9	10,4
	NS/NR	2,3	1,7	1,0	0,7	0,9
El Ministerio Público	Poca/Nada de confianza	71,6	62,7	74,8	81,8	84,7
	Mucha/Bastante confianza	23,7	33,0	21,8	14,4	12,6
	NS/NR	4,7	4,3	3,4	3,8	2,7
Los diarios	Poca/Nada de confianza	70,6	56,9	64,6	74,5	77,8
	Mucha/Bastante confianza	27,9	40,9	33,9	24,0	21,1
	NS/NR	1,6	2,1	1,47	1,5	1,1
La televisión	Poca/Nada de confianza	64,9	49,8	64,0	76,1	77,9
	Mucha/Bastante confianza	34,2	48,9	35,1	23,2	21,4
	NS/NR	0,9	1,3	1,0	0,7	0,8
Las radios	Poca/Nada de confianza	50,8	42,3	46,1	57,8	66,7
	Mucha/Bastante confianza	47,7	55,8	51,7	40,5	31,2
	NS/NR	1,5	2,0	2,3	1,7	2,1
La iglesia católica	Poca/Nada de confianza	50,9	54,2	64,7	69,1	85,8
	Mucha/Bastante confianza	47,6	44,6	34,2	29,6	13,5
	NS/NR	1,5	1,2	1,1	1,3	0,7
Las iglesias evangélicas	Poca/Nada de confianza	65,0	62,1	65,7	70,4	82,0
	Mucha/Bastante confianza	29,5	34,0	29,9	24,2	16,0
	NS/NR	5,5	3,9	4,4	5,5	2,0
Las Fuerzas Armadas	Poca/Nada de confianza	46,9	38,2	46,9	58,2	71,4
	Mucha/Bastante confianza	50,6	60,1	51,2	40,5	27,5
	NS/NR	2,5	1,7	1,9	1,2	1,1

		2008	2010	2012	2016	2018
Carabineros	Poca/Nada de confianza	42,4	38,4	46,2	49,9	75,5
	Mucha/Bastante confianza	56,6	60,6	53,0	49,7	23,4
	NS/NR	1,1	1,0	0,9	0,4	1,1
Los sindicatos	Poca/Nada de confianza	65,3	60,5	70,2	68,1	65,8
	Mucha/Bastante confianza	26,3	31,4	24,0	22,4	30,3
	NS/NR	8,4	8,1	5,9	9,4	3,9
Las empresas privadas	Poca/Nada de confianza	77,1	65,3	79,0	84,9	84,5
	Mucha/Bastante confianza	18,3	30,6	17,8	13,4	13,9
	NS/NR	4,6	4,1	3,3	1,7	1,7
Las municipalidades	Poca/Nada de confianza	67,1	60,4	66,8	74,5	79,7
	Mucha/Bastante confianza	31,2	38,0	32,3	23,9	19,1
	NS/NR	1,7	1,6	0,9	1,6	1,2
El movimiento estudiantil	Poca/Nada de confianza			62,8	70,0	73,3
	Mucha/Bastante confianza			34,1	24,9	24,2
	NS/NR			3,1	5,2	2,6
El movimiento feminista	Poca/Nada de confianza					72,6
	Mucha/Bastante confianza					24,7
	NS/NR					2,8
Las redes sociales (Facebook y Twitter)	Poca/Nada de confianza					76,5
	Mucha/Bastante confianza					19,6
	NS/NR					4,0
Los bomberos	Poca/Nada de confianza					17,5
	Mucha/Bastante confianza					81,6
	NS/NR					0,9
La policía de Investigaciones	Poca/Nada de confianza				63,3	
	Mucha/Bastante confianza				34,8	
	NS/NR				1,9	
Las empresas públicas (2010) / las empresas estatales (2008)	Poca/Nada de confianza	75,0	71,0			
	Mucha/Bastante confianza	21,0	25,6			
	NS/NR	4,0	3,4			
El Tribunal Constitucional	Poca/Nada de confianza		62,3			
	Mucha/Bastante confianza		31,5			
	NS/NR		6,1			

ANEXO 5

Encuesta Auditoría a la Democracia, PNUD 2018. Estadísticas univariadas para el total de habitantes de las 16 regiones del país, hombres y mujeres de 18 años o más

1.589 personas encuestadas

Aplicación de la encuesta: 8 de noviembre al 18 de diciembre de 2018

Datos ponderados

La base de datos estará disponible en www.pnud.cl

1. De acuerdo a la siguiente escala, ¿cómo calificaría Ud. la actual situación económica del país? (porcentaje)

Muy mala	Mala	Ni buena ni mala	Buena	Muy buena	NS (no leer)	NR (no leer)
10,7	31,3	43,3	3,3	0,7	0,2	0,6

2. ¿Y Ud. piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará? (porcentaje)

Mejorará	No cambiará	Empeorará	NS (no leer)	NR (no leer)
25,7	50,7	18,6	3,4	1,6

3. ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? (porcentaje)

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno	En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático	A la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario	NS (no leer)	NR (no leer)
51,7	19,0	21,0	5,1	3,3

4. ¿Qué tan importante es para usted vivir en una sociedad democrática? En una escala donde 1 no es para nada importante y 10 es absolutamente importante, ¿qué posición elegiría usted? (porcentaje)

Nada importante (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	Absolutamente importante (10)	NS (no leer)	NR (no leer)
3,6	1,2	1,5	3,1	15,6	10,6	9,2	10,0	7,5	35,6	1,6	0,6

5. Ahora, ¿qué tan democrático es Chile? Usando esta escala donde 1 significa para nada democrático y 10 significa muy democrático. (porcentaje)

	Para nada democrático (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy democrático (10)	NS (no leer)	NR (no leer)
a. ¿Qué tan democrático es nuestro país hoy en día?	6,5	3,3	7,6	12,5	22,1	12,6	12,6	10,8	4,4	5,4	1,8	0,5
b. ¿Qué tan democrático era nuestro país hace 10 años?	5,9	5,0	8,2	13,4	22,8	12,8	9,8	7,7	2,9	5,1	5,5	1,0
c. ¿Qué tan democrático era nuestro país antes de 1973?	19,4	8,8	8,5	8,9	11,5	5,8	6,4	4,1	2,9	5,1	17,2	1,5
d. ¿Y qué tan democrático cree Ud. que será en 10 años más?	5,4	3,7	4,3	9,3	15,7	11,4	13,2	10,1	6,3	8,7	10,9	1,1

6. ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que funciona la democracia en Chile? (porcentaje)

Muy bien	Bien	Regular	Mal	Muy mal	NS (no leer)	NR (no leer)
0,5	10,8	56,7	21,4	8,3	0,9	1,5

7. Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que hace a un buen ciudadano. De acuerdo a la siguiente escala de 1 al 7, donde 1 significa que no es importante y 7 significa que es muy importante, ¿cuán importante es para Ud...? (porcentaje)

	No es importante (1)	2	3	4	5	6	Es muy importante (7)	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Siempre votar en las elecciones	7,1	3,7	4,1	10,0	11,2	10,5	52,5	0,6	0,3
b. Nunca tratar de pagar menos impuestos	3,5	3,0	5,9	13,9	15,4	14,4	39,2	3,0	1,6
c. Siempre obedecer las leyes y normas	1,7	1,4	4,3	8,4	16,9	16,6	49,4	0,8	0,6
d. Realizar un seguimiento a las acciones del gobierno	3,9	3,1	5,0	12,7	15,1	13,9	43,7	1,7	0,9
e. Ser activo en asociaciones sociales o políticas	8,6	7,4	8,2	17,7	15,6	13,1	25,7	2,6	1,0
f. Tratar de entender las ideas de la gente con opiniones diferentes	2,2	1,5	4,7	8,7	15,2	17,8	48,8	0,9	0,3
g. Escoger productos por razones políticas, éticas o ambientales, aun cuando ellos puedan costar un poco más	10,5	7,4	8,0	15,8	15,9	11,8	26,2	3,5	0,9
h. Ayudar a personas en Chile que estén en peores condiciones que Ud.	0,9	0,7	2,9	6,3	9,3	19,1	60,0	0,5	0,5
i. Estar informado sobre lo que pasa en el país	1,4	1,5	3,1	7,3	12,0	17,5	55,9	0,7	0,6
j. Estar dispuesto a servir en las Fuerzas Armadas en el momento necesario	16,8	7,6	8,4	11,5	12,8	10,5	27,2	3,7	1,4
k. Cuidar el medioambiente	1,0	0,8	1,3	4,0	6,9	11,3	73,5	0,4	0,9

8. Existen diferentes opiniones sobre los derechos de las personas en una democracia. En una escala del 1 al 7, donde el 1 significa que no es importante y 7 significa que es muy importante, ¿cuán importante es para Ud...? (porcentaje)

	No es importante (1)	2	3	4	5	6	Es muy importante (7)	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Que todos los ciudadanos tengan un nivel de vida adecuado	0,4	0,9	0,9	4,1	5,2	11,2	77,1	0,1	0,1
b. Que los políticos tomen en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de tomar decisiones	0,4	1,1	1,9	3,5	6,4	12,5	73,3	0,7	0,2
c. Que las autoridades de gobierno respeten y protejan el derecho de las minorías	0,2	0,7	2,4	5,2	7,1	13,9	69,7	0,6	0,3
d. Que a las personas se les den mayores oportunidades para participar en la toma de decisiones públicas	0,5	1,2	1,4	5,2	9,0	15,3	66,5	0,7	0,2
e. Que los ciudadanos puedan protestar cuando se opongan a acciones oficiales	1,6	2,0	2,8	7,2	11,5	15,7	57,5	1,4	0,4

**9. De los siguientes partidos políticos que se presentan en esta tarjeta, ¿con cuál de ellos se identifica más o simpatiza más Ud.?
(porcentaje)**

Partido Andha Chile	0,0
Partido Ciudadanos	0,4
Partido Comunista de Chile (PC)	0,9
Partido Demócrata Cristiano (PDC)	3,1
Partido Ecologista Verde	0,6
Partido Evolución Política (Evópoli)	0,3
Partido Federación Regionalista Verde Social	0,0
Partido Humanista (PH)	1,2
Partido Igualdad	1,1
Partido Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores	0,3
Partido Izquierda Ciudadana de Chile	0,3
Partido Más Región	0,2
Partido Poder Ciudadano	0,0
Partido por la Democracia (PPD)	2,3
Partido País Progresista (PRO)	0,3
Partido Radical Socialdemócrata (PRSD)	0,6
Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI)	0,9
Partido Renovación Nacional (RN)	3,2
Partido Revolución Democrática (RD)	0,4
Partido Socialista de Chile (PS)	3,1
Partido Unión Demócrata Independiente (UDI)	2,9
Otro partido	1,1
Ninguno	73,6
No sabe	1,7
No responde	1,4

**10. Ahora, de los siguientes bloques políticos que se presentan en esta tarjeta, ¿con cuál de ellos se identifica más o simpatiza más Ud.?
(porcentaje)**

Chile Vamos	9,6
(ex) Nueva Mayoría	4,9
Frente Amplio	7,7
Otro	1,7
Ninguno	69,3
NS (no leer)	3,3
NR (no leer)	3,4

11. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NS (no leer)
a. Los partidos políticos son indispensables para la democracia	10,2	32,5	30,1	16,0	7,0	3,7	0,6
b. Los partidos políticos sólo sirven para dividir a la gente	17,0	32,1	29,3	16,1	3,0	1,9	0,7
c. En Chile los partidos funcionan bien	2,7	9,6	33,1	35,0	16,4	2,4	0,9

12. Si usted tuviera que elegir entre dos candidatos/as que tienen las mismas propuestas, que pertenecen al mismo partido o coalición política, y que se diferencian sólo en algunas características personales, ¿a cuál candidato preferiría usted...? (porcentaje)

a. Al candidato más joven	Al candidato con más edad	(No leer) Le da lo mismo	NS (no leer)	NR (no leer)
48,5	31,0	14,2	1,3	5,0
b. Al candidato que haya sido elegido otras veces	Al candidato que no haya sido elegido antes	(No leer) Le da lo mismo	NS (no leer)	NR (no leer)
27,8	50,7	15,0	1,5	5,1
c. Al candidato que sea hombre	Al candidato que sea mujer	(No leer) Le da lo mismo	NS (no leer)	NR (no leer)
18,8	21,9	50,3	1,5	7,6
d. Al candidato que sea de su zona	Al candidato que sea de fuera de su zona	(No leer) Le da lo mismo	NS (no leer)	NR (no leer)
52,4	9,4	29,9	1,3	7,1

13. Como Ud. sabe, tradicionalmente en nuestro país la gente define las posiciones políticas como más cercanas a la izquierda, al centro o a la derecha. En esta tarjeta representamos las distintas posiciones políticas. Por favor, indíqueme, ¿con cuál Ud. se identifica más o con cuál posición simpatiza Ud. más? (porcentaje)

Derecha	Centroderecha	Centro	Centroizquierda	Izquierda	Independiente (no leer)	Ninguna (no leer)	NS (no leer)	NR (no leer)
8,0	4,5	7,9	6,5	9,3	5,6	54,6	1,6	2,1

14. Si es que hubiera igual número de mujeres y hombres en cargos de poder político, ¿qué cree usted que pasaría? (porcentaje)

Mejoraría la forma de hacer política	43,4
Empeoraría la forma de hacer política	4,1
No habría ningún cambio en la forma de hacer política	42,1
NS (no leer)	7,3
NR (no leer)	3,1

15. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con la siguiente afirmación? En términos generales, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. (porcentaje)

Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
5,5	19,5	51,0	18,3	5,4	0,3

16. En Chile existe una ley de cuotas que exige a los partidos políticos tener al menos un 40% de mujeres candidatas en las elecciones de diputados y senadores. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con...? (porcentaje)

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
a. ... la existencia de esa ley de cuotas?	16,3	48,8	18,8	3,9	10,8	1,4
b. ... y con ampliar esta ley de cuotas para las elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales?	20,6	49,2	15,0	3,2	10,3	1,7

17. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con crear una ley que exija que haya igual número de hombres que de mujeres en algunos cargos del gobierno, como por ejemplo ministros y subsecretarios? (porcentaje)

Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
28,9	50,3	2,5	11,9	5,1	1,4

18. ¿Estaría usted de acuerdo con una ley que obligue a las grandes empresas privadas a tener igual o similar cantidad de hombres y de mujeres ejerciendo los cargos directivos? (porcentaje)

Sí, estaría de acuerdo	No, estaría en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
84,0	10,6	3,8	1,6

19. Si es que hubiera igual número de mujeres y hombres en cargos directivos de las grandes empresas, ¿qué cree usted que pasaría? (porcentaje)

Aumentaría la eficiencia de las empresas privadas	56,1
Disminuiría la eficiencia de las empresas privadas	4,7
No habría ningún cambio en la eficiencia de las empresas privadas	32,3
NS (no leer)	5,8
NR (no leer)	1,1

20. Cuando usted piensa en la palabra “mujer”, ¿cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la cabeza? Dígame hasta tres palabras (respuesta abierta)

21. Y cuando usted piensa en la palabra “hombre”, ¿cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la cabeza? Dígame hasta tres palabras (respuesta abierta)

22. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
a. En última instancia, la responsabilidad de mantener económicamente a la familia siempre es del hombre	5,4	21,2	50,1	22,6	0,4	0,3
b. En última instancia, la responsabilidad de cuidar la casa y los niños es siempre de la mujer	5,3	18,7	52,5	22,8	0,2	0,5

23. ¿Qué tan orgulloso/a se siente usted de ser chileno/a? (porcentaje)

Muy orgulloso	Algo orgulloso	No muy orgulloso	Nada orgulloso	No soy chileno	NS (no leer)	NR (no leer)
61,4	23,4	6,6	4,1	2,4	0,4	1,7

24. ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes aspectos? (porcentaje calculado en base a quienes declararon ser chilenos o chilenas)

	Muy orgulloso	Algo orgulloso	No muy orgulloso	Nada orgulloso	NS (no leer)	NR (no leer)
a. La forma en que funciona su democracia	5,2	34,1	38,6	20,5	1,3	0,3
b. Sus logros económicos	14,8	39,7	29,4	15,0	0,8	0,4
c. Su sistema de seguridad social	4,3	23,3	34,6	36,5	0,9	0,5
d. Sus Fuerzas Armadas	13,3	33,8	31,6	18,5	2,1	0,9
e. Su historia	28,4	39,4	20,9	8,8	1,9	0,7
f. Su trato justo e igual de todos los grupos en la sociedad	6,0	24,3	37,8	30,4	1,0	0,5
g. La forma en que se cuida el medio ambiente	5,4	20,3	35,0	38,4	0,7	0,2

25. Para mantener las culturas de los pueblos originarios o indígenas de nuestro país, ¿qué tan importante cree Ud. que es...? (porcentaje)

	Muy importante	Bastante importante	Poco importante	Nada importante	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Que exista un Ministerio de Asuntos Indígenas	44,9	38,2	12,1	3,1	1,6	0,1
b. Que tengan cupos especiales en el Congreso Nacional	42,5	35,4	15,4	4,9	1,6	0,2
c. Que la Constitución reconozca la existencia de los pueblos indígenas	51,8	35,7	9,7	1,5	1,0	0,3
d. Que el Estado les entregue tierras	42,6	32,0	15,8	6,2	2,9	0,5
e. Que en las escuelas se enseñen las lenguas indígenas de nuestro país	51,7	32,4	11,3	3,6	1,0	0,0
f. Que los pueblos indígenas puedan administrar autónomamente sus territorios	42,1	31,0	15,8	7,9	3,0	0,2

26. Pensando en Chile, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo? (porcentaje)

La diferencia de intereses y opiniones representa un obstáculo para la unidad del país	30,8
La diferencia de intereses y opiniones expresa la diversidad y riqueza del país	58,9
NS (no leer)	8,5
NR (no leer)	1,8

27. En todas las sociedades se producen conflictos. Cuando estos se producen, ¿qué debiera hacerse? (porcentaje)

Dejar que se muestren los conflictos para que aparezcan los problemas	41,5
Tratar de evitar los conflictos para que las cosas no pasen a mayores	51,7
NS (no leer)	5,2
NR (no leer)	1,6

28. En su opinión, ¿hablar sobre lo que ocurrió en Chile antes y después de 1973...? (porcentaje)

Permite aprender del pasado, para un mejor futuro	52,9
No se saca nada bueno discutiendo sobre esa época	35,8
NS (no leer)	5,7
NR (no leer)	5,5

29. Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que viven en Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Los inmigrantes mejoran la sociedad chilena trayendo nuevas ideas y culturas	10,5	33,4	24,4	26,2	4,8	0,7	0,1
b. Los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile	6,4	23,3	25,0	36,3	8,7	0,4	0,1
c. Los inmigrantes aportan a la economía de Chile	6,6	33,5	26,6	25,5	4,6	3,2	0,1
d. Los inmigrantes aumentan la delincuencia en el país	8,4	28,5	31,0	23,7	6,3	2,0	0,1
e. El gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes	12,6	32,4	24,5	19,6	4,3	6,5	0,0
f. Los inmigrantes reciben peores tratos que los chilenos en sus lugares de trabajo	22,8	39,4	18,6	14,3	1,9	3,0	0,0

30. En la pasada elección presidencial de 2017, ¿Ud....? (no leer: primera y/o segunda vuelta) (porcentaje)

Votó por un candidato	Votó nulo o blanco	No fue a votar	NS (no leer)	NR (no leer)
64,5	3,6	30,3	0,8	0,9

31. ¿Por qué no fue a votar? (porcentaje en base a quienes declararon no haber ido a votar en las elecciones presidenciales de 2017) (porcentaje)

Porque la política no me interesa	33,7
Porque esta elección no era importante	2,9
Porque ningún candidato me gustaba	13,5
Porque quería protestar contra el sistema	0,8
Porque mi voto no cambiaría en nada las cosas	8,9
Porque me dio lata ir a votar	7,6
Porque estaba enfermo, perdí el carnet, estaba lejos de mi lugar de votación	20,4
Porque no me enteré de mi lugar de votación	2,6
NS (no leer)	3,3
NR (no leer)	6,2

32. ¿Usted sabe que en las próximas elecciones municipales del 2020 se elegirá también a los gobernadores regionales? (porcentaje)

Sí	No	NS (no leer)	NR (no leer)
34,9	59,2	5,4	0,6

33. ¿Y Ud. cree que irá a votar en las elecciones del 2020? (porcentaje)

Sí	No	NS (no leer)	NR (no leer)
67	16,8	14,6	1,6

34. ¿Qué tan informado se siente usted sobre el proceso de descentralización y la elección democrática de los gobernadores regionales en el 2020? (porcentaje)

Muy informado	Bastante informado	Poco informado	Nada informado	NS (no leer)	NR (no leer)
3,1	6,4	36,7	50,9	2,0	1,0

35. En general, ¿Ud. cree que en Chile el voto debería ser obligatorio o voluntario? (porcentaje)

Voluntario	Obligatorio	NS (no leer)	NR (no leer)
49,3	45,8	2,8	2,1

36. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Ud. más de acuerdo? (porcentaje)

La forma como uno vota puede influir en lo que pase en el país	63,6
La forma como uno vota no puede influir en lo que pase en el país	21,9
NS (no leer)	5,7
NR (no leer)	8,8

37. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Los plebiscitos son una buena forma de decidir asuntos políticos importantes	25,8	42,3	20,2	6,3	5,1	0,4
b. Los plebiscitos y consultas comunales son una buena forma de decidir en torno a los problemas locales	27,3	41,0	20,8	5,5	5,0	0,4

38. ¿A qué nivel se deben tomar las decisiones más importantes sobre los siguientes temas? (porcentaje)

	A nivel comunal	A nivel regional	A nivel nacional	NS (no leer)	NR (no leer)
a. La construcción de grandes obras públicas (como calles, puentes y carreteras)	25,0	32,6	41,2	0,7	0,5
b. La administración de la salud primaria (consultorios y hospitales)	31,8	27,3	39,6	0,8	0,5
c. El cuidado del medio ambiente	21,4	22,2	54,9	0,8	0,8
d. La instalación de grandes empresas e industrias	22,3	31,5	43,4	1,8	1,0
e. La administración de colegios y escuelas	34,4	25,6	38,2	1,0	0,8
f. La generación de empleo	25,2	24,5	49,0	0,7	0,7
g. Medidas para combatir la delincuencia	25,0	16,3	56,7	1,1	0,8

39. ¿Cuáles diría que son los 3 principales problemas del lugar donde vive y que lo afectan a Ud.? (pregunta abierta)

40. El Congreso tiene distintas tareas o funciones que realizar. De la siguiente lista, ¿cuál cree Ud. que es la tarea más importante que tiene el Congreso? (porcentaje)

Fiscalizar los actos de gobierno	13,9
Representar los intereses de las personas	43,2
Elaborar y aprobar leyes	34,2
NS (no leer)	7,2
NR (no leer)	1,4

41. ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que el Congreso chileno cumple con cada una de esas funciones? (porcentaje)

	Muy bien	Bien	Mal	Muy mal	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Fiscalizar los actos de gobierno	0,8	19,5	52,7	18,9	7,4	0,7
b. Representar los intereses de las personas	0,8	13,9	54,3	24,9	5,4	0,7
c. Elaborar y aprobar leyes	1,4	19,4	50,6	20,5	7,2	1,0

42. Suponga que un proyecto de ley está siendo debatido por el Congreso y Ud. considera que es injusto o perjudicial. En este caso, ¿qué tan probable es que Ud., junto a otras personas, realice algo al respecto? (porcentaje)

Muy probable	Probable	No muy probable	No es probable	NS (no leer)	NR (no leer)
8,0	19,9	28,9	36,0	6,0	1,3

43. Y si hiciera ese esfuerzo, ¿qué tan probable es que el Congreso le diera atención seria a sus demandas? (porcentaje)

Muy probable	Probable	No muy probable	No es probable	NS (no leer)	NR (no leer)
1,7	9,6	33,6	44,1	9,0	2,1

44. ¿Y cuál cree usted que es el mejor medio para influir en la discusión del Congreso? (leer cada alternativa) (porcentaje)

Enviando cartas al diario	3,7
Llamando a la radio o algún medio de comunicación	13,3
Dando mi opinión por redes sociales (Twitter, Facebook)	14,5
Mandando emails a los/as parlamentarios/as	5,2
Reuniéndome con los/as parlamentarios/as	10,5
Asistiendo a las comisiones en el Congreso	7,8
Organizando manifestaciones o protestas en la vía pública	17,7
Otro, ¿cuál?	2,5
NS (no leer)	21,1
NR (no leer)	3,7

45. A continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. ¿Podría decirme cuál cree Ud. que es el grado de influencia que hoy día cada una de ellas tiene en las decisiones que toma el Congreso? (porcentaje)

	Mucha	Bastante	Poca	Ninguna	NS (no leer)	NR (no leer)
a. La iglesia católica	16,0	17,8	37,5	21,2	7,2	0,4
b. Los medios de comunicación	17,1	33,0	36,0	10,1	3,5	0,3
c. Los empresarios	39,5	31,6	18,3	6,8	3,3	0,4
d. Los trabajadores	5,1	16,9	46,8	27,6	3,1	0,5
e. Las Fuerzas Armadas	18,4	28,9	31,5	14,8	5,9	0,5
f. Los movimientos sociales	7,1	23,3	45,2	19,3	4,5	0,5
g. Los pueblos indígenas	4,5	13,4	36,4	41,4	3,8	0,5

46. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
a. La gente como yo no tiene nada que decir sobre lo que el Congreso hace	4,3	20,1	20,7	41,6	11,1	2,0	0,2
b. No creo que al Congreso le importe mucho lo que piensa la gente como yo	21,7	45,8	19,1	9,3	1,9	1,8	0,3
c. La mayoría de los políticos están en la política sólo por lo que puedan obtener personalmente de ella	39,2	38,8	16,6	4,0	0,4	1,0	0,2

47. ¿Con qué frecuencia Ud...? (porcentaje)

	Todos los días	4-6 días a la semana	1-3 días a la semana	Menos de 1 vez a la semana	Nunca o casi nunca	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Lee las noticias en algún diario [no leer, solo para el encuestador: se refiere a en papel o digital]	19,3	10,0	17,8	13,4	38,2	0,8	0,6
b. Ve algún noticiero de televisión	55,9	16,7	14,6	5,4	6,8	0,0	0,7
c. Escucha noticias en la radio	23,1	11,3	17,2	13,1	33,3	0,8	1,2
d. Usa redes sociales (Facebook, Twitter) para informarse sobre lo que pasa el país	37,8	12,5	12,8	5,3	29,6	1,3	0,8
e. Usa Internet para informarse	42,1	12,4	11,8	4,8	27,1	1,0	0,8
f. Conversa sobre las noticias o hechos que pasan en la actualidad del país	28,8	16,2	25,3	14,6	14,2	0,1	0,8
g. Conversa sobre política	10,8	6,0	14,4	22,0	45,6	0,4	0,8

48. La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para cada tipo de grupo, por favor dígame si Ud. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. ¿Pertenece Ud. a...? (porcentaje)

	Sí, pertenece	No, no pertenece	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Un partido político	3,2	94,7	0,1	2,0
b. Un movimiento político	2,9	95,0	0,1	2,1
c. Un sindicato	8,0	89,8	0,1	2,1
d. Una asociación profesional o gremial	3,6	94,1	0,1	2,3
e. Una asociación empresarial	2,6	94,8	0,1	2,5
f. Una junta de vecinos	18,7	79,7	0,1	1,6
g. Una iglesia u otra organización religiosa	14,4	83,8	0,1	1,6
h. Un grupo cultural	7,3	90,3	0,1	2,3
i. Un grupo deportivo	10,6	87,3	0,1	2,1
j. Una fundación o grupo de beneficencia	4,0	93,7	0,1	2,2
k. Un grupo de mujeres o movimiento feminista	2,3	95,4	0,1	2,2

l. Un grupo o asociación de pueblos originarios	2,0	95,7	0,1	2,2
m. Un grupo ecológico o ambientalista	3,7	93,9	0,1	2,3
n. Centro de alumnos/as o de padres/madres	7,4	90,4	0,1	2,1
o. Un club de interés, hobbies o pasatiempos	8,3	89,8	0,1	1,9
p. Un grupo de protección y defensa de los animales	2,7	95,0	0,1	2,3
q. Otra asociación voluntaria	5,0	92,7	0,1	2,3

49. ¿Usted se identifica o simpatiza con alguna de las siguientes posturas o causas? (porcentaje)

	Sí, me identifico o simpatizo con la causa	No, no me identifico ni simpatizo con la causa	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Feminismo	39,3	56,7	1,2	2,8
b. Defensa del medioambiente	68,4	29,1	0,2	2,4
c. Anarquismo	7,4	88	1,1	3,6
d. Regionalismo	25,1	70,1	1,3	3,5
e. Protección de los animales	66,0	32,2	0,2	1,6
f. Defensa de las minorías sexuales	44,1	51,8	0,9	3,3
g. Defensa de los consumidores	50,0	46,8	0,7	2,4
h. Defensa de la patria	38,8	56,3	1,1	3,9
i. Reconocimiento de los pueblos originarios	56,4	40,3	0,5	2,9
j. Defensa de los trabajadores	63,7	33,5	0,3	2,6
k. Defensa de las demandas estudiantiles	48,7	47,5	0,8	3,0
l. Defensa de la tradición y los valores religiosos	33,5	62,1	1,0	3,4
m. Legalización de la marihuana	35,2	60	1,1	3,7
n. En contra del aborto	35,5	58,9	2,4	3,1

50. ¿Dónde se ubicaría Ud. en la siguiente escala, en que 1 significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en el Estado” y 10 significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas”? (porcentaje)

La principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en el Estado (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	La principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas (10)	NS (no leer)	NR (no leer)
6,0	2	2,7	2,8	18,9	14	9,1	9,1	8,8	25,6	0,8	0,1

51. ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que 1 significa “yo le daría más importancia al cuidado y protección del medioambiente que al desarrollo económico” y 10 significa “yo le daría más importancia al desarrollo económico que al cuidado y protección del medioambiente”? (porcentaje)

Yo le daría más importancia al cuidado y protección del medioambiente que al desarrollo económico (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	Yo le daría más importancia al desarrollo económico que al cuidado y protección del medioambiente (10)	NS (no leer)	NR (no leer)
9.9	3,9	4,9	4,8	25,3	18,4	9,7	7,1	5,1	9,8	0,7	0,5

52. ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que 1 significa “el matrimonio entre personas del mismo sexo nunca es justificable” y 10 significa “el matrimonio entre personas del mismo sexo siempre es justificable”? (porcentaje)

El matrimonio entre personas del mismo sexo nunca es justificable (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	El matrimonio entre personas del mismo sexo siempre es justificable (10)	NS (no leer)	NR (no leer)
20,3	8,7	5,2	4,1	16,7	8,3	6,3	6,7	5,8	15,2	1,8	0,8

53. ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que 1 significa “el aborto nunca es justificable” y 10 significa “el aborto siempre es justificable”? (porcentaje)

El aborto nunca es justificable (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	El aborto siempre es justificable (10)	NS (no leer)	NR (no leer)
21,1	10,7	5,6	4,7	18,3	9,3	6,4	6,1	3,4	12,8	1,1	0,5

54. Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas si Ud. lo ha hecho o no lo ha hecho. Veamos, ¿Ud. ha...? (porcentaje)

	Sí, lo ha hecho	No, no lo ha hecho	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Participado en una huelga	25,6	74,3	0,1	0,1
b. Asistido a una marcha o manifestación política	24,4	75,0	0,1	0,5
c. Donado dinero o recolectado fondos para una actividad social o política	36,8	62,8	0,1	0,3
d. Firmado una petición	19,8	79,7	0,2	0,4
e. Trabajado en una campaña electoral	7,6	91,5	0,2	0,7
f. Contactado o figurado en los medios de comunicación para expresar su opinión	7,4	91,9	0,2	0,5
g. Usado las redes sociales (como Facebook, Twitter y otros) para expresar su opinión en temas políticos	23,7	76,0	0,2	0,1
h. Participado en una toma	10,0	89,3	0,1	0,5
i. Creado o apoyado alguna campaña en Internet por alguna causa de su interés	18,8	80,7	0,1	0,4
j. Realizado algún reclamo formal a empresas públicas o privadas	19,2	80,2	0,1	0,6
k. Participado en alguna actividad solidaria o de voluntariado	31,7	67,8	0,2	0,3
l. Boicoteado o dejado de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medioambiente	20,4	79,0	0,1	0,5

55. Voy a leerle una lista de acciones que las personas pueden realizar para lograr sus objetivos políticos. Usando esta tarjeta donde 1 significa que desaprueba totalmente y 10 significa que aprueba totalmente, Ud. ¿aprueba o desaprueba que...? (porcentaje)

	Desa- prueba totalmente (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	Aprueba totalmente (10)	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Que las personas participen en manifestaciones públicas	8,2	2,1	1,4	3,2	15,5	8,2	9,6	9,5	9,5	30,9	1,5	0,5
b. Que las personas trabajen en campañas electorales	6,6	1,9	2,7	2,8	18,8	9,2	8,8	11,4	8,9	24,8	2,6	1,6
c. Que las personas participen en organizaciones o partidos políticos	6,2	1,9	2,9	4,6	17,8	10,0	8,9	10,9	8,9	23,6	2,5	1,7
d. Que las personas participen en un bloqueo de calles o carreteras	25,8	8,6	6,8	7,4	14,5	6,7	7,6	5,1	3,6	12,6	0,9	0,4
e. Que las personas ocupen terrenos privados, fábricas, oficinas	31,3	8,6	8,4	7,3	13,2	6,2	5,2	4,1	2,9	10,6	1,8	0,4
f. Que las personas hagan huelgas en el trabajo	12,2	4,9	3,4	4,2	13,9	7,5	8,5	10,3	7,8	25,9	0,8	0,5
g. Que las personas hagan huelgas de hambre	35,1	11,5	7,1	5,2	11,6	5,8	4,1	4,0	3,0	11,0	1,4	0,5
h. Que las personas hagan justicia por sus propias manos	50,2	11,4	4,4	4,4	10,2	4,5	2,7	1,9	1,3	7,0	1,4	0,6

56. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

	Muy de acuerdo (1)	De acuerdo (2)	Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)	En desacuerdo (4)	Muy en desacuerdo (5)	NS (no leer)	NR (no leer)
a. En Chile la justicia funciona bien	1,0	4,7	20,6	49,5	23,2	0,6	0,4
b. La justicia no tiene los medios para cumplir su función	4,6	16,6	24,1	35,7	14,9	3,7	0,4
c. La justicia siempre favorece a los poderosos	43,2	36,8	13,0	5,5	0,9	0,4	0,1
d. Los tribunales son demasiado lentos	47,5	34,5	12,7	3,4	0,9	0,5	0,4

57. En general, ¿Ud. diría que uno debe obedecer las leyes siempre, sin excepciones, o que hay ocasiones excepcionales en las que uno podría no obedecer una ley si se considera que ella es injusta? (porcentaje)

Obedecer las leyes siempre	53,9
No obedecer si se considera que la ley es injusta	36,5
NS (no leer)	4,6
NR (no leer)	5,1

58. En todos los sistemas judiciales se cometen errores. En su opinión, ¿qué es peor, condenar a una persona inocente o dejar libre a una que es culpable? (porcentaje)

Condenar a una persona inocente	59,7
Dejar libre a una persona culpable	27
NS (no leer)	6,4
NR (no leer)	7,0

59. Suponga que el Gobierno sospecha que se va a cometer un acto terrorista, ¿Ud. cree que las autoridades del Gobierno debieran tener el derecho a...? (porcentaje)

	Sí, sin ninguna duda	Probablemente sí	Probablemente no	No, en ningún caso	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Detener personas por todo el tiempo que quieran sin enjuiciarlos	7,8	14,7	29,8	44,0	3,1	0,6
b. Intervenir las conversaciones telefónicas	8,4	27,1	25,3	35,8	2,9	0,5
c. Detener y controlar a cualquier persona en la calle	6,6	27,3	26,8	36,1	2,7	0,6
d. Maltratar físicamente a los detenidos para lograr confesiones	1,9	4,0	18,4	72,9	2,2	0,7

60. A continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿cuánta confianza tiene Ud. en cada una de ellas? (porcentaje)

	Mucha confianza	Bastante confianza	Poca confianza	Nada de confianza	NS (no leer)	NR (no leer)
a. La iglesia católica	4,8	8,8	40,8	45,0	0,5	0,2
b. Las Fuerzas Armadas	7,4	20,2	42,3	29,1	1,0	0,1
c. Las iglesias evangélicas	6,4	9,6	39,7	42,2	1,7	0,4
d. Los tribunales de justicia	1,9	8,5	50,5	38,2	0,5	0,4
e. Los partidos políticos	1,2	4,6	44,7	48,7	0,4	0,5
f. Los diarios	2,5	18,6	51,3	26,6	0,5	0,6
g. La televisión	3,1	18,3	50,9	26,9	0,5	0,3
h. Las radios	5,5	25,7	46,4	20,4	1,5	0,6
i. Los sindicatos	5,8	24,5	42,3	23,5	3,4	0,6
j. Carabineros	4,5	18,9	43,9	31,6	0,7	0,5
K. El Gobierno	2,4	10,9	47,7	37,8	0,6	0,6
L. El Congreso	1,3	7,1	49,0	41,5	0,7	0,4
m. Las empresas privadas	1,9	12,0	49,4	35,0	1,4	0,3
n. Las municipalidades	2,2	16,9	49,9	29,8	0,9	0,3
o. El Ministerio Público [no leer: fiscalía]	1,9	10,7	48,8	35,8	2,2	0,6
p. El movimiento estudiantil	5,9	18,3	45,0	28,3	1,8	0,8
q. El movimiento feminista	5,8	18,9	42,4	30,1	2,0	0,7
r. Las redes sociales (Twitter y Facebook)	2,7	16,9	45,2	31,3	3,3	0,7
s. Los bomberos	55,7	25,9	10,7	6,8	0,5	0,4

61. En general, ¿Ud. diría que se puede confiar en la mayoría de las personas, o no se puede confiar en la mayoría de las personas? (porcentaje)

Se puede confiar en la mayoría de las personas	13,0
No se puede confiar en la mayoría de las personas	65,0
NS (no leer)	1,1
NR (no leer)	20,9

62. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS (no leer)	NR (no leer)
a. La gente como yo no tiene nada que decir sobre lo que el gobierno hace	5,1	16,5	19,5	42,5	14,8	1,1	0,6
b. No creo que al gobierno le importe mucho lo que piensa la gente como yo	21,8	42,4	18,8	13,0	2,4	1,2	0,5
c. La mayor parte del tiempo podemos confiar en que el gobierno haga lo correcto	3,6	17,9	34,6	31,4	11,0	1,2	0,4
d. Preferiría ser representado por un ciudadano común que por un político experimentado	18,6	33,0	28,3	13,9	2,2	3,2	0,9

63. ¿Cuán interesado está Ud. en la política? (porcentaje)

Muy interesado	5,6
Bastante interesado	7,7
Algo interesado	27,9
Nada interesado	57,5
NS (no leer)	1,1
No responde	0,2

64. ¿En qué circunstancias cree Ud. que podría llegar a interesarse más en la política? (porcentaje calculado excluyendo a quienes respondieron “muy interesado” en la pregunta 63) (porcentaje)

Si hubiera buenos políticos/as	17,8
Si hubiera un proyecto político que lo representara	13,5
Si viera que la política genera cambios en su vida	24,3
Si hubiera más espacios para participar	10,6
Bajo ninguna circunstancia	30,6
NS (no leer)	2,3
NR (no leer)	0,9

65. ¿Y usted diría que está...? (porcentaje)

Más interesado en política que antes	9,3
Menos interesado en política que antes	24,5
Igual de interesado en la política que antes	24,8
Nunca ha estado interesado en política	38,9
NS (no leer)	1,1
NR (no leer)	1,4

66. A continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿cuán extendida cree Ud. que está la corrupción en cada una de ellas? Veamos... (porcentaje)

	Hay mucha corrupción	Hay algo de corrupción	No hay nada de corrupción	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Las Fuerzas Armadas	52,7	40,1	4,5	2,4	0,3
b. Los partidos políticos	68,9	28,5	1,5	0,9	0,2
c. Los tribunales de justicia	56,5	38,3	3,1	2,0	0,1
d. Carabineros	63,1	32,9	2,8	0,9	0,3
e. El Gobierno	59,0	36,6	2,9	1,3	0,2
f. El Congreso	61,5	33,9	2,7	1,7	0,2
g. Los Ministerios	55,8	37,8	3,8	2,3	0,4
h. Las empresas privadas	51,7	41,2	4,7	2,3	0,2
i. Los servicios públicos	49,2	42,5	5,7	2,6	0,2
j. Las intendencias o gobiernos regionales	48,5	42,5	3,7	4,9	0,5
k. Las municipalidades	49,7	44,2	4,0	1,8	0,3
l. El Ministerio Público [no leer: fiscalía]	49,7	42,0	4,2	3,7	0,4
m. La policía de Investigaciones	42,2	46,5	7,3	3,5	0,5
n. Medios de comunicación	39,3	50,0	7,4	2,8	0,5

67. En el último año, ¿Ud. ha tenido que pagar alguna coima o hacer algún favor para conseguir que le solucionen un problema en el servicio público? (porcentaje)

Sí	6,5
No	89,9
NS (no leer)	1,1
NR (no leer)	2,6

68. ¿En el último año, ¿Ud. ha tenido que pagar alguna coima o hacer algún favor para conseguir que le solucionen un problema en alguna empresa privada? (porcentaje)

Sí	4,4
No	90,8
NS (no leer)	1,0
NR (no leer)	3,6

69. Sexo (porcentaje)

Hombre	48,3
Mujer	51,7

70. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

71. ¿Cuál es su edad exacta en años?

Tramos de edad (porcentaje)

18 a 24 años	14,3
25 a 34 años	20,8
35 a 44 años	18,1
45 a 54 años	17,6
55 a 64 años	14,2
65 o más	15,1

Tipo de localidad (porcentaje)

Rural	12,4
Urbano	87,6

Macrozona (porcentaje)

Norte	12,2
Centro	21,5
Sur	25,3
Región Metropolitana	40,9

72. ¿Pertenece Ud. a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas? (porcentaje)

Aymara	1,3
Rapa-nui (pascuense)	0,2
Quechua	0,1
Mapuche	8,0
Atacameño (likán antai)	0,1
Coya	0,1
Kawésqar (alacalufe)	0,1
Yagán (yámana)	0,1
Diaguíta	0,4
No pertenece a ningún pueblo indígena	83,7
NS (no leer)	1,9
NR (no leer)	4,1

73. ¿Cuál es su nacionalidad? (porcentaje)

Chilena	96,6
Argentina	0,3
Brasileña	0,1
Boliviana	0,5
Dominicana	0,1
Ecuatoriana	0,3
Española	0,0
Haitiana	0,2
Estadounidense	0,0
Peruana	0,7
Venezolana	0,3
Otra, ¿cuál? Especificar	0,8
NS (no leer)	0,0
NR (no leer)	0,1

74. ¿Podría Ud. decirme la religión o iglesia a la que pertenece o se siente más cercano? (porcentaje)

Católica	50,0
Evangélica	14,6
Testigo de Jehová	1,1
Judía	0,0
Mormona	0,5
Musulmana	0,0
Ortodoxa	0,1
Otra religión o credo	1,5
Ninguna	28,0
Ateo	1,1
Agnóstico	2,4
NS (no leer)	0,1
NR (no leer)	0,6

75. Aparte de ceremonias religiosas tales como casamientos, bautizos y funerales, ¿Ud. con qué frecuencia asiste a los servicios religiosos? (porcentaje)

Varias veces a la semana	4,9
Una vez a la semana	6,5
2 o 3 veces al mes	5,4
Una vez al mes	5,2
Varias veces al año	11,7
Una vez al año	8,4
Menos frecuentemente	14,5
Nunca	37,9
Rechaza	1,3
NS (no leer)	0,1
NR (no leer)	4,2

76. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted alcanzó? Si está estudiando, ¿qué nivel de educación cursa actualmente? (porcentaje)

No estudió	0,8
Educación básica o preparatoria incompleta	8,6
Educación básica o preparatoria completa	10,0
Educación media o humanidades incompleta	13,8
Educación media o humanidades completa	29,7
Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta	5,0
Instituto profesional o centro de formación técnica completa	12,3
Universitaria incompleta	8,1
Universitaria completa	10,7
Postgrado (máster, doctorado o equivalente)	1,0
NS (no leer)	0,0
NR (no leer)	0,0

77. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor su actividad principal? (porcentaje)

Estudia	5,6
Estudia y trabaja	3,9
Trabaja de manera permanente	47,9
Dueño/a de casa, tareas de cuidado	16,5
Jubilado/a o rentista	13,5
Cesante y busca trabajo	4,3
Hace trabajos esporádicos, ocasionales o de temporada	6,6
Familiar no remunerado	0,2
Otro	0,8
NS (no leer)	0,0
NR (no leer)	0,8

78. ¿Cuál es su ocupación u oficio en su trabajo actual o en el último que realizó? Indique el nombre completo y facilite detalles, por ejemplo: recolector de frutas, vendedor de zapatos en un mall, profesor de enseñanza media en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, enfermera en un hospital, etc. (porcentaje calculado solo considerando a quienes en la pregunta 77 declararon estudiar o trabajar, trabajar de manera permanente, estar cesante en búsqueda de trabajo y trabajar esporádicamente, de manera ocasional o de temporada)

Fuerzas Armadas	0,0
Miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo a personal directivo de la administración pública, pero excluyendo empresas estatales	0,0
Altos ejecutivos de empresa privada o pública, gerentes	0,4
Profesionales, científicos e intelectuales	10,7
Técnicos y profesionales de nivel medio	15,8
Dueños de micro o pequeñas empresas (hasta 60 empleados)	4,9
Trabajadores dependientes de los servicios (panaderos, peluqueros, taxistas) y vendedores de comercios y mercados	22,5
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores	5,0
Obreros calificados y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios	14,0
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros	3,7
Trabajadores no calificados (peones, vendedores ambulantes o servicio doméstico)	19,6
Peones agropecuarios	1,5
NS (no leer)	0,0
NR (no leer)	2,0

79. ¿En este trabajo usted es o era...? (porcentaje calculado solo considerando a quienes en la pregunta 77 declararon estudiar o trabajar, trabajar de manera permanente, estar cesante en búsqueda de trabajo y trabajar esporádicamente, de manera ocasional o de como temporera)

Empleado u obrero del sector privado	56,3
Empleado u obrero del sector público	13,2
Trabajador por cuenta propia (no tiene jefes ni empleados)	25,0
Patrón o empleador (tiene empleados)	2,2
Servicio doméstico	2,6
Fuerzas Armadas	0,0
NS (no leer)	0,2
NR (no leer)	0,6

80. ¿Actualmente usted tiene pareja? (porcentaje)

Sí	58,6
No	35,3
NS (no leer)	0,2
No responde	5,9

81. ¿Y vive actualmente con su pareja? (porcentaje en base a quienes declararon tener una pareja en pregunta 80)

Sí	82,6
No	17,0
NS (no leer)	0,0
No responde	0,4

82. Independientemente de si usted tiene o no tiene pareja, ¿podría decirme cuál es su estado civil o conyugal actual? (porcentaje)

Casado(a) por primera vez	32,3
Casado(a) por segunda vez o más	2,4
Casado(a) legalmente, pero separado de hecho	3,9
Divorciado (a)	4,6
Soltero(a), pero con un matrimonio legalmente anulado	2,0
Soltero(a), nunca se ha casado	33,7
Viudo(a)	7,2
Convivencia civil (AUC)	1,3
Convive (SIN AUC)	11,0
NS (no leer)	0,1
NR (no leer)	1,7

83. ¿Cuál de las alternativas de la tarjeta calza mejor con esta vivienda...? (porcentaje)

Vivienda propia (pagada totalmente)	57,2
Vivienda propia (pagando a plazos)	8,4
Vivienda arrendada	21,4
Cedida por trabajo o servicio	1,9
Vivienda gratuita	3,3
NS (no leer)	0,4
NR (no leer)	7,3

84. Incluyéndose Ud., ¿cuántas personas viven permanentemente en su hogar? (no considere servicio doméstico, aunque sea puertas adentro) (porcentaje)

Número de personas	Frecuencia
1	15,5
2	26,9
3	22,0
4	19,3
5	9,2
6	4,2
7	2,0
8	0,4
9	0,3
10	0,1%
11	0,1%
20	0,1%

85. ¿Cuántos adultos y cuántos niños y guaguas viven permanentemente en este hogar? Sin incluir servicio doméstico. Veamos, ¿cuántos...? (porcentaje)

Número de personas	Adultos (mayores de 18)	Niños entre 6 y 17 años	Niños menores de 6 años
0	0,2	64,4	82,3
1	21,8	23,2	12,3
2	41,7	9,4	3,9
3	21,6	1,8	0,4
4	9,3	0,3	0,0
5	2,9	0,0	0,0
6	1,1	0,0	0,0

7	0,3	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0
10	0,1	0,0	0,0
No responde	1,0	1,0	1,0

86. Considerando el aporte de todos los miembros del hogar y otros ingresos adicionales, como rentas de propiedades, jubilaciones o pensiones, ¿en cuál de estos tramos está el ingreso total de su hogar? (El total de encuestados fue distribuido en diferentes tramos según el número de miembros de su núcleo familiar. Los porcentajes fueron calculados en base al total de encuestados dentro de cada tramo)

1 miembro			2 miembros		
1	Menos de 120 mil	11,5	1	Menos de 194 mil	6,8
2	120 mil – 207 mil	21,4	2	194 mil – 336 mil	25,6
3	208 mil – 361 mil	20,8	3	337 mil – 586 mil	29,6
4	362 mil – 630 mil	20,4	4	587 mil – 1.023.000	20,2
5	631 mil – 1.099.000	8,8	5	1.024.000 – 1.785.000	4,2
6	1.100.000 – 1.916.000	5,1	6	1.786.000 – 3.113.000	1,6
7	Más de 1.916.000	0,4	7	Más de 3.113.000	0,7
9	NS/NR (No leer)	11,7	9	NS/NR (No leer)	11,3
3 miembros			4 miembros		
1	Menos de 257 mil	7,7	1	Menos de 314 mil	7,3
2	257 mil – 446 mil	25,0	2	314 mil – 546 mil	27,2
3	447 mil – 779 mil	26,0	3	547 mil – 953 mil	26,2
4	780mil – 1.359.000	18,3	4	954 mil – 1.662.000	17,1
5	1.360.000 – 2.370.000	4,7	5	1.663.000 – 2.899.000	5,9
6	2.371.000 – 4.135.000	1,4	6	2.900.000 – 5.057.000	1,8
7	Más de 4.135.000	0,0	7	Más de 5.057.000	0,0
9	NS/NR (No leer)	16,8	9	NS/NR (No leer)	14,6
5 miembros			6 miembros		
1	Menos de 367 mil	9,5	1	Menos de 417 mil	15,2
2	367 mil – 638 mil	37,5	2	417 mil – 725 mil	26,8
3	639 mil – 1.114.000	22,8	3	726 mil – 1.265.000	15,9
4	1.115.000 – 1.943.000	7,6	4	1.266.000 – 2.207.000	14,8
5	1.944.000 – 3.389.000	3,7	5	2.208.000 – 3.850.000	0,8
6	3.390.000 – 5.912.000	1,6	6	3.851.000 – 6.717.000	0,0
7	Más de 5.912.000	0,6	7	Más de 6.717.000	1,2
9	NS/NR (No leer)	16,8	9	NS/NR (No leer)	25,5
7 miembros o más					
1	Menos de 464 mil	13,5			
2	464 mil – 808 mil	25,8			
3	809 mil – 1.409.000	20,5			
4	1.410.000 – 2.459.000	14,5			
5	2.460.000 – 4.289.000	4,1			
6	4.290.000 – 7.482.000	0,0			
7	Más de 7.482.000	0,0			
9	NS/NR (No leer)	21,6			

87. ¿Tiene este hogar alguno de los siguientes artefactos en uso o alguno de sus miembros ha usado alguno de los siguientes servicios contratados? (porcentaje)

	Sí	No	NS (no leer)	NR (no leer)
a. Smartphone	78,2	18,0	0,3	3,5
b. Conexión a Internet en el hogar pagada	64,0	32,0	0,6	3,4
c. Algún miembro del hogar tiene cuenta corriente	29,2	63,4	1,1	6,3
d. Computador portátil	55,4	39,1	1,1	4,3
e. Vehículo de uso particular	45,8	47,6	1,0	5,7
f. Lavavajillas automático	3,4	88,1	0,9	7,7
g. Servicio doméstico	4,4	87,0	0,9	7,8
h. Algún miembro del hogar ha viajado al extranjero en los últimos 12 meses	10,4	81,4	0,9	7,3

88. ¿Quién es la persona que aporta los mayores ingresos al hogar? (porcentaje)

Soy yo mismo(a)	55,8
Es mi cónyuge o pareja	22,5
Es mi hijo(a)	1,9
Es mi padre o madre	13,7
Es otro familiar	3,7
Es otra persona no familiar	0,5
NS (no leer)	1,9
NR (no leer)	0

89. ¿Cuál es la ocupación u oficio de la persona que aporta los mayores ingresos de este hogar? Indique el nombre completo y facilite detalles, por ejemplo: recolector de frutas, vendedor de zapatos en un mall, profesor de enseñanza media en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, enfermera en un hospital, etc. (porcentaje calculado solo considerando a quienes en la pregunta 88 declararon no ser quienes aportan la mayor cantidad de ingresos en el hogar)

Fuerzas Armadas	0,7
Miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo a personal directivo de la administración pública, pero excluyendo empresas estatales	0,0
Altos ejecutivos de empresa privada o pública, gerentes	1,4
Profesionales, científicos e intelectuales	6,3
Técnicos y profesionales de nivel medio	12,2
Dueños de micro o pequeñas empresas (hasta 60 empleados)	3,7
Trabajadores dependientes de los servicios (panaderos, peluqueros, taxistas) y vendedores de comercios y mercados	17,0
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores	4,8
Obreros calificados y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios	18,0
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros	4,5
Trabajadores no calificados (peones, vendedores ambulantes o servicio doméstico)	16,9
Peones agropecuarios	3,1
NR (no leer)	11,5

90. ¿En este trabajo, esta persona es...? (porcentaje en base a quienes declararon en la pregunta 88 no ser quienes aportan la mayor cantidad de ingresos en el hogar)

Empleado u obrero del sector privado	51,2
Empleado u obrero del sector público	13,1
Trabajador por cuenta propia (no tiene jefes ni empleados)	19,7
Patrón o empleador (tiene empleados)	3,0
Servicio doméstico	1,4
Fuerzas Armadas	0,8
NS (no leer)	1,9
NR (no leer)	9,0

91. ¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta los mayores ingresos de este hogar? (porcentaje en base a quienes declararon en la pregunta 88 no ser quienes aportan la mayor cantidad de ingresos en el hogar)

No estudió	0,9
Educación básica o preparatoria incompleta	9,0
Educación básica o preparatoria completa	11,2
Educación media o humanidades incompleta	15,4
Educación media o humanidades completa	29,3
Instituto profesional o CFT incompleta	2,2
Instituto profesional o CFT completa	13,3
Universitaria incompleta	2,8
Universitaria completa	9,8
Postgrado (máster, doctorado o equivalente)	1,7
NS (no leer)	1,0
NR (no leer)	3,3

REFERENCIAS

- Adamczyk, A., y Pitt, C. (2009). Shaping attitudes about homosexuality: The role of religion and cultural context. *Social Science Research*, 38(2), 338-351.
- Albala, A., y Tricot Salomon, V. (2019). Social movements and political representation in Chile (1990-2013). *Latin American Perspectives*, junio. <https://doi.org/10.1177/0094582X19861699>
- Araujo, K. (2016). *El miedo a los subordinados. Una teoría de la autoridad*. Lom.
- Araujo, K., y Martuccelli, D. (2012). *Desafíos comunes. Retratos de la sociedad chilena y sus individuos*. Tomo I. Lom.
- Araya, C. (2019). Representaciones discursivas: valoraciones a la comunidad gay en comentarios de ciberprensa chilena. *Árboles y Rizomas* I(1), 35-58.
- Banco Central (2019). Informe de estabilidad financiera. Primer semestre. Banco Central de Chile.
- Banco Mundial (2015). *Efectos distributivos de la reforma tributaria de 2014*. Banco Mundial.
- Baño, R., y Faletto, E. (1992). *El apoliticismo: el factor generacional*. Flacso.
- Bargsted, M., y Maldonado, L. (2018). Party identification in an encapsulated party system: The case of post-authoritarian Chile. *Journal of Politics in Latin America*, 10(1), 29-68.
- Bargsted, M., y Somma, N. (2018). La cultura política, diagnóstico y evolución. En C. Huneeus y O. Avendaño (eds.), *El sistema político de Chile (193-224)*. Lom.
- Bargsted, M., Somma, N., Campos, T., y Joignant, A. (2017). Resultados Primera Ola. Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC). Módulo 4: Ciudadanía y democracia: desigualdades de voz política. Santiago de Chile. *Notas COES de Política Pública*, 11. Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.
- Bargsted, M., Somma, N., y Castillo, J. C. (2017). Political trust in Latin America. En S. Zmerli y T. van der Meer (eds.), *Handbook on political trust (395-417)*. Elgar.
- Barrientos, J. (2016). Situación social y legal de gays, lesbianas y personas transgénero y la discriminación contra estas poblaciones en América Latina. *Revista Latinoamericana*, 22, 331-354.
- Boeninger, E. (2003). *Gobernabilidad. Lecciones de la experiencia*. Uqbar.
- Booth, J. A., y Seligson, M. A. (2009). *The legitimacy puzzle in Latin America: Political support and democracy in eight nations*. Cambridge University Press.
- Brown, W. (2015). *Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution*. Zone Books.
- Carlin, R. (2011). What's not to trust? Rubrics of political party trustworthiness in Chile and Argentina. *Party Politics*, 20(1), 63-77.

- Castells, M. (2008). The new public sphere: global civil society, communication networks, and global governance. *The Annals of the American Academy*, 616, 78-93.
- Castiglioni, R., y Rovira, C. (2016). Challenges to political representation in contemporary Chile. *Journal of Politics in Latin America*, 8(3), 3-24.
- Castillo, J. C. (2011). *The legitimacy of economic inequality: An empirical approach to the case of Chile*. Dissertation. com.
- Castillo, J. C., Palacios, D., Joignant, A., y Tham, M. (2015). Inequality, distributive justice and political participation: An analysis of the case of Chile. *Bulletin of Latin American Research*, 34(4), 486-502.
- CEP (2017). Estudio nacional de opinión pública abril-mayo. Santiago de Chile. Centro de Estudios Públicos.
- (2016). Estudio nacional de opinión pública julio-agosto. Santiago de Chile. Centro de Estudios Públicos.
- CEPAL (2019). Observatorio Demográfico, 2018 (LC/PUB.2018/25-P). Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- (2011). Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. El salto de la autonomía de los márgenes al centro. Informe 2011, Documentos de Proyecto, 436 (LC/W.436). Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Coffé, H., y Bolzendahl, C. (2010). Same game, different rules? Gender differences in political participation. *Sex Roles*, 62(5-6), 318-333. <https://doi.org/10.1007/s11199-009-9729-y>
- Comisión Engel (2015). Informe final. Santiago de Chile. Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
- Comisión Nacional de la Productividad (2017). Informe anual. Santiago de Chile.
- Comunidad Mujer (2018). Informe GET 2018: Género, educación y trabajo. Avances, contrastes y retos de tres generaciones. Santiago de Chile.
- CONICYT (2016). Encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología en Chile. Resumen ejecutivo. Santiago de Chile.
- Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., y Vicuña, M. (2001). *Historia del siglo XX*. Sudamericana.
- Cortés Terzi, A. (2000). *El circuito extrainstitucional del poder*. Cesoc.
- Corvalán, A., y Cox, P. (2015). Participación y desigualdad electoral en Chile. En C. Cox y J. C. Castillo, *Aprendizaje de la ciudadanía: contextos, experiencias y resultados* (175-204). Ediciones UC.
- Cuevas, H., y Gamboa, R. (2013). ¿Cómo piensan los chilenos la ciudadanía? En *La emergencia de la ciudadanía: democracia, poder y conflicto. Actas de la VI Escuela Chile-Francia* (27-46). Cátedra Michel Foucault, Universidad de Chile-Lom.
- Dalton, R. (2017). *The participation gap. Social status and political inequality*. Oxford University Press.
- (2008). Citizenship norms and the expansion of political participation. *Political Studies*, 56(1), 76-98. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00718.x>
- (2006). Citizenship norms and political participation in America: The Good news is ... the bad news is wrong. CDACS Occasional Paper Series 2006/1. The Center for Democracy and Civil Society, Universidad de Georgetown. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-V.125.428-a>
- (1999). Political support in advanced industrial countries. En P. Norris (ed.), *Critical citizens: Global support for democratic government* (57-77). Oxford University Press.
- (1984). Cognitive mobilization and partisan dealignment in advanced industrial democracies. *Journal of Politics*, 46, 264-284.

- Dalton, R., y Shin, D.C. (2014). Reassessing the civic culture model. En R. Dalton y C. Welzel (eds.), *The civic culture transformed: From allegiant to assertive citizens* (91-115). Cambridge University Press.
- Dalton, R., y Welzel, C. (2014). *The civic culture transformed. From allegiant to assertive citizens*. Cambridge University Press.
- Denters, B., Gabriel, O., y Torcal, M. (2006). Norms of good citizenship. En J. W. van Deth, J. R. Montero, y A. Westholm (eds.), *Citizenship and involvement in European democracy: A comparative analysis* (88-107). Routledge.
- Donoso, S. (2016). When social movements become a democratizing force: The political impact of the student movement in Chile. En T. Davies, H. E. Ryan, y A. Milcíades (eds.), *Protest, social movements and global democracy since 2011: New perspectives* (167-196). Emerald.
- Donoso, S., y Von Bülow, M. (2017). *Social movements in Chile. Organization, trajectories, and political consequences*. Palgrave Macmillan.
- Espinal, R., y Zhao, S. (2015). Gender gaps in civic and political participation in Latin America. *Latin American Politics and Society*, 57(1), 123-138. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2015.00262.x>
- Eyerman, R., y Turner, B. (1998). Outline of a theory of generations. *European Journal of Social Theory*, 1(1), 91-106.
- Flisfisch, A., Culagovski, M., y Charlón, M. (1988). *Edad y política en el Chile autoritario: Un análisis exploratorio y conjeturas para un futuro democrático*. Flacso.
- Fraser, N. (2007). Transnationalizing the public sphere. On the legitimacy and efficacy of public opinion in a post-Westphalian world. *Theory, Culture & Society*, 24(4), 7-30.
- (1992). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. En C. Calhoun (ed.), *Habermas and the public sphere* (109-142). The MIT Press.
- Frei, R. (2017). Talking about legacies and ruptures: Generational narratives in times of youth activism in Argentina and Chile. *Oral History Forum d'Histoire Orale*, 37, 1-25. Número especial: Generations and Memory: Continuity and Change.
- (2015). "The living bond of generations". *The narrative construction of post-dictatorial memories in Argentina and Chile*. Universidad Humboldt de Berlín.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Gallego, A. (2007). Unequal political participation in Europe. *International Journal of Sociology*, 37(4), 10-25. <https://doi.org/10.2753/ijso020-7659370401>
- Gamboa, R., López, M. Á., y Baeza, J. (2013). La evolución programática de los partidos chilenos 1970-2009: De la polarización al consenso. *Revista de Ciencia Política*, 33(2), 443-467. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2013000200002>
- Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. Arcis-Clacso.
- (1990). *Las condiciones socio-políticas de la inauguración democrática en Chile*. Documento de trabajo 142. Kellogg Institute. Universidad de Notre Dame.
- (1989). La oposición política y el sistema partidario en el régimen militar chileno: Un proceso de aprendizaje para la transición. En M. Cavarozzi y M.A. Garretón, *Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y democratización del Cono Sur* (395-466). Flacso.
- González, R., Muñoz, E., Mackenna, B. (2019). Cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero: Actitudes de los chilenos hacia la inmigración. En I. Aninat y R. Vergara (eds.), *Inmigración en Chile. Una mirada multidimensional* (321-346). Fondo de Cultura Económica Chile y Centro de Estudios Públicos.

- Gronemeyer, M. E., y Porath, W. (2017). Tendencias de la posición editorial en diarios de referencia en Chile. El arte de dosificar la crítica frente a la actuación de los actores políticos. *Revista de Ciencia Política*, 37(1), 177-202. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2017000100008>
- Gruzd, A., y Roy, J. (2014). Investigating political polarization on Twitter: A Canadian perspective. *Policy & Internet*, 6(1), 28-45.
- Guzmán, V., Barozet, E., y Méndez, M. L. (2017). Legitimación y crítica a la desigualdad: una aproximación pragmática. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 73, 87-112.
- Habermas, J. (1981). *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*. Gustavo Gili.
- Herrera, F., Miranda, C., Pavicevic, Y., y Sciaraffia, V. (2018). “Soy un papá súper normal”: Experiencias parentales de hombres gay en Chile. *Polis*, 17(50), 111-137. <https://doi.org/10.4067/S0718-65682018000200111>
- Herrera, F., y Teitelboim, B. (2010). Opiniones de los chilenos sobre el aborto. En Quinta Encuesta Nacional UDP. Chile 2009. Percepciones y actitudes sociales (95-103).
- Hetherington, M. (1998). The political relevance of political trust. *The American Political Science Review*, 92(4), 791-808.
- Huneus, C., y Maldonado, L. (2003). Demócratas y nostálgicos del antiguo régimen. Los apoyos a la democracia en Chile. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 103, 9-49.
- IDEA (2017). *The global state of democracy: Exploring democracy's resilience*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- INE (2018). Características de la inmigración internacional en Chile, Censo 2017. Santiago de Chile. Instituto Nacional de Estadísticas.
- (2016). Encuesta nacional sobre uso del tiempo (ENUT). Documento de principales resultados ENUT 2015. Santiago de Chile. Instituto Nacional de Estadísticas.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization. Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton University Press.
- Inglehart, R., y Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series RWP16-026, agosto.
- (2003). *Rising tide: Gender equality and cultural change around the world*. Cambridge University Press.
- Inglehart, R., y Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790881>
- INJUV (2002). Encuesta Nacional de la Juventud. Santiago de Chile. Instituto Nacional de la Juventud.
- (1999). Los jóvenes de los noventa. El rostro de los nuevos ciudadanos: Segunda Encuesta Nacional de la Juventud. Santiago de Chile. Instituto Nacional de la Juventud.
- (1996). Encuesta Nacional de la Juventud. Santiago de Chile. Instituto Nacional de la Juventud.
- IPSOS (2019). Populist and nativist sentiment in 2019: A 27-country survey. Ipsos Global Advisor.
- Jelen, T. G., y Wilcox, C. (2003). Causes and consequences of public attitudes toward abortion: A review and research agenda. *Political Research Quarterly*, 56, 489-500. <https://doi.org/10.1177/106591290305600410>
- Jelin, E. (2000). Towards a global environmental citizenship? *Citizenship Studies*, 4(1), 47-63.
- Jones, D. (2015). Declining trust in Congress: Effects of polarization and consequences for democracy. *The Forum*, 13(3), 375-394.

- Laakso, M., y Taagepera, R. (1979). "Effective" number of parties: A measure with application to West Europe. *Comparative Political Studies*, 12(1), 3-27.
- Larrañaga, O., y Contreras, D. (eds.) (2015). *Las nuevas políticas de protección social en Chile*. Nueva edición ampliada y actualizada. PNUD-Uqbar.
- Latinobarómetro (2015). Latinobarómetro. Opinión Pública Latinoamericana. Informe 1995-2015. Santiago de Chile.
- Lechner, N. (2007). Las condiciones sociopolíticas de la ciudadanía (1999). En *Norbert Lechner. Obras escogidas* (vol. II, 407-433). Lom.
- (1998). Modernización y democratización: un dilema del desarrollo chileno. *Estudios Públicos*, 70, 231-242.
- (1985). *Pacto social en los procesos de democratización. La experiencia latinoamericana*. Flacso.
- Levitsky, S., y Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Broadway Books. [*Cómo mueren las democracias*. Ariel.]
- Luna, J. P. (2016). Delegative democracy revisited. Chile's crisis of representation. *Journal of Democracy*, 27(3), 129-138. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0046>
- (2014). *Segmented representation: Political party strategies in unequal democracies*. Oxford University Press.
- (2008). Partidos políticos y sociedad en Chile. Trayectoria histórica y mutaciones recientes. En A. Fontaine, C. Larroulet, J. Navarrete y I. Walker (eds.), *Reforma de los partidos políticos en Chile* (75-124). PNUD, CEP, Corporación de Estudios para Latinoamérica, Libertad y Desarrollo y Projectamérica.
- Luna, J. P., y Altman, D. (2011). Uprooted but stable: Chilean parties and the concept of party system institutionalization. *Latin American Politics and Society*, 53(2), 1-28. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2011.00115.x>
- Luna, J. P., y Mardones, R. (2010). Chile: Are the parties over? *Journal of Democracy*, 21(3), 107-121. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0180>
- Lupu, N. (2015). Partisanship in Latin America. En R. E. Carlin, M. M. Singer y E. J. Zechmeister (eds.), *The Latin American voter: Pursuing representation and accountability in challenging contexts* (226-245). University of Michigan Press.
- (2014). Brand dilution and the breakdown of political parties in Latin America. *World Politics*, 66(4), 561-602. <https://doi.org/10.1017/S0043887114000197>
- Macedo, S. (2005). *Democracy at risk: How political choice undermine citizen participation and what we can do about it*. Brookings Institution.
- Madariaga, A., y Rovira, C. (2019). Right-wing moderation, left-wing inertia and political cartelisation in post-transition Chile. *Journal of Latin American Studies*, 1-29.
- Madrid, S. (2005). ¿Políticos de ayer, apáticos de hoy? Generaciones, juventud y política en Chile. En C. Fuentes y A. Villar (eds.), *El ciudadano a las urnas: Un debate sobre la participación electoral en Chile* (45-84). Flacso.
- Mainwaring, S., y Pérez-Liñán, A. (2013). Democratic breakdown and survival. *Journal of Democracy*, 24(2), 123-137.
- Mainwaring, S., y Scully, T. R. (2010). Democratic governance in Latin America: Eleven lessons from recent experience. *Democratic Governance in Latin America*, 365-397.
- Medel, R., y Somma, N. (2016). ¿Marchas, ocupaciones o barricadas? Explorando los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile. *Política y Sociedad*, 23(1), 163-199.

- Menéndez-Carrión, A., y Joignant, A. (eds.) (1999). *La caja de Pandora: el retorno de la transición chilena*. Ariel.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2017). Equidad de género. Síntesis de resultados CASEN 2017. Observatorio Social. Santiago de Chile.
- Ministerio de Medio Ambiente (2018). Resultados Encuesta Nacional Medio Ambiente 2017-2018. Santiago de Chile.
- Mitchell, K. (2016). Neoliberalism and citizenship. En S. Springer, K. Birch, y J. Macleavy, *The handbook of neoliberalism* (118-129). Routledge.
- Morales, M. (2008). Evaluando la confianza institucional en Chile. Una mirada desde los resultados LAPOP. *Revista Chilena de Ciencia Política*, 28(3), 161-186.
- Morris, S., y Klesner, J. (2010). Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from México. *Comparative Political Studies*, 43(10), 1258-1285.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual: anatomía de un mito*. Lom.
- (1994). Chile y la democracia contemporánea. *Espacios*, 1, 4-28.
- Mounk, Y. (2018). *The people vs. democracy: Why our freedom is in danger and how to save it*. Harvard University Press.
- Musolff, A. (2015). Dehumanizing metaphors in UK immigrant debates in press and online media. *Journal of Language Aggression and Conflict*, 3, 41-56.
- (2011). Migration, media and “deliberate” metaphors. *Metaphorik.de*, 21, 7-19.
- Navia, P. (2008). Legislative candidate selection in Chile. En P. Siavelis y S. Morgenstern, *Pathways to power: Political recruitment and candidate selection in Latin America* (92-118). Pennsylvania State University Press.
- (2005). La transformación de votos en escaños: leyes electorales en Chile, 1833-2004. *Política y Gobierno*, 12(2), 233-276.
- Newton, K. (1999). Social capital and democracy in modern Europe. En J.W. van Deth, M. Maraffi, K. Newton y P. Whiteley, *Social capital and European democracy* (3-22). Routledge.
- Newton, K., y Norris, P. (2000) Confidence in public institutions: Faith, culture, or performance? En S. Pharr y R. Putnam (eds.), *Disaffected democracies: What's troubling the trilateral countries?* (52-73). Princeton University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit. Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- (1999). *Critical citizen: Global support for democratic government*. Oxford University Press.
- Norris, P., y Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press.
- OCDE (2017a). *Government at a glance*. OECD Publishing.
- (2017b). *Trust and public policy: How better governance can help rebuild public trust*. OECD Publishing.
- ONU (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Unctad.org.
- Oxhorn, P. (1994). Where did all the protesters go?: Popular mobilization and the transition to democracy in Chile. *Latin American Perspectives*, 21(3), 49-68.
- (2010). *Organizing civil society: The popular sectors and the struggle for democracy in Chile*. Pennsylvania State University Press.
- Pavez, J. (2016). Afecciones afrocolombianas. Transnacionalización y racialización del mercado del sexo en las ciudades mineras del norte de Chile. *Latin American Research Review*, 51(2).

- Persily, N. (2017). The 2016 US Election: Can democracy survive the internet? *Journal of Democracy*, 28(2), 63-76.
- Pinto, J. (2007). *Desgarros y utopías en la pampa salitrera: la consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923)*. Lom.
- PNUD (2020). *Nuevo mapa del poder y género en Chile (1995-2018)*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2019a). *Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century*. Nueva York. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2019b). *Una década de cambios hacia la igualdad de género (2009-2018): Avances y desafíos*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2018a). *Desigualdad regional en Chile. Ingresos, salud y educación en perspectiva territorial*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2018b). *Representación política de mujeres en el poder legislativo: Análisis de la aplicación de las cuotas de género en las elecciones parlamentarias de 2017*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2017a). *Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2017b). *Promoviendo la participación electoral: Guía de buenas prácticas internacionales*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2017c). *Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2017d). *Chile en veinte años. Un recorrido a través de los Informes sobre Desarrollo Humano*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y LOM.
- (2015a). *Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2015. Los tiempos de la politización*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2015b). *Condicionantes de la participación electoral en Chile*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2015c). *Mecanismos de cambio constitucional en el mundo. Análisis desde la experiencia comparada*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2015d). *Representación indígena en poderes legislativos. Claves desde la experiencia internacional*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2014). *Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2013). *Pueblos originarios y sociedad nacional en Chile. La interculturalidad de las prácticas*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2010). *Informe sobre Desarrollo Humano. Género: Los desafíos de la igualdad*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2007). *Democracia/ Estado / Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la democracia en América Latina*. Lima. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2004). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. Buenos Aires. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2002). *Informe de Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- (2000). *Informe de Desarrollo Humano. Más sociedad para gobernar el futuro*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

- (1998). *Informe de Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas de la modernización*. Santiago de Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD-OEA (2010). *Nuestra democracia*. Fondo de Cultura Económica.
- Posner, P. W. (2004). Local democracy and the transformation of popular participation in Chile. *Latin American Politics and Society*, 46(3), 55-81.
- (1999). Popular representation and political dissatisfaction in Chile's new democracy. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 41(1), 59-85.
- Przeworski, A. (2019). *Crises of democracy*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>
- Riquelme, A. (1999). ¿Quiénes son y por qué no están ni ahí? Marginación y/o automarginación en la democracia transicional. Chile. 1988-1997. En P. Drake e I. Yaksic (eds.), *El modelo chileno: Democracia y desarrollo en los noventa* (261-279). Lom.
- Roberts, K. M. (2016). (Re)Politicizing inequalities: Movements, parties, and social citizenship in Chile, *Journal of Politics in Latin America*, 8(3), 125-154.
- (2012). The politics of inequality and redistribution in Latin America's post-adjustment era. WIDER Working Paper 8, 23.
- Robinson, P. y Robinson, S. (2018). *Shadow vigilantes: How distrust in the justice system breeds a new kind of lawlessness*. Prometheus Books.
- Rosanvallon, P. (2008). *Counter-democracy: Politics in an age of distrust*. Cambridge University Press.
- Rovira, C. (2019). La (sobre)adaptación programática de la derecha chilena y la irrupción de la derecha populista radical. *Colombia Internacional*, 99, 29-61. <https://doi.org/10.7440/colombiaint99.2019.0>
- (2007). Chile: transición pactada y débil autode-terminación colectiva de la sociedad. *Revista Mexicana de Sociología*, 69(2), 343-372.
- Runciman, D. (2018). *How democracy ends*. Basic Books.
- Salazar, G. (2012). *Movimientos sociales en Chile, trayectoria histórica y proyección política*. Uqbar.
- Segovia, C. (2015). Confianza en instituciones políticas en Chile. Documento de Referencia 25. Santiago de Chile. Espacio Público.
- Segovia, C., Haye, A., González, R., Manzi, J., y Carva-cho, H. (2008). Confianza en instituciones políticas en Chile: Un modelo de los componentes centrales de juicios de confianza. *Revista de Ciencia Política*, 28(2), 39-60. <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2008000200002>
- Settle, J. (2018). *Frenemies: How social media polarizes America*. Cambridge University Press.
- Siavelis, P. M. (2016). Crisis of representation in Chile? *Journal of Politics in Latin America*, 8(3), 61-93.
- (2009). Enclaves de la transición y democracia chilena. *Revista de Ciencia Política*, 29(1), 3-21.
- Somma, N. M. (2018). When do political parties move to the streets? Party protest in Chile. *Research in Social Movements, Conflicts and Change*, 42, 63-85.
- Somma, N. M., y Medel, R. (2017). Shifting relationships between social movements and institutional politics. En M. von Bulow y S. Donoso (eds.), *Social movements in Chile* (29-61). Palgrave Macmillan.
- Stefoni, C., y Stang, F. (2017). La construcción del campo de estudio de las migraciones en Chile. Notas de un ejercicio reflexivo y autocrítico. *Íconos*, 58, 109-129.
- Streeck, W. (2016). *How will capitalism end?: Essays on a failing system*. Verso.
- (2014). *Buying time*. Verso.

- Tapia, M. (2012). Frontera y migración en el norte de Chile a partir del análisis de los censos de población. Siglos XIX-XXI. *Revista de Geografía Norte Grande*, 53, 177-198.
- Teorell, J., Coppedge, M., Skaaning, S.-E., y Lindberg, S. I. I. (2016). Measuring electoral democracy with V-Dem data: Introducing a new polyarchy index. V-Dem Working Paper, 25.
- Theocharis, Y., y van Deth, J. W. (2018). The continuous expansion of citizen participation: A new taxonomy. *European Political Science Review*, 10(1), 139-163. <https://doi.org/10.1017/S1755773916000230>
- Tijoux, M. E. (ed.) (2016). *Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración*. Universitaria.
- Torcal, M., y Montero, J. R. (2006). *Political disaffection in contemporary democracies: Social capital, institutions, and politics*. Routledge. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2281.1975.tb00751.x>
- Toro, S. (2008). De lo épico a lo cotidiano: Jóvenes y generaciones políticas en Chile. *Revista de Ciencia Política*, 28(2), 143-160.
- Toro, S., Acevedo, C., Jaramillo-Brun, N., y E. Zechmeister (2016). Cultura política de la democracia en Chile y las Américas, 2014: ¿Tiempo de reformas? En E. Zechmeister y J.P. Luna (eds.), *Cultura política de la democracia*. Latin American Public Opinion Project (LAPOP), Universidad Vanderbilt.
- Turchin, P. (2016). *Ages of discord: A structural-demographic analysis of American history*. Beresta Books.
- Uslaner, E. (2018). The study of trust. En E. Uslaner (ed.), *The Oxford handbook of social and political trust* (3-14). Oxford University Press.
- (2017). Political trust, corruption, and inequality. En S. Zmerli y T. van der Meer (eds.), *Handbook on political trust* (302-315). Edward Elgar.
- Vaidhyathan, S. (2018). *Anti-social media. How Facebook disconnects us and undermines democracy*. Oxford University Press.
- Valenzuela, E., Bargsted, M., y Somma, N. (2013). ¿En qué creen los chilenos? Naturaleza y alcance del cambio religioso en Chile. *Temas de la Agenda Pública* 59. Centro de Políticas Públicas UC. Año 8, abril. Santiago de Chile.
- Van der Meer, T., y Zmerli, S. (2017). The deeply rooted concern with political trust. En S. Zmerli y T. van der Meer (eds.), *Handbook on political trust* (1-16). Elgar.
- Van Deth, J. W. (2014). A conceptual map of political participation. *Acta Politica*, 49(3), 349-367.
- (2012). New modes of participation and norms of citizenship. En J.W. van Deth y W. Maloney, *New participatory dimensions in civil society. Professionalization and individualized collective action* (115-138). Routledge-ECPR Studies in European Political Science.
- van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity. A critical history of social media*. Oxford University Press.
- V-DEM (2019). Democracy facing global challenges. V-Dem annual democracy report 2019. V-Dem Institute Varieties of Democracy, Universidad de Gotemburgo.
- (2018). Democracy for all? V-Dem annual democracy report 2018. V-Dem Institute Varieties of Democracy, Universidad de Gotemburgo.
- Warren, M. (2018). Trust and democracy. En E. Uslaner (ed.), *The Oxford handbook of social and political trust*. Oxford University Press.
- You, J. (2018). Trust and corruption. En E. Uslaner (ed.), *The Oxford handbook of social and political trust*. Oxford University Press.
- Zerán, F. (ed.) (2018). *Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado*. Lom.

